

Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino

Quintín Riquelme

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Septiembre de 2003

950-9231-90-8

(15,5 x 22,5 cm) 214 páginas

El libro aborda los conflictos de tierra protagonizados por los movimientos campesinos del Paraguay en dos departamentos ubicados en contextos regionales diferentes, Misiones y Caaguazú, en los que la reacción colectiva contra la pérdida de identidad y el desarraigo fue adquiriendo características distintas durante el período 1989-1999. Investigaciones desarrolladas en las últimas décadas sobre el campesinado paraguayo demostraron que la aparente homogeneidad que se observa en el campo no es tal y que las características de las regiones, su modo de inserción en la estructura productiva, los condicionantes socioculturales y la intervención del Estado en dichos contextos han determinado comportamientos diferenciados de los actores en una acción colectiva específica: la lucha por la tierra. El problema de la tierra en el Paraguay se remonta a la postguerra de 1865-1870, cuando los sucesivos gobiernos realizaron la venta masiva de las tierras públicas, dando origen al latifundio. Otro de los factores determinantes del proceso de descomposición de la economía campesina y el desarraigo fue la destrucción de la matriz de organización productiva basada en el esquema parcelario-comunitario, y su sustitución por relaciones sociales fundadas en el intercambio y la propiedad privada como forma predominante de la tenencia de tierra. Desde la implantación de estas nuevas relaciones sociales en el agro sometido a una lenta pero progresiva descomposición por la profunda modificación de su modo de producción y la imposibilidad de competir en el mercado de la tierra con la agricultura empresarial. La presente investigación buscó identificar similitudes y diferencias en el nivel de organización y las estrategias desarrolladas por las organizaciones campesinas, ONGs. El proceso de latifundización, minifundización e implantación de una nueva modalidad de organización productiva regida por el mercado, no asumido totalmente por los campesinos, fue conduciendo gradualmente a este sector al desarraigo que, junto con el crecimiento demográfico no absorbido por el mercado laboral, creó las condiciones para la aparición de los campesinos sin tierras. Desde 1980, cuando comienza el estancamiento económico del país, éstos comenzaron a presionar por la tierra, proceso que se acentúa luego con la apertura política en 1989.

Capítulo I

Introducción

El objeto de estudio

La presente investigación se enmarca dentro de la literatura de los movimientos sociales, definidos en términos de una acción colectiva concertada por la cual “una categoría social, siempre particular, pone en cuestión una forma de dominación social, a la vez particular y general, e invoca contra ella valores, orientaciones generales de la sociedad que comparte con su adversario para privarlo de tal modo de legitimidad” (Touraine, 1997: 100) o como “exigencias socialmente compartidas de cambio en algún aspecto del orden social” (Gusfield, 1974: 269) o como una reacción colectiva contra el status bajo (Landsberger, 1978: 34). El estudio prioriza los movimientos campesinos, y dentro de éstos los que están involucrados en conflictos de tierra en el período 1989-1999 en Paraguay. Se trata pues de analizar la reacción de un grupo bien definido, los campesinos sin tierra que demandan cambios de un orden social injusto que los ha conducido al desarraigo y a la pérdida de su identidad como grupo social determinado, como consecuencia fundamentalmente de la aplicación de un modelo de desarrollo rural excluyente que no ha potenciado el mejoramiento de los espacios rurales en sus distintas dimensiones: económicas, sociales, culturales y políticas. Las características y la envergadura de la reacción son analizadas a través de las siguientes variables, entre otras: cantidad de conflictos; actores involucrados; posición asumida por el Estado, los propietarios y otros actores sociales como la Iglesia y los partidos políticos. El trabajo se centra en los departamentos de Caaguazú y Misiones, pertenecientes a dos contextos regionales distintos. Se buscará analizar en qué medida esta pertenencia determina ciertas características en el comportamiento de los actores sociales colectivos en la lucha por la tierra.

Por un lado, el departamento de Misiones conforma con otros departamentos la región denominada como de economía campesina tradicional, es decir “aquella que opera a partir de parcelas de reducido tamaño y de superficies cultivadas también restringidas, y del uso preferente de la mano de obra familiar, así como de un instrumental tecnológico escasamente renovado” (Galeano, 1990: 24). Esta región incluye al departamento de Concepción, parte de San Pedro, parte de Cordillera, Guairá, Paraguarí y Caazapá, y los departamentos de Misiones y Ñeembucú. La misma se ha estructurado a partir del complejo socio-económico, cultural y político del latifundio-minifundio (Galeano, 1990: 24).

Por el otro, el departamento de Caaguazú integra con otros departamentos la región de colonización, es decir, la colonización llevada a cabo desde mediados de los años ‘30 hasta los más recientes, lo cual ha posibilitado la apertura y la ampliación de la frontera agrícola del país, “en la medida en que hizo factible que un numeroso contingente de familias campesinas desarraigadas se trasladara de las antiguas áreas de asentamiento a los nuevos núcleos” (Galeano, 1990: 28). Los principales núcleos de colonización están situados en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y los distritos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú.

La creciente pulverización de las parcelas de los pequeños productores agrarios, así como la existencia de extensos latifundios, ha originado en el país la aparición de un sector social llamado “sin tierra”. Este fenómeno social, que afecta a un alto porcentaje de la población rural –se estima en la actualidad aproximadamente 300 mil campesinos sin tierra en una población rural económicamente activa de 942.784 personas–, viene generando desde finales del siglo XIX una apreciable cantidad de movilizaciones de protesta (1887, 1902), la mayoría de ellas con escasos resultados favorables a este sector del campesinado, pero que llegaron a cuestionar fuertemente la estructura de la tenencia de la tierra imperante en el país. Asimismo, es una de las principales causas de la migración de los campesinos a las ciudades y del aumento de las desigualdades sociales. Los factores que causaron estos hechos sociales fueron ampliamente estudiados por autores como Ayala (1915), Gaona (1987), Pastore (1972), Rivarola (1982), y Galeano (1978), entre otros, razón por la cual no serán objeto de análisis de este trabajo.

Los conflictos de tierra, por tanto, son una reacción colectiva contra la concentración de la tierra y contra los mecanismos legales e ilegales que frenan el acceso a ella. Es una situación que afecta a un grupo determinado de personas en un lugar determinado, pero cuyas consecuencias se expanden y repercuten en prácticamente todos los ámbitos de la vida del país. Los actores sociales que intervienen en ellos son: los sin tierra, los pequeños productores minifundarios en proceso de desarraigo, las organizaciones campesinas, los propietarios, las organizaciones de propietarios, los organismos gubernamentales, la Iglesia católica, los partidos políticos, las empresas agroindustriales, etcétera.

En el Paraguay, el campesinado ha sido históricamente –y sigue siendo– el sector más estudiado, quizás por su importancia demográfica y por lo que ello implica en términos de participación en la economía y de clientela para los partidos políticos¹. Desde los albores del siglo XX, tanto economistas como abogados e historiadores se han embarcado en la tarea de estudiar a este sector social como parte de la formación social del país. Sin embargo, a pesar de los numerosos y variados trabajos existentes, los estudios sociológicos propiamente tienen una presencia significativa recién desde la década del setenta², en la que comienzan a ser analizados los primeros síntomas de la descomposición campesina como resultado de la modernización agraria a partir de la aplicación del paquete tecnológico llamado revolución verde.

Entre los autores que han hecho importantes aportes al análisis de los procesos agrarios desde principios de siglo XX cabe citar a Eligio Ayala, quien ha investigado profundamente el tema agrario en el Paraguay. Fruto de esas investigaciones fueron los ensayos *Migraciones y Evolución de la Economía Agraria en el Paraguay*, escritos ambos entre 1913 y 1915³. Otro clásico dentro de la misma línea es Carlos Pastore (1972), que con su libro *La lucha por la tierra en el Paraguay* hizo un aporte significativo para la comprensión del complejo mundo rural⁴. Otras investigaciones siguieron a las anteriores, entre las cuales se destacan entre otras las de Ramón Fogel (1982 y 1990), Luis Galeano (1982 y 1990), Tomás Palau y Ma. Victoria Heikel (1987), Domingo Rivarola (1982), Daniel Campos (1982 y 1992). Todas ellas han arrojado resultados esclarecedores sobre el sector agrario paraguayo desde el punto de vista teórico y también empírico.

En lo que respecta al tema de los conflictos de tierra específicamente, resaltan los estudios realizados por Ramón Fogel (1990 y 1992) *Los campesinos sin tierra en la frontera* y *Los conflictos agrarios y la intervención del Estado*, Rafaela Guanes (1992) *Familias sin tierra en Paraguay*, CPES y CIPAE (1995) *Conflictos de tierra y defensa jurídica del campesino* y Digno Brítez (1996) *El desalojo en las ocupaciones de tierra, la violencia policial y el sistema latifundiarío vigente en el Paraguay*.

Los campesinos sin tierra en la frontera aborda el fenómeno de los sin tierra desde su raíz histórica y la constitución del campesinado criollo en el período independiente. *Los conflictos agrarios y la intervención del Estado* analiza la respuesta de las asociaciones de empresarios a las demandas de tierra y el papel desempeñado por el Poder Legislativo y Judicial en los conflictos de tierra. *Familias sin tierra en Paraguay*, en cambio, analiza casos concretos de conflictos de tierra ocurridos en departamentos como los de Alto Paraná, Caaguazú y Cordillera entre 1980 y 1983⁵. Digno Brítez, por su parte, encara la problemática de las ocupaciones de la tierra desde el punto de vista jurídico, mostrando la contradictoria aplicación de las leyes: por un lado el Código Civil, el Procesal y el Estatuto Agrario, que norman la función social de la tierra y de la propiedad, y por otro la legislación penal, que considera a las ocupaciones un delito de acción penal pública.

Como se ha podido constatar, el grueso de lo que se ha escrito sobre el sector rural paraguayo ha sido a partir de los efectos que produjo la modernización agraria. Hay una rica investigación sobre el proceso de acumulación capitalista en el campo y sus consecuencias en la economía campesina. Estas investigaciones, empero, se han centrado fundamentalmente en los años 1970 y 1980. Han sido más escasos aún los estudios sobre los conflictos de tierra que son consecuencia de dicho proceso de acumulación capitalista.

La apertura democrática en febrero de 1989, como es sabido, ha posibilitado a los campesinos la exteriorización de sus reclamos por la tierra, que durante el largo período de la dictadura han sido sistemáticamente soslayados. Sólo durante ese año se produjeron setenta y tres ocupaciones de tierras y se registraron cerca de noventa conflictos, lo que habla de la envergadura del problema (Informativo Campesino IC N° 15, 1989). Es además un indicador

importante de que el afianzamiento de la democracia dependería en gran medida de la democratización de la tenencia de la tierra y por ende de la sociedad rural (Galeano, 1990).

Esta apertura democrática, como era de esperar, generó un gran movimiento de lucha por la conquista de la tierra. Los campesinos, articulados en coordinaciones zonales, regionales y nacionales, comenzaron a presionar al gobierno y a los terratenientes con ocupaciones y con movilizaciones. Con esta intensa lucha, los campesinos sin tierra estaban atacando los cimientos mismos del poder político y económico de la oligarquía paraguaya. Ante la incontenible ola de ocupaciones, el entonces presidente de la República, general Andrés Rodríguez (1989-1993), declaró públicamente en febrero de 1990 la “guerra a los invasores de propiedades privadas” y presentó un proyecto de ley de ampliación del Estatuto Agrario, que en uno de sus artículos declaraba que ninguna persona que haya incurrido en hechos de usurpación de propiedad privada o fiscal podrá ser beneficiaria de la reforma agraria (IC N° 18, 1990: 2). De esta manera, la democracia formal conservadora muy pronto entró en conflicto con las aspiraciones de una democracia más participativa con justicia social (Bareiro, 1997: 124). El Estado, impotente para resolver el problema, lo agrava al asumir abiertamente posturas en favor de los terratenientes. Mientras tanto, la Asociación Rural del Paraguay (ARP), gremio que nuclea a los ganaderos, declaraba en un comunicado dado a conocer ese mismo año que “la invasión de propiedades privadas es un atentado contra los derechos humanos”, y para cerrar el círculo el Instituto de Bienestar Rural (IBR), ente autárquico responsable de ejecutar la política de tierra en el país, afirmaba que “el problema de la ocupación irregular de propiedades inmobiliarias, no ha sido ni será avalado por el Instituto, que en innumerables oportunidades se ha reafirmado en sus resoluciones, en que la usurpación de inmuebles en forma violenta o clandestina, no está protegida por las leyes y que, por constituir un delito de acción penal pública, previsto y sancionado por el Código, no puede ser amparada y legalizada”(IC N° 6, 1989).

Hacia fines del año 1989, con la intención de cuantificar y de dimensionar el problema de los sin tierra y plantear una propuesta de solución más adecuada, el Ministerio del Interior realizó un censo en todo el país. Dicho censo arrojó un total de 110 mil familias campesinas sin parcela propia. La propuesta del gobierno de Rodríguez (1989-1993) frente a esta constatación fue la habilitación de nuevas colonias para asentar a 10 mil o 15 mil familias campesinas por año. Para ello creó el Consejo Nacional de Coordinación para el Desarrollo Rural (CONCODER)⁶. Este Consejo duró apenas un año: rápidamente se convirtió en una repartición burocrática más, superponiendo sus tareas a las del IBR. Fue disuelto en junio de 1990.

En febrero del año 2000, el IBR informó de la apertura de 265 nuevos asentamientos entre 1989 y 1999, totalizando 47.638 lotes en una extensión de 1.457.388 ha. Suponiendo que en cada lote se halla asentada una familia, ello indica que en once años sólo el 43,31% de los sin tierra fueron asentados de los 110 mil censados en el '89. Estos asentamientos, habilitados por el Estado desde el año '89 hasta el '99, no fueron consecuencia de una planificación racional de la política agraria, sino de la presión que ejercieron los campesinos a través de las ocupaciones y las movilizaciones. Por esta razón, el método que hasta el presente mejor resultado ha dado a los sin tierra es el de la ocupación acompañada de movilizaciones. La otra vía, la legal, no tuvo en la mayoría de los casos respuestas positivas por la lentitud de los trámites y por el costo que ello implica. Las comisiones vecinales que inician sus reclamos por la vía legal casi siempre terminan ocupando las parcelas solicitadas por la imposibilidad de afrontar el costo de los trámites legales y judiciales y por la manifiesta parcialidad de las autoridades responsables hacia los propietarios. Otro de los grandes problemas que afronta el campesino en los conflictos por la tierra es el desamparo jurídico. En ausencia del fuero agrario, los conflictos son calificados como delitos penales, criminalizándose los problemas generados a partir de la tierra.

El fracaso de la reforma agraria y el desarrollo rural fue reconocido por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en un estudio elaborado juntamente con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio fue categórico al afirmar que los asentamientos rurales no produjeron el arraigo de los campesinos. En varios de ellos se pudo observar la rápida reconcentración de la tierra y varios de los beneficiarios se convirtieron de nuevo en campesinos sin tierra (IC N° 111, 1997). Otro estudio asegura que el 70% de los campesinos asentados no logra arraigarse, fundamentalmente por falta de apoyo en los primeros meses de la mudanza (Bareiro, 1997: 127).

Estos hechos demuestran que la tenencia de la tierra es el eje central sobre el cual gira el proceso agrario paraguayo, y junto a ella, el conflicto por la tierra pasa a ser el foco central de los conflictos agrarios. De acuerdo a los datos del CDE, entre 1989 y 1999 se han registrado aproximadamente 434 casos de conflictos de tierra (IC, varios números). A diferencia de otras décadas, se dio un incremento considerable en los conflictos.

Objetivos e hipótesis del trabajo

La caracterización de los conflictos de tierra en dos departamentos ubicados en contextos regionales distintos, comparando e identificando las similitudes y las diferencias entre ellos, se ha asumido como el objetivo general de esta investigación. Se parte del supuesto de que la intensidad de los conflictos de tierra y la modalidad que éstos asumen están relacionadas con los contextos regionales. Los avances en las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas sobre el campesinado (Palau y Heikel, 1987 y Galeano, 1990, entre otros) demostraron que la aparente homogeneidad que se observa en el campo no es tal y que las características de las regiones, su modo de inserción en la estructura productiva, los condicionantes socioculturales y la intervención del Estado en dichos contextos han determinado comportamientos diferentes de los actores, en este caso en la lucha por la tierra.

La asunción de este objetivo y de la hipótesis planteada conduce a una serie de interrogantes. ¿Qué volumen de conflictos de tierra se ha observado en dichas regiones, concretamente en los dos departamentos estudiados entre 1989 y 1999? ¿Cuáles fueron los procesos previos realizados por los campesinos antes de llegar a la ocupación? ¿Cuántos han sido y cómo se han desarrollado los eventos? ¿Cuáles han sido los tipos de propiedades ocupadas? ¿Quiénes han sido los principales actores involucrados en los conflictos y cuál ha sido el rol que cada uno de ellos representó en los diferentes procesos? ¿Cuáles fueron las estrategias desarrolladas por los sin tierra? ¿Cuáles fueron los resultados de los conflictos? ¿Cuál ha sido el destino final de los ocupantes?

La segunda hipótesis planteada parte del supuesto de que el éxito o el fracaso de los conflictos de tierra está fuertemente ligado al nivel de organización, al trabajo previo realizado y a la estrategia de defensa implementada, así como a la experiencia previa y el apoyo que reciben de otras organizaciones y de otros sectores de la sociedad. Esta hipótesis conduce a la necesidad de realizar un mapeo de las organizaciones existentes en ambas regiones, tipos y nivel de organización, su relación con los sin tierra, sus vínculos con otros actores, su historia, su estrategia, etcétera.

Una de las motivaciones principales que llevó a encarar esta investigación es la diferenciación que se ha observado en el grado de conflictividad por la tenencia de la tierra entre uno u otro contexto, aún existiendo factores condicionantes de mucho peso que deberían inducir a una reacción colectiva de los actores afectados. Sin embargo, dicha reacción no se ha dado, o se ha dado en una proporción que no corresponde al nivel de carencia o de necesidad observado en ese aspecto.

Propuesta metodológica

La propuesta metodológica incluye la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. En lo cuantitativo se describen los setenta conflictos de tierra ocurridos en los departamentos de Caaguazú y Misiones y se realiza una interpretación de los datos resultantes de la matriz construida con las variables y sus respectivas categorías. En lo cualitativo, se analizan las estrategias utilizadas por los campesinos sin tierra en los conflictos y el rol de los actores sociales que intervienen en cada caso.

La matriz incluye las siguientes variables y categorías:

Tipos de propiedad: privada, fiscal, comunal e indígena. Las acciones legales y represivas varían si la ocupación se produce en una de esas categorías.

Localización: incluye distritos y compañías. Con esta variable se determina en qué zonas se concentran los conflictos.

Tipo de latifundio: incluye las categorías de 'improductivo' y 'racionalmente explotado'. Son conceptos sobre los cuales la legislación agraria no es muy precisa, pero a la hora de

producirse la ocupación una comisión interinstitucional de la que no participan las organizaciones campesinas define estas categorías en base a una inspección ocular, y las acciones también varían dependiendo de la definición a la que se llega. Se considera racionalmente explotado un inmueble cuando el valor de lo plantado en él alcanza el 50% de su valor fiscal; por lo tanto, una propiedad es improductiva cuando no alcanza el 50% de su valor fiscal.

Tamaño del inmueble: a través de esta variable se establecen tres rangos, de menos de 1.000 ha, de 1.000 a menos de 5.000, y de 5.000 y más. Con esta escala se tiene una visión del tamaño de las propiedades ocupadas o en conflicto. La probabilidad de éxito o de fracaso depende también de la extensión.

Tipo de ocupación: con esta variable se establecerá si la ocupación es reciente o antigua. Reciente es toda ocupación o conflicto ocurrido después de la apertura política, en febrero de 1989, y antigua, antes de la apertura.

Duración: con dicha variable se tratará de medir la capacidad de resistencia de los ocupantes frente a las presiones ejercidas por los propietarios y por las autoridades. Se clasifica en tres rangos: menos de un año; uno a cinco; y cinco y más años.

Resultado: las categorías que incluye esta variable son a favor de los ocupantes; a favor del propietario; no resuelto y sin información. Con esta variable se pretende tener conocimiento de lo que ocurrió con el conflicto.

Tipos de desalojo: las categorías que se analizan son pacíficos, con violencia sin detenciones; con violencia y detenciones; con violencia y destrucción de ranchos. Con ellas se visualiza el nivel de violencia en los desalojos.

Eventos: es la cantidad de veces que un mismo inmueble fue ocupado, y se clasifica en una ocupación, dos a tres ocupaciones y más de tres ocupaciones. Los eventos pueden mostrar la capacidad de resistencia de los ocupantes, su nivel de organización y el apoyo que reciben de otros actores sociales.

Destino: con esta variable se busca conocer lo que ocurrió con los ocupantes. Si consiguieron asentarse, si se desarticularon, y si se fundieron con otras comisiones vecinales de sin tierra.

Resolución: incluye categorías tales como compra, expropiación, canje o recuperación. Se busca conocer cuáles son los mecanismos de solución más comunes planteados por las autoridades y por los propietarios.

Estrategias: explica el proceso de trabajo previo encarado por los sin tierra antes de la ocupación de un inmueble y una vez ocupado para permanecer en él. Estas estrategias incluyen: investigación previa sobre el inmueble para determinar la extensión, si está racionalmente explotado o no, etc.; negociación con las autoridades, contacto con organizaciones u otros actores como la Iglesia, las autoridades partidarias, etc.; toma directa de la tierra, presión a través de manifestaciones, campamentos y ocupación de plazas, etcétera.

Actores: se busca identificar quiénes son los principales actores que intervienen en un conflicto. Los sin tierra, los propietarios, el Estado, las empresas, las cooperativas, las comisiones vecinales, los indígenas, entre otros.

Rol de los actores: qué papel o rol juegan los distintos actores sociales que intervienen en un conflicto, fundamentalmente el Estado, las organizaciones campesinas, los propietarios, las iglesias, los partidos políticos, etcétera.

Matriz de variables y categorías

Variables	Categorías
Tipo de propiedad	a. Privado b. Fiscal c. Comunal
Localización	a. Distritos b. Compañías
Tipo de latifundio	a. Improductivo b. Racionalmente explotado
Tamaño de la propiedad	a. Menos de 1.000 ha b. De 1.000 a 5.000 c. De 5.000 y más
Tipos de ocupación	a. Reciente b. Antigua
Duración	a. Menos de 1 año b. De 1 a 3 años c. Más de 3 años
Resultado	a. A favor de los ocupantes b. A favor de los propietarios c. No resueltos d. Sin información
Tipos de desalojo	a. Sin violencia b. Con violencia y sin detenciones c. Con violencia y con detenciones
Eventos	a. 1 ocupación b. 2 a 3 ocupaciones c. Más de 3 ocupaciones
Destino	a. Asentados b. Desarticulados c. Se funden con otras comisiones vecinales
Resolución	a. Compra b. Expropiación c. Canje d. Recuperación
Estrategias	a. Investigación previa sobre el inmueble b. Inicio de las negociaciones legales para compra, expropiación o recuperación c. Contactos con otras organizaciones e instituciones fraternas d. Toma de las tierras e. Manifestaciones, campamento frente al inmueble o en la capital, presión al legislativo, etc.
Actores	a. Campesinos sin tierra b. Propietarios c. Estado d. Empresas e. Particulares f. Cooperativas g. Organismos internacionales h. Comisiones vecinales i. Pueblos indígenas j. Otros
Rol de los actores	a. Del Estado a través de sus instituciones b. De las organizaciones campesinas c. De las organizaciones de propietarios d. De las iglesias e. De los partidos políticos f. De la comunidad local, regional y nacional

Fuentes

Como fuente fundamental se contó con la base de datos del Centro de Documentación y Estudios (CDE), que desde el año 1988 viene registrando la totalidad de las informaciones que hacen referencia al sector campesino, las cuales se publican en la revista *Informativo Campesino*, de edición mensual. La principal fuente de información de la revista es la prensa escrita, y se cuenta además con la colaboración de las organizaciones campesinas, que a través de sus dirigentes proporcionan información mediante comunicados, notas, cartas y entrevistas. Las mismas son clasificadas de acuerdo a un listado de descriptores entre los cuales se pueden citar: organizaciones campesinas, política agraria pública y privada; conflictos de tierra; entrevistas e informaciones agrícolas, entre otros.

Otras fuentes de información son las entrevistas realizadas a informantes clave, fundamentalmente a dirigentes de organizaciones campesinas nacionales y líderes de los sin tierra. La visión de los propietarios afectados, de las autoridades regionales y nacionales y de las instituciones como el IBR fue recabada a través de entrevistas semiestructuradas y complementada con las informaciones que aparecen en *Informativo Campesino*. Como se podrá notar, esta investigación tiene una sustentación empírica relativamente bien documentada. Sin embargo, es justo reconocer que refleja en mayor grado la percepción y el pensamiento de los campesinos organizados y de los sin tierra.

Precisiones conceptuales

En la gran mayoría de los trabajos sobre temas campesinos es común encontrar el uso de conceptos tales como “familias sin tierra”, “familias de campesinos sin tierra”, “campesinos sin tierra” o simplemente “sin tierra”. Aparentemente la utilización de estas diversas acepciones en un mismo trabajo no debería ser motivo de controversia, teniendo en cuenta que todas apuntan a un mismo contenido. Es decir, se está aludiendo a un grupo social carente de una parcela propia donde levantar su vivienda y desarrollar sus actividades productivas. En este trabajo se opta por el concepto de campesinos sin tierra o simplemente sin tierra. La precisión es relevante desde el momento en que no es lo mismo referirse a familias de sin tierra o de campesinos sin tierra. Familia implica la presencia de más de una persona, y puede ser una pareja, una familia nuclear o extensa. Sin embargo, cuando se habla de campesinos sin tierra, se hace alusión a una persona, lo que implica que dentro de una misma familia puede haber más de uno/a. La distinción es pertinente por el hecho de que la imprecisión suele generar polémicas entre el gobierno y las organizaciones campesinas cuando se trata de cuantificar la cantidad de sin tierra en el país. En esferas gubernamentales se maneja un número relativamente bajo de sin tierra porque generalmente se hace referencia a las familias, en tanto que los dirigentes de las organizaciones campesinas hablan de campesinos sin tierra.

Con respecto a la definición que hace el Estatuto Agrario acerca de los beneficiarios de la Reforma Agraria, en su artículo 14° inciso a) establece que son beneficiarios “los varones y mujeres que hayan cumplido dieciocho años de edad, sean paraguayos o extranjeros, que se dediquen habitualmente a las labores agropecuarias o que se propongan formalmente dedicarse a ellas” (Estatuto Agrario, 1963). Las organizaciones campesinas, por su parte, han incluido en sus censos de sin tierra a los varones y mujeres que hayan cumplido los quince años de edad, teniendo en cuenta que las labores agrícolas se realizan desde muy temprana edad y, como señalaban algunos dirigentes, mientras dura la gestión de la tierra se llega a sobrepasar incluso la edad reglamentaria establecida en el Estatuto Agrario.

Otro concepto que suele generar confusión es el de ‘conflicto de tierra’. En este trabajo es utilizado en un sentido amplio, e incluye desde la solicitud de desafectación de una parcela iniciada por una comisión vecinal por la vía legal, la legalización de una ocupación ya existente o de hecho, y la ocupación misma con todas sus consecuencias, desalojos, detenciones, destrucción de viviendas, cultivos, asesinatos, etcétera. En otros términos, el conflicto es una confrontación entre dos o más actores y su grado de intensidad varía dependiendo de las características que va asumiendo.

Mapa del Paraguay



Capítulo II

Antecedentes

Factores desencadenantes de los conflictos de tierra

La desaparición del llamado Capitalismo de Estado del Dr. Francia (1814-1840) y del Estado Mercantilista de los López (1840-1870) con la Guerra contra la Triple Alianza de 1865-1870 culmina en el Paraguay un período en el que el Estado era el actor preponderante en todos los ámbitos de la vida nacional. La nueva constitución del país promulgada en 1870 establecía que el interés del pueblo y la felicidad de cada uno de sus habitantes era superior al interés privado del Estado y que éste debía estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del Estado. Derogó las leyes de confiscación de bienes y declaró inviolable la propiedad privada (Pastore, 1972: 173 y 174). El nuevo escenario socioeconómico y político que se instaura en el país con el advenimiento del sistema constitucional democrático abre al Paraguay al mundo exterior con la oferta de lo mejor de sus recursos: tierras, maderas, yerba mate y praderas. El ministro de Hacienda del gobierno provisorio afirmaba que el “áncora de salvación para el gobierno, el país y para el mundo con él relacionado, es la desamortización de todos los bienes del fisco” (Pastore, 1972: 179).

La enajenación masiva de estos recursos al capital internacional dio origen a la constitución de los latifundios, con lo cual se inicia el problema de la tierra en el Paraguay. Por ley del 4 de noviembre de 1875 el Poder Ejecutivo quedaba autorizado a vender tierras a los ocupantes y a todos los demandantes, que en el perentorio plazo de doce meses podían cancelar el pago por las tierras adquiridas en moneda de oro y plata sellada, y se establecía la pérdida de todo derecho del comprador en el caso de mora de un mes. Esta ley, que dejaba fuera de toda competencia a los campesinos pobres, fue el preludio de lo que vendría años más tarde: el remate de todas las tierras del Estado al capital extranjero. El destino de los pobladores paraguayos que a duras penas se reponían de la guerra quedó de esta manera predeterminado: pasarían a integrar en lo sucesivo la legión de los habitantes sin tierra en un país de extensos latifundios en poder de empresas extranjeras (Pastore, 1972: 180). En consecuencia, el origen del problema de la tierra campesina en el Paraguay está asociado con el latifundio como forma de monopolio del dominio sobre la tierra, independientemente de la base jurídica en la que se apoya dicho monopolio (Barrios, 1984: 366).

A un siglo y tres décadas de la ruptura de los gobiernos autárquicos, los analistas sociales rurales y las organizaciones campesinas gremiales de todas las épocas, sean del nivel que fueren, persisten en señalar que el latifundio originado con las ventas de las tierras públicas a las grandes corporaciones de capital extranjero fue el mayor obstáculo al desarrollo económico y social del país, y particularmente responsable del deterioro de las condiciones materiales de existencia de los trabajadores del campo. El país sigue arrastrando las consecuencias de ese fenómeno social, económico y político, y la concentración de la tierra es un problema que el Paraguay no ha podido superar hasta el presente, postergando el desarrollo agrario.

Otro de los factores determinantes del proceso de descomposición de la economía campesina y del desarraigo fue la destrucción de la matriz de organización productiva basada en el esquema “parcelario-comunitario” (Barrios, 1984) y su sustitución por relaciones sociales fundadas en el intercambio y en la propiedad privada como forma predominante de tenencia de la tierra. Desde la implantación de estas nuevas relaciones sociales en el agro paraguayo en los inicios de la década del setenta, el campesino ha sido sometido a una lenta pero progresiva descomposición por la profunda modificación de su modo de producción y por la imposibilidad de competir en el mercado de la tierra con otros segmentos de la agricultura.

Formas de apropiación y utilización de la tierra

Como se ha podido apreciar, el proceso agrario paraguayo ha pasado por etapas en las que se constata “que las grandes alternativas y los más importantes problemas o desafíos estuvieron —y continúan estando— directamente relacionados con las consecuencias de los

modos de apropiación y uso de la tierra” (Galeano, 1990: 7). De esto se sostiene que el afianzamiento de la democracia en el Paraguay debe pasar necesariamente por la democratización de la tierra y de la sociedad rural (Galeano, 1990: 8). La asimetría en la tenencia de la tierra se mantiene y se agudiza (de 0,9218 en el año 1981 en el índice de concentración de Gini pasa a 0,9344 en 1991), obstaculizando todo intento de diseñar alguna estrategia de desarrollo rural.

Estas constataciones muestran que el modo de apropiación y uso de la tierra en el Paraguay estuvo fuertemente ligado a circunstancias político-institucionales en las cuales pueden distinguirse tres grandes modalidades: de la apropiación privada a la utilización comunal de las tierras; de la utilización comunal a la monopolización en sistemas de latifundios forestales de enclave⁷; y del latifundio de enclave a la empresarialización de la tenencia. Estas tres modalidades no suponen de ninguna manera una delimitación ni tampoco una definición clara de cada modalidad, sino tendencias que se han observado a lo largo del desarrollo histórico del país.

De la apropiación privada a la utilización comunal de las tierras

Esta modalidad de apropiación y uso de la tierra se observó durante el largo período colonial (1524-1811) y su posterior paso a la independencia (1811-1870). La conquista del territorio paraguayo por los españoles supuso la desarticulación de una sociedad cuya estructura social era relativamente igualitaria, basada en el uso comunal de las tierras y en la economía de reciprocidad. Aún cuando los conquistadores pregonaban alianzas con los nativos, a través del cuñadazgo fundamentalmente (casamiento de españoles con las mujeres nativas), la estructura igualitaria no se mantuvo. Por el sistema de las encomiendas, las tierras y los indios pasaron a formar parte del patrimonio de los conquistadores, quienes incumpliendo las Leyes de Indias y las ordenanzas de los gobernadores sometieron a los nativos a rigurosos trabajos, acelerando su exterminio.

Esta modalidad de organización social, de apropiación y uso de la tierra cambió radicalmente durante el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Este desconoció las concesiones y los derechos sobre las tierras otorgados por la corona a sus súbditos, confiscándolas, e hizo lo mismo con las tierras de sus enemigos declarados y potenciales, fueran éstos criollos o extranjeros. De esta manera, el Estado pasó a ser poseedor de la casi totalidad de las tierras del país, del 100% en el Chaco y del 98,4% en la Región Oriental: “De las 16.590 leguas cuadradas en que era estimada entonces la superficie del territorio nacional, solamente 261 leguas cuadradas eran del dominio privado de sus habitantes” (Pastore, 1972: 178).

Los gobiernos de los López –Carlos Antonio y su hijo Francisco Solano, en el período 1943-1970– siguieron la misma política de Francia con pequeñas variantes hasta que la guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay, iniciada en 1965, destruyera totalmente el sistema social, político y económico imperante hasta entonces.

Durante los regímenes de Francia y los López, la modalidad de usufructo de las tierras era el arrendamiento. Los campesinos pagaban al Estado un canon anual por la utilización de las tierras, y las llamadas Estancias la Patria, propiedad del Estado, proveían de ganado a los poblados más pobres. Es en este período que la agricultura parcelario-comunitaria llegó a consolidarse. Antonio García denominó a este período el de la República autárquica y de crecimiento hacia adentro, sobre todo al gobierno del Dr. Francia (García, 1982).

De la utilización comunal de las tierras a la monopolización en sistemas de latifundios forestales de enclave

Concluida la guerra en 1870 comienza el proceso de reorganización del país con los sucesivos gobiernos controlados por los nuevos colonizadores, que eran fundamentalmente el Brasil y en menor medida la Argentina. El hecho más relevante de este período fue la promulgación de sucesivos decretos-leyes a través de los cuales se ordenaba la venta de las tierras públicas, fundamentados en razones fiscales e ideológicas: fiscales, la necesidad de financiar el presupuesto de gastos de la nación, e ideológicas, la supuesta incapacidad del Estado para administrar los bienes de la sociedad (García, 1982). El decreto-ley más

importante por su impacto en la población campesina fue el de julio de 1885, promulgado por el entonces presidente de la República, General Bernardino Caballero. En él, el presidente ordenaba la enajenación de la totalidad de las tierras, propiedad del Estado (Pastore, 1972: 223). Con esta decisión, varios pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comunales debido a la imposibilidad de adquirirlos por los altos costos. Incluso poblaciones enteras de campesinos quedaron encerradas dentro de las grandes propiedades y obligadas a trabajar para el propietario, con amenazas de ser expulsadas en caso de resistir a dicha determinación. Los poblados campesinos más afectados fueron los de origen yanacona (se denominaba yanacona al indio que estaba al servicio personal del español o encomendero), el sector de la población más atrasado cultural y económicamente, cuyas tierras fueron adquiridas masivamente por la clase superior gobernante, y los poblados de origen mitayo (se denominaba mitayo al indio a quien le tocaba trabajar en la mita, un sistema de trabajo por turno en actividades públicas), que quedaron fuera de las tierras privadas y serían los centros de reclutamiento de la mano de obra para la explotación de la yerba mate y de los bosques (Pastore, 1972: 247).

Recién hacia 1918 el Estado comenzó tímidamente a establecer programas de colonización y reparto de tierra en forma de lotes agrícolas. Pero a partir de 1936 el Estado se interesó por el reparto de tierra con el gobierno del Coronel Rafael Franco, lo que posteriormente continuó durante las décadas de los años '50 y '60 con las colonizaciones impulsadas por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y posteriormente por el Instituto de Bienestar Rural (IBR). Sin embargo, muchos de los destinatarios de estas colonizaciones nunca pudieron consolidar sus derechos sobre las tierras que trabajaban, lo que condujo a su vez a la ampliación de los latifundios a costa de las posesiones de los pequeños productores agrícolas (Fletschner, 1982).

Del latifundio de enclave a la empresarialización de la tenencia de la tierra

Desde 1970 en adelante, la estructura agraria caracterizada por la coexistencia del latifundio y minifundio comenzó a sufrir importantes modificaciones con la inserción de grandes empresas agroindustriales como la Agriex, Agropeco, Fiduciaria Transatlántica Alemana, entre otras, con las que comenzó efectivamente la modernización de la agricultura en el Paraguay. Otro estudio indica que los indicios de modernización empezaron en la década del sesenta con el Plan Trigo implementado en el departamento de Misiones (Fogel, 1982). Estas grandes empresas se instalaron en la denominada cuenca del Paraná en los departamentos del Amambay, Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, apropiándose de las tierras más fértiles. Concomitantemente, se produjo el ingreso masivo de los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas brasileños en las fronteras norte y este.

La presencia de las empresas agroindustriales y de los colonos brasileños produjo la transformación de la cuenca del Paraná. Su influencia se extendió igualmente a otros departamentos, como el de Caaguazú, en la medida en que comenzó a tener mayor vigencia la propiedad como forma institucional de acceso a la tierra y porque las tierras "sin dueño", que anteriormente servían para descongestionar las regiones más pobladas, dejaron de existir. La modernización produjo además otros efectos colaterales negativos, como la valorización inusual de la tierra, el reparto de excedentes fiscales a los grupos ligados al aparato estatal y la corrupción en las instituciones públicas responsables de la administración de los recursos del Estado.

Los conflictos de tierra en el proceso agrario paraguayo

Las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX

En el marco de este contexto caracterizado muy someramente, el protagonismo del sector campesino se ha dado en mayor o menor intensidad desde finales del siglo XIX. Hasta la década de 1960, la presencia pública del campesinado se dio básicamente a través de protestas esporádicas y/o la formación de organizaciones muy localizadas para buscar soluciones a problemas muy específicos. La primera manifestación de protesta de la que se tiene noticia se produjo en la localidad de Atyra, departamento de Cordillera, en el año 1887, en la que trescientos agricultores dirigieron una nota de protesta al Ministerio del Interior contra el nuevo propietario, que pedía el desalojo de los ocupantes. Otra protesta que tuvo un mayor impacto político, se dio en el departamento de Concepción, en el lugar denominado Agaguigo,

donde seiscientas familias defendieron con armas las 37 leguas cuadradas ocupadas. El descontento, sin embargo, se acentuaba en la medida en que iban apareciendo órdenes de desalojo contra los ocupantes o por exigencias de los nuevos dueños en el pago de los arrendamientos (Gaona, 1987: 126). Estas manifestaciones de protesta abarcaban los departamentos de Central, Concepción, Guairá, Amambay, Cordillera, Paraguarí y parte de Itapúa.

La organización de pequeños productores fue otro hecho que se dio recién entre los años 1910 y 1920, fomentada por los militantes anarcosindicalistas, fundamentalmente en el departamento Central. Así se formaron la Sociedad de Agricultores Unidos de Limpio, la Sociedad de Resistencia y de Obreros Agricultores de Luque, y la Sociedad de Cultivadores y Alambiqueros de Luque. En el distrito de San Antonio se formó la Sociedad de Conductores de Carretas, y en Itá la Sociedad de Agricultores, con el propósito de organizar, administrar y distribuir la mano de obra adoptando el sistema de la minga. Estas organizaciones no pudieron sostenerse por mucho tiempo, por la persecución que sufrían por parte de las autoridades locales, el carácter de subsistencia de la agricultura paraguaya y la falta de mercado (Gaona, 1987: 132).

Las organizaciones campesinas en este período de la historia social del país (1885-1960) sobresalían por su carácter mutualista y localista. Los agricultores se organizaban para mejorar sus condiciones concretas de existencia con ayuda mutua y cuestionaban muy poco las estructuras injustas que los oprimían y las relaciones de explotación patrón-trabajador.

A partir de 1910 y hasta 1960 no se tiene información de que se hayan producido conflictos de tierra de importancia. La historia social sólo ha registrado la exacerbación de la explotación de la mano de obra campesina en los obrajes, en los yerbales y en las tanineras de los grandes enclaves agroforestales. El dolor paraguayo de Rafael Barret⁸ es uno de los grandes rescates de esa historia.

Las décadas de 1960 y 1970

Estas décadas están marcadas por la aparición de dos hechos sociales de mucha importancia por su repercusión social, económica, cultural y política. Uno de ellos es la promulgación de dos leyes, la N° 852 del 22 de marzo de 1963, que crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR), y la N° 854, de la misma fecha, que establece el Estatuto Agrario. Con estas leyes, el gobierno empezó a habilitar masivas colonizaciones, fundamentalmente hacia los ejes este y norte del país, y a legalizar ocupaciones de hecho en los departamentos de la región central. De acuerdo a cifras oficiales, de 130.443 propiedades rurales que existían en el país en el año 1960, se pasó a 258.281 en el año 1980 (Frutos, 1982: 115). Este proceso de expansión de la frontera agropecuaria y de mayor ruralización produjo transformaciones importantes en la estructura poblacional en las regiones de viejo poblamiento. La migración rural-rural tuvo su mayor apogeo en estos años (1960-1980).

El otro hecho social importante durante la década del '60 hasta mediados de los '70 fue la aparición y la rápida expansión de una nueva forma de organización campesina, las llamadas Ligas Agrarias Cristianas (LAC), que tuvieron una repercusión importante en los ámbitos políticos y económicos, razón por la cual el gobierno apeló a intensas y violentas acciones represivas para desarticularlas. Hasta entonces, la escasa o nula participación de los campesinos constituía el signo más relevante de la marginación en que se encontraban. Los intentos de organización autónoma, tanto de los partidos políticos como de la Iglesia, eran desalentados, perseguidos y reprimidos por el gobierno (Red Rural, 1993: 10).

El inicio de las Ligas Agrarias, una de las organizaciones de mayor relevancia en el país, tuvo su origen en los conflictos por la tierra. La movilización campesina que marca la aparición de las Ligas Agrarias fue la "mensura y cerco que efectuaron el presidente y vicepresidente de la seccional colorada de Santa María Misiones, quienes tenían la intención de apoderarse del campo comunal de 6 mil hectáreas en el que habitaban 500 familias" (Red Rural, 1993: 10). Si bien el foco de tensión que marcó el inicio de las Ligas fue un conflicto de tierra, éstas se organizaron sobre la base de "la fraternidad de los primeros cristianos". Esta modalidad organizacional de carácter solidario y basada en la fraternidad llevó a algunos autores a caracterizarlas como organizaciones o movimientos prepolíticos o milenaristas por el hecho de reivindicar el modo de vida de los primeros cristianos. Sin embargo, las duras condiciones de opresión que imponía la dictadura militar, y las restricciones a la libre asociación y expresión,

rápidamente dieron un giro hacia propuestas de carácter reivindicativo y más radical. La redistribución de la tierra, así como el pago justo por los productos agrícolas, pasaron a ser las demandas en torno a las cuales giró la lucha de los liguistas. Si bien la tierra era concebida como un don de Dios para todos y la explotación existente una ofensa al plan de Dios, detrás de estas percepciones subyace la idea de una sociedad igualitaria cuya base es la solidaridad y para la cual deben ser modificadas las estructuras injustas. Es importante destacar que cuando los liguistas hablaban de cambio de estructura hacían alusión a la sociedad y también a los hombres. Se partía del supuesto de que para una nueva sociedad se necesitaban hombres nuevos. Esta es la razón por la que se daba mucho énfasis a la educación. Las escuelitas campesinas y los cursillos de capacitación y de concienciación preparaban a los nuevos hombres para la prosecución de una nueva sociedad.

De aquí el rechazo a la pretensión de concebir a las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) como movimientos de carácter milenaristas, arcaicos o prepolíticos, porque desde sus inicios comenzaron a atacar las bases de la alineación, que eran el sistema educativo vigente y las relaciones de intercambio, el sustento de la economía capitalista.

Las LAC fueron movimientos de carácter religioso en sus inicios, nacieron y crecieron bajo el amparo de la estructura eclesial, pero gradualmente fueron adquiriendo un carácter contestatario que las llevó a romper sus lazos hasta con la Iglesia y a buscar nuevos aliados en otros sectores de la sociedad, como el estudiantil. De la idea de una sociedad igualitaria, con énfasis en el sistema comunitario –“vivir como hermanos”–, se desarrolla la idea de concebir al socialismo como el sistema político y económico ideal para la consecución de la igualdad en la sociedad.

Durante las décadas de los '60 y '70, la lucha por la tierra se redujo a su mínima expresión. En primer lugar, por la llamada marcha hacia el este, estrategia gubernamental de colonización agrícola que tenía por objetivo descomprimir la presionada región central del país. En segundo lugar, los potenciales demandantes de tierra son absorbidos por las grandes obras hidroeléctricas y por el sector de la construcción. Y por último, la fuerte represión contra las LAC desatada en los años 1975 y 1976, que consiguió desarticularlas totalmente.

La década de los '80 y la crisis de la economía campesina

La economía paraguaya, caracterizada por un alto crecimiento económico en casi toda la década del '70, experimenta en los '80 una brusca caída. De un crecimiento promedio del 9,42% entre 1971 y 1981, baja a 1,97% durante 1981 y 1988 (Borda y Masi, 1998: 18): “La crisis agraria emerge con la sostenida caída de precios del algodón y la soja, y un virtual cierre de los programas de colonización que conlleva a ocupaciones de tierras y conflictos sobre su tenencia, concentrada en manos de grandes capitales” (Red Rural, 1993: 17).

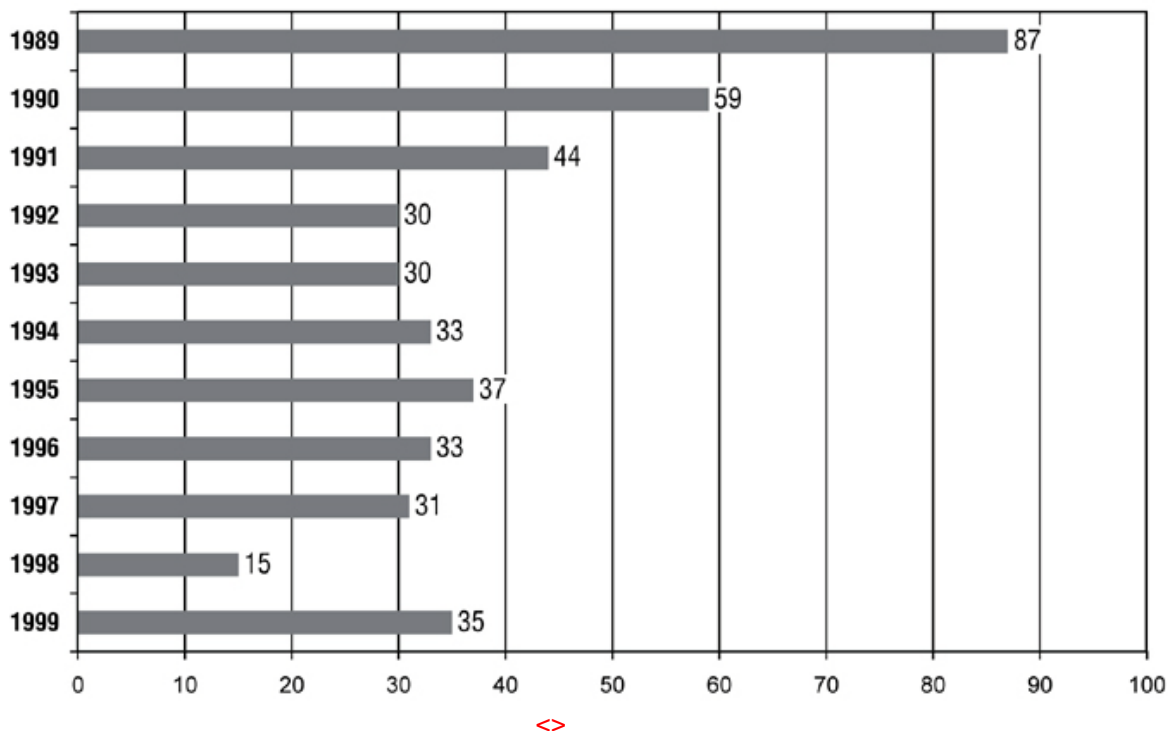
La finalización de las obras en la hidroeléctrica Itaipú produce el retorno de los asalariados a sus valles, originándose una fuerte presión por la tierra. Esta mano de obra liberada no encuentra ocupación en otros sectores económicos, lo cual agravó y complejizó aún más la situación en el campo. La tierra pasa a constituirse en la principal demanda de los campesinos. En esta década se asiste a la emergencia de nuevas organizaciones campesinas. Los viejos líderes liguistas comienzan a aglutinarse lentamente, y hacia el año 1981 ya existían varios grupos campesinos nucleados en una nueva modalidad organizativa, que son los comités de productores agrícolas. Se asiste igualmente a la expansión de un nuevo actor social, las organizaciones no gubernamentales (ONGs), que con pequeños proyectos productivos y de capacitación incursionan en el sector campesino. Producto de esta nueva modalidad de trabajo, hacia 1985 se crea una primera coordinación de las organizaciones, la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA).

Otras organizaciones de carácter gremial e independiente también aparecen en el escenario rural⁹. A mediados de los '80 la lucha por la tierra se acentúa y se producen las primeras movilizaciones de protesta masivas. Una de las más importantes se registró en Caaguazú en el año 1985, de la cual participaron 5 mil personas en protesta por un violento desalojo ocurrido en una de las ocupaciones del departamento. En 1988 se registraron 23 conflictos de tierras, que en su gran mayoría se venían arrastrando de años anteriores (IC N° 15, 1988). Las ocupaciones eran escasas, y los grupos campesinos que optaban por esta modalidad de presión eran violentamente reprimidos.

La apertura democrática y los conflictos de tierra

La ruptura del régimen autoritario del 2 y 3 de febrero del año 1989 abrió un período de transición hacia la democracia, lo cual hizo posible que la población comenzara a disfrutar de ciertas libertades civiles, sobre todo en las ciudades. Mientras tanto, en el campo la lucha por la tierra se agudizaba. En este nuevo escenario, el desarrollo de las organizaciones campesinas tuvo un gran impulso. Éstas pasan de acciones de tipo más bien económicas y de servicios a acciones reivindicativas. Las grandes postergaciones eclosionan con fuerza, y las acciones se dirigen básicamente a la recuperación de la tierra. Las organizaciones campesinas nacionales –Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Federación Nacional Campesina (FNC), Organización Nacional Campesina (ONAC), Unión Nacional Campesina (UNC), Organización de Lucha por la Tierra (OLT)– crean sus propias comisiones vecinales de sin tierra para articular, apoyar y acelerar la lucha por la tierra. El campesinado indudablemente se constituyó en uno de los principales protagonistas de la transición por ser el sector que más rápidamente puso a prueba la proclama del 2 y 3 de febrero, que hacía referencia a la recuperación de la dignidad de todos los paraguayos. Miles de campesinos sin tierra irrumpen en las grandes “propiedades privadas”, con la ilusión de hacerse de una parcela propia. En la tarde del 3 de febrero de 1989, los sin tierra con el apoyo de sus organizaciones ocupan dos latifundios improductivos de 10 mil y 11 mil hectáreas en la localidad de Maracaná, distrito de Curuguaty (Canindeyu) y otro de 5 mil hectáreas en Limoy, distrito de Minga Porã (Alto Paraná). Estas ocupaciones, realizadas en el mismo día de la apertura democrática, significaban la emergencia de numerosos casos de conflictos que permanecían ocultos por temor a la represión del régimen depuesto, eran el preludio de las masivas ocupaciones de tierra que vendrían posteriormente y representaban una dura prueba para la nueva administración del gobierno. Desde 1989 a 1999 se produjeron aproximadamente 434 casos de conflictos de tierra. Entre estos años de la transición, los tres primeros fueron los más intensos: 87 casos en el '89, 59 en el '90 y 44 en el '91. En los años posteriores la cantidad osciló entre 15 y 37, con un promedio de 30,5 casos por año.

Gráfico 1
Conflictos por año



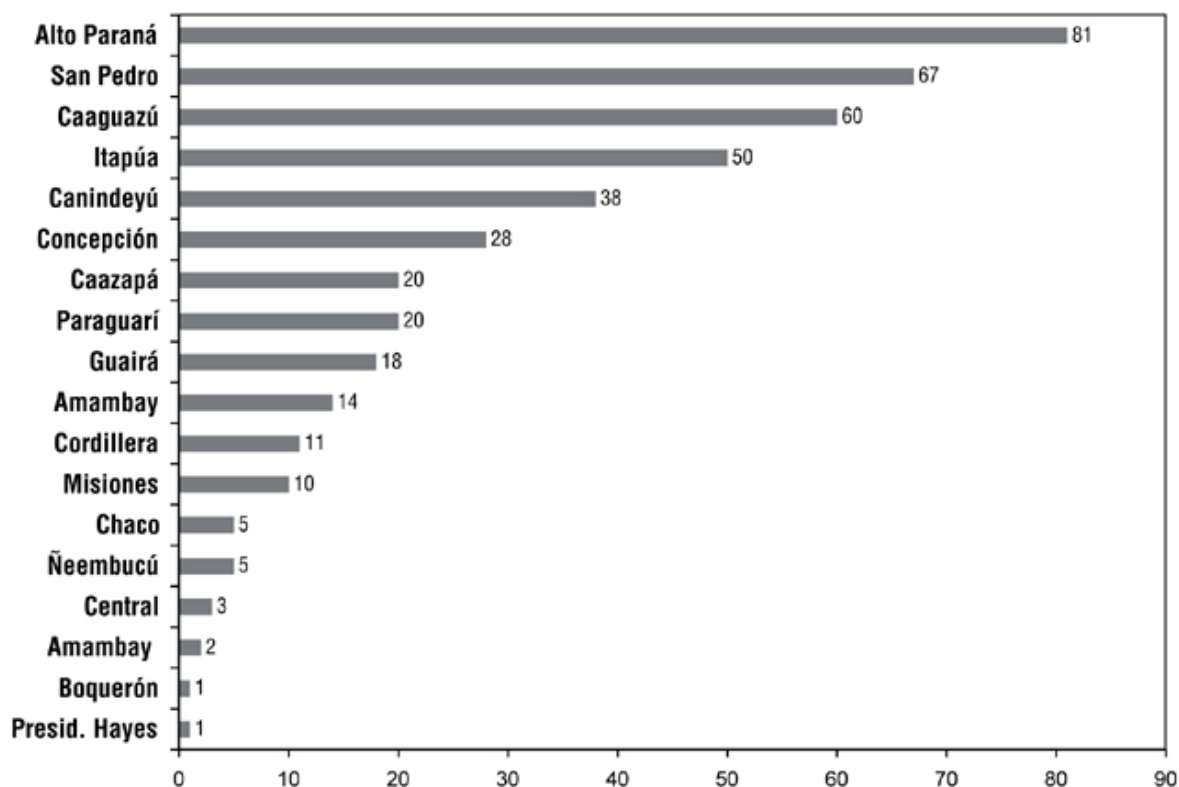
Fuente: CDE-Informativo Campesino.

La ilusión y la gran expectativa generadas en torno al nuevo sistema político instaurado, sin embargo, se desvanecieron al poco tiempo. La oligarquía terrateniente, con el apoyo del gobierno, demostró que el orden social imperante durante décadas no iba a ser modificado tan fácilmente. En respuesta a este grave conflicto social generado a partir de las ocupaciones, el Estado a través del IBR habilitó 265 nuevas colonias en una extensión de 1.457.388 ha divididas en 47.638 lotes agrícolas y agroganaderas (Anexo Cuadro 1). En el Chaco fueron habilitadas 6 colonias agroganaderas en una extensión de 755.516 ha, divididas en 980 lotes, con un promedio de 770,93 ha por lote, y en Concepción, en las ex tierras de la Compañía Industrial Paraguayo-Argentina S.A. (CIPASA), fueron parceladas 224 mil hectáreas en 1.400 lotes, con un promedio de 160 ha por lote. En los otros casos, la extensión de las fincas adjudicadas a los campesinos osciló entre 5 a 10 ha. El resultado de este proceso generado a partir de la lucha por la tierra hasta 1999 no ha significado una modificación importante de la estructura de la tenencia de la tierra, por la escasa cantidad de tierras afectadas y por los numerosos conflictos que seguían produciéndose. Si exceptuamos las colonias agroganaderas del Chaco y Concepción, que juntas hacen un total de 979.516 ha, se tiene que las tierras destinadas a la colonización en la Región Oriental llegaron a 477.872 ha, una proporción ínfima de los 7 millones de hectáreas potencialmente aptas para uso agrícola en esta región, gran parte de las cuales están destinadas a la ganadería. El uso potencial de las tierras en la Región Oriental es el siguiente: 7,1 millones de hectáreas para uso agrícola, 2,4 millones para la ganadería y 4,5 millones para la explotación forestal y otros. Sin embargo, el uso real es el siguiente: 8,5 millones están destinadas actualmente para uso pecuario, y sólo 2 millones para la agricultura (Halley Merlo, 2001).

Este proceso de lucha por la tierra no se dio de manera homogénea en todo el país. Las luchas más intensas fueron localizadas en los contextos de colonización y modernización agraria, en los cuales el impacto de los procesos de diferenciación y descomposición de la economía campesina fue mayor (CPES-CIPAE, 1995: 38). En cambio, en los contextos de viejo poblamiento la dinámica de la modernización agraria fue más lenta, y la articulación de la agricultura campesina se dio fuertemente con el mercado y no con la agricultura moderna, como en el primer contexto (Galeano y Rivarola, 2000: 33). Los departamentos de Alto Paraná con 81 casos, San Pedro con 67, Caaguazú con 60 e Itapúa con 50, son las regiones con un alto índice de conflictos de tierra en el período 1989-1999 (IC, varios números).

En los departamentos de Concepción, Caazapá, Misiones y Ñeembucú hay un fuerte predominio de la economía campesina tradicional, que se mueve muy lentamente. Recién hacia mediados del año 1990 en estos lugares se comenzó a presionar por el acceso a la tierra, con la excepción de Concepción, que tiene una antigua historia de lucha y de promoción de las organizaciones campesinas, con las llamadas comunidades eclesiales de base que posteriormente convergerían en la Organización Campesina del Norte (OCN). En este contexto, y durante el período 1989-1999, el departamento de Concepción es el que aparece con mayor cantidad de conflictos con 28 casos; le sigue Caazapá con 20, Misiones con 10, y Ñeembucú con sólo 5 casos.

Gráfico 2
Conflictos por departamento



<>

Fuente: CDE-Informativo Campesino.

Notas

7. El latifundio forestal de enclave es un concepto utilizado por Antonio García (1982) en su trabajo "El minifundio en el proceso agrario del Paraguay. Hacia un nuevo proyecto de desarrollo rural" publicado por Domingo Rivarola (compilador) en Estado, Campesinos y Modernización Agrícola.

8. Rafael Barret fue un anarquista español llegado al Paraguay en el 1900. Comenzó a difundir las ideas anarquistas y denunció las atrocidades cometidas contra los mensú (mensualeros) en los obrajes de los enclaves agroforestales de la Industrial Paraguaya y otros, a raíz de lo cual conoció las cárceles del país. Fue además un gran escritor. Murió muy joven, a los 34 años de edad.

9. Las organizaciones campesinas que surgieron en la década de los '80 fueron: el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) fundado en 1980; la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA) en 1985, organización que pasó a llamarse Federación Nacional Campesina (FNC) en 1991; la Unión Nacional Campesina (UNC), 1985, y la Organización Nacional Campesina (ONAC), 1986. La Coordinadora Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda (CNLTV) fue fundada en 1989, pero en 1993 se dividió en dos organizaciones: la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y la Coordinadora Interdepartamental de Sin Tierra (CIST). También aparecieron varias otras organizaciones regionales.

El contexto del estudio

Caracterización socio-demográfica y económica del Paraguay

El notable desarrollo de la estadística en el Paraguay en la década del noventa, gracias a la modernización institucional de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y el apoyo de organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permite estimar, cuantificar y proyectar la dinámica del país en su aspecto sociodemográfico y económico.

Las más recientes publicaciones de la DGEEC y la Secretaría Técnica de Planificación (STP) afirman que el Paraguay registrará profundos cambios demográficos en los próximos años y décadas, lo que traerá consigo importantes desafíos. El incremento de la población de las edades activas (diez a sesenta años) de gran potencial para la generación de riquezas, la movilidad geográfica y la distribución espacial de la población, pondrá al Estado frente al desafío de diseñar políticas de desarrollo que permitan el uso óptimo de los recursos humanos que, junto con los recursos naturales, son sus principales fuentes de riqueza (DGEEC y FNUAP, 1999).

De acuerdo a las estimaciones disponibles, Paraguay contaba a fines de 1999 con 5.355.850 habitantes y una tasa de crecimiento poblacional de 2,59% anual acumulativo. Si bien se pudo observar un descenso paulatino de la fecundidad, las familias numerosas hasta épocas recientes inciden en la gran cantidad de mujeres en edad de procrear (DGEEC y FNUAP, 1999: 6). La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil del año 1998 revela que el promedio de hijos de las mujeres de 15 a 44 años es de 4,1: "Está en curso una transición demográfica, desde altas tasas de fecundidad y mortalidad hacia tasas más bajas, que ya ha ocurrido en otros países, gracias a la mejora en los servicios de salud preventiva y atención médica" (DGEEC y FNUAP, 1999: 7).

Distribución espacial de la población

En las dos últimas décadas se observa un notable crecimiento del sector urbano, fruto de la emigración desde las áreas rurales. Los principales condicionamientos que inciden en la emigración rural-urbana son el agravamiento de la crisis campesina, las restricciones para la migración internacional y la expansión de la economía terciaria, que ofrece opciones de ocupación más rentable en comparación con la agricultura tradicional campesina, por más que se trate en muchos casos de estrategias de supervivencia (DGEEC y FNUAP, 1999: 16).

Hasta 1982 la urbanización fue un proceso muy lento. Desde entonces, el poblamiento de las periferias de las grandes ciudades tuvo un auge considerable. Del 43% que era la población urbana en 1982 se dio un salto al 49% en el '92, y para fines de la década se estima en un 56%. Este acelerado crecimiento de la población urbana y el descenso de la población rural coinciden con la aguda crisis de la agricultura tradicional campesina y la desaceleración económica del país, que se inicia justamente en los primeros años de la década de los 80 (DGEEC y FNUAP, 1999: 16).

De acuerdo a la STP, entre 1987 y 1992, de un total de 314 mil migrantes registrados, el 71% optó por trasladarse a zonas urbanas. Este porcentaje era de aproximadamente 60% en el quinquenio 1977-1982. La Encuesta Integrada de Hogares (EIH) 1997-1998 confirma esta tendencia al señalar que las corrientes migratorias tienen dirección urbano-urbanas (32%) y rural-urbanas (28%). Dentro de este flujo migratorio sobresalen las mujeres, que representan un 48% en el quinquenio 1977-1982, nivel que aumentó al 50% en el quinquenio 1987-1992. La EIH 1997-1998 confirmó esta tendencia al mostrar que la migración afecta al 50,1% de las mujeres, de las cuales el 60% tenía como destino las ciudades (STP, 2000).

Las corrientes migratorias afectan también de una manera dramática a los jóvenes. En los quinquenios considerados, los/as jóvenes de 14 a 29 años representaban el 47% y el 45%

respectivamente. La propensión a migrar es más alta en los grupos de mejores niveles educativos y capacitación técnica y/o laboral. Estos migrantes se insertan mayoritariamente en el sector terciario de la economía, siendo el trabajo doméstico el más frecuente entre las mujeres jóvenes y campesinas (STP, 2000: 14, 15 y 16).

Las corrientes migratorias, como se aprecia, producen un doble efecto sobre las áreas rurales. Por un lado se observa un acelerado proceso de vaciamiento, y por otro los que migran son jóvenes de ambos sexos, los de mejores niveles de escolaridad, lo cual implica que en pocos años más la agricultura familiar campesina se verá seriamente afectada. En la actualidad la economía paraguaya es una economía de servicios, ya que el 53% de la PEA está ocupada en este sector. Los otros sectores, el primario y el secundario, absorben al 29 y 18% respectivamente (STP, 2000: 24).

Características de la población rural

La población rural estimada para el año 1999 es de aproximadamente 2.599.000 personas, 1.337.000 varones y 1.262.000 mujeres, que corresponden al 46,1% del total del país. El número promedio de miembros por hogar es de 5 personas, mayor al que se registra en el área urbana, que es de 4,4. La Población Económicamente Activa rural (PEA) se acerca a las 1.021.000 personas, de las cuales 986 mil (96,6%) están ocupadas. La mayoría de quienes componen la PEA rural ocupada cuentan con algún grado de educación primaria (74%), pero solamente el 16,3% ha tenido acceso a educación secundaria, y 2,3% a educación terciaria. La tasa de analfabetismo llega al 12,7%, mayor a la que se registra a nivel nacional, de 7,7% (DGEEC, 2000).

La baja escolarización, junto con la escasa asistencia técnica, entre otros factores, tienen una incidencia directa en el rendimiento de la economía campesina. La desarticulación de la economía campesina tradicional de base autoconsumista a una economía monocultivista de base dineraria aceleró el proceso de pauperización de los pequeños productores. Este cambio en la estrategia productiva que se desarrolló a inicios de la década del setenta funcionaba a expensas de factores exógenos incontrolables para los productores.

El sector económico que genera la mayor cantidad de empleos es el agropecuario. El 52% se dedica a la agricultura, y poco más del 10% a la ganadería. El 38% restante se encuentra empleado en unidades de producción diferentes de la agricultura y la ganadería, del cual el 24,9% se encuentra en el sector terciario, comercio, transporte, servicios personales y comunales, entre otros, y entre el 8,6% y 3,5% en la industria y la construcción, respectivamente. De la PEA ocupada, el 73% se encuentra en la categoría de independientes, mientras que el 27% pertenece a la categoría de asalariados (DGEEC, 2000).

Servicios e infraestructura

Más de la mitad de los hogares del área rural se provee de agua en pozos sin bomba (57,7%). El 17,4% lo hace en pozos con bomba, el 7% de manantiales o *ycua* y el 9,8% de la Corporación de Aguas Sanitarias (CORPOSANA) o del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA).

En cuanto a infraestructura vial, el 71% de las carreteras utilizadas son de tierra, mientras que el 13% son asfaltadas. Esta situación crea serios inconvenientes para los desplazamientos de la población campesina. Con respecto al crédito y la asistencia técnica, las principales instituciones que prestan servicios en estos menesteres son el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) y las Cooperativas de Crédito. Con relación a la asistencia técnica, un porcentaje importante de las comunidades rurales, alrededor del 69%, está asesorado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y en menor medida por las Cooperativas, las empresas y los profesionales independientes (DGEEC, 2000).

Fuentes de ingresos

Las actividades desarrolladas por las unidades de producción rurales son diversas. Las de mayor difusión son las agropecuarias, cultivos agrícolas y ganados, y otras no agropecuarias, como el comercio, servicios y procesamiento de la propia producción agropecuaria (queso, almidón, miel de caña, etc.). El ingreso de los hogares rurales no proviene en su totalidad del agropecuario, que representa un poco más de la tercera parte del ingreso total, lo que permite concluir “que la economía del sector rural paraguayo (en particular la que produce ingresos) no está completamente basada en la agricultura, pues los ingresos provenientes del sector no agropecuario representan la mitad del total del ingresos. De esta forma, los datos obtenidos por la Encuesta Integrada de Hogares (EIH) 1997/98 refutan en parte la premisa de que las familias rurales obtienen la mayor parte de sus ingresos de la producción agropecuaria” (DGEEC, 2000).

Por otra parte, los datos de la EIH mostraron una fuerte asociación entre ingresos agropecuarios y niveles de pobreza en el campo. En efecto, el quintil más pobre de la población rural tiene una alta dependencia de los ingresos agropecuarios: el 84% de los ingresos de los más pobres provienen de actividades agropecuarias. Sin embargo, cuanto más elevado es el quintil de ingresos (más ricos), mayor es el peso de los ingresos no agropecuarios (58%).

Otro hecho importante que surge a partir de los datos de la EIH es la hipótesis de que no existe relación clara entre pobreza y cantidad de tierras administradas por los hogares del área rural. Por ejemplo: el 40% de la población rural no tiene tierras o tiene menos de 2 ha y presenta tasas de pobreza por debajo del promedio del área rural. Lo mismo sucede con el 11% de los que habitan el área rural y administran entre 20 y 100 ha o más: estos hogares también se encuentran por debajo del promedio de la pobreza rural. Por otra parte, el 42% que administra tierras de entre 2 y menos de 20 ha presenta tasas de pobreza por encima del promedio rural (DGEEC, 2000).

Capítulo IV

Los principales actores sociales

Los conflictos de tierra, definidos fundamentalmente en términos de una confrontación entre propietarios y sin tierra, cuyo grado de intensidad varía de acuerdo a las características que ésta va asumiendo, han sido uno de los problemas sociales de mayor trascendencia desde la apertura democrática. El hecho ha motivado a varios analistas de las ciencias sociales a interesarse por el tema. No existe ninguna investigación de carácter social que haya soslayado este problema. Sin embargo, los análisis específicos de tipo monográfico son relativamente escasos, y los que existen han puesto el énfasis en los factores causales y los efectos que producen en términos de descomposición social, de desarraigo y de pobreza. Otros se han interesado en delimitar y definir las categorías de familias sin tierra o poner énfasis en el aspecto jurídico legal. Los aportes han sido significativos desde estos puntos de vista. Pero en lo que respecta a la caracterización de los conflictos y al rol que cumplen los diferentes actores sociales, ya sea como mediadores o facilitadores de la resolución de los mismos hacia uno u otro contendiente, han sido analizados sólo tangencialmente, al igual que los movimientos sociales campesinos como soporte de la lucha por la tierra y de los demás actores.

En el presente trabajo, el énfasis, además de en lo descriptivo, estará puesto en la participación de los tres principales actores que intervienen en todo conflicto de tierra. Los campesinos sin tierra por un lado, los propietarios por otro, y el Estado en su doble rol de intermediador y de facilitador de la resolución de los conflictos. La pregunta que servirá de base es: ¿cuál ha sido entre 1989 y 1999 el papel que han jugado el Estado a través de sus principales instituciones, el movimiento campesino en su conjunto y el sector empresarial/ganadero en los conflictos de tierra en los casos registrados en los departamentos estudiados?

Para responderla es necesario analizar el concepto y las funciones del Estado, especialmente el Estado social de derecho, adoptado por la Constitución Nacional de 1992; los movimientos campesinos como principal soporte en la lucha por la tierra y el gremio empresarial ganadero como obstáculo para la erradicación del latifundio y el minifundio y como herramienta de defensa del interés corporativo de este sector.

El Estado

El Estado se define generalmente como el conjunto de personas e instituciones a través del cual se ejerce el poder en un determinado territorio; es el timón de la sociedad, es el que establece las reglas de juego, de qué manera se conjugan los diversos intereses privados con los de la sociedad en su conjunto (Revista Crítica, 1985). Comúnmente se pretende presentar al Estado como un árbitro imparcial, como una realidad neutra que está por encima de los intereses en juego en la sociedad. Sin embargo, a esta concepción del Estado se ha opuesto otra que sostiene que está controlado por grupos y organizaciones que tienen el control de la economía de un país. Los países que han adoptado como forma de organización política de la sociedad el sistema democrático occidental han estado permanentemente en la búsqueda de un modelo de organización política que se adecue a las condiciones socioeconómicas y a la evolución de la sociedad.

De esta manera, de un Estado regido por el sistema liberal a ultranza, se ha pasado a adoptar desde la Segunda Guerra Mundial el Estado de derecho, es decir, aquél que se rige por las normas constitucionales, que garantizan gobiernos elegidos democráticamente y donde la división de poderes tiene plena vigencia (Orbe, 1993: 92). Y más recientemente se habla del Estado social de derecho, que significa la profundización de la democracia política a través de una mejor redistribución de la riqueza social. Esto se logra, entre otros medios, con un sistema tributario progresivo y una política social que preste especial atención a la salud, educación, vivienda y medio ambiente, además de encarar de forma central una reforma agraria que termine con el latifundio y la miseria de extensas capas campesinas. El Estado social de

derecho, por lo tanto, combina democracia política con democracia social, esto es, Estado de derecho con justicia social y participación ciudadana (Carlos Martini, IC N° 35, 1991: 39). El Estado social de derecho reconoce explícitamente la existencia de desigualdades, y que el mercado por sí solo no garantiza el necesario equilibrio entre los sectores sociales. La igualdad de oportunidades para todos, proclamada por el Estado liberal, no es suficiente: hace falta la intervención del Estado para amortiguar dichas desigualdades y lograr un mayor equilibrio en términos sociales y económicos.

En el Art. 1 de su Carta Magna promulgada en 1992, el Paraguay adopta el Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado. Esto implica que el Estado está constitucionalmente comprometido a entender los problemas sociales y buscar el equilibrio y la solución de los mismos. Para este Estado, el campesino es un sujeto de derecho y como tal debe contar con las garantías y condiciones mínimas para su desarrollo. El propietario también es un sujeto de derecho, tiene derecho a la propiedad privada, pero no a la posesión irrestricta, que vaya en perjuicio de los demás sujetos, como ocurre en nuestro país.

A casi una década de la promulgación de la Constitución Nacional, que proclama el Estado social de derecho, éste no ha cumplido con su rol de mediador y de canalizador de las demandas sociales, sino por el contrario, ha sido y sigue siendo el principal responsable de la exacerbación de los conflictos al asumir posturas que no conciben con el rol de búsqueda del bienestar de su población. En el fondo, y a pesar de los cambios que ha habido al interior del mismo, sigue siendo un Estado que representa y defiende los intereses de una clase sobre otra (Sartorius, 1983: 43). Esto se ha podido comprobar en los conflictos de tierra, en muchos de los cuales el principal contendor ha sido el propio Estado o personas o grupos estrechamente vinculados a él (CPES-CIPAE, 1995). En otras palabras, el Estado ha sido y sigue siendo una herramienta de control al servicio de los sectores con poder económico y político. Sobre lo que ha sido el rol del Estado, Caballero Carrizosa señala que en Paraguay el Estado de bienestar no ha existido, ni siquiera con la precariedad e imperfección con que lo ha hecho en los demás países de la región. Recién con la apertura democrática las demandas sociales comenzaron a ser abordadas, pero en general la construcción de un sistema de bienestar social¹⁰ sigue siendo una de las tareas pendientes (Caballero Carrizosa, 1999: 244).

Los graves problemas sociales que azotaron a la mayoría de los países de América Latina desde los años '80 como consecuencia del ajuste estructural han obligado a estos países a implementar programas y proyectos con los cuales amortiguar las agudas carencias de los sectores más desfavorecidos. En el Paraguay se han creado instituciones como la Secretaría de Acción Social (SAS), la Dirección Nacional de Beneficencia (DIBEN) y el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), entre otras. Sin embargo, la envergadura del problema ha superado ampliamente la capacidad de respuesta de estas instituciones.

Desde la grave crisis económica producida en la década del '80, se habla con insistencia de la "reforma del Estado". ¿Por qué reforma del Estado en Paraguay? Esta es la pregunta que se hacen Masi y Borda en el estudio *Desafíos y Oportunidades de la Reforma del Estado*. Para estos autores, en el Paraguay, contrariamente a lo que ha acontecido en otros países de la región, antes que hablar de la dimensión del Estado, de achicamiento del Estado, hay que hablar de la necesidad de construir el Estado, porque la herencia dejada por el régimen autoritario ha sido un Estado "vacío, con casi ninguna institucionalidad efectiva, con escasa capacidad de control y supervisión, con fuertes limitaciones para la formulación de políticas y estrategias públicas, y con un mínimo interés en la equidad social" (Borda y Masi, 1998: 56).

El gobierno de transición que asume en 1989 siguió arrastrando esa herencia y ni siquiera con la nueva Constitución Nacional, que ha sido un avance importante en la construcción de la institucionalidad, se la ha podido superar. Actualmente, en las instituciones del Estado sigue predominando una burocracia esclerosada con altos niveles de corrupción y clientelismo político. En los casos de los conflictos de tierra, la lentitud de los trámites y el favoritismo político y económico siguen siendo la norma: "En los hechos, las políticas oficiales de asignación de tierras han estado privilegiando a los empresarios y a los especuladores, cuando se trata precisamente de priorizar la subsistencia, ligada a la función económica y social de la tierra" (Fogel, 1989: 68).

El Estado ha sido muy capaz de distribuir tierras públicas a los no sujetos de la reforma agraria –militares, correligionarios, altos funcionarios públicos– e incapaz de afectar los

grandes latifundios “porque ello afectaría los intereses de gente poderosa que posee tierras y que constituyen aliados importantes del núcleo de poder estatal” (Arditti y Rodríguez, 1987: 62).

En síntesis, se tiene un Estado que se define como “social de derecho” pero que en la práctica no ha respondido a su función de mediador y de contralor para amortiguar las desigualdades sociales.

Los movimientos sociales campesinos

Los movimientos sociales campesinos son analizados en este trabajo como organizaciones o asociaciones que representan los intereses de estos sectores. En particular se analiza el caso de los campesinos sin tierra que buscan modificar total o parcialmente la estructura de la tenencia de la tierra a través de la negociación y/o la apropiación compulsiva de la tierra para desarrollar su actividad productiva y reproductiva. El movimiento social en un sentido amplio implica la presencia de actores sociales colectivos que buscan modificar algún aspecto del orden social o en su defecto la totalidad del mismo.

En el Paraguay los sin tierra están estructuralmente ligados a las organizaciones campesinas, sean éstas regionales o nacionales. No han constituido una organización o movimiento independiente, como se ha dado en el Brasil con los Movimientos de Sin Tierra (MST). Cada organización regional o nacional incorpora a los sin tierra en su propia estructura, formando secretarías u organismos internos, al igual que los pequeños productores, los/as jóvenes y las mujeres. Desde esta óptica, las organizaciones campesinas regionales y nacionales son un recurso para los sin tierra para asegurar el apoyo de los mismos y para reforzar su capacidad de resistencia ante sus adversarios.

En el Paraguay, los estudios sobre los movimientos sociales en general y los movimientos campesinos en particular han quedado relegados por las circunstancias sociopolíticas que redujeron el espacio de análisis de las acciones colectivas de los actores sociales subalternos e incluso de relevamiento de los hechos sociales más importantes. No es casualidad que la Universidad Nacional de Asunción no haya tenido una carrera de sociología en toda su vida institucional, y que la carrera creada por la Universidad Católica en el año 1973 funcionara apenas hasta 1983, año en que fue clausurada por las autoridades académicas de la institución bajo el pretexto de “producir tilingos de izquierda”, expresión usada por uno de los académicos para justificar su cierre. La misma fue reabierta recién en el año 1995. La producción de conocimientos en el campo de las ciencias sociales no formaba parte de la agenda de las universidades y el espacio abierto por un corto período fue producto quizás de la presión y la extrema carencia de análisis explicativos de los hechos sociales en una etapa histórica de extraordinaria convulsión social. A treinta años, ese intento de generar un espacio de debate sobre las acciones colectivas, protagonizadas por los movimientos sociales, sigue arrastrando falencias. Hasta el presente, gran parte de los estudios sobre las acciones sociales colectivas y sobre todo la pobreza que afecta a estos sectores sociales no surgen del seno de las universidades sino de organizaciones privadas, de organismos internacionales y de algunas dependencias del Estado como la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de la Mujer y la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

El interés académico sobre los movimientos sociales rurales en América Latina, en general, ha sido mayor de 1960 a 1970. En los años posteriores, la aparición en el escenario de la región de nuevos actores sociales colectivos ha desdibujado en cierta manera la primacía ejercida por los estudios de los movimientos campesinos (Starn, 1991: 19).

Si en los '80 los estudios sobre los movimientos campesinos perdieron relevancia en los demás países de la región, en Paraguay es posible asegurar que fue la década de mayor producción, por la cantidad relativamente importante de trabajos sobre los conflictos sociales y los movimientos sociales (Fógel, 1982; Rivarola, 1986; Alcaráz, 1987; Arditti y Rodríguez, 1987; González et al, 1988, por citar algunos). El empuje observado en esta década declinó en la década posterior con el paso de la dictadura a la democracia. En este período, denominado de transición a la democracia, cobró gran importancia el debate sobre los derechos ciudadanos: la ciudadanía pasó a ser el centro de interés de los analistas sociales y los conflictos sociales en general quedaron relegados a un segundo plano. Hacia finales de 1990, la preocupación sobre el tema de los conflictos sociales y las acciones colectivas cobró nuevo impulso debido a la creciente manifestación de desencanto con el resultado del proceso democrático. La adopción

del modelo neoliberal como nuevo paradigma de desarrollo y la progresiva aplicación de sus recetas, comenzaron a generar descontento en una población acostumbrada al paternalismo del Estado, a pesar de su poca institucionalización, su escasa proyección social y su excesivo centralismo.

El restablecimiento de las reglas de la democracia había permitido a los actores sociales subalternos la exteriorización de sus demandas, pero la hegemonía del mercado desnaturalizó las viejas relaciones sociales, generando incertidumbre y desplazando a los tradicionales actores campesinos y obreros hacia posiciones de mayor subalternabilidad y vulnerabilidad. Los cambios operados han dado lugar al surgimiento de nuevos actores sociales, mujeres, estudiantes secundarios, desocupados, indígenas, niños de la calle, estafados por el sistema financiero, etc., los cuales comienzan a incidir fuertemente en la dinámica social y a articular nuevas formas de protesta.

Este escenario sociopolítico y económico que aparece en la región y que a su vez crea las condiciones para el surgimiento de nuevos actores colectivos introduce el debate de los viejos y nuevos movimientos sociales. Esta distinción no responde a fines meramente clasificatorios sino a un cambio importante en la manera en que la sociedad visualiza a estos actores. Si bien algunos autores manifiestan dudas respecto a esta distinción (Cohen 1988; Starn, 1991; Touraine, 1997), reconocen sin embargo que objetivamente se ha producido cambios en la cosmovisión de los actores. Si la lucha en los primeros se fundamentaba en los aspectos ideológicos y políticos, en los segundos el énfasis está puesto en lo organizativo (Calderón y Jelin, 1987). En el caso de los movimientos campesinos, estos autores señalan: “la acción combinaba orientaciones de transformación de relaciones de clase, de autonomía e identidad nacional y de afirmación étnico cultural”. En el caso de Touraine, “los movimientos sociales encarnaron en el pasado un proyecto de reconstrucción radical de la sociedad y una figura del Sujeto” (1997) o son nuevos porque ya no incluyen en su imaginario “sueños revolucionarios de una reforma estructural” (Cohen, 1988). De esta manera, los movimientos sociales en América Latina que pretendían modelos de sociedad distintos al actual o transformaciones radicales fueron perdiendo impulso y en cambio “emergen nuevos actores sociales y nuevas prácticas colectivas, tanto en el seno de los movimientos sociales clásicos (obrero-campesino), como en el desarrollo de nuevos movimientos de género, generacionales, urbanos, étnicos, de derechos humanos, etc., que no llegan a plantearse metas ni acciones holísticas” (Calderón y Jelin, 1987).

El Paraguay, por su larga tradición autoritaria o por una manera particular de su proceso de socialización, vivió en un rezago permanente con respecto a los acontecimientos sociales de la región. La observación hecha por estos autores quizás sea válida para los movimientos sociales emergentes, no así para los movimientos tradicionales campesinos y obreros que poco o nada han perdido el imaginario inicial que les dio sustento. Estos movimientos siguen combinando lo que Touraine llama lo utópico con lo ideológico, en el sentido de identificarse con los derechos del sujeto y de concentrar su lucha contra un adversario social y al interior del Estado. Los movimientos sociales tradicionales apuntan a la consecución de objetivos puntuales: tierra, créditos, precios justos, relaciones laborales más equitativas, entre otros, pero, a la vez apelan a la destrucción de las causas estructurales que provocan las desigualdades y la opresión como el sistema latifundiaro, la intermediación en los procesos de comercialización, la dependencia del capital externo, la explotación laboral, etcétera. Los movimientos emergentes, en cambio, dirigen sus objetivos mucho más a conquistar derechos de ciudadanía o a preservar aquellos ya logrados. Lo expresado con relación a los movimientos tradicionales no implica que éstos se hayan proyectado como un movimiento de naturaleza decididamente política, excepto una cúpula de dirigentes más ilustrados, a pesar de haber sido fuertemente permeados por los movimientos políticos de la región.

Toda proyección en esta dirección desde luego estaba destinada a una vida de corta duración debido al fuerte control de la dictadura que con su red de informantes distribuidos en cada rincón del país haría fracasar cualquier intento por consolidar un movimiento de esta naturaleza. *La sociedad a pesar del Estado: movimientos sociales y recuperación de la democracia en el Paraguay*, publicado en 1987 por José Carlos Rodríguez y Benjamín Arditti, es el reflejo de la lucha de los movimientos sociales al interior de un estado omnívoro, que a pesar de esta característica han podido “ocupar un espacio que ayer les estaba prohibido e, incluso, crear espacios nuevos, modos de actuar y de pensar que no existían, que habían sido olvidados o que la sociedad se negaba a reconocer y hoy debe aceptar” (1987: 21).

En el actual proceso socioeconómico y político del país –agudización de la crisis económica y alta corrupción de la clase política– los movimientos sociales se hallan en una difícil tarea de definiciones y clarificaciones de sus proyectos sociales y políticos. El Estado totalmente vulnerable a los intereses de potencias regionales y extraregionales genera un conflicto que pone en juego la propia supervivencia de los movimientos sociales. La emergencia de “pluralidades colectivas fragmentadas de viejos y nuevos actores sociales” tiene el histórico desafío de construir un proyecto aglutinador; de lo contrario, el escenario posible es una mayor fragmentación. Por fortuna, el actual escenario que se proyecta parece encaminado a lograr una articulación mayor entre dichas pluralidades y un acercamiento entre lo social y lo político que fue una experiencia importante durante gran parte de la larga dictadura stronista.

En este aspecto lo señalado por Quijano (1967: 171) en la década de los sesenta, la “tendencia del campesinado de algunos países a diferenciarse y a organizarse como un sector específico de intereses sociales, que se manifiesta en la emergencia de vigorosos movimientos político-sociales, varios de los cuales han logrado alcanzar un nivel considerable de desarrollo y han ejercido una profunda influencia sobre sus respectivas sociedades”, tampoco cuadra del todo con el caso paraguayo. En algunos períodos de la historia paraguaya el movimiento campesino tuvo un rol político importante, pero sin la proyección necesaria para modificar la relaciones sociales vigentes.

Si bien el férreo control que impuso la dictadura stronista durante treinta y cinco años ha limitado los estudios sobre los movimientos sociales en el Paraguay, ello no ha significado que no haya habido intentos por incorporar el tema en los debates. Uno de esos trabajos fue *Los movimientos sociales en el Paraguay*, una compilación de varios estudios editada por Domingo Rivarola (1986), en la cual los autores trataron de establecer un primer marco descriptivo de los movimientos sociales dado el escaso conocimiento sobre el tema. Los actores sociales estudiados fueron los campesinos, los obreros, las mujeres y los estudiantes. Otra contribución la encontramos en el libro *Avances teóricos en la explicación de los movimientos sociales rurales* de Ramón Fogel (1982), en el cual el autor realiza una revisión de varios de los enfoques que analizan los movimientos sociales rurales desde el punto de vista de los factores que hacen posible su aparición y trata de aplicarlos a dos casos históricos de movimientos sociales que aparecieron en el Paraguay en 1960 y 1970, las Ligas Agrarias de Misiones y la secta Pueblo de Dios de Caaguazú. Entre los enfoques analizados está el que propone que los movimientos sociales son resultado de la prosecución racional del interés colectivo. Oberschall (1973), expresa que la acción colectiva es un fenómeno organizacional protagonizado por grupos con capacidad organizativa para defender colectivamente sus intereses (citado por Fogel, 1982: 14). Otros autores analizados por Fogel son Hobsbawm (1968) y Wolf (1972), quienes sostienen que la aparición de los movimientos sociales rurales es una reacción a la descomposición campesina. La misma se produce por la alteración de la sociedad campesina como consecuencia de la expansión del capitalismo en la agricultura. Tanto la tierra como el trabajo y la producción se convierten en mercancías, y de esta manera se da una separación de los campesinos de sus recursos productivos y de su matriz social habitual (Fogel, 1982: 29). A partir de estos enfoques define los movimientos sociales como “grupos subalternos que buscan a través de formas organizadas influir en grupos que no hacen parte de sus adherentes para la prosecución del interés colectivo [...] Estos grupos en sus formas más desarrolladas establecen alianzas, se organizan a nivel nacional y buscan influir al gobierno para la defensa del interés común” (1).

Otro de los trabajos importantes sobre los movimientos sociales es el libro *La sociedad a pesar del Estado: movimientos sociales y recuperación democrática en el Paraguay* de Benjamín Arditti y José Carlos Rodríguez (1987). Los autores sostienen que los movimientos sociales “contribuyen a la producción de formas, espacios y mentalidades democráticas a partir de una actividad desarrollada en el terreno usualmente designado con el nombre de sociedad civil”. Dicha acción no excluye a la de los partidos políticos sino que la complementa pero en otro terreno, en el extra-estatal, el terreno propiamente societal (30)

Con relación a estos dos últimos trabajos, Campos (1992) señala que en el Paraguay se hubiera podido dar un interesante debate teórico entre estas dos corrientes: por un lado, “una corriente americana, economicista, reformista y racionalista, y por otro lado, una corriente europea más política”. Sin embargo, este debate no se dio (62). Frente a estos dos enfoques, él plantea otro que parte de un análisis histórico del modelo de desarrollo paraguayo dependiente que produce una diferenciación social que polariza la sociedad no en clases

antagónicas, sino en bloques antagónicos definidos en base a la dialéctica opresión-liberación. El bloque liberación se constituye dinámicamente como el bloque antihegemónico frente al de opresión, que es el bloque histórico hegemónico. “Dentro de esta perspectiva, actores individuales en base a un proceso dinámico de lucha constituyen actores sociales colectivos y se organizan en la búsqueda de la liberación para actuar en la producción de una sociedad modificada, transformada y humanizada con proyecto alternativo” (63).

Otro factor u otra manera de entender el proceso sociohistórico que podría explicar la aparición de movimientos sociales en el Paraguay, sobre todo en la última década, es el gran déficit que aún se da en materia de desarrollo de la ciudadanía. Las reacciones colectivas podrían deberse a la negación de los derechos fundamentales reconocidos legalmente. En el caso de los sin tierra, este factor es clave en la medida en que el reclamo parte de una premisa constitucional que establece que todo paraguayo tiene derecho a la tierra propia. Si bien esta premisa fue modificada en la Constitución Nacional de 1992, ella permanece viva en la memoria colectiva de los campesinos. Esta concepción parte de un supuesto básico de que la “ciudadanía es la condición del hombre moderno. Este se caracteriza por ser una persona con derechos y responsabilidades en su relación con el Estado y la comunidad política (...) y se sostiene por medio de las garantías constitucionales, institucionales, organizativas y recursos que el Estado moderno ofrece” (López Jiménez, 1997: 39).

Esa ciudadanía puede ser vista desde perspectivas diferentes:

- liberal: enfatiza las relaciones individualistas de autoridad, la libertad para actuar sin impedimentos ni restricciones, libertad de propiedad, de compra y venta, de contrato, etc.

- democrática: pone énfasis “en la participación igualitaria de todos los ciudadanos en la elección de las autoridades y en la definición de las políticas públicas, en el acceso igualitario a los cargos públicos y en el establecimiento de los límites constitucionales y democráticos mediante la titularidad del poder en manos de los ciudadanos” (López Jiménez, 1997: 385).

- Socialdemócrata: enfatiza la igualdad de oportunidades y el acceso de los ciudadanos al bienestar y a la riqueza que produce la colectividad, sin dejar de lado la libertad y la participación política. Subraya los derechos sociales de los ciudadanos.

Estas perspectivas comparten sin embargo “un núcleo básico constituido por dos elementos centrales: el carácter universal de la ciudadanía y la homogeneización de las diferencias como forma de concretar esa universalidad” (López Jiménez, 1997: 385).

Estos intentos de explicar las acciones de los actores sociales colectivos en el Paraguay desde perspectivas diferentes no han tenido continuidad en los ámbitos académicos públicos ni privados, lo que confirma que el escaso conocimiento sobre las acciones de estos actores sociales al cual hacía mención Rivarola (1982) veinte años atrás perdure. Uno de los grandes problemas de los movimientos sociales en el Paraguay es su fragmentación, debido quizás a la poca claridad del escenario sociopolítico que se quiere proyectar y la escasa contribución de los analistas sociales al esclarecimiento de estos escenarios complejizados cada vez más por una estrategia política y económica que busca borrar de la memoria colectiva las luchas y las conquistas de los movimientos sociales.

Origen y desarrollo de los movimientos campesinos en el Paraguay

El origen de las primeras organizaciones campesinas en el Paraguay se remonta a finales de 1800, cuando las tierras que trabajaban y que pertenecían al Estado fueron privatizadas y se quedaron sin sus fuentes de sustento. Estos trabajadores del campo, que eran en su gran mayoría pequeños productores que combinaban la producción agrícola con la ganadería en pequeña escala, se vieron obligados ante el nuevo contexto a asociarse para defender sus posesiones. La organización, por tanto, fue desde sus inicios una modalidad de agrupación formal e informal creada con el propósito de promover o de luchar por un objetivo común. Estos objetivos pueden ser económicos o sociales. En el caso de las primeras organizaciones campesinas en el país, la finalidad era detener el desalojo peticionando a las autoridades que sus derechos de ocupación fueran reconocidos y respetados.

Se presume –no hay investigaciones, excepto la de Francisco Gaona, que hayan rescatado esta parte de la historia social del país– que por lo limitado de sus objetivos estas organizaciones no atraían a grandes contingentes de personas, sino a aquellas directamente

afectadas por este nuevo contexto. Por esta razón, no constituían movimientos sociales en el amplio sentido de la palabra sino que más bien podrían ser caracterizadas como movimientos de protesta, grupos de presión (Heberle, 1974: 264) aislados unos de otros, como fueron los casos de Atyrami (Atyrá, Cordillera) en 1887 y de Cali (Emboscada, Cordillera) en 1894, entre otros (Gaona, 1987: 127). Estas protestas consistían básicamente en peticionar a las autoridades la detención de las órdenes de desalojo, la devolución de las tierras de las que fueron desalojados o la formalización de las ocupaciones ante los pedidos de desalojo de los nuevos propietarios. Si bien Gaona señala que desde los inicios de 1900 las protestas aumentaban e iban adquiriendo un mayor nivel de agitación, la nota distintiva era su aislamiento. Hubo casos en que los agricultores eran apoyados por otros lugareños, como el de Chape Cue de Emboscada (Cordillera), acompañados por agricultores de Limpio y Luque (127), pero no constituían organizaciones de segundo nivel conocidas en la actualidad como coordinaciones zonales, regionales o nacionales.

La formación de las primeras organizaciones de agricultores un poco más estructuradas fue obra de actores externos. Los gremios obreros pertenecientes a la corriente anarquista – ideología dominante de la época dentro de los gremios de trabajadores– tomaron la iniciativa y organizaron a los agricultores entre 1910 y 1930. Varias de estas nucleaciones fueron creadas en los distritos cercanos a Asunción, Itá, Luque, Emboscada, Mariano Roque Alonso, Caraguatay, etc., y fueron llamadas sociedades de resistencias. Los objetivos que se proponían eran el estudio y defensa de los intereses campesinos, la enseñanza agropecuaria, inculcar el sentimiento del ahorro, combatir el alcoholismo, practicar la asistencia social y la ayuda mutua, y estimular el esfuerzo rural por medio de los lazos federativos (Gaona, 1987: 132-133).

Estas primeras experiencias de organización culminan en los inicios de la década de 1930, cuando el presidente de la república José P. Guggiari (1929-1932) decretó en 1931 el estado de sitio en todo el país y disolvió por la fuerza la mayoría de los sindicatos, acusándolos de subvertir el orden y la paz interna. La guerra contra Bolivia también se aproximaba, y los dirigentes obreros de la época se oponían a la misma. En una conferencia de paz llevada a cabo en Montevideo, los obreros paraguayos y bolivianos declararon guerra a la guerra. El gobierno aprovechó este acontecimiento para acusar a las organizaciones obreras de subversivas, peligrosas y antipatrióticas (Lambert y Villalba, 1991: 28-29).

Desde entonces hasta 1960 las organizaciones campesinas dejaron de existir. El reinicio de las mismas se produjo a comienzos de la década del '60 con la formación de las primeras Ligas Agrarias bajo el influjo de la Iglesia Católica. De acuerdo a Campos (1992: 18), la reconstitución del actor colectivo campesino fue posible gracias al trabajo realizado por la acción pastoral de la Iglesia. En esta tarea de recomposición se destacaron las organizaciones promovidas por la acción católica en la década anterior, que dio impulso a la formación de las primeras Ligas Agrarias Cristianas (LAC).

Paralelamente con esta modalidad organizativa se desarrollaba otra, promovida desde el Estado con el apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), la cual planteaba un modelo de organización que debía conducir a la cooperativización. Producto de esta tarea emprendida por el Estado fue la creación de varias cooperativas en el interior del país, lo que condujo a la formación de dos centrales de cooperativas, la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), que aglutina a los medianos y grandes productores fundamentalmente de los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, y CREDICOOP, que es una central de cooperativas que agrupa a los pequeños productores agropecuarios (Campos, 1992: 20).

Con la represión a las Ligas Agrarias Cristianas en 1975 y 1976 termina un período de gran avance de las organizaciones campesinas en el Paraguay.

El reinicio del proceso de articulación

Uno de los canales de reencuentro de los dirigentes campesinos ex miembros de las Ligas Agrarias fueron las ONGs y las pastorales sociales de la Iglesia Católica. En 1980 líderes provenientes de varios departamentos comenzaron de nuevo a encontrarse con el objetivo de buscar nuevas formas organizativas a través de las cuales viabilizar las inquietudes de los campesinos. Estos encuentros iniciales, que comenzaron con alrededor de diez dirigentes,

fueron incorporando paulatinamente a otros hasta llegar a una coordinación que a poco más de un año ya abarcaba a varios distritos de varios departamentos. Con pequeños proyectos productivos canalizados a través de una organización no gubernamental (ONG), apoyados por agencias externas de cooperación y la pastoral social arquidiocesana de la Iglesia Católica, se dio inicio a la reorganización de los campesinos bajo una modalidad organizativa llamada comités de agricultores. La coordinación creada como resultado de esta nueva experiencia fue denominada Servicio Arquidiocesano de Comercialización (SEARCO), nombre que surge justamente por el apoyo de la pastoral arquidiocesana, que donó un terreno en las inmediaciones del Mercado Central de Abasto de Asunción para el local de la nueva coordinación. La utilización conjunta de un depósito de venta mayorista del Mercado de Abasto con la Coordinación de Horticultores de la zona central (CCH), que ya venía trabajando desde fines de 1970 con el apoyo de Misión de Amistad –organización no gubernamental perteneciente a la iglesia Discípulos de Cristo– para la comercialización de sus productos, le dio al SEARCO cobertura y pudo pasar desapercibido ante los controles de las fuerzas represivas. Cabe destacar que para la dictadura no significaba un peligro organizarse para mejorar la producción, la organización se volvía peligrosa cuando trabajaba temas educativos fuera del ámbito oficial y, sobre todo, si tenía por objetivo elevar la conciencia crítica de sus asociados. No es casualidad que el Estado autoritario haya intervenido y reprimido dos ONGs (Banco Paraguay de Datos en 1983 y el Servicio de Educación y Apoyo Social en 1988) que trabajaban en la producción y promoción de materiales educativos que daban cuenta de la realidad social y política del país.

Esta nueva modalidad organizativa, los comités de agricultores, a diferencia de las Ligas Agrarias, que tenían un carácter más político y movimientista, se caracteriza por su orientación economicista (Campos, 1992: 40), con fuerte apoyo de la Iglesia y de las llamadas organizaciones no gubernamentales que tuvieron su expansión como nuevo actor social en la década del '80.

El SEARCO, que inicialmente estaba conformado por comités de productores y horticultores de los departamentos de Caaguazú, Guairá, San Pedro, Concepción, Paraguari y Cordillera, a medida que se iba consolidando fue creando sus propias coordinaciones regionales, que posteriormente con otras organizaciones regionales de otros departamentos fundaron en el año 1985 la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA). Otros dirigentes se acoplaron a otras organizaciones nacionales como la Organización Nacional Campesina (ONAC), fundada en el año 1986 bajo la influencia de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), afiliada a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) de orientación humanista.

Además de este canal de organización que fue el SEARCO, ya se venían desarrollando otras experiencias organizativas similares en los departamentos del Guairá y Caazapá con el apoyo del Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC) desde mediados de 1975, que culminaron con la creación de la Regional Campesina Guairá-Caazapá en los inicios de la década del '80. La otra experiencia ya citada fue el trabajo del Programa Rural de la Misión de Amistad, con los horticultores de los distritos de Villeta, Itá e Itauguá del departamento Central.

Las nuevas experiencias organizativas de carácter económico-productivo surgidas con el apoyo de las ONGs y de las pastorales sociales de la Iglesia Católica no se agotaron en éstas. Otra organización de carácter más movimientista en el sentido de más abarcante, que incluía a jóvenes, sin tierra, mujeres, pequeños productores y a los familiares de desaparecidos y asesinados de las Ligas Agrarias, fue el Movimiento Campesino Paraguay (MCP), fundado en diciembre de 1980. Esta organización campesina, a diferencia de las demás, se declaraba explícitamente clasista e independiente de toda tutela de los partidos políticos, de las ONGs y de la Iglesia. Sus dirigentes provenían en su mayoría de la rama juvenil de las Ligas Agrarias conocida como Juventud Agraria Cristiana (JAC). Los dos principales departamentos donde operaba fueron Caaguazú y Misiones, y posteriormente se extendió a Alto Paraná y San Pedro.

A mediados de 1985 tuvo su aparición pública otra organización nacional, la Unión Campesina Nacional (UCN), también declarada independiente de los actores externos citados. Esta organización tuvo su origen en algunos distritos del departamento de Paraguari bajo el liderazgo de un ex funcionario del IBR que comenzó a realizar una contrapropaganda a la siembra del algodón, conminando a los productores a dejar de sembrar este rubro, por beneficiar sólo a los exportadores y a la cadena de intermediación que se crea entre éste y el

productor, y dar prioridad a los rubros de consumo. Desafiando a las autoridades de la dictadura distribuyó panfletos con dicha consigna, lo que le valió la cárcel.

Inmediatamente después de la caída de la dictadura, para direccionar la lucha por la tierra tanto en el campo como en la periferia de las ciudades, se fundó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda (CNLTV), bajo el asesoramiento de la Misión de Amistad. Esta coordinadora se bifurcó en 1993 en dos organizaciones: la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y la Coordinadora Interdepartamental de Sin Tierra (CIST).

Estas fueron las organizaciones nacionales que se crearon en la década del '80. Además de las nacionales, varias otras organizaciones regionales y distritales fueron surgiendo en la medida que la crisis económica impactaba cada vez con mayor fuerza la vida en el campo y con la aparición en el escenario urbano y rural de los organismos no gubernamentales, que comenzaron a expandir su trabajo. Ya en la década del '90 se creó otra organización nacional llamada Unión Nacional Campesina (UNC), agrupando a organizaciones regionales y distritales del departamento de Concepción y parte de San Pedro, con proyecciones posteriormente a otros departamentos como Itapúa.

Además de las organizaciones campesinas que se declaran autónomas e independientes, están los comités de agricultores promovidos a través de algunas dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como el Servicio de Extensión Agraria (SEAG). En 1997, las organizaciones de base llamadas comités de agricultores, surgidas a instancias del MAG, sumaban alrededor de 1.775, con 27.557 socios/as (Ocampos y Rodríguez, 1999: 65). La característica de estos comités es su escasa proyección social. Sus objetivos se agotan en la búsqueda de una mayor productividad y en el mejoramiento de los precios a través de ventas conjuntas.

Como se pudo notar, la fuerte represión contra las organizaciones campesinas y la amenaza permanente de represión no en todos los casos tuvieron su efecto sobre los campesinos. Con la aparición de varias organizaciones a sólo cuatro años de haberse producido la dura represión a las Ligas Agrarias (1976), los campesinos comenzaron de nuevo a rearticular sus fuerzas, y para mediados de los '80 ya el campo estaba minado de nuevo con organizaciones de diversas características y niveles de estructuración, base, zona, región y país. Las organizaciones surgidas en la década del '80 se proyectaron en la del '90, expandiendo aún más su base de operaciones, y se puede afirmar con un escaso margen de error que en el país deben ser pocos los distritos que no cuentan en su interior con algún tipo de organización campesina.

Principios y objetivos

Las organizaciones campesinas nacionales, así como algunas regionales, se definen como de carácter gremial y asumen como objetivo la defensa de los intereses de su sector. Otras tienen una proyección de menor alcance, regional o distrital, y sus objetivos son más limitados. Todas, sin embargo, tienen un denominador común: buscan mayor bienestar para sus asociados. En algunas de estas organizaciones las ideas que expresan esos principios y esos objetivos son más claras; en otras en cambio aparecen más difusas. Esta mayor o menor claridad en la definición de los principios y los objetivos también se refleja en el campo de la acción. Algunas dan prioridad al trabajo de base y otras priorizan el trabajo de impacto en las políticas públicas. A las primeras les interesa por sobre todo el desarrollo de programas que den mayores beneficios a corto plazo, sin descuidar las políticas públicas, pero dejándolas en segundo plano. Esta sería la razón que explica el enclaustramiento de ciertas organizaciones en su entorno comunitario, distrito o a lo sumo región. A las segundas les interesan las políticas públicas, y las ponen como prioridad en sus estrategias de acción. Ambas priorizaciones llevadas al extremo conducen a la larga a conflictos intra e inter-organizacionales. El basismo practicado en su máxima expresión no conduce a soluciones de carácter más estructural y no tiene ningún impacto ni en las políticas ni en la opinión pública. Por otra parte, priorizar el polo opuesto, centrando la estrategia en el ataque sistemático a las políticas públicas, puede conducir al abandono de las bases y a la pérdida de la esperanza porque no se logra nada, la lucha es estéril.

Estos dos posicionamientos, que en la realidad no se dan de manera estricta, siguen proyectados en algunas de las organizaciones tanto nacionales como regionales y constituyen

uno de los principales motivos de divisiones en el seno de las organizaciones campesinas del país. La principal causa de la división del movimiento campesino desde unos años atrás ha dejado de ser la independencia o la dependencia con respecto a los actores externos que durante la dictadura se percibían más claramente, y tiene que ver fundamentalmente con la orientación. Lo que Campos llama una orientación economicista vs. una orientación politicista. La asunción de una u otra orientación obviamente responde a cuestiones ideológicas, aunque algunos dirigentes no lo ven así o lo niegan, dejando entrever que la división es el resultado de la falta de coincidencias en las grandes líneas de acción y no necesariamente de problemas ideológicos.

Otro aspecto no aclarado y que suele ser motivo de controversias es la relación entre lo gremial y lo político. Los límites no son claros. El parcelamiento o la atomización de las organizaciones suelen ser motivados por lo difusa que resulta esta relación. La primera gran escisión de la Federación Nacional Campesina (FNC) se ha debido a esto. La inserción de movimientos políticos al interior de las organizaciones, captando miembros importantes de su dirigencia, genera dificultades por el hecho de que el dirigente o los dirigentes que responden a una determinada línea política buscan permeare las acciones de la organización con sus ideas políticas, que a veces no coinciden con el objetivo de la organización y con la percepción de la mayoría de los miembros que componen la conducción de la organización o sus socios. Si hay coincidencias se produce una dinámica distinta: si lo político y lo gremial encuentran un punto de convergencia, la organización que logra esta coincidencia asume un protagonismo público de gran trascendencia en la sociedad.

La diversidad de los acontecimientos sociales, económicos y políticos exige a las organizaciones respuestas también puntuales. Esta diversidad que afecta a las organizaciones también suele ser motivo de desencuentro porque las respuestas se diversifican. Mientras más aisladas son éstas respecto a los fenómenos que van ocurriendo, más difícil se vuelve la concertación entre las distintas organizaciones.

Estructura organizativa

La estructura organizativa o el modelo de organización de la gran mayoría de las organizaciones actuales son casi similares. La unidad más pequeña de organización suele ser el comité, compuesto de alrededor de diez familias o por la cabeza de familia, que es generalmente el hombre. Últimamente se han formado también comités de mujeres, pero son aún escasos. En una zona o distrito estos distintos comités coordinan entre sí formando las llamadas organizaciones zonales o distritales. Si en un departamento se conforman varias zonales, de la coordinación de los representantes zonales surge la regional, y de éstas, finalmente, las nacionales. El modelo organizativo descripto, aunque aparece como el dominante, no es exclusivo. Se ha dado también otra modalidad organizativa, sobre todo en aquellas organizaciones de carácter más movimientista, en las cuales la adhesión no se da a través de pequeños grupos como el comité, o comisiones vecinales de sin tierra, sino que la adhesión es a los principios y objetivos de la organización. En este caso los adherentes no necesariamente pertenecen a un sector como el campesino, sino que la organización queda abierta a que otros sectores puedan formar parte de ella. El MCP ha sido una de las organizaciones que ha ensayado este tipo de modalidad. En algunos asentamientos tampoco se forman pequeños núcleos, sino que todos los asentados forman parte de una organización centralizada.

La constitución en 1994 de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), una confederación que de hecho llegó a aglutinar a todas las organizaciones campesinas más representativas del país, ha significado el avance quizás más importante que hayan logrado las OCs desde la desaparición de las Ligas Agrarias Cristianas a mediados de la década del '70. A partir de entonces las OCs han pasado a constituirse en un actor social gravitante en el escenario social del país. Este avance, sin embargo, sólo se ha podido mantener por pocos años. En 1998 se produce la fractura en el seno de la MCNOC con la separación de varias organizaciones nacionales. Actualmente las OCs están divididas en dos grandes bloques, por un lado, la MCNOC que agrupa a cuatro organizaciones nacionales, varias regionales y distritales y la Comisión Nacional de Lucha por la Reforma Agraria, que aglutina a tres organizaciones nacionales: la FNC, la ONAC y el Movimiento de la Juventud Campesina Cristiana (MJCC).

La unidad de las organizaciones campesinas ha sido un objetivo largamente buscado, no sólo entre ellas sino también con los gremios obreros. Ya durante la vigencia del Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT) en los '80 se intentó formar una confederación entre los gremios campesinos para conformar la unidad obrero campesina, pero por diversos motivos este intento no prosperó. Pero en 1989 el MCP y la CONAPA participaron de la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), inserción que tampoco duró mucho tiempo. En menos de dos años, las organizaciones se retiraron de la Central. La ONAC, por su parte, se adhirió a la Central Nacional de Trabajadores (CNT), en la cual continúa hasta el presente. En el año 1989 las diversas organizaciones intentaron crear la Central Única Campesina, en vista de los numerosos problemas de tierra que existen y la necesidad de contar con una instancia de discusión y de decisión en la toma de medidas en torno a las prioridades del sector. La idea era construir un modelo de organización sólido que llevara el clamor campesino ante los organismos gubernamentales y otras empresas. Este intento tampoco prosperó (IC N° 14, 1989: 4).

En el '98 se ha creado una instancia de coordinación obrero-campesina denominada Coordinación Obrero Campesina (COC), que se escindió con la fractura de la MCNOC ese mismo año. El grupo conformado por la FNC, la ONAC y el MJCC junto con la CNT y otros sindicatos se quedaron en la COC, mientras el grupo que conservó el nombre de la MCNOC con otras organizaciones sindicales y sociales creó otra instancia que se llamó Frente Social y Sindical.

Demandas

De lo puntual a una visión integradora

Acceso a la tierra, crédito blando, asistencia técnica, precio justo por los productos, libertad de organización, cese de la represión, etc., fueron demandas históricas de los campesinos organizados, a las que se sumaron otras más puntuales, como la no impunidad para los asesinos de los dirigentes del sector. Desde la caída de la dictadura las organizaciones campesinas comenzaron a presionar por otro tipo de demandas sin abandonar las anteriores, dando origen a un listado cada vez más amplio de reclamos. Una investigación realizada por el Centro de Documentación y Estudios (CDE) entre 1992 y 1993 y publicada en mayo de 1994 bajo el título de Censo de las Organizaciones Campesinas reveló que las demandas del sector organizado del campesinado tenían que ver prioritariamente con aspectos relacionados a la prestación de servicios y la producción. Las demandas giraban en torno a la educación, la salud, la tierra y la infraestructura, por un lado; el desarrollo rural, la producción, el crédito, la asistencia técnica y la comercialización, por otro. En segundo nivel de importancia se encontraron la organización, la participación y la igualdad de derechos.

De las 768 organizaciones de base encuestadas, 398 de ellas respondieron que la necesidad más sentida es la escasa cobertura en educación, y le siguen salud con 327 respuestas; crédito, 293; infraestructura, 236; tierra, 224; producción, 202; asistencia técnica, 136; y comercialización, 131. Las otras demandas consideradas importantes por las organizaciones fueron desarrollo rural, organización y participación. Estos datos revelan que “la preocupación de las organizaciones campesinas de base apunta a prioridades que hacen relación a la satisfacción de las necesidades básicas –o de sobrevivencia– y relega a segundo plano los aspectos relativos al desarrollo rural, a la organización y la participación” (Rodríguez y Dávalos, 1994).

A principios de 1990, las organizaciones campesinas, en un intento por unificar criterios y presentar un paquete de reclamos a las autoridades gubernamentales, realizaron un seminario en Asunción en el que los principales puntos debatidos fueron tierra, colonización, poder local, crédito, política de precio, política fiscal, educación, salud, organización y representación campesina. Este seminario fue realizado en el marco de una campaña denominada NEIKE “caminar juntos y con prisa”, campaña para la participación campesina por la democracia.

Otro hecho relevante en la vida institucional de las organizaciones campesinas fue el pedido de condonación de la deuda. La acumulación de la deuda con los organismos financieros del Estado –Crédito Agrícola de Habitación (CAH), Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC)– a raíz de los bajos precios del algodón comenzaba a inquietar a los productores debido a la ejecución judicial de la misma, lo que conduciría irremediablemente a la pérdida de la escasa infraestructura con la que contaba el productor,

incluida su tierra. Fue a raíz de este pedido que en 1993 las organizaciones iniciaron un proceso de articulación que condujo a la formación de la Coordinación Interdepartamental de Organizaciones Campesinas (CIOC), y un año después a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), una confederación de hecho que aglutinaba a todas las OCs más representativas del país. Con la conformación de esta Mesa se inició un período de movilizaciones que produjo un impacto social y político de grandes proporciones en el país. La presencia de aproximadamente 20 mil campesinos/as de todas las edades por las calles de la capital el 15 de marzo de 1994 alteró la rutina de la ciudadanía asuncena, y desde entonces los campesinos se han constituido en una fuerza social importante. En esta movilización los reclamos fueron: asistencia a los asentamientos abandonados; expropiación de los inmuebles ocupados; regularización y legalización inmediata de las ocupaciones de tierra existentes; agilización de trámites en el IBR; apoyo al desarrollo de la producción de subsistencia, cuya cuantificación debe ser incluida en el acta de acuerdo; designar los 3.818 millones de guaraníes que la Cámara Algodonera del Paraguay (CADELPA) cedió al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la condonación de deudas por semillas e insecticidas de los productores de algodón; y participación de dirigentes campesinos en la elaboración de una nueva ley agraria donde se contemplen planes de producción y fijación de precios mínimos de algodón y otros rubros agrícolas.

A partir de entonces, todos los años las organizaciones campesinas realizan su movilización en la capital y a los viejos reclamos se van sumando otros, muchos de los cuales superan las preocupaciones que afectan sólo al espacio propiamente rural para proyectarse a las de toda la sociedad. Los pedidos se extienden al congelamiento de precio de los productos de la canasta familiar; no privatización de empresas e instituciones de servicios públicos; retiro de Paraguay del MERCOSUR; despartidización de entes públicos; rubro para todas las escuelas y alimentación para los escolares de escasos recursos; atención a mujeres embarazadas y a niños; construcción y equipamiento de hospitales con medicina y médicos. Otro de los reclamos incorporados fue la jubilación del productor agrícola a los 55 años de edad. Estas demandas muy generales quizás hayan restado capacidad de negociación a las organizaciones. Tampoco el Estado tuvo capacidad de responder a varios de estos pedidos, generando un ambiente de insatisfacción general y el aumento de la tensión entre el campesinado organizado y el Estado. Incluso dentro de la élite pensante “progresista”, y mucho más dentro del gremio empresarial, algunas de estas demandas fueron tomadas despectivamente, como el caso del retiro de Paraguay del MERCOSUR. Sorprendentemente, este mismo reclamo que los campesinos habían planteado formalmente en el año 1996, los empresarios del sector industrial lo plantearon cuatro años después, durante las movilizaciones que impulsaron en el 2000. Para los dirigentes campesinos, desde un principio el MERCOSUR significaba la muerte del pequeño productor por el escaso desarrollo tecnológico de la agricultura paraguaya y mucho más de la agricultura tradicional campesina. Los compromisos asumidos por el país en el marco de esta integración regional prácticamente no tuvieron difusión ni mucho menos han dado lugar a discusiones entre los diferentes sectores sociales (Los campesinos y el MERCOSUR, 1994: 1). Los efectos han comenzado a sentirse en las pequeñas y medianas industrias, así como en los pequeños productores, cuyo nivel de competitividad está muy por debajo de sus pares brasileños y argentinos.

La condonación de la deuda hasta la suma de seis millones de guaraníes fue lograda recién en marzo del año 1999, siete años después, en ocasión de los acontecimientos políticos ocurridos en dicha fecha y durante los cuales los campesinos que habían realizado su tradicional marcha a la capital consiguieron la aprobación del proyecto de ley en un momento histórico en el cual el país necesitaba aglutinar a todas las fuerzas democráticas para forzar el cambio del gobierno de Raúl Cubas, quien había asumido en agosto de 1998.

La incorporación de demandas que van más allá de las necesidades propias del sector campesino indicaba que el problema comenzaba a ser visualizado como de toda la sociedad y no sólo como de un sector. La solución a mediano y largo plazo podrá ser realidad en la medida en que los problemas del sector rural sean resueltos junto con los de otros sectores económicos: industria, servicios, etcétera. Esta visión integradora que comenzaba a ser realidad en los dos o tres últimos años del '90 coincide con lo que plantea Edelmira Pérez sobre la necesidad de que lo rural sea integrado al conjunto de la sociedad y desterrar la idea del papel secundario que cumple en la economía (Pérez, 2001).

De lo asistencial a un programa nacional

El avance cualitativo de las organizaciones campesinas, que condujo a la articulación en instancias inter-organizacionales, contribuyó a la generación de procesos sociales que posibilitaron la superación de la mera contestación para asumir roles más proactivos. Este gradual proceso tuvo su concreción más visible a partir del año 1999, en el que algunas de las organizaciones campesinas asumieron como estrategia plantear propuestas que superen el esquema puramente asistencial para pasar a las de tipo estructural, al reclamar del Estado programas de desarrollo nacional basados en la reactivación económica global y no sólo en la del sector rural. Estos programas se fundamentan en la necesidad de transformar la materia prima, sobre todo agrícola, dada la abundancia de la mano de obra y de energía eléctrica. Sin esta transformación, los dirigentes campesinos no creen que la profunda crisis de la producción campesina fuera resuelta de manera aislada: “Nos dimos cuenta de que el problema agrario no se restringe sólo al campo y al campesino, sino que es una cuestión nacional, ya que la crisis agraria está repercutiendo en todos los demás sectores, el de los comerciantes, de los profesionales y empleados. Entonces abrimos el debate nacional, que realizamos en todos los departamentos del país, que comenzó en junio de 1998, y en octubre del mismo año realizamos el debate en Asunción con presencia de varios profesionales y otros sectores sociales, pero del que no participaron los partidos políticos tradicionales y otros más nuevos, de lo cual deducimos que no había esperanzas de emerger de esta crisis porque en manos de los partidos tradicionales están las riendas del país” (Eladio Flecha, presidente de la FNC, 2000).

Este proceso de pasar de la reivindicación a la proposición, sin embargo, creó fisuras en los gremios campesinos que podrían ser atribuibles a la falta de claridad y de sinceridad en los planteamientos. Estas rupturas observadas en el gremio del sector campesino paraguayo no son ajenas a lo que ocurre en otros países de América Latina, tal como lo señala Diez Hurtado, en el sentido de que los campesinos fueron capaces de organizarse a nivel macro mediante la articulación en gremios de mayor alcance, altamente politizados, para luego caer en una crisis de representación y posterior fragmentación (Diez Hurtado, 2001: 196). Al igual que en el espacio rural peruano analizado por Diez Hurtado, en el Paraguay también hubo y hay más organizaciones y menos proyectos comunes, aunque la gran brecha se establece entre dos grandes gremios: la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), ruptura que se produjo en 1998. Este hecho no deja de ser una paradoja, ya que las necesidades son comunes a ambas y atacarlas centralmente hubiera sido lo más prudente.

En Paraguay, a diferencia quizás de otros países, el salto que dieron las organizaciones campesinas de pasar de lo asistencial a un programa de desarrollo nacional no surgió de estrategias urbanas; al contrario, nace en el seno del propio movimiento campesino. Dentro de esta estrategia se plantea el desarrollo de diversos programas cuya ejecución debe estar dirigida por el Estado, pero bajo control y vigilancia del movimiento social. El único programa nacional con que cuenta el Estado para el campesino es el del algodón; los otros rubros no son tenidos en cuenta y quedan al arbitrio del mercado y de las necesidades y posibilidades de los agricultores. Esta visión que nace y se reproduce en la dirigencia del movimiento social campesino, compatible con el centralismo democrático, pone en entredicho los paradigmas de la descentralización como una forma de organización sociopolítica de la sociedad: “El Estado debe ser responsable para que pueda dar solución a los problemas tanto del desempleo, el problema agrario, el problema de la salud, de la educación (...) Este hecho es mucho más complejo en las actuales circunstancias sociopolíticas en las que las instituciones del Estado están muy debilitadas. Hay un descreimiento generalizado de la población hacia las autoridades que administran el país y en estas condiciones de ingobernabilidad y de pérdida de autoridad moral de las autoridades es mucho más complicado reestructurar la sociedad teniendo como eje la descentralización política y económica” (Areco, IC Nº 145, 2001 y Quiroga, IC Nº 150, 2001). La lucha por la tierra está concebida dentro de esta estrategia. Los dirigentes de las organizaciones campesinas son conscientes de que el acceso a la tierra por sí solo no resolverá la crisis del sector, pero sí es uno de los componentes más importantes, es la base de sustentación para evitar la extinción del campesino.

Otro aspecto destacable en los últimos tres o cuatro años guarda relación con el protagonismo de las dirigencias campesinas, que no se reduce a la simple presentación de propuestas para que sean analizadas por los burócratas de las instituciones, sino que han logrado una participación paritaria en la discusión y defensa de dichas propuestas. En este

aspecto, es importante visualizar que desde las grandes movilizaciones iniciadas en 1994, a pesar de las dificultades observadas, se ha podido notar un gradual avance en la cualificación del cuadro dirigenal de las organizaciones campesinas. La defensa de los intereses campesinos ya no sólo se desarrolla en el espacio geográfico rural, sino que se ha trasladado a los ámbitos de decisión políticos, donde los protagonistas han logrado debatir y defender sus propuestas en igualdad de condiciones. Si bien muchas de ellas han quedado en meras promesas, el hecho de que hayan ocupado esos espacios anteriormente mediatizados por referentes partidarios o eclesiales es un avance significativo. El dilema 'dependencia vs. autonomía', que permanentemente se recrea dentro de las organizaciones campesinas, paulatinamente se ha inclinado a favor de la última.

Sin embargo, las propuestas y las múltiples manifestaciones de protesta hasta el presente no han tenido un impacto político importante en las estructuras del Estado, quizás porque el movimiento social en su conjunto, y el campesino en particular, no han podido estructurar un proyecto hegemónico alternativo debido a las divisiones internas y por las no coincidencias en las grandes líneas de acción. En este aspecto conviene destacar lo señalado por Bareiro, en cuanto a que el "campesinado ha desempeñado roles convergentes y divergentes en relación a sus intereses históricos, lo que significa que la gran masa de campesinos, no ha tenido ni tiene aún coherencia o conciencia para sí (...) no ha producido su propia ideología" (Bareiro, 1997: 76). Esta visión pesimista se contrapone a la reciente publicación del sociólogo norteamericano James Petras, quien señala que la "expansión de los nuevos movimientos campesinos se centra en la transformación social, cultural y económica que ha convertido a los campesinos aislados en una fuerza revolucionaria cohesionada y con conciencia de clase" (Petras, 2001). Estas visiones, ubicadas en polos opuestos, por ser muy generales no reflejan en su real dimensión la situación actual, a la que conviene tratar con cautela, porque la realidad no es ni lo uno o lo otro o es ambas cosas a la vez, pero en circunstancias y coyunturas concretas y en grupos bien definidos, evitando generalizaciones y más aún homogeneizaciones. En el Paraguay no existe el movimiento campesino sino movimientos campesinos, algunos de los cuales desarrollan trabajos que suponen un avance importante de la conciencia de clase y otros que aún permanecen en la nebulosa. Pero lo cierto y lo concreto es que ningún grupo ha desarrollado todavía una estrategia alternativa anti-sistema que ponga en peligro el modelo de desarrollo actual, por lo menos formalmente.

El gremio empresarial ganadero

El empresariado es en el Paraguay un sector social poco estudiado. Algunos trabajos hacen referencia a sus actividades y a sus demandas, pero casi nada a su composición social, sus facciones y fracciones y sus modos de acumulación. Con relación al empresariado rural, Ramón Fogel publicó un trabajo en la Revista Paraguaya de Sociología bajo el título "Los conflictos agrarios y la intervención del Estado", en el cual releva las diversas fracciones que operan al interior del empresariado rural. Los empresarios, como es sabido, son actores que tienen mucho poder dentro de la estructura del Estado. Durante la dictadura, constituían una de las bases de sustentación del régimen, sobre todo la fracción más conservadora, conformada por la oligarquía terrateniente y el grupo ligado a la mafia del contrabando. La otra fracción más modernizante, ligada a la industria y a la agroindustria, aunque no tenía mucha influencia en el gobierno, gozaba de las concesiones del gobierno en su calidad de representante de la economía formal, que le aseguraba condiciones de estabilidad para desarrollar su actividad sin mayores interferencias de los sindicatos y de los campesinos (Borda y Masi, 1998: 94). Otra fracción, quizás la de mayor poder económico y político, que emergió en la transición hacia la democracia, es la ligada al capital financiero, cuya acumulación inicial provino de la construcción de las dos grandes represas hidroeléctricas.

Dentro de este entramado, no resulta fácil hacer una distinción entre las diferentes fracciones del empresariado: los límites son difusos y se entrecruzan. Lo que aparece es una oligarquía ligada en mayor o menor medida a los diferentes sectores económicos. El empresario industrial es a la vez ganadero, terrateniente y en algunos casos agroexportador o agroindustrial. De aquí resulta que el empresario es "un sujeto social y político complejo y heterogéneo" (Luna y Valdez, 1990: 9).

En la medida en que la economía paraguaya continúa sustentada en el sector agropecuario, la tierra es un factor importante de riqueza, de poder y de prestigio. Datos recientes señalan

que el 90% de las exportaciones registradas provienen de este sector; es responsable del 35% del empleo y del 25% del PIB. El 70% del PIB industrial corresponde a la agroindustria (Halley Merlo, 2001). Este hecho hace que los sectores ligados a la tierra (ganaderos, grandes empresarios agrícolas, agroexportadores y agroindustriales) se resistan a la transformación de la estructura agraria concentradora y excluyente. Esta tarea de transformación y de modernización de las estructuras agrarias sigue teniendo las mismas dificultades en esta nueva era. La toma del poder en 1989 por un general-empresario ligado al capital financiero y dueño de grandes extensiones de tierras hizo sentir sus consecuencias cuando en 1990 el nuevo presidente del país vetó una ley del Congreso que expropiaba 150 mil hectáreas de un latifundio improductivo de 408 mil hectáreas en los departamentos de Concepción y Amambay, perteneciente a otro empresario. En 1993, otro empresario vinculado a la construcción, la ganadería y la agroexportación se hizo cargo del gobierno, con lo cual la influencia de este sector se hizo más notoria. Desde entonces “el relacionamiento y la influencia empresarial sobre el Gobierno Nacional se harían fundamentalmente por los conductos del Ministerio de Industria y Comercio, donde los titulares serían escogidos de los gremios empresariales” y donde las propuestas de éstos se convirtieron en políticas públicas (Borda y Masi, 1998: 95).

Desde la crisis de 1982 un sector del empresariado industrial reclamaba al gobierno medidas tendientes a la liberalización económica, tales como las referentes a tasas de interés, tipos de cambio, flexibilización laboral, etcétera. Sin embargo, estas medidas no fueron acompañadas por un proyecto que significara sacar al país de su prolongada crisis. Las medidas reclamadas y logradas en algunos casos sólo contemplaban los intereses de los sectores minoritarios y nada para la mayoría, cuya situación empeoraba cada vez más. Las contradicciones al interior del propio gremio empresarial se hacían sentir. Mientras un grupo de empresarios reclamaba una lucha frontal contra el contrabando, otro grupo, en connivencia con las propias autoridades nacionales y aduaneras en particular, se dedicaba a la introducción de grandes volúmenes de mercaderías sin pagar las tasas portuarias correspondientes, minando el mercado con productos de contrabando y quebrando a las empresas nacionales. Un claro ejemplo de estas contradicciones ocurre con la producción del azúcar. Por un lado, los productores hacían el esfuerzo por mejorar la productividad de la caña dulce; por otro, el contrabando traído del Brasil hacía tambalear el esfuerzo de los productores, tornando imposible la competencia por la gran diferencia de precios entre uno y otro producto. Se estima que sólo el 30% de los ingresos en concepto de tasas aduaneras ingresa al fisco, y el resto se lo reparten las propias autoridades y los funcionarios.

Tradicionalmente, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), junto con los empresarios ganaderos, son los que han tenido mayor influencia sobre las políticas económicas del país. Sus demandas se dirigían básicamente a la racionalización de los gastos públicos y a la privatización de las empresas públicas generadoras de déficits. En cambio, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) dirigía sus reclamos a la reconversión industrial, para lo cual exigía definir una política de crecimiento hacia afuera, con la adopción de medidas de tipo monetario y fiscal que sirvieran de estímulo al sector industrial junto con la creación de fondos industriales, zonas francas y polos de desarrollo industrial (Borda y Masi, 1998: 99).

En el contexto rural, el grupo predominante es la Asociación Rural del Paraguay (ARP), gremio de ganaderos, aunque algunos combinan la ganadería con la producción agrícola y otras actividades. Este gremio no es homogéneo; al interior del mismo coexisten grupos con orientaciones capitalistas modernas, y otros con visiones más arcaicas, como el liderado por la Sociedad Paraguaya de Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, de clara orientación conservadora y reaccionaria, para la cual la tierra no es concesión del Estado sino que emana del orden natural creado por Dios. Las diversas fracciones que componen el empresariado rural están conformadas por: ganaderos que combinan sus actividades con el capital financiero así como con empresas de construcción civil; ganaderos tradicionales con orientación desarrollista; otros provienen de la oligarquía y mantienen su explotación extensiva con escasa incorporación de capital y tecnología; otros forman parte de los nuevos grupos económicos y al mismo tiempo están insertos en otros sectores económicos, entre los cuales se encuentran militares con orientaciones económico-corporativos y estamentales; y, finalmente, los agentes ligados a las grandes corporaciones de capital transnacional, que combinan la explotación agrícola-forestal con la ganadera. Todos estos grupos o fracciones del empresariado rural tienen una coincidencia básica: la resistencia a toda propuesta seria de reforma agraria (Fogel, 1992: 122-123).

El Estado, el movimiento campesino y el gremio empresarial

La relación del movimiento campesino con el Estado y con el sector empresarial-ganadero se ha dado casi siempre dentro de un escenario de confrontación. Las veces en que el Estado ha invitado al movimiento campesino a una mesa de concertación, ésta termina con la retirada de los campesinos por no constituir un ámbito adecuado de resolución de conflictos y sí de cooptación y de manipulación. Así lo han interpretado sus dirigentes. Esta desconfianza hacia el Estado se mantiene, razón que explica la ausencia de representación del sector campesino en los procesos de cambio. La experiencia de participación de dos representantes nombrados por las cinco organizaciones nacionales en septiembre de 1989 (CONAPA, MCP, ONAC, UNC, MJCC) en el Consejo Nacional de Coordinación del Desarrollo Rural (CONCODER) duró menos de seis meses: se retiraron en febrero de 1990 (IC N° 17, 1990: 4). Estas organizaciones, que habían sido motivadas por aspiraciones de mayor desarrollo, rápidamente denunciaron que la política del Consejo es de neutralización de la lucha campesina: mientras por un lado prometía solución, por el otro utilizaba a las Fuerzas Armadas para desalojar a los ocupantes y amedrentar a los sin tierra. La participación en los ámbitos de poder, por tanto, fue efímera y sin resultado positivo.

Mientras tanto, el movimiento campesino apela a la reivindicación de sus derechos como estrategia fundamental de lucha. Esta estrategia, en la cual el "Estado es visto como proveedor potencial y como adversario actual (...) no puede simplemente explicarse por opciones ideológicas, sino por una historia donde el Estado y la clase política funcionaban en general con la pretensión de absorber a la sociedad civil y en particular, a las iniciativas campesinas" (Rodríguez, 1999: 223-225).

De esta manera, el movimiento campesino aparece como un movimiento fundamentalmente reivindicativo, no como un movimiento decididamente anti-sistema. Aún cuando en los discursos apela a la destrucción de ese sistema, en la práctica el Estado sigue siendo el receptor y el refugio de todas las propuestas de reivindicación, pues busca que el Estado le reconozca sus derechos, y cuando éste los niega se produce el conflicto.

En el estado social de derecho se reconoce y se respeta la heterogeneidad social. Se busca universalizar el concepto de ciudadanía, pero esta ciudadanía sólo se ha afirmado en lo político y no en otras dimensiones como en lo social, económico, cultural, ambiental, las relaciones de género, entre otros aspectos. Hay una gran brecha entre lo que establece la legislación y la realidad cotidiana: "La emergencia de la ciudadanía implica un cambio fundamental en las relaciones tradicionales de autoridad. Gracias a ese cambio, los gobernados dejan de ser objeto sometido al poder para convertirse en un sujeto y titular legítimo del poder" (López Jiménez, 1997: 43).

En los conflictos de tierra, en la mayoría de los casos, las reacciones son consecuencia de los elementos o factores señalados en los enfoques revisados, fundamentalmente en el de la descomposición campesina; sin embargo, éstas reacciones parecen tener una cercanía mayor al enfoque que parte de la negación de los derechos de ciudadanía y de la búsqueda de la construcción de una sociedad más democrática, tal como lo señalan Rodríguez y Arditti (1987). En su discurso el campesino apela a su condición de paraguayo, a su derecho de contar con una parcela de tierra. Para ello continúa reivindicando el derecho de cada ciudadano paraguayo de asentarse sobre un pedazo de tierra propio, y por lo tanto está fuera de toda lógica y de la lógica campesina que un grupo minoritario se apropie de una gran extensión de tierra o que los extranjeros tengan más privilegios que un paraguayo. El slogan lanzado en la revolución febrerista de 1936, de que la tierra es de quien la trabaja, ha calado hondo en la memoria colectiva campesina y ha sido una de las principales fuerzas motivadoras en la lucha por la tierra.

La confrontación se produce en un ámbito en el que los propietarios y el empresariado en general, junto con el gobierno, priorizan la perspectiva liberal de ciudadanía, aquella para la cual la ley es inviolable, es para todos, no importa el estrato social al que un grupo o sector pertenezca, ni las asimetrías sociales que genera o reproduce. Por otro lado, el movimiento campesino encara su lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades, buscando eliminar la asimetría en el marco del sistema democrático. En otros términos, los primeros pretenden imponer un modelo de ciudadanía conocido como el de la ciudadanía asistida, donde el sector más vulnerable es percibido como objeto de intervención de las políticas sociales

gubernamentales, y no el de la ciudadanía emancipada, donde dicho sector es visto como integrado por sujetos y actores sociales autónomos y en el que la prioridad debe ser la distribución de la riqueza generada por toda la colectividad (Bustelo y Minujín, 1996, citado por Galeano y Rivarola, 2000: 29). Esta última percepción es compatible con la que plantea López Jiménez, la de ciudadanía entendida desde la perspectiva de la socialdemocracia.

Notas

10. Caballero desarrolla el concepto de sistema de bienestar social porque permite abordar la problemática desde una perspectiva diferente. “La idea del sistema de bienestar social no involucra sólo al Estado ni sólo a la Administración Pública central sino que deja abierta la posibilidad para construir una red de actores que interactúan en forma sistemática para producir resultados concretos en cuanto a los índices de bienestar de los ciudadanos”.

Capítulo V

Marco jurídico e institucional de la tenencia de tierra

La legislación paraguaya que regula y garantiza la tenencia de la tierra y la propiedad en general está expresada en varios cuerpos legales: Constitución Nacional, Código Penal, Código Civil, la Ley 622 de 1960 de colonizaciones y urbanizaciones de hecho, la 662/60 de la parcelación proporcional de propiedades mayores, la 852/63 que crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR), y la 854/63 que establece el Estatuto Agrario. Las numerosas leyes existentes sobre el tema agrario no están exentas de contradicciones, lo que hace que su aplicación resulte en algunos casos parcial y en otros impracticable. Las reformas y las modificaciones que se han hecho sobre algunas de ellas en los últimos años no necesariamente ofrecen un marco que favorezca un mayor nivel de bienestar a la población más carenciada. En muchos aspectos han significado un retroceso, como es el caso del artículo 83 de la Constitución Nacional de 1967, que en la nueva Constitución de 1992 fue eliminado. Dicho artículo expresaba textualmente: “toda familia tiene derecho a un hogar asentado sobre tierra propia para lo cual se perfeccionarán las instituciones y se dictarán las leyes más convenientes a fin de generalizar la propiedad inmobiliaria urbana y rural y promover la construcción de viviendas económicas, cómodas e higiénicas, especialmente para trabajadores asalariados y campesinos” (Constitución Nacional, 1967). Esta ley, que garantizaba a todos los ciudadanos el derecho a una parcela propia, sea en el área rural o urbana, y obligaba al Estado a cumplir con ese derecho, desaparece en la nueva Constitución de 1992. Ésta sólo habla del derecho a tener una vivienda digna –Art. 100– sin hacer ninguna mención a la tierra propia.

La modificación introducida tiene un propósito aparente: liberar al Estado de una mayor responsabilidad en lo que atañe a la cuestión de la tierra y dejar abierto un espacio para que el mercado sea en adelante el que medie en las transacciones inmobiliarias y los conflictos de tierra resultantes aparezcan como un problema de oferta y demanda. El artículo 107 de la Constitución Nacional garantiza la competencia en el mercado; si bien hace mención a la igualdad de oportunidades, quien participa en el mercado es aquel que tiene capacidad de demanda, de la cual carece precisamente el campesino. Otra traba legal introducida en la Constitución de 1992 es el previo pago de una justa indemnización acordada convencionalmente o por orden judicial de las tierras expropiadas –Art.109. Estos mecanismos legales incorporados en las leyes agrarias muestran una tendencia clara, la intervención cada vez mayor del mercado en la regulación de la tenencia de la tierra, restringiendo el rol del Estado en la materia.

La participación de los sectores empresariales, latifundistas poseedores de grandes extensiones de tierra, ha sido contundente en la Constituyente de 1992 en contraposición a la débil presencia de representantes del sector campesino, lo cual ha llevado a la aprobación de artículos sumamente lesivos para el proceso de cambio en el sector rural. El Art. 109 de la C.N. expresa: “Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Ésta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley” (Constitución Nacional, 1992).

Esta norma consagrada en la C.N de 1992 fue un retroceso en comparación con la anterior de 1997, al incorporar el previo pago de una justa indemnización como una condición en las expropiaciones. La misma coarta la posibilidad de que el campesinado acceda a la tierra propia a través de la figura de la expropiación. Con esta ley lo que se hizo fue trasladar una potestad del Estado a la luz del derecho público, casi a una operación de compra-venta de la propiedad,

según manifiesta Hugo Halley Merlo, ex presidente del IBR. Contrasta con la naturaleza jurídica de la expropiación, según la cual ésta es un acto unilateral propio del Estado, que la impone centrado en consideraciones de orden económico, político y social, sobre la cual el afectado no discute porque el Estado lo hace en función de la necesidad del desarrollo rural del país. Sin embargo, la ley no permite eso; se resuelve la expropiación a favor de los ocupantes o peticionantes y se empieza a negociar el precio, lo que puede llevar años. Mientras tanto, se extiende la inseguridad y la precariedad de la posesión (Halley Merlo, 2001). Esta nueva situación generada a partir de 1992 ha hecho que varias expropiaciones no se hayan podido legalizar por falta de acuerdo sobre el precio entre el propietario, los interesados y el Estado, incluso en los casos de los latifundios improductivos que no están sujetos al previo pago. El asentamiento Cristóbal Espínola del distrito Raúl Arsenio Oviedo es un ejemplo de las dificultades en llegar a un acuerdo en el precio. La tierra fue expropiada en el año 1989; sin embargo, el litigio continua en el 99 por desacuerdo en el precio por hectárea y hay varios otros asentamientos en esta situación. El otro caso famoso es el de las tierras de la Compañía Industrial Paraguayo Argentina S.A. (CIPASA) –Antebi Kue– en Concepción, un latifundio improductivo que continúa sin solución por desacuerdo en el precio seis años después de su expropiación.

Aún con estas contradicciones y limitaciones, la C.N del '92 en su artículo 114 reconoce que la reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural y que para ello se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra; se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro. Este artículo, junto con el 116, que habla de la eliminación progresiva del latifundio y minifundio, son capítulos que permiten a los campesinos pugnar por una más justa redistribución de la tierra. El marco institucional y jurídico que regula todo el proceso de la reforma agraria está contemplado en las leyes 852/63 y 854/63. La primera crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR): ente autárquico cuyo patrimonio jurídicamente está separado de los bienes del Estado, es la institución responsable de ejecutar la ley 854/63 del Estatuto Agrario, cuyo principal objetivo –Art. 114– es lograr el bienestar rural a través de la transformación de la estructura agraria mediante la incorporación de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. El Art. 115 de este Estatuto establece las bases para el logro de la reforma agraria y del desarrollo rural: a) adoptando un sistema tributario que estimule la producción, desaliente el latifundio y garantice el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural según las peculiaridades de cada zona; b) la promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola; c) la programación de asentamientos campesinos previendo la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la vialidad, la educación y la salud; d) el establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al productor primario; e) el otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios; f) la defensa y la preservación del ambiente; g) la creación del seguro agrícola; h) el apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de familia, entre otros.

La vigencia ininterrumpida del Estatuto Agrario por casi cuatro décadas sin haber sufrido ninguna reforma es un indicador del poder y del control que ejerce la oligarquía terrateniente sobre las instituciones del Estado. Desde el inicio de la apertura política, las organizaciones campesinas acompañadas por otros sectores sociales, movimientos políticos, instituciones no gubernamentales, etc. se han enmarcado en la tarea de elaboración de nuevas propuestas que se adecuen a las condiciones estructurales y nuevos desafíos del sector agrario. A esta tarea se han sumado igualmente las instituciones del Estado como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), presentando el proyecto de ley denominado Programa de Modernización del Desarrollo Agropecuario y Forestal (PROMODAF); el IBR, que con el apoyo de la FAO presentó al Congreso su proyecto de reforma del Estatuto Agrario y del ente ejecutor denominado INCORA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y, finalmente, la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores, que tuvo como asesor a un experto en reforma agraria de Costa Rica y propuso el proyecto denominado Código Agrario. Ninguno de los proyectos presentados al Congreso pasó la barrera de la oposición impuesta por el sector empresarial ganadero, que en todos los casos encontraba una fuerte presencia del componente Estado, por lo cual los descalificaba argumentando que todos ellos contenían propuestas de tendencia socializante o populista por el solo hecho de proponer una redistribución más equitativa de la tierra.

Las otras leyes que regulan y garantizan la propiedad privada están contenidas en los códigos Civil y Penal, siempre con la salvedad de que cumplan con la función social y económica atribuida por la Constitución Nacional. El Código Civil establece en su Art. 1954 el derecho del propietario de usar, gozar y disponer de sus bienes y la facultad legítima de repeler la usurpación de los mismos y de recuperarlos. El Código Penal, por su parte, establece las penas privativas de libertad para los que cometieren actos de atropello a la propiedad de terceros, y cuando dicho atropello se realiza conjuntamente con otros aumenta la pena. Incluso la tentativa de apropiación ilegal es castigada.

Como se puede observar, el campesino que carece de una parcela y que no tiene capacidad de demanda, que no cuenta con los recursos económicos para participar en el mercado de tierra, debe desafiar y vencer todas estas leyes para poder hacerse de una parcela propia. Esta situación lo coloca frente a una disyuntiva: permanecer quieto sin posibilidad de acceder a una parcela o disponerse a enfrentar el desafío, lo que conlleva casi necesariamente a la ocupación, al conflicto, y éste a su vez a la intervención del Estado. La intervención del Estado es un paso importante y en la mayoría de los casos las ocupaciones de tierra se realizan con ese propósito, lograr que el Estado intervenga, pero con el riesgo de no haber ganado un aliado sino de haber sumado un enemigo, más poderoso incluso que el propietario. En muchos casos de conflictos de tierra, como se podrá ver más adelante, el Estado fue un aliado importante de los sin tierra y en otros casos un poderoso enemigo. Esta estrategia de lograr la intervención del Estado se explica por el hecho de que el mercado está fuera de las posibilidades de los campesinos y la única manera de lograr adjudicarse una parcela es a través del Estado, con el aval del Estado.

Ocupaciones de tierra: ¿un delito o un derecho?

El problema de tierra en el Paraguay plantea un dilema que va más allá de las disposiciones del derecho positivo que norman la relación de las personas y grupos en la sociedad y de la posesión de las cosas muebles e inmuebles. Para los legalistas, para quienes la convivencia en la sociedad debe estar regida por el cumplimiento irrestricto de la ley, esto no es discutible. Para los campesinos, sin embargo, todo es discutible, primero porque la ley fue hecha para proteger los intereses de los poderosos, y segundo porque la vida, la dignidad de las personas, están por encima de la ley. Su cosmovisión respecto de la tierra es totalmente diferente a la de un capitalista. La tierra para los campesinos es parte de su modo de ser, es la vida, es la madre que da todo. Esta visión, que tiene una raíz histórica profunda, sigue predominando en la conciencia de la gran mayoría de los campesinos. Incluso en las actuales ocupaciones algunos ocupantes aún apelan a la interpretación bíblica de que Dios creó la tierra para todos y que es la ley humana la que la distribuye mal. Para reparar este mal se crean las organizaciones, se realizan las ocupaciones, porque la tierra es una de las soluciones al problema que existe en nuestro país (Argüello, 2001). De esto se deduce que la tierra para un campesino es el medio, es la herramienta sin la cual pierde su identidad, deja de ser campesino: “Para el campesino, la tierra es una fuente de vida, porque de allí se obtiene para que los compañeros puedan sobrevivir, la educación de los hijos, la salud, la vestimenta, depende complementemente de la tierra porque realmente uno de los grandes problemas que tiene el campesinado es la tierra, la única profesión que tienen los compañeros es el trabajo por la tierra. Digamos que en 99% del campesinado no tiene otra profesión porque no tiene posibilidad de estudiar otra profesión y por eso el trabajo por la tierra constituye una fuente de vida porque de allí debe obtener el sustento de la familia y por eso para nosotros es de mucha importancia” (Vázquez, 2001).

Esta manera de entender y de relacionarse con la tierra contrasta profundamente con la realidad que ha impuesto el capitalismo. Esta manera de ver también es un factor aglutinante en algunos casos y en otros un factor de división. Si el campesino sin tierra o pauperizado no internaliza la necesidad de la lucha por la tierra como un interés colectivo y como un reaseguro para su futuro y el de sus generaciones posteriores, entonces se deja llevar por la apatía, por el conformismo, es muy difícil que se convenza de la importancia de recuperar las tierras del poder de los terratenientes. En cambio, cuando descubre que es un bien por el cual vale la pena luchar, la conciencia crece rápidamente. Este cambio de conciencia no se logra sin la organización, es aquí que entra a jugar un rol importante la organización campesina. Es a través de ella que el campesino llega a descubrir su interés y a percibir las relaciones sociales que se generan en torno a ella y que esas relaciones no responden a designios externos sino

que son producto de las relaciones entre los hombres. Llegar a este nivel de conciencia es un avance que facilita la organización y la lucha por la tierra.

Capítulo VI

La región, un espacio territorial diferenciado

Las regiones son espacios territoriales que posibilitan el análisis de ciertos temas de manera más intensiva y detallada y brindan posibilidades de aportar afirmaciones y explicaciones ricas en matices. Por ello, los estudios regionales tienen su importancia (Alba Vega, 1990: 19). Las regiones en el Paraguay son espacios cuya delimitación responde a condiciones geográficas y no a estructuras administrativas locales ni a límites territoriales departamentales. Varios departamentos forman parte de una misma región. Las cinco subdivisiones de las que se compone la región Oriental (Norte, Centro, Sur, Sureste y Suroeste) son delimitaciones hechas en base a cierta homogeneidad ecológica y en menor medida a condiciones socioeconómicas y culturales.

Los criterios de regionalización no siempre siguen un patrón único, dependen del interés particular del investigador y del tema en estudio. En este trabajo, las regiones son definidas fundamentalmente por variables socioeconómicas antes que por la variable territorio, aunque tengan cierta delimitación geográfica. La región de la economía campesina tradicional y la de la colonización son conceptos empleados por primera vez en los estudios sobre los procesos de transformación de la estructura agraria en los '90 (Galeano, 1990; CPES-CIPAE, 1995), en los cuales se muestra en qué medida los factores socioeconómicos y culturales propios de esas regiones condicionan determinadas características y comportamientos de los actores sociales y dinámicas diferenciadas en lo que hace a la descomposición y diferenciación campesina. Esta dinámica observada en dichos procesos es también notoria en lo que respecta a la lucha por la tierra. La región de la economía campesina tradicional comprende una gran franja que bordea el río Paraguay desde el departamento de Concepción, parte de San Pedro, Cordillera, Guairá, Paraguari, Caazapá, Misiones y Ñeembucú, en tanto que la región denominada de colonización incluye básicamente a los departamentos de Caaguazú y San Pedro y parte de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay e Itapúa. En estos cuatro últimos predomina la agricultura moderna con alta tecnología. De ambos contextos regionales se han escogido el departamento de Misiones, que comprende el área en el cual sigue vigente el patrón de relacionamiento tradicional entre el latifundio ganadero y el minifundio agrícola, y el de Caaguazú, que representa el área de colonización. Si bien en este departamento se reprodujo el modelo de la agricultura parcelaria tradicional (Galeano, 1990: 28), el impacto de los procesos de modernización agraria y el acelerado crecimiento poblacional produjeron cambios importantes que alteraron la estructura agraria, produciéndose una rápida reconcentración de la tierra y la exclusión de grandes contingentes de campesinos, sobre todo jóvenes, que comenzaron a presionar por la tierra.

Esta parte del trabajo toma como ejes de análisis variables cuya caracterización permite realizar comparaciones que muestran la dinámica de cada uno de los departamentos y en qué medida dichas variables determinan la generación o no de acciones colectivas tendientes a producir cambios en la estructura social local, y sobre todo en la estructura de la tenencia de la tierra. Las variables analizadas son: población, distribución de la tierra, formas de tenencia de la tierra, actividades productivas, las necesidades básicas insatisfechas y las organizaciones campesinas.

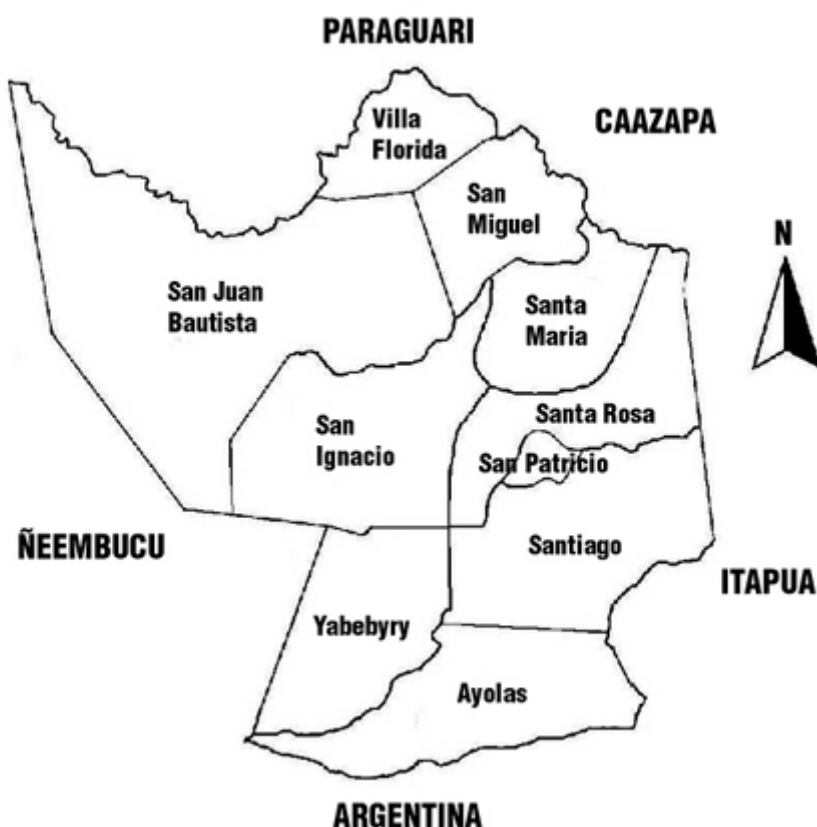
La región de la economía campesina tradicional: Misiones

Población y división geográfica

El departamento de Misiones se encuentra ubicado en la región Suroeste del país. Tiene una superficie de 9.556 Km² y una población censada en 1992 de 89.018 personas, de las cuales el 49,6% viven en el área urbana. Representa el 2,1% de la población total del país. Su densidad poblacional es muy baja, 9,3 habitantes por Km². Su tasa de crecimiento poblacional en el último período intercensal (1982-1992) fue de 1,4%. La población estimada en 1999 es de 99.823 habitantes, un incremento del 12,1%, representando el 1,9% del total del país, y una densidad poblacional de 10,4 por Km². La población urbana tuvo un leve repunte, pasando del 49,6% en el '92 al 50,4% en el '99 (DGEEC y FNUAP, 1999: 18). El 43,9% de la población

tiene menos de 15 años de edad, y esta proporción sube a 45,8 en el sector rural. El 12,9% de la población es analfabeta. En el sector rural el porcentaje de analfabetismo sube a 16,4% (DGEEC, 1999: 8).

Cuenta con diez distritos distribuidos a lo largo de la ruta internacional N° 1 que une la capital Asunción con Encarnación, capital del departamento de Itapúa, lindante con la ciudad de Posadas, Argentina. Su capital es San Juan Bautista. Todas las ciudades fueron antiguamente reducciones jesuíticas de las que aún conservan un rico patrimonio cultural. En el distrito de Ayolas se encuentra la hidroeléctrica Yacyretá, que en su momento de mayor actividad fue un gran receptor de la mano de obra del Departamento. La ciudad más importante por su población y por su desarrollo comercial es San Ignacio.



Distribución de la tierra

Misiones cuenta con 9.918 explotaciones agropecuarias cubriendo un total de 886.612 ha. Es uno de los departamentos con mayor índice de concentración de la tierra. Ciento cincuenta y cuatro unidades productivas de más de 1.000 ha, que corresponden al 1,55% del total, detentan el 75,49% de la superficie (593.754 ha). De éstas, a su vez, sólo 8 unidades cuentan con 158.248 ha, un promedio de 19.781 ha.

Las pequeñas unidades productivas de menos de 5 ha totalizan 4.887 (49,0%) y poseen 9.003 ha (2,14%), un promedio de 1,84 ha. Los distritos con mayor número de explotaciones agropecuarias son Santa Rosa con 2.303 unidades, San Ignacio con 1.678 unidades, Santa María con 1.272 y San Juan con 1.045 unidades (MAG, 1993). La cantidad de unidades agropecuarias que ocupan entre 5 a 20 ha es relativamente importante, llegando a aproximadamente 29% (2.868) de las explotaciones, con una superficie ocupada del 3,30% (26.014 ha). Este segmento de productores conforma las unidades que combinan la producción agrícola con la pequeña ganadería.

Cuadro 1
Distribución de tierra en Misiones

Estratos	Cantidad	%	Superficie	%	Promedio
No tiene	557	6	0	0,00	0,00
Menos de 1 ha	1.224	12	428	0,05	0,35
De 1 a menos 5 ha	3.663	37	8.575	1,09	2,34
De 5 a menos de 10 ha	1.741	18	11.348	1,44	6,52
De 10 a menos de 20 ha	1.127	11	14.666	1,86	13,01
De 20 a menos de 50 ha	788	8	23.102	2,94	29,32
De 50 a menos de 100 ha	296	3	19.419	2,47	65,60
De 100 a menos de 200 ha	165	2	22.541	2,87	136,61
De 200 a menos de 500 ha	123	1	37.525	4,77	305,08
De 500 a menos de 1.000 ha	80	1	55.249	7,02	690,61
De 1.000 a menos de 5.000 ha	125	1	277.740	35,31	2.221,92
De 5.000 a menos de 10.000 ha	21	0	157.771	20,06	7.512,90
De 10.000 y más ha	8	0	158.248	20,12	19.781,00
Total	9.918		786.612		

<>

Fuente: MAG (1993).

Formas de tenencia de la tierra

En el departamento de Misiones, de 9.361 explotaciones con tierras 4.871 (52,00%) cuentan con títulos definitivos, abarcando una superficie de 724.326 ha; 746 (5,08%) con títulos provisorios, con 10.908 ha; 1.269 (13,56%) son alquiladas, con 26.181 ha; 260 (2,78%) se encuentran en régimen de aparcería, con una superficie de 1.420; 2.579 (27,55%) son tierras fiscales ocupadas, con 10.558 ha; 1.503 (16,06%) ocupadas de particulares, con 10.874 ha; y otras formas de tenencia 234 (2,50%), con 3.345 ha. Las explotaciones mayores a 200 ha casi en su totalidad cuentan con títulos definitivos. Entre las que tienen menos de 5 ha, que totalizan 5.846 unidades productivas, 1.638 (28,02%) cuentan con títulos definitivos, con 2.903 ha; 331 (5,66%) con títulos provisorios, con 546 ha; 811 (15,07%) son alquiladas, con 1.280 ha; 151 (2,58%) están en régimen de aparcería, con 236 ha; 1.793 (30,69%) son ocupantes de tierra fiscal, con 2.454 ha; 986 (16,87%) son ocupantes de tierras particulares, con 1.512 ha; y finalmente 138 (2,36%) están con otras formas de tenencia, con una superficie de 75 ha (MAG, 1993).

Las explotaciones agropecuarias son unidades administrativas manejadas por una persona, familia o empresa. Estas unidades pueden contar con una o varias fincas y además con variadas formas de tenencia, con título, con título provisorio, en alquiler, etc. Por esta razón, el total de explotaciones con tierra no coincide con la suma de los parciales, porque existen explotaciones que cuentan con más de una forma de tenencia. Esta particularidad se observa sobre todo en los inmuebles de superficies grandes. En los pequeños, como por ejemplo en los de menos de 5 ha, la diferencia prácticamente desaparece.

Actividades productivas

En Misiones la principal actividad económica es la ganadería. La agricultura de renta tiene alguna importancia con los cultivos de algodón, arroz, maíz y caña de azúcar (DGEEC, 1995). En 1997 Misiones era el mayor productor de arroz con riego, con 7.778 ha sembradas (DGEEC, 1997: 126). Si bien es uno de los departamentos con mayores campos naturales de pastoreo, está en el séptimo lugar en cuanto a cantidad de ganado vacuno. Predomina aún la estancia tradicional con una práctica del tipo semifeudal, donde los peones trabajan con salarios muy por debajo del oficial vigente y sin los beneficios sociales estipulados en la legislación laboral. Los salarios rondarían entre los 300 y 400 mil guaraníes, la mitad del salario mínimo actual vigente (Ana López, 2001). Los ganaderos, por su parte, aseguran que ya terminó esa práctica de pagarle al peón a fin de año o en especie. El presidente de la ARP regional afirma que los empleados de las estancias están todos cubiertos por altísimos sueldos, y la razón que motivó a mejorar esa relación semiservil es que el patrón está en manos de los peones, es un compañero de trabajo, un amigo con quien se sale a recorrer el campo a la madrugada, y nadie más que el patrón está interesado en solucionar los problemas del campo, que haya seguridad, riqueza y un lugar donde haya alegría (Acosta Núñez, 2001).

El sector industrial está escasamente desarrollado. Pueden contabilizarse algunas industrias de balanceados, lácteos y artesanías manufactureras en cuero y lana (DGEEC, 1995: 132). En 1993 Misiones contaba con 11 industrias que daban empleo a apenas 79 personas. Las dos empresas más importantes eran una procesadora de café y otra de productos alimenticios, que estaban incluidas en la categoría de más de 21 personas empleadas; le seguían dos panaderías y un molino de arroz, que ocupaban entre 6 y 20 trabajadores. Las otras empresas eran pequeñas y empleaban entre 1 y 5 trabajadores (STP, 1993).

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Las necesidades básicas se definen “como el conjunto de requerimientos de índole físico, psíquico o cultural, cuya satisfacción es condición necesaria al funcionamiento y desarrollo de los seres humanos de una sociedad determinada” (DGEEC, 1995: 15). Las cuatro necesidades básicas consideradas por el Atlas son: calidad de la vivienda, infraestructura sanitaria, acceso a la educación y capacidad de subsistencia.

En Misiones, de 19.052 hogares, 13.470 (70,70%) registran al menos una NBI. Este perfil excede en 6,6 puntos al promedio nacional de hogares carenciados, lo que le ubica entre los 8 departamentos pobres del país. En el área rural los hogares carenciados suben al 73,22%. Misiones se ubica globalmente en el estrato III. Este estrato agrupa a hogares con al menos una NBI de entre el 67 y 75%. En calidad de vivienda se ubica en el estrato II, en acceso a educación e infraestructura sanitaria en el estrato III, y en capacidad de subsistencia en el estrato V. Esto indica que Misiones está muy rezagado en cuanto a seguridad alimentaria. El 32,32% de hogares (6.158) registra una NBI, 23,98% (4.568) dos NBI; 11,09% (2.112) tres NBI y 3,32% (632) cuatro NBI.

En el área rural del departamento, de un total de 9.130 hogares, el 73,22% (6.685) registra al menos una NBI. La distribución es la siguiente: 33,31% (3.041) de los hogares registra una NBI; 24,42% (2.230) dos NBI; 12,15% (1.109) tres NBI y 3,34% (305) cuatro NBI. A nivel nacional la distribución es la siguiente: de 412.042 hogares en el sector rural, un 72,16% tiene al menos una NBI; 25,70% dos NBI; 22,53% tres NBI; y 10,73% cuatro NBI (DGEEC, 1995).

Organizaciones campesinas

Misiones, como ya lo habíamos señalado, fue la cuna de una de las organizaciones más importantes del país, las Ligas Agrarias. Desde la violenta represión en 1976, en la cual comunidades enteras fueron devastadas, la recuperación fue lenta. El miedo que sembró la dictadura duraría hasta su caída en 1989. El proceso organizativo empezó de nuevo en 1988, como un apéndice de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay, apoyado fuertemente por la Iglesia. Con esta nueva identidad y un trabajo semiclandestino, la organización fue creciendo hasta que en el '89 pudo reflotar públicamente. Desde ese año la lucha por la tierra comenzó a madurar, pero no se realizaron ocupaciones hasta 1991. El trabajo con los sin tierra comenzó en el '89, así como con los pequeños productores. Una de las primeras acciones

colectivas importantes fue el cierre de ruta del cual participaron alrededor de 7 mil personas, en protesta por el bajo precio del algodón. Otra tiene relación con la caminata de más de 180 km que realizaron desde la ciudad de San Ignacio hasta Asunción en noviembre de 1990, en reclamo de una mayor equidad en la distribución de la tierra. Esta peregrinación fue denominada “Kurusu rape yvy rekavo” (calvario de la búsqueda de tierra). Cuando ya las condiciones estaban dadas, 16 comisiones vecinales de sin tierra y pequeños productores fundaron la Organización Campesina de Misiones (OCM) en octubre de 1994, de carácter gremial y autónomo. La organización campesina en Misiones nació con el liderazgo de los sobrevivientes de las Ligas Agrarias (entrevista a Ana López, Nemesia Ramírez y Héctor Soto, 03/2001).

De la OCM original, que nació en el '94 con el objetivo de recuperar parte de los grandes latifundios y de mejorar la calidad de vida de los pequeños productores, se desprendieron varios dirigentes, formando su propia organización. En Misiones operan actualmente, además de la OCM que se encuentra afiliada a la MCNOC, la OCM afiliada a la Federación Nacional Campesina (FNC), la Comisión Vecinal Campesino Paraguayo de Sin Tierra, la Organización Campesina Unida (OCU), y otra comisión de sin tierra. Estas organizaciones no coordinan entre sí; todos/as los/as dirigentes pertenecieron en algún momento a la OCM, pero posteriormente se retiraron por diferentes motivos para formar su propia organización.

La región de colonización: Caaguazú



Población y división territorial

El 5° departamento del Paraguay, Caaguazú, se encuentra situado en el Centro-Este de la Región Oriental. Cuenta con una extensión de 11.474 Km² y una población censada en 1992 de 386.412 habitantes, de los cuales el 27,4% reside en el área urbana. Representa el 9,3% del total de la población paraguaya. Su densidad es muy alta, 33,7 habitantes por Km². Su tasa de crecimiento anual en el último período intercensal –1982/1992– fue moderada, de 2,6% (DGEEC, 1995: 108). La población estimada para el año 1999 es de 455.404 habitantes, un

crecimiento del 17,9%; representa el 8,5% de la población total del país con una densidad de 39,7 habitantes por Km². La población urbana subió a 31,3%, un crecimiento del 4% en 7 años (DGEEC y FNUAP 1999: 18).

La población en edad de trabajar –12 años y más– de acuerdo a los datos de la Encuesta Integrada de Hogares 97/98 (EIH) es de 313.506 habitantes, que corresponde al 67% del total. De ésta, la población económicamente activa (PEA) total es de 165.819 –120.990 hombres y 44.829 mujeres. Por otra parte, la Población Económicamente Inactiva (PEI) es de 147.687 –43.831 hombres y 103.856 mujeres.

La población total de 15 años y más de edad del departamento es de 243.631 personas. De éstas, de acuerdo a los datos de la EIH 97/98 el total de alfabetos –segundo o más grados aprobados– es de 215.613 habitantes (88,5%), y los analfabetos suman 28.018 personas (11,5%). En cuanto a las principales causas de no asistencia a una institución de enseñanza formal, en primer lugar aparecen las razones económicas (54,7%), seguidas por la manifestación de no querer estudiar y por problemas relacionados con los centros educativos, 15,9% y 9,1% respectivamente.

Asimismo, la EIH 97/98 señala que en el departamento de Caaguazú la ocupación por sector económico es la siguiente: primario 51,2%, secundario 14,2%, y terciario 34,6%. Si se compara con el porcentaje del censo de 1992, se observa una disminución de ocupados en el sector primario relativamente significativa, de un 12,8% (64%), y un aumento de ocupados en el sector terciario de un 14,6% (20%).

Caaguazú está dividido territorialmente en 16 distritos, siendo las ciudades más grandes Coronel Oviedo, su capital, y Caaguazú, denominada también capital de la madera por la gran cantidad de industrias madereras en el lugar. Cruza por este Departamento una de las carreteras más importantes del país, que conduce a la capital del Alto Paraná, Ciudad del Este, frontera con Foz de Iguazú, Brasil. Otra de las ciudades que tuvo gran crecimiento es J. Eulogio Estigarribia, poblada en su mayoría por inmigrantes menonitas. Este distrito cuenta con una de las industrias lácteas más importantes del país y también sobresale por su gran producción de granos, soja, maíz y trigo.

Distribución de la tierra

Caaguazú cuenta con 43.681 explotaciones agropecuarias, que cubren un total de 897.045 ha. Es uno de los departamentos con mayor proporción de campesinos medios. El 56,62% de las explotaciones posee entre 5 a 20 ha y cubre el 24,56% de la superficie (221.172 ha). Esta particularidad es resultado del intenso proceso de colonización al que fue sometido este departamento. Hasta finales de la década del '80 era el principal polo de recepción de la migración campesina. Sin embargo, también ha sufrido, al igual que otros departamentos, un proceso de minifundización muy acelerado como consecuencia del crecimiento demográfico y de la venta parcial de los lotes para cubrir deudas contraídas con instituciones estatales de crédito o particulares. Cabe recordar que el departamento de Caaguazú, junto con los de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, Itapúa y San Pedro, configuraron los departamentos típicos del Programa de Colonización. Desde la apertura del Instituto de Bienestar Rural (IBR) en 1963, que afectó 2.2 millones de hectáreas en su programa de colonización, éstas dieron lugar a la formación de 366 colonias con 89.525 lotes, distribuidos en 285 colonias oficiales y 81 privadas hasta 1987. Caaguazú fue el centro de la colonización, con un total de 97 colonias habilitadas, 59 oficiales y 38 privadas, que abarcaron una superficie total de 514.025 ha con 30.419 lotes (Borda, 1990: 33-36). Desde el '89 al '99 el IBR habilitó 42 nuevas colonias en una superficie de 67.515 ha, totalizando 6.990 lotes (IBR, 2000). Si tomamos en cuenta que se distribuyeron 514.025 ha de tierras en 97 colonias en parcelas de 10, 15 y 20 ha, desde 1963 hasta 1987, el censo agropecuario de 1992 registra que los mencionados estratos de explotaciones agrícolas cubría en el '92 –cinco años después– apenas 138.896 ha, un poco más de la cuarta parte del total distribuido en las 97 colonias. Este hecho confirma el rápido proceso de reconcentración de la tierra en dicho departamento.

Las explotaciones menores a 5 ha conforman el 30,62% (13.630) y cubren una superficie del 3,5% (31.367 ha), un promedio de 2,30 ha. En el otro extremo, entre las explotaciones mayores a 1.000 ha, éstas cubren una superficie del 39,46% (353.937 ha) y constituyen el 0,29% (124) del total de explotaciones (ver cuadro). Los distritos con mayor número de

explotaciones son Caaguazú con 6.296; Yhú con 4.884; Coronel Oviedo con 4.482; Juan Manuel Frutos con 4.228; y Raúl Arsenio Oviedo con 3.410 explotaciones (MAG, 1993: 10).

Cuadro 2
Distribución de tierra en Caaguazú

Estratos	Cantidad	%	Superficie	%	Promedio
No tiene	206	0,47	0	0,00	0,00
Menos de 1 ha	1.248	2,86	545	0,06	0,44
De 1 a menos 5 ha	12.176	27,87	30.822	3,44	2,53
De 5 a menos 10 ha	13.032	29,83	82.276	9,17	6,31
De 10 a menos 20 ha	11.703	26,79	138.896	15,48	11,87
De 20 a menos 50 ha	3.965	9,08	105.174	11,72	26,53
De 50 a menos 100 ha	692	1,58	45.672	5,09	66,00
De 100 a menos 200 ha	296	0,68	38.033	4,24	128,49
De 200 a menos 500 ha	156	0,36	46.090	5,14	295,45
De 500 a menos 1.000 ha	83	0,19	55.609	6,20	669,99
De 1.000 a menos 5.000 ha	110	0,25	226.567	25,26	2.059,70
De 5.000 a menos 10.000 ha	11	0,03	78.589	8,76	7.144,45
De 10.000 y más ha	3	0,01	48.781	5,44	16.260,33
Total	43.681		897.045		

<>

Fuente: MAG (1993).

Formas de tenencia de la tierra

De las 43.475 explotaciones con tierras en Caaguazú, 20.391 (46,90%) cuentan con títulos definitivos; 8.582 (19,74%) con títulos provisorios; 5.437 son alquiladas (12,51%); 715 (1,64%) están en régimen de aparcería; 5.587 (12,85%) son de ocupantes de tierra fiscal; 7.477 (17,20%) de ocupantes de tierra particular; y 901 (2,07%) están con otras formas de tenencia. Como se puede apreciar, el 46,90% de las unidades productivas cuenta con títulos definitivos, una proporción muy cercana a la del nivel nacional, que es de 47,36%. Las unidades productivas con mayores problemas de titulación son las que se encuentran en los estratos de 20 ha y menos. A partir de las unidades de 20 a 50 ha la proporción sube a casi el 80%, y en los estratos superiores se acerca al 100%. La precariedad en la tenencia se acentúa en el estrato inferior, el de menos de 5 ha de tierra, lo que acarrea innumerables dificultades a los productores (MAG, 1993).

Actividades productivas

Las actividades económicas principales del departamento de Caaguazú son la agricultura, la explotación maderera y la ganadería. Del 1,1 millón de hectáreas de superficie con la que cuenta, 900 mil hectáreas (78%) son aptas para la actividad agropecuaria. De este total, 350 mil hectáreas (39%) se destinan a la ganadería y 319 mil hectáreas (35%) a la agricultura (STP, 1993). Entre los cultivos sobresalen el algodón, la caña de azúcar, el tabaco y la mandioca. La soja y el trigo son cultivados básicamente por las cooperativas menonitas y cubren una superficie del 4% del total destinado a la actividad agrícola. Hasta mediados de la

década del '90, este departamento era el principal proveedor de mandioca a los mercados locales y uno de los mayores productores de algodón.

En 1993 contaba con 251 empresas industriales que daban ocupación a 5.309 personas, de las cuales 120 ocupaban entre 1 a 5 trabajadores; 87 entre 6 y 20; 37 entre 21 y 100; y 7, más de 100 trabajadores. La industria maderera era la más importante; sin embargo, a partir de la década del '90 comenzó el quiebre de varias de ellas por la intensa deforestación. En el año 1989, según las informaciones obtenidas, el departamento de Caaguazú contaba con 3.225 hornos para la fabricación de carbón vegetal y 182 aserraderos. Otras industrias con las que contaba eran desmotadoras de algodón, secaderos, silos, alcoholeras, aceiteras, industrializadora de bebidas (cerveza y gaseosas), entre otras (STP, 1990). En 1999 gran parte de estas industrias ha dejado de operar. Los aserraderos se han reducido en más del 50%, así como las desmotadoras, por la reducción del área de siembra del algodón. Las dos industrializadoras de bebidas cerraron sus fábricas en el año 1995, quedando los obreros sin su fuente de empleo. El quiebre de la mayoría de las industrias ha quebrado también el incipiente desarrollo del sindicalismo en este Departamento que tuvo su importancia después de la apertura política.

En cuanto a ganadería, Caaguazú ocupa el sexto lugar, con 564 mil cabezas de ganado vacuno. En este departamento se practica la ganadería intensiva, y una inmensa proporción de los ricos suelos agrícolas fue destinada a campos de pastoreo. La masiva deforestación de extensos bosques nativos se intensificó después de la apertura democrática. Los propietarios de grandes extensiones de tierras comenzaron a talar los montes por temor a las ocupaciones por parte de campesinos sin tierra. Actualmente se puede ver en algunos de sus distritos, como el de Yhú, tierras convertidas en estancias sin que sean explotadas, o parcialmente explotadas, con extensas praderas artificiales sin ganado alguno o con muy pocos.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

El departamento de Caaguazú contaba con 74.367 hogares. De éstos, un total de 56.034 figuraba con al menos una NBI (75,35%), afectando a un total de 305.895 personas. Este porcentaje es superior en 11 puntos al promedio nacional, que es de 64,18% de hogares, y se distribuye de la siguiente manera: hogares con una NBI, 26.236 (35,28%); con dos NBI, 19.368 (26,04%); con tres NBI, 8.038 (10,81%); con cuatro NBI, 2.392 (3,22%).

Caaguazú ocupa el segundo estrato en lo que hace a acceso a la educación y capacidad de subsistencia, bajando al tercero en las estratificaciones según calidad de la vivienda e infraestructura sanitaria. Sin embargo, en la clasificación global está ubicado en el estrato IV.

En el sector rural, de 52.457 hogares, no tiene ninguna NBI el 25,26% (13.252 hogares); tiene al menos una NBI el 74,74% (39.205 hogares); tiene una NBI el 35,03% (18.378 hogares); tiene dos NBI el 25,20% (13.219 hogares); tiene tres NBI el 11,08% (5.811 hogares); y tiene cuatro NBI el 3,43% (1.797 hogares) (DGECC, 1995: 108).

Organizaciones campesinas

Caaguazú es otro de los departamentos en los que la organización campesina tuvo una presencia relevante. Las Ligas Agrarias tuvieron un desarrollo importante y, después de Misiones, quizás haya sido el departamento más golpeado por la represión, con varios asesinatos, desapariciones y detenciones. La más violenta fue contra el conocido "caso Caaguazú", ocurrido en diciembre de 1980, en el que fueron asesinados 10 campesinos, heridos otros tantos y aproximadamente 80 quedaron detenidos. La organización campesina con mayor arraigo en la zona es la Federación Nacional Campesina, cuya regional ARPAC aglutina a una importante cantidad de campesinos pequeños productores y sin tierra. La otra organización con buena cantidad de afiliados es el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). Otras organizaciones que operan en el departamento son la Organización Nacional Campesina (ONAC), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), que tiene algunas bases, y después varias organizaciones de carácter distrital, como la Organización Campesina de Repatriación (OCAR), la Organización Campesina de Desarrollo del Este (OCDE), la Organización Campesina de San Joaquín, entre otras. Además de estas organizaciones independientes de carácter gremial, operan en la zona dos cooperativas importantes, Caaguazú Poty Ltda., de la

ciudad del mismo nombre, y la de Coronel Oviedo Ltda., en la ciudad de Coronel Oviedo. Es indudablemente uno de los departamentos con mayor número de organizaciones de distintas filiaciones.

Análisis comparativo de ambos departamentos

Una de las hipótesis planteadas en esta investigación apunta a que la intensidad de los conflictos de tierra está relacionada con los contextos regionales. La caracterización de los departamentos en base a las variables analizadas muestra una dinámica bastante diferenciada entre ambos contextos. En cuanto a la variable población, Caaguazú tuvo un crecimiento del 17,9% en 8 años (1992-1999), mientras que en Misiones el crecimiento fue del 12,1%, aumentando la densidad poblacional en 6 personas por Km² en el primero (de 33,7 en el '92 pasó a 39,7 en el '99), y en apenas 1,1 persona por Km² en el segundo (de 9,3 en el '92 pasó a 10,4 en el '99). Con respecto al crecimiento de las áreas urbanas, también se nota una gran diferencia. En Caaguazú la población urbana, que representaba el 27,4% en 1992, subió a 31,4% en el '99, en tanto que en Misiones ese porcentaje sube de 49,6% en 1992 a 50,4% en el '99. Existe igualmente diferencia en cuanto a la proporción de analfabetos en uno y otro departamento. En Caaguazú el porcentaje de analfabetos es de 11,5% y en Misiones de 12,9%, subiendo a 16,4% en el área rural en este último.

La distribución de la tierra también muestra una gran disparidad; Misiones aparece como el departamento de mayor concentración, pues en el índice de Gini llega a 0,9376, cifra levemente superior a la registrada a nivel nacional, que es de 0,9344, mientras que Caaguazú tiene un índice del 0,7368, inferior en 2 puntos al registrado a nivel nacional. En lo que hace a la minifundización, Misiones aparece como el más afectado. Las explotaciones de menos de 5 ha en este departamento alcanzan el 49% del total, con un promedio de 1,84 ha, inferior al promedio nacional que es de 2,02 ha, en tanto que Caaguazú totaliza el 30,73% con un promedio de 2,3 ha. En las explotaciones mayores a 1.000 ha igualmente hay diferencia: en Misiones este estrato cubre el 75,49% de la superficie y en Caaguazú el 39,46% del total. Las explotaciones agrícolas que sobresalen claramente en Misiones son las que corresponden al estrato que va de 1 a menos de 5 ha totalizando un 37% de las mismas (Cuadro 1), en tanto que en Caaguazú las explotaciones agrícolas que sobresalen son las del estrato de 5 a menos de 10 ha con un total de 29,83% (Cuadro 2).

La minifundización es una de las principales vías y la más antigua forma de exclusión social de los campesinos (Galeano y Rivarola, 2000: 30). Ella conlleva a la incapacidad no sólo para reproducir su economía sino también a la pérdida de formas de solidaridad o de relacionamiento formales e informales de cooperación con sus pares. El más pobre entre los pobres debe buscar satisfacer sus necesidades cotidianamente y ya no le sobra tiempo para otro tipo de actividades. Su principal fuente de ingreso proviene de la changa (Riquelme et al, 1999: 38).

Este proceso de minifundización ha venido operando lenta pero progresivamente a nivel nacional y a nivel de los departamentos. Si se comparan los dos últimos censos agropecuarios, de 1981 y 1991, se puede notar que el estrato conformado por explotaciones con menos de 5 ha ha tenido un incremento del orden de los 4 puntos a nivel nacional. De 36% en el '81 se saltó al 40% en el '92. En Misiones, el minifundio creció entre los dos períodos intercensales en 4,38, cifra levemente superior a la observada a nivel nacional, que de 26,35% en el '81 subió a 30,73% en el '91. Caaguazú, por su parte, tuvo un incremento de 3,69, levemente inferior al observado a nivel nacional, que de 45,58% en el '81 pasó a 49,27% en el '91.

En los estratos de 1.000 y más hectáreas, se han producido igualmente aumentos considerables en el período de 10 años. En términos absolutos, en Caaguazú de 76 explotaciones registradas en el '81 se pasó a 127 en el '91, lo que en superficie significó un incremento de aproximadamente 97 mil hectáreas, es decir, de 257.021 ha que poseían las 76 explotaciones en el '81 se pasó a 353.937 ha en el '91. Misiones también conoció un importante incremento en este estrato. De 137 explotaciones en el 81 se subió a 154 en el '91: en superficie, de 512.550 a 597.759 ha.

En la práctica, la política agraria que pregonaba la eliminación progresiva del latifundio y minifundio ha tenido un efecto contrario. Tanto el minifundio como el latifundio han sufrido incrementos considerables, lo que amplía la brecha entre los dos estratos así como la pobreza

crítica, que en 1992 afectaba al 70,8% en el sector rural. La pobreza es crítica cuando los ingresos no son suficientes para cubrir adecuadamente la alimentación familiar (Sauma et al, 1993).

Con relación a las formas de tenencia de la tierra, el análisis comparativo de los datos muestra una mayor proporción de tierras con títulos definitivos en Misiones que en Caaguazú. En el primero llega al 52%, en tanto que en el segundo alcanza al 46,90%. Esta diferencia obedecería a la relativa estabilidad de la estructura agraria en Misiones, que no sufrió alteraciones importantes por efecto de la colonización, como se observa en Caaguazú. Se observa sí en ambos departamentos un claro predominio de tierras alquiladas, ocupadas y con otras formas de tenencia en las unidades productivas menores a 5 ha. En Caaguazú, el 73% de las unidades productivas pertenecientes a este estrato se encuentra en estas categorías, en tanto que en Misiones se llega al 66,33% (MAG, 1993).

Otra de las vías de exclusión del campesinado es la precariedad en la tenencia de la tierra. En los departamentos estudiados se observa que un poco menos de la mitad, 48% en Misiones, y más de la mitad, 53,1%, en Caaguazú, carece de títulos de propiedad. Esta carencia se acentúa en los estratos inferiores, donde aproximadamente las dos terceras partes carecen del mismo. A nivel nacional, la precariedad de la posesión llega a aproximadamente el 66% de las explotaciones. La tenencia precaria, sumada a la reducida extensión de las parcelas, excluye al campesino del acceso a créditos y a la asistencia técnica oficial, acelerando su descomposición y su desarraigo (Galeano y Rivarola, 2000: 30 y 31).

En lo que respecta a las actividades productivas, los datos muestran una gran diferencia entre ambos departamentos. Mientras en Caaguazú se observa una gran variedad de actividades productivas, Misiones sigue manteniendo su ritmo característico, con una agricultura destinada básicamente al consumo familiar, excepto el arroz, que es cultivado por medianos y grandes productores y por industrias que utilizan una exigua cantidad de mano de obra. Esta diferenciación productiva sobre todo agrícola obedece básicamente a la aptitud de la tierra y la cultura ligada a ella. Las tierras de Misiones en un alto porcentaje son suelo apto para la ganadería, y el desarrollo agrícola, sobre todo el comercial, es reciente: data de la década del '60 cuando el gobierno implementó el plan trigo en el Departamento, que no tuvo éxito. Caaguazú, por su parte, es suelo fundamentalmente agrícola y el desarrollo de la ganadería es reciente. Esta diferenciación sería una de las razones que explican la desigualdad en la lucha por la tierra entre uno y otro Departamento.

En cuanto a las NBI, Misiones tiene una mejor ubicación que Caaguazú, ya que globalmente ocupa el estrato III y Caaguazú el estrato IV. Sin embargo, en variables como educación y capacidad de subsistencia, Misiones ocupa el estrato III y V respectivamente, mientras que Caaguazú ocupa la posición II en ambas variables.

Otro aspecto importante que merece destacarse es el proceso de urbanización y de redistribución territorial. Como se pudo notar, éste fue mucho más acelerado en Caaguazú que en Misiones. El primero de los nombrados en menos de dos décadas –'80 y '90– casi duplicó la cantidad de distritos para dar cobertura institucional al crecimiento poblacional que fue desplazándose hacia las áreas menos pobladas. Nueve fueron los distritos creados desde el '80. Misiones, por su parte, no ha sufrido cambios en lo que hace a la redistribución de su territorio. Este proceso de expansión poblacional y de creación de pequeños centros urbanos es un indicador importante de la lucha por la tierra en la medida en que campesinos pauperizados y desarraigados de antiguas colonias van ganando nuevas áreas a fuerza de ocupaciones y de negociaciones.

En general, se puede apreciar que el departamento de Misiones en casi todas las variables analizadas ocupa una posición relativa inferior comparado con Caaguazú, lo cual explica su lento proceso de cambios en todos los aspectos y específicamente en lo que respecta a la redistribución de la tierra.

Capítulo VII

Descripción de los conflictos de tierra

Departamento de Caaguazú

Conflicto 1 – Asentamiento Cristóbal Espínola, Raúl Arsenio Oviedo

La comisión vecinal de Raúl Arsenio Oviedo, integrada por 100 familias y presidida por Eulalio Torales y Alfonso Torres, desde 1988 venía solicitando al Instituto de Bienestar Rural (IBR) la compra de 2.063 ha pertenecientes a la firma José Domingo Ocampo, que posee en la zona aproximadamente 8.641 ha no explotadas racionalmente. El pedido no ha prosperado porque el dueño rechazó la oferta; sin embargo, los campesinos denunciaron la venta de 800 ha a los menonitas (IC N° 4 y 7, 1989).

Después de tres años de trámites legales, los campesinos ingresaron al terreno por indicación del IBR, desmintiendo de esta forma al Dr. Tuma, abogado de la firma, quien había informado que los campesinos violentaron el portón de acceso a la propiedad. Al no prosperar la compra directa, la comisión vecinal presentó el proyecto de expropiación (IC N° 18, 1990). El pedido fue favorable a los campesinos y la ley de expropiación fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 16 de enero de 1990 (Ley 57/89). La cantidad de hectáreas expropiadas fue de 2.063, de las cuales 1.300 correspondían a la firma José Domingo Ocampo y 763 a la Sociedad Civil Sommerfeld Komitee (Poder Legislativo, Ley N° 57/89, 1990). Del total expropiado, 1.200 ha fueron para los campesinos y las restantes para la comunidad indígena Mby'a Guaraní de la zona. Sin embargo, 520 ha correspondientes a los indígenas quedaron en poder de la cooperativa menonita Sommerfeld. Estas hectáreas no fueron recuperadas para los indígenas; al contrario, la cooperativa presentó un juicio de inconstitucionalidad contra la ley de expropiación N° 57/89 del 16 de enero de 1990. La tierra fue transferida por la firma José Domingo Ocampo a la cooperativa después de la media sanción en la Cámara de Senadores. Alfonso Torres urgió la agilización de los trámites del juicio de inconstitucionalidad planteado por la cooperativa. La ley de expropiación también prohíbe, mediante una orden judicial, innovar o realizar cualquier tarea dentro del predio expropiado. Sin embargo, los campesinos denunciaron que los dueños seguían talando árboles y limpiando el terreno en abierta complicidad de las autoridades locales (IC N° 21, 1990 y 30, 1991).

En junio de 1991, a pesar de la ley de expropiación, 50 campesinos fueron desalojados del terreno por efectivos de la Policía Especial de Operaciones (PEO). La firma José D. Ocampo había interpuesto un juicio de inconstitucionalidad contra la ley de expropiación, que la Corte no ha resuelto aún. Por esta razón, los campesinos denunciaron que este desalojo fue ilegal, ya que lo hicieron sin notificación de una circunscripción judicial y fue hecho por el juez de paz de Juan León Mallorquín (IC N° 32, 1991). Los campesinos volvieron a ingresar al terreno ya expropiado, pero denunciaron nuevas amenazas de desalojo. En agosto del '91 la Corte Suprema de Justicia seguía sin expedirse sobre el juicio de inconstitucionalidad (IC N° 34, 1991).

Los ocupantes fueron desalojados en tres ocasiones. En una oportunidad fue detenido un ocupante, pero sus compañeros pudieron recuperarlo de la comisaría de Yhú, donde llegaron masivamente a reclamar su libertad. La expropiación quedó definitivamente ejecutoriada porque la Corte no hizo lugar a la inconstitucionalidad planteada por los dueños.

A fines de 1999, once años después, el conflicto seguía debido a que el dueño pretende cobrar una suma muy elevada por sus tierras, 720 mil guaraníes por hectárea, mientras que el IBR sólo quiere pagar 300 mil guaraníes la hectárea. El pleito sigue en el Tribunal de Cuentas, institución que debe expedirse sobre el monto a pagar por cada hectárea. El asentamiento ahora se llama Cristóbal Espínola, en homenaje al campesino asesinado en la plaza frente al Congreso en 1999, en el llamado marzo paraguayo, que perteneciera a este asentamiento. Esta comisión vecinal tuvo desde sus inicios el apoyo de la Asociación Regional de Productores Agrícolas de Caaguazú (ARPAC), miembro de la Federación Nacional Campesina

(Marcial Gómez de la ARPAC, marzo 2001; dirigente de la Asociación Regional de Productores Agrícolas de Caaguazú, ARPAC, afiliada a la Federación Nacional Campesina, FNC, a cargo de la secretaría de conflictos, 26/03/01).

Conflicto 2 – Tembiaporã, Raúl Arsenio Oviedo

En octubre de 1990, 67 familias que ocupaban un terreno de aproximadamente 1.000 ha denunciaron la actuación prepotente de Juan Ramón Torres Legal, quien quería tomar posesión de 900 ha. Ante la denuncia de los ocupantes se quedó con 163 ha. Las autoridades del lugar prometieron solución. Finalmente, en 1994 el IBR adjudicó dichas tierras a los ocupantes mediante las resoluciones 165/94 y 378/94. La colonia se conformó con 1.100 ha para 140 familias. Pero el problema continuaba debido a la falta de acuerdo con el dueño por el precio de las tierras. No se cuenta con datos sobre si la comisión vecinal forma parte de otra organización (IC N° 30, 1990; IBR, 2000 y Vázquez, Adrián, 2001).

Conflicto 3 – Toro Canguê, Raúl Arsenio Oviedo

En 1991, inversionistas alemanes dueños de unas 6 mil hectáreas aproximadamente denunciaron la ocupación de sus tierras por campesinos. De acuerdo a los dueños los ocupantes ya quemaron 1.200 ha de cañaverales para construir sus casas, y solicitaron que los campesinos abandonaran pacíficamente el lugar antes de recurrir a la justicia. La fracción ocupada por los campesinos pertenece a Rudolf Thiessen. Este había autorizado a 15 familias a cultivar una parte del predio, ya que quedó desocupada al cerrarse la fábrica de alcohol que funcionaba en las inmediaciones. Al observar este asentamiento, otras 85 familias ingresaron al terreno y solicitaron la expropiación. El proyecto fue presentado al IBR y éste lo envió a la Cámara de Diputados. Los diputados se pronunciaron favorablemente, pero la Cámara de Senadores rechazó el pedido. Éste volvió a la Cámara de Diputados, que se ratificó en el texto inicial del proyecto de ley que declaró de interés social y expropió a favor del IBR la fracción ocupada de 523 ha ubicada en Toro Canguê, distrito de Raúl Arsenio Oviedo. La ley fue sancionada a favor de los ocupantes el 25 de agosto de 1994 (IC N° 34, 1991; 36, 10/91; 70, 07/94 y Poder Legislativo, Ley N° 410/94).

Otros dos grupos de campesinos fueron favorecidos con dos expropiaciones del mismo inmueble. El primero, de 1.300 ha, expropiadas en 1997 y en las cuales viven aproximadamente 150 familias, y el segundo de 3.800 ha, expropiadas en el 2000, y que ya están totalmente ocupadas pero aún no loteadas por el IBR. Estas comisiones vecinales contaron con el apoyo de la FNC (Gómez, 03/01).

Conflicto 4 – Guahory II, Raúl Arsenio Oviedo

En junio de 1992, ocupantes de las tierras de 9 mil hectáreas pertenecientes a un ciudadano suizo de nombre Carl Axel Piroh fueron violentamente desalojados, y 64 de ellos detenidos, de un total de 152. Según los ocupantes, las tierras no están racionalmente explotadas. Un dirigente de la comisión vecinal afirmó que en el IBR le informaron que dichas tierras estaban en tratativas de compra desde hacía más de un año, lo que consideró como un simple engaño porque nada hicieron por evitar el desalojo. El presidente de la comisión vecinal solicitó al IBR su intermediación para lograr la libertad de los 64 detenidos, quienes fueron trasladados al penal de Tacumbú de Asunción. Treinta consiguieron su libertad, mientras los demás siguieron detenidos desde junio del '92. Posteriormente recuperaron su libertad.

Después de varias tratativas, las tierras fueron compradas por el IBR en 1995. Son dos fracciones, una denominada Guahory, de 5 mil hectáreas, donde están asentadas 500 familias, y la otra Pindó, de 2.457 ha, ocupadas por 328 familias. Las fracciones están divididas por el lago de la represa del río Yguazú. Después del golpe unos seccionaleros del distrito instigaron a la ocupación de las tierras. No estaban articulados con ninguna organización regional ni nacional (IC N° 45 y 46, 1992; IBR, 2000; Gómez, 03/01).

Conflicto 5 – Syryka, Raúl Arsenio Oviedo

En agosto de 1993, miembros de la comisión de reforma agraria del Senado visitaron el lugar donde varias familias tenían problemas con el supuesto dueño de las tierras. El diputado Basilio Nikiphoroff aseguró que dichas tierras ya llevaban por lo menos cinco años sin uso, por lo que urgía resolver a favor de los campesinos que clamaban por ellas. Los campesinos están en el lugar desde hace veinte años. El terreno en conflicto, de aproximadamente 600 ha, estaba hipotecado por el Banco 5 Estrellas, que posteriormente lo puso en remate. El mismo fue adquirido por un señor de apellido Achón, que quiso realizar una colonización privada, pero los campesinos no la aceptaron, razón por la cual fue adquirido por el IBR, que sí colonizó para los ocupantes mediante resolución N° 869/95. Es un asentamiento legalizado. Son 571 ha ocupadas por 73 familias (IC N° 59, 1993; IBR, 2000 y Gómez, 03/01).

Conflicto 6 – Coronel Toledo o Mil Palos, Raúl Arsenio Oviedo

La Federación Nacional Campesina (FNC) denunció el desalojo violento de 200 familias campesinas que estaban ocupando una propiedad de aproximadamente 10 mil hectáreas, perteneciente al terrateniente Pedro Elías Anciaux, por efectivos de la Policía Ecológica y Rural (PER). Los ocupantes fueron denunciados por robo de maderas por el dueño. Este supuesto hecho fue utilizado por el juez Silvio Flores, del tribunal de Coronel Oviedo, para decretar el desalojo. La FNC repudió la actitud del juez y solicitó al gobierno que arbitre los medios para buscar la solución a este problema. La ocupación se habría producido en el mes de junio de 1994. En el operativo de desalojo 14 campesinos fueron detenidos. No fue la primera vez que los ocupantes eran desalojados. Estos solicitaron la expropiación o la compra de 3 mil hectáreas.

Pedro Elías Anciaux solicitó el rechazo de un proyecto de expropiación de 4.500 ha de su propiedad. El afectado sostiene que los diputados le dieron un claro manejo político-partidario al tema y advierte que si los senadores no rectifican la decisión de la Cámara baja, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.

Miembros de la Federación de Madereros del Paraguay manifestaron su desacuerdo con el proyecto de expropiación, que ya tiene media sanción de Diputados, por considerar que el predio constituye una de las últimas reservas boscosas de especies nativas de la zona. Hay 3.800 ha de bosques.

La FNC realizó una denuncia ante la Comisión de DD.HH. del senado por las amenazas que reciben los ocupantes. Personas extrañas merodean la zona, aparentemente con la intención de atacar a las familias que ocupan unas 2 mil hectáreas de las 10 mil que posee el inmueble. “Nuestros compañeros también están armados para repeler cualquier agresión”, expresó Adrián Vázquez, de la secretaría de sin tierra de la FNC.

Los ocupantes nuevamente fueron desalojados en mayo del ‘98 y detenidos 64 de sus miembros, los cuales fueron derivados a la Cárcel de Villarrica, Guairá. Los dirigentes de esta comisión vecinal presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra los uniformados que actuaron con brutal ferocidad. Los afectados denunciaron igualmente la ilegalidad de sus detenciones por la supuesta inexistencia de una orden judicial. También realizaron una denuncia ante la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Senadores por las torturas recibidas por los efectivos policiales de la Agrupación Ecológica y Rural (PER). En ocasión del desalojo sus precarios ranchos y sus pertenencias personales fueron tirados y esparcidos por el suelo.

Los ocupantes desalojados en mayo del ‘98 anunciaron que volverán a ocupar el predio porque consideran que es la única forma de encontrar salida a la acuciante situación de pobreza en la que viven. Sixto Ortega Ávalos, líder campesino, indicó que el supuesto propietario, Elías Anciaux, argumentó que la propiedad era una reserva forestal para conseguir el desalojo; sin embargo, tala indiscriminadamente el bosque. El último desalojo se produjo el 26 de mayo del ‘98, oportunidad en la que fueron destruidos ranchos y cultivos y detenidos 64 ocupantes. Tanto el dueño como los vecinos claman por una solución definitiva del problema.

De las 10.800 ha que posee la propiedad, 2.630 ha están ocupadas por 220 familias que ya sufrieron 7 desalojos, en dos ocasiones con detenciones masivas. El Parlamento había expropiado parte del terreno, pero la ley fue vetada por el vicepresidente de la República,

Roberto Seifar, en ocasión de interinar la presidencia en ausencia del país del presidente Juan Carlos Wasmosy. El proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores, que no pudo reunir los dos tercios de votos requeridos para la aprobación definitiva. El problema sigue y los ocupantes tienen pendiente otra orden de desalojo. Dirigentes campesinos de la FNC consideran difícil que se produzca otro desalojo, debido a que ya es una colonia consolidada. Hay un destacamento militar en el terreno para resguardar la propiedad (IC, varios números y Gómez, 03/01).

Conflicto 7 – Asentamiento Chemenda, Raúl Arsenio Oviedo

Este terreno de 510 ha, perteneciente a Ever Thielman, fue ocupado por un grupo de campesinos sin tierra en 1990. El mismo estaba hipotecado al Banco Nacional de Fomento (BNF). El IBR lo compró al Banco en 1997 y lo loteó a favor de las 60 familias ocupantes, que desde el '89 venían reclamando a través de los canales legales. No hubo desalojo. Los campesinos fueron apoyados por la FNC (Gómez, 03/01).

Conflicto 8 – Torín Yguazú, J. E. Estigarribia

Este conflicto, que se había iniciado en 1970, pasó por varias peripecias antes de llegar a la solución definitiva que se produjo en 1992, a pesar de haber sido expropiado el inmueble por el Congreso el 23 de diciembre de 1988. Se trata de un terreno de 600 ha, de las cuales 350 estaban ocupadas por 37 familias. Los dueños eran los hermanos Molinas Rebollo, de nacionalidad argentina. Estas familias han sufrido innumerables atropellos y las autoridades han hecho muy poco para evitar los inconvenientes (IC Nº 4, 1989).

Los ocupantes denunciaron en varias ocasiones el desacato de las autoridades locales a la orden de expropiación, al no permitir incluso a funcionarios del IBR la medición y loteamiento de las tierras. La orden de prohibición provenía del juez de paz del distrito de J. E. Estigarribia (IC Nº 7, 1989). En julio de 1989 fueron violentamente desalojados, con quema de sus ranchos. A más de un año de haberse expropiado el terreno, los campesinos seguían sin poder ocuparlo, porque los dueños recibían protección y apoyo de militares de la zona. Mientras tanto aprovechaban para realizar mejoras, debido a que el precio ofertado por el IBR es inferior a la suma pretendida por ellos. Por su parte, los campesinos urgieron al IBR que acelere la indemnización para hacerse efectivo el decreto de expropiación.

En febrero de 1991, los campesinos seguían denunciando la imposibilidad de posesionarse de las tierras expropiadas. La institución responsable de ejecutar la ley de expropiación ha hecho muy poco para darle cumplimiento (IC Nº 10, 1989; 19 y 21, 1990; 29, 1991). Recién en 1992 los ocupantes pudieron ingresar al terreno y trabajarlo. Actualmente es una colonia legalmente habilitada (Gómez, 03/01; IBR, 2000).

Conflicto 9 – Tractur SACI, J. E. Estigarribia

Ciento veinte campesinos sin tierra ocuparon un inmueble de 1.552 ha, ubicado en el distrito de J. E. Estigarribia, cuya propietaria es la empresa Tractur SACI, de un ciudadano brasileño. El 24 de octubre del '90 los ocupantes fueron desalojados, y 8 de ellos detenidos. Los abogados querellantes fueron Hermes Rafael Saguier y Felino Amarilla, asesores jurídicos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Los campesinos habían solicitado la intervención del IBR, pero éste no apareció. Esta comisión vecinal se desarticuló. No tuvo apoyo de otra organización (IC Nº 25, 1990 y Gómez, 03/01).

Conflicto 10 – Aguila Real, J. E. Estigarribia

En diciembre de 1991, alrededor de 500 campesinos realizaron una huelga de hambre en el salón parroquial de la ciudad de Caaguazú en protesta por una falsa promesa del IBR. El titular del ente agrario había prometido tierras a los campesinos que se encontraban ocupando el lindero de las tierras de la empresa Águila Real. La promesa no se había cumplido, razón por la cual los campesinos pertenecientes al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) optaron por esta medida de fuerza en apoyo a sus compañeros. Este grupo de campesinos, que inicialmente ocupó estas tierras, desistió en 1992 debido a que eran tierras destinadas para los

indígenas. Posteriormente, otro grupo perteneciente a otra organización campesina, la Organización Nacional Campesina (ONAC), ocupó dichas tierras. Es la fracción de los indígenas Ypaú Señorita. El conflicto continúa (IC N° 39, 1991 y dirigentes del MCP, 04/01). Varios dirigentes del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) informaron sobre este caso en oportunidad del congreso regional realizado en la localidad de Pastoreo el 6 de abril de 2001.

Conflicto 11 – Luz y Esperanza, J. E. Estigarribia

En abril de 1993, alrededor de 53 familias que ocupaban una propiedad de 700 ha perteneciente a unos ciudadanos norteamericanos fueron violentamente desalojados por la Policía Especial de Operaciones (PEO). Durante el operativo de desalojo, los efectivos policiales, apoyados por particulares, derrumbaron 35 ranchos precarios y un oratorio. Monroe Miller, administrador de las 4.144 ha de tierras en el lugar, dijo que si los campesinos volvían a ocuparlas serían nuevamente desalojados, porque los dueños contaban con el apoyo de las autoridades nacionales. Efectivos de la PEO custodiaron las acciones de las autoridades judiciales y del personal contratado para derrumbar los precarios ranchos de familias que ocupaban la propiedad de la sociedad privada Luz y Esperanza de los mennonitas. En dicha oportunidad la policía sólo encontró a mujeres y niños, mientras los hombres se refugiaron en un bosque cercano. Las mujeres observaron impotentes el derrumbe de sus casas.

Basilio Nikiphoroff y Elba Recalde, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, prometieron dar curso favorable al pedido de expropiación de 450 ha de las 4.144 con que contaban los mennonitas en el lugar. Los ocupantes fueron desalojados en dos ocasiones. Un grupo de ocupantes se trasladó frente al Parlamento en Asunción para participar del debate sobre el pedido de expropiación planteado. Éste tuvo dictamen favorable en la Comisión de Reforma Agraria, pero la plenaria lo rechazó por contener fallas en la medición del terreno, por lo que los proyectistas Nikiphoroff y Recalde retiraron el proyecto y no lo volvieron a presentar. El caso quedó en la incertidumbre.

En octubre, luego de un intenso debate, la Cámara de Senadores aprobó por mayoría el proyecto que expropia la fracción en conflicto. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Reforma Agraria, antes de expedirse, visitó el lugar y los miembros no se mostraron de acuerdo con la expropiación. En cambio, propusieron que se les diera otro lugar. Los campesinos seguían acampados frente al parlamento. La Cámara de Diputados rechazó el pedido de expropiación presentado por los campesinos. El argumento es que las tierras están racionalmente explotadas. Con este rechazo el conflicto quedó en foja cero.

El 30 de julio de 1994 un grupo de campesinos que se encontraba en la ocupación denunció ante el Parlamento el desalojo del que fueron objeto. El operativo estuvo a cargo de la Policía Especial de Operaciones (PEO), que acompañada de tractores y camiones procedió a derrumbar y quemar la mayoría de las casas de los ocupantes. Los campesinos desalojados se instalaron al costado del terreno. Con éste ya sumaban tres los desalojos que sufrieron, y la PEO procedió a instalar un campamento en el terreno para evitar que volvieran a ingresar al terreno. El caso preocupaba a la opinión pública (IC varios números, 1993/1994).

En 1995 los campesinos fueron reubicados en dos parcelas en el departamento del Alto Paraná, en el lugar conocido como Troncal IV, con lo cual se cerró este conflicto. Esta reubicación fue coordinada por la FNC (Gómez, 03/01).

Conflicto 12 – Culandrillo, J. E. Estigarribia

Miembros de la comisión vecinal del lugar solicitaron a las autoridades del IBR la agilización de los trámites para obtener parte de un inmueble perteneciente a la empresa Fukada Trading Corporation SA. El abogado, Alberto Alderete, del Servicio Educativo Integral de Asesoría Jurídica (SEIJA), asesor de los sin tierra, señaló que existía un proceso de negociación bastante avanzado con el apoderado de la empresa y el IBR. Estas tierras fueron ocupadas en 1990. Eran 5 mil hectáreas y el número de sin tierra sumaba 175 (IC N° 61, 1993: 44). Este litigio fue ganado por los campesinos al conseguir que el IBR comprara, en 1995, 1.646 ha para el asentamiento de 177 familias. Fue una comisión vecinal no articulada con ninguna organización nacional ni departamental (IC N° 61, 1993; IBR, 2000 y Alderete 04/01).

Conflicto 13 – Hildebrand, J. E. Estigarribia

Unos 80 campesinos fueron desalojados en julio de 1994 de un inmueble de 8 mil hectáreas, cuyo dueño es Albert Hildebrand, menonita y uno de los dueños de la empresa maderera más grande del país. Este terreno había sido comprado a la empresa Fukada Tradin Corporation que tenía en la zona 45 mil hectáreas. El operativo de desalojo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Especial de Operaciones (PEO), y durante el mismo fueron detenidos 18 ocupantes. Alberto Alderete, abogado defensor de los ocupantes, denunció que la PEO habría actuado en forma violenta, derrumbando y destruyendo todo lo que encontraba a su paso. El desalojo fue con orden judicial.

Esta comisión vecinal, que no estaba articulada con otras organizaciones, no soportó la represión y se desarticuló. Tampoco encontró eco favorable en el IBR, que estuvo totalmente en contra de la ocupación. De acuerdo a Alberto Alderete, que acompañó a los ocupantes, cuando se trata de propiedades pertenecientes a alemanes, norteamericanos e ingleses, el gobierno hace lo imposible para no viabilizar ninguna resolución que favorezca a los ocupantes. Incluso mencionó que existiría un convenio con estos países que se llama de garantía a las inversiones, mediante el cual el gobierno paraguayo está obligado a resguardar las propiedades de estos ciudadanos (IC N° 70, 1994; Alderete 04/01).

Conflicto 14 – Col. Sommerfeld, J. E. Estigarribia

En esta colonia, en julio del '94, campesinos sin tierra fueron desalojados de parcelas pertenecientes a colonos menonitas. De acuerdo al presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Darío Castagnino, las propiedades ocupadas son parcelas de 50, 80 y 100 ha, con cultivos mecanizados de trigo, soja y pastura. Los dueños consiguieron orden de desalojo y captura contra los ocupantes, pero éstos no fueron aprehendidos, volviendo al lugar después de tres días. Los ocupantes posteriormente fueron desalojados y se desarticularon al no encontrar apoyo ni en el IBR ni en el Parlamento. Tampoco estaban articulados con otras organizaciones (IC N° 70, 1994; Alderete 04/01).

Conflicto 15 – Santa Carmen, J. E. Estigarribia

El 18 de julio de 1994, 80 campesinos ocuparon un inmueble de 5.500 ha de la empresa Alfa Inmobiliaria SA, ubicado en el km. 230 de la ruta VII que une Asunción con Ciudad del Este y cuyo principal accionista es el General (SR) Roberto Knopfelmacher, ex presidente de Aceros del Paraguay (ACEPAR), procesado de acuerdo a los ocupantes por defraudación de fondos públicos y robo de bienes del Estado. Los campesinos tomaron la decisión de ocupar después de haber esperado durante dos años la expropiación de unas 2 mil hectáreas de dicho inmueble.

El hijo de Knopfelmacher aseguró que son legítimos dueños de las tierras y que los campesinos estaban mal informados; sin embargo, éstos aseguraron que eran tierras malhabidas¹¹ y que no presentaron los documentos que probaban la legalidad de las mismas, razón por la cual decidieron no abandonar el predio. A pesar de todo fueron desalojados y acamparon frente al inmueble. Pero en enero del '95 volvieron a ocupar. Dimitri Fridrikson, otro de los accionistas, denunció la nueva ocupación, indicando que sus tierras están racionalmente explotadas.

Los campesinos que ocupaban la franja de la propiedad fueron nuevamente desalojados por la PEO. Era la segunda vez que realizaban la ocupación, así como la segunda vez que sufrieron desalojos. En esa ocasión abandonaron el terreno ante la posibilidad de que los dueños iniciaran un diálogo con ellos, y se ubicaron en otro costado de la ruta.

Otra accionista de las tierras señaló que de ninguna manera podían ser expropiadas porque estaban racionalmente explotadas; los campesinos, por su parte, seguían insistiendo porque sospechaban que eran tierras malhabidas y volvieron a ingresar al inmueble. También denunciaron la presencia de civiles fuertemente armados que custodiaban la propiedad. Los dueños expresaron que, ante la amenaza de los campesinos, los empleados fueron autorizados a portar armas.

El conflicto empeoró al producirse enfrentamientos armados entre los campesinos y los empleados de la empresa Alfa Inmobiliaria. A raíz del enfrentamiento quedaron heridos los sin tierra Isidoro González y Julián Gavilán. El juez de primera instancia en lo correccional del menor de Coronel Oviedo, Silvio Flores Mendoza, dispuso la orden de captura de más de 100 campesinos ubicados en la propiedad de la empresa. Mientras, el presidente del IBR comunicó a los líderes de la comisión vecinal que el ente no impulsaría el proyecto de expropiación porque el terreno estaba racionalmente explotado. Por otro lado, la policía incursionó secretamente en la ocupación y se apoderó de un cuaderno donde los líderes tenían ciertas anotaciones que según la policía indicarían la presencia de actividad guerrillera en el lugar.

Los ocupantes fueron desalojados por tercera vez. Para presionar al Parlamento a fin de que éste se expidiera sobre el pedido de expropiación, cerraron la ruta internacional VII. El 14 de septiembre de 1995 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de expropiación, y la Cámara de Senadores, por 17 votos a favor y 10 en contra, aprobó también el proyecto de ley el 30 de noviembre de 1995, de dos inmuebles que pertenecían al General (SR) Knopfelmacher manejados por la firma Alfa Inmobiliaria. La fracción expropiada fue de 570 ha. Esta expropiación fue vetada por el presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y la Cámara de Senadores no consiguió los dos tercios de votos para levantar el veto.

Mientras tanto, civiles armados que resguardaban las tierras en litigio dispararon contra los campesinos, matando a Arsenio Vázquez e hiriendo de gravedad a Mariano Díaz, quien después de 11 días de agonía también murió. El hecho ocurrió el 12 de julio de 1996. Pese a este suceso, la Policía Ecológica y Rural (PER) desalojó a los 98 ocupantes y detuvo a 43 integrantes del grupo el 30 de julio. Los ranchos de los campesinos desalojados fueron desmantelados, y éstos se ubicaron al costado del terreno bajo carpas. Entre tanto, miembros de la Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de Diputados prometieron presentar un nuevo proyecto de ley de expropiación de 2.600 ha del inmueble. Los diputados que visitaron el lugar señalaron que las tierras no estaban racionalmente explotadas y que correspondía la presentación. Por otro lado, los campesinos presentaron una querrela criminal contra los autores materiales y morales del asesinato de Vázquez y Díaz. El escrito de la abogada, Antonia Amarilla, acusaba a Knopfelmacher de ser uno de los presuntos principales ideólogos del asesinato de los dos campesinos.

Después del último desalojo, ocurrido en el '96, la comisión vecinal Santa Carmen abandonó el intento de asentarse en el lugar, y se perdió el caso. Los miembros de la comisión vecinal se fusionaron con otras comisiones: un grupo se unió con la de Toledo, otros se fueron al asentamiento Cristóbal Espínola y otros se unieron al grupo de asentados de San Carlos en el distrito de Juan Manuel Frutos. Esta comisión vecinal formaba parte de la ARPAC (IC varios números 1994/1996; Gómez 03/01).

Conflicto 16 – Cleto Romero y Juan de Mena

Desde 1986, unos 500 campesinos sin tierra de las localidades de Cleto Romero (Caaguazú) y Juan de Mena (Cordillera), con el apoyo de la Pastoral Social de la Diócesis de Cordillera, cuyo responsable era el párroco de Juan de Mena, gestionaron ante las autoridades nacionales, específicamente ante el IBR, la expropiación de 5 mil hectáreas de un latifundio improductivo perteneciente a la empresa Unión Paraguaya SA de la familia Gunder, que en total posee 40 mil hectáreas en el lugar. El IBR, bajo la presidencia de su presidente Juan Manuel Frutos, puso obstáculos para agilizar el trámite de reconocimiento de la comisión vecinal y posteriormente la gestión del pedido de expropiación.

En marzo del '89, cuatro años después del inicio de las negociaciones y a un mes de la apertura política, una delegación de 220 campesinos llegó al IBR para exigir la agilización de los trámites de expropiación. En esa ocasión el IBR prometió el loteamiento de 7 mil hectáreas. Esta resolución del IBR, que dio vía libre para la expropiación, fue enviada al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para su autorización; sin embargo, el MAG devolvió el documento al IBR sin la autorización correspondiente. Los dueños, por su parte, presentaron un recurso judicial contra la resolución del IBR (IC N° 5, 6 y 7, 1989).

Después de largos trámites de negociación, de idas y venidas acompañadas de represiones violentas, incluso con perros amaestrados en la plaza frente al Congreso, finalmente la Cámara de Senadores, el 5 de septiembre de 1989, sancionó la Ley 08/89 que declara de interés social

y expropia hasta 7 mil hectáreas de tierras aptas para la agricultura de la finca N° 14, propiedad de la firma Unión Paraguaya SA. Previamente la Cámara de Diputados ya lo había hecho. La empresa dueña de las tierras inmediatamente presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de expropiación sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo (Fogel, 2001: 95).

La Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por la empresa contra el decreto de expropiación del Poder Ejecutivo. De esta forma, los campesinos tenían el camino despejado para ocupar la tierra que reclamaban desde 1986. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque el Consejo Nacional de Coordinación para el Desarrollo Rural (CONCODER) volvió a pedir al IBR la verificación del censo y el IBR solicitó un estudio de gabinete para la delimitación de las 7 mil hectáreas expropiadas. Los campesinos amenazaron con ocuparlas.

Finalmente las tierras a ser adjudicadas a los campesinos quedaron en 5.414 ha. El IBR, a través de la resolución N° 1.574, estableció dicha extensión, que fue aceptada por los campesinos. De esta manera se levantó la huelga de hambre llevada adelante por 21 campesinos, entre los cuales se encontraba el Presbítero Julio López, párroco de Juan de Mena. Una coordinadora de apoyo de la ciudad de Asunción visitó el lugar ocupado por los campesinos y éstos demostraron que las tierras son aptas para el cultivo.

La empresa volvió a presentar una apelación al Tribunal de Cuentas con la intención de evitar la ocupación de las tierras. Ante esta acción, un grupo de madres se acampó bajo carpas frente al Palacio de Justicia a la espera del dictamen del Tribunal de Cuentas, que se expidió a favor de los campesinos. Una colonización privada conformada por 60 familias fue encontrada dentro del perímetro expropiado. Esto obstaculizó la delimitación de las 5.414 ha. Ante esta inesperada dificultad, unos 100 campesinos ocuparon el local del IBR en Asunción en protesta por el incumplimiento de una resolución emanada del propio IBR, en la cual prometía el traslado de las 60 familias que no pertenecían a la comisión vecinal legítima. En noviembre del '92 el IBR seguía sin resolver el problema de las 60 familias y los campesinos amenazaron con ocupar de nuevo el local del ente en Asunción. En enero del '93 el problema seguía sin resolverse, las 60 familias seguían en el lugar, y el IBR aseguró que hay lugar para ellos dentro de las tierras expropiadas. Los campesinos, por su parte, insistían en que fueran trasladadas. En abril del '93 otros 40 campesinos volvieron a ocupar el local del IBR en Asunción por la falta de solución al problema generado por la presencia de familias no pertenecientes a la comisión vecinal que gestionó dichas tierras. Acusaron a un funcionario del IBR de nombre Raúl Melgarejo de negociar los lotes con otro grupo ilegal. Los campesinos fueron desalojados del local del IBR y acamparon en la Plaza Uruguaya, donde permanecieron hasta la solución definitiva (IC varios números, 1989/1993).

A fines de 1993 el conflicto fue resuelto a favor de los 500 campesinos/as, después de ocho años de intensa lucha, período en el cual perdieron la vida Guido Almada, ingeniero agrónomo que trabajaba con los campesinos y funcionario de una ONG de apoyo al asentamiento cuya muerte se produjo a raíz de un accidente de tránsito en las inmediaciones de la ciudad de Coronel Oviedo sobre la ruta II cuando retornaba a Cleto Romero después de las gestiones realizadas en la capital del país, y Regina Marecos, una señora que murió de un paro cardíaco en la plaza frente al Congreso en Asunción en una de las tantas movilizaciones de protesta realizadas por los campesinos. El asentamiento conquistado en estos distritos lleva el nombre de estas personas.

Conflicto 17 – Ñane Maitei, Caaguazú

Ñane Maitei es uno de los tantos asentamientos que se pudo conseguir mediante una intensa lucha. La colonia tiene 1.403 ha. La explotación de las tierras se inició en 1979, cuando los dueños decidieron arrendar a un grupo de campesinos una parte del inmueble, con el compromiso de que el 30% de lo producido debía ser entregado a los dueños. En 1981 se da la primera ocupación violenta: 60 familias ingresan al terreno, produciéndose la primera represión, con desalojo y detención del principal dirigente, Herminio Ramírez, acusado de comunista. Después de este primer desalojo, las familias no volvieron a ingresar al terreno y varias continuaron trabajando por el sistema de arrendamiento. La segunda ocupación se produjo el 9 de febrero del '89, una semana después de la apertura política: 246 sin tierra ocuparon el terreno y comenzaron a cultivar y a levantar sus ranchos. El 22 de abril del '89 fueron detenidos

tres miembros de la comisión vecinal, sin orden judicial, por orden del Ministerio del Interior. A raíz de esta medida los campesinos realizaron una manifestación de protesta frente a la Delegación de Gobierno de Coronel Oviedo, Caaguazú, y posteriormente acamparon en la explanada de la catedral de la misma ciudad. En este lugar fue detenido otro campesino. Los detenidos fueron derivados a la cárcel regional de Villarrica, Guairá, donde recuperaron posteriormente su libertad. La tierra pertenecía a Peter Nágel (IC N° 7, 1989; Riquelme et al, 1999).

En junio del '89 el dueño consiguió una orden de desalojo de un juez de la Circunscripción Judicial de Villarrica, Guairá. Los campesinos apelaron, pero el dueño seguía hostigando. En julio del '89, 50 ranchos fueron derribados por efectivos policiales de la Delegación de Gobierno de Coronel Oviedo ayudados por otros vecinos. Las intervenciones del IBR eran desconocidas por el dueño. En febrero del '90 la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad planteada por los ocupantes contra la orden de desalojo dictada por los jueces de primera y segunda instancia de Villarrica. Con este revés de los ocupantes quedó abierto el camino para el desalojo.

Los campesinos igualmente presentaron una nota al titular de la Cámara de Senadores, Waldino Ramón Lovera por la cual solicitaron la expropiación de las tierras ocupadas. El Senado archivó el pedido de expropiación. Los campesinos ya tenían cultivadas alrededor de 1.000 ha. Mientras realizaban las negociaciones, civiles armados amenazaron a los ocupantes con dispararles sus armas. Seguía latente el desalojo porque la orden ya había sido dada por un juez de Villarrica.

Los ocupantes resistieron más de un año hasta que el 24 de octubre del '90 se produjo el desalojo masivo con destrucción de viviendas y cultivos. El desalojo se realizó en presencia de dos parlamentarios de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, quienes prometieron que no iba a haber violencia ni destrucción de viviendas y también se comprometieron a acelerar el estudio de la expropiación. Sin embargo, las casas fueron quemadas. Los campesinos denunciaron este hecho porque se sintieron engañados por los parlamentarios, quienes no cumplieron con el acuerdo al que habían llegado. Los desalojados acamparon bajo carpas y solicitaron de nuevo la expropiación. Esta vez el pedido fue atendido por el Parlamento, el cual le dio curso favorable. Las dos Cámaras del Congreso aprobaron el proyecto de expropiación, el 2 de noviembre de 1990 la Cámara de Diputados y el 15 de noviembre de 1990 la Cámara de Senadores. Los dueños presentaron un juicio de inconstitucionalidad. En el '91 los campesinos recobraron la ocupación. En septiembre de 1992 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró nula la ley que expropiara las tierras. La CSJ entendió que no existieron motivos o interés social para la expropiación. De esta manera los campesinos quedaron nuevamente indefensos y expuestos al desalojo, pero inmediatamente reiniciaron otra solicitud de expropiación. Los senadores Pura Moreno de Decoud y Julio Rolando Elizeche, del oficialista Partido Colorado, presentaron el proyecto de expropiación del mencionado inmueble. Los senadores argumentaron que los campesinos venían ocupando dicha fracción desde varios años atrás y que esas tierras constituían la única fuente de donde sacaban el sustento de sus hijos. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley el 15 de diciembre de 1994 y la Cámara de Diputados el 18 de abril de 1995 (IC varios números, 1989/1994; Poder Legislativo, Ley 88/90 y Ley 562/95). Esta ley promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo de 1995 no entró en vigencia hasta 1997 por diversos problemas. Recién en 1998 El IBR realizó el loteamiento, con el cual quedó definitivamente resuelto el conflicto (informe de los pobladores).

Conflicto 18 – Ciervo Cua, Caaguazú

Ciento setenta campesinos sin tierra se encarparon desde mayo del '89 al costado de un inmueble de 5.500 ha perteneciente a Sergio Facetti Brun, en la compañía Ciervo Cua, distrito de Caaguazú. El dueño había acusado a los campesinos de invadir clandestinamente su propiedad; en cambio, éstos enviaron una nota al IBR refutando la declaración de Facetti. Los sin tierra solicitaron al Parlamento la expropiación de 3.500 ha, pedido al cual se dio curso favorable. Los campesinos denunciaron que sólo 2.500 ha les fueron entregadas y las 1.000 ha faltantes estarían en poder de unos americanos. Amenazaron con ocupar dicho terreno para completar las 3.500 ha de las que fueron beneficiados con la ley de expropiación. Finalmente, los 200 sin tierra favorecidos se

quedaron en las 2.500 ha. Esta comisión vecinal no tuvo el apoyo de ninguna organización regional ni nacional (IC N° 16, 1990 y 30, 1991).

Conflicto 19 – Colonia Mcal. López, Caaguazú

Ocupantes de una fracción perteneciente al MAG, al BNF y a la colonizadora militar solicitaron en diciembre de 1992 al IBR su mediación para encontrar solución al litigio que ya llevaba varios años, desde 1982. Los ocupantes sostuvieron que recibían frecuentes amenazas de desalojo por parte de la policía local, razón por la cual solicitaron al IBR la legalización de la ocupación. Aunque el ente no respondió durante largo tiempo, en 1994, por resolución N° 1238/96, legalizó la ocupación, que constaba de 6.307 ha para 630 familias. La comisión vecinal que realizó las gestiones no tuvo vinculación con otras organizaciones (IC N° 51, 1992; IBR, 2000).

Conflicto 20 – Reserva Paraguaya, Mariscal López

La colonia Santa Teresa es una colonización privada cuyo dueño es el griego Eutimio Ioannidis. Desde el inicio de la colonización, en 1968, los colonos denunciaron innumerables hechos de estafa, usurpación de lotes ya pagados, atropello de domicilios, animales que arrasan los cultivos. De acuerdo a denuncias de los campesinos y del cura párroco de la ciudad, Presbítero Julio Foster, altas autoridades nacionales estarían involucradas en los ilícitos. La colonia estaba poblada por 1.000 familias en aproximadamente 10 mil hectáreas. Uno de los afectados, Manuel Dos Santos, denunció el robo de 500 ha de sus tierras. Además, en marzo de 1989, 13 precarios ranchos fueron destruidos y quemados por efectivos policiales que cumplían órdenes de Eutimio Ioannidis (IC N° 6 y 11, 1989).

En septiembre de 1989, 150 familias que ocupaban una fracción de la colonia fueron desalojadas y se refugiaron en la escuela de Caacupemí del lugar. Durante el desalojo varias casas fueron derribadas, robaron víveres, mataron animales domésticos. Además, hubo un intento de violación de una señora. Intervino el Consejo Nacional de Coordinación para el Desarrollo Rural (CONCODER). El dueño resolvió entregar 1.500 ha (IC N°12, 1989). En 1990 el Congreso expropió 5 mil hectáreas, pero al año siguiente el mismo Parlamento derogó dicha expropiación porque Ioannidis ofertó a los ocupantes 4 mil hectáreas en otro lugar en donación, pero con el compromiso de que cada ocupante debía abonar el impuesto por la tierra y por la transferencia. Esta oferta fue aceptada por los ocupantes, quienes solicitaron al Parlamento la derogación de la ley a través de la cual se había expropiado las 5 mil hectáreas. En una de las cláusulas del contrato de donación Ioannidis estableció una figura jurídica denominada 'bien de familia' por la cual ningún propietario podía hipotecar ni vender su parcela. A raíz de esta cláusula los campesinos no pudieron conectar la energía eléctrica porque la parcela no era de nadie. Otra cláusula establecida era que las parcelas adjudicadas a los ocupantes no podían ser vendidas antes de los 20 años de ocupación. Los campesinos en esta situación se sintieron estafados por Ioannidis y volvieron a solicitar al Parlamento la reconsideración de la ley de expropiación derogada sobre las 5 mil hectáreas. El Parlamento no volvió a tratar el tema. El problema continúa hasta el presente (Hugo Rodríguez del IBR Caaguazú, 06/01).

Conflicto 21 – Santa Juana, Col. Mariscal López

Campesinos paraguayos ocupantes de una parte de la propiedad de Rafael Calstein denunciaron que 100 colonos brasileños indocumentados fueron asentados en una fracción de 7 mil hectáreas y procedieron a alambrar la propiedad. La ocupación se produjo en septiembre del '89. Mientras tanto, las 200 familias paraguayas que habían ocupado parte de la propiedad en julio del '89 recibían permanentes amenazas de capangas al servicio del dueño. Este invocaba nombres de políticos importantes, como Domingo Laíno, y decía tener el apoyo del Parlamento para conseguir una orden de desalojo. Los ocupantes recibieron la visita de la Fuerza de Tarea Conjunta, que por segunda vez incursionaba en la ocupación con intenciones de desalojarlos. El dueño ofrecía indemnizar con 10 mil guaraníes a los casados por abandonar el lugar. El 20 de febrero del '90 los ocupantes sufrieron un violento desalojo por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Las casas y la producción fueron destruidas, y hubo señoras y niños golpeados. Por su parte, el dueño y el presidente del IBR, Basilio Nikiphorof, expresaron

que durante el operativo de desalojo no hubo violencia (IC N° 12, 14 y 15, 1989 y 18, 1990). Esta propiedad fue abandonada por los campesinos, que no volvieron a ocuparla y tampoco realizaron trámites de compra ni de expropiación. El grupo de ocupantes quedó desarticulado. No contaban con apoyo de organización campesina alguna (Hugo Rodríguez del IBR Caaguazú, 06/01).

Conflicto 22 – Jakarekai, Mcal. López

En 1993 57 familias ocuparon un inmueble de 1.250 ha, cuyo dueño probablemente sea un militar de nombre Fulgencio Yegros Macía. En 1994 los ocupantes iniciaron los trámites ante el IBR con la formación y reconocimiento de la comisión vecinal. De acuerdo a la versión dada por el agente regional del IBR de Caaguazú, Ing. Hugo Rodríguez, los ocupantes no sufrieron ningún tipo de presión. Nadie reclamó como suyas dichas tierras. Los trámites están avanzados y el IBR no legalizó aún la situación porque no se sabe quién es el dueño. Esta comisión vecinal es independiente, no está afiliada a ninguna organización nacional ni regional (Hugo Rodríguez del IBR Caaguazú, 06/01).

Conflicto 23 – Colonia Laterza, Mcal. López

En marzo de 1994, campesinos ocupantes de una fracción en la colonia Laterza enviaron una nota al presidente del Congreso en la que expresaban su preocupación por la falta de solución al problema que ya llevaba 24 años. El caso se complicó por la aparición de varias personas que dijeron ser propietarias del inmueble ocupado. Sin embargo, según los labriegos, el único que presentó título de propiedad fue Mario Laterza. Otro de los que decían ser dueños es Eutimio Ioannidis, que persiguió a los pobladores por varios años. La ocupación se había producido en 1970 y desde entonces se inició la lucha. Se trata de 3 mil hectáreas y el caso afecta a 108 familias.

Los campesinos denunciaron que vivían en zozobra debido a la persecución de la cual eran objeto por parte del supuesto propietario Eutimio Ioannidis, quien buscaba desalojarlos del sitio donde se encontraban afincados desde hacía 28 años. El predio pertenecía a Mario Laterza. Eutimio Ioannidis se habría valido de artimañas legales para despojar a los labriegos de sus parcelas en tribunales. Este predio era una propiedad de Laterza que los ocupantes consiguieron por la ley de usurpación, figura jurídica que reconoce el derecho a los ocupantes una vez cumplido 20 años de ocupación continua (IC N° 66, 1994; 103, 1997 y entrevista a Hugo Rodríguez del IBR Caaguazú, 06/01). Miguel Villalba y Albino Favero, dirigentes campesinos, relataron que diez años atrás habían otorgado poder a un representante campesino, identificado como Díaz Filho, para que iniciara las gestiones a fin de obtener la adjudicación del terreno. Los ocupantes consiguieron la tenencia de la tierra, pero el representante elegido transfirió el terreno a la firma Arcadia, cuyos dueños son Ioannidis y su esposa, y desapareció de la zona. Los ocupantes piden la nulidad del título de propiedad entregado a la firma mencionada.

También un grupo de aproximadamente 60 personas, autodenominado 'compradores de buena fe', ingresó a una parte de las 3 mil hectáreas en litigio. Los ocupantes exhibieron títulos de compra-venta de cuatro fracciones de 8 y 10 ha, en los que consta que las adquirieron de Corina Von Lasperg en representación de Santa Basílica, una empresa ligada al empresario griego Eutimio Ioannidis. El problema continúa y, de acuerdo al agente regional del IBR de Caaguazú, el caso es bastante confuso (IC N° 101, 1997; 118 y 120, 1998).

Conflicto 24 – Cai-o I, Yhu

Campesinos de esta localidad solicitaron al Dr. Frutos, presidente del IBR, su intervención para la compra de 2 mil hectáreas de tierra pertenecientes a Matías Gotz. Este había manifestado a los campesinos su interés en venderles la parcela que ocupan, pero repentinamente cambió de postura amenazando con el desalojo. Los ocupantes fueron rodeados por militares de infantería de Villarrica, Guairá. El conflicto se inició en el '89. La ocupación siguió hasta que en 1994 los 106 ocupantes fueron desalojados de la propiedad de 2.100 ha. Los mismos solicitaron a los diputados Blas Llano y Silvio Ovelar su mediación para evitar perder los cultivos que ya tenían dentro del predio. Para ello

solicitaron la expropiación, solicitud que fue presentada y tratada en la Cámara de Diputados. El pedido fue aceptado por Diputados, pero los Senadores prometieron pronunciarse al respecto recién en marzo de 1995, hecho aprovechado por el dueño para desalojarlos (IC N° 7, 1989 y 75, 1994). En 1995 los ocupantes volvieron a ingresar al terreno, pero en una negociación entre éstos, el IBR y el concejal departamental Jorge Galeano, del Partido Encuentro Nacional (PEN), fueron relocalizados en Puerto Indio, distrito de Hernandarias, Alto Paraná (dirigentes del MCP, 04/01).

Conflicto 25 – Cai-o II, Yhú

En abril de 1999 otro grupo de 25 familias ocupó de nuevo una parte del predio y en diciembre del mismo año formalizó su comisión vecinal con el reconocimiento por parte de la Municipalidad de Yhú. Con la comisión vecinal ya reconocida, comenzaron a gestionar ante el IBR parte de la parcela. Los campesinos sospechaban que dentro del predio grande unas 300 ha eran fiscales. El actual dueño, hijo de Matías Gozt, estaría dispuesto a vender la fracción ocupada. La negociación continuaba a fines del '99. Este grupo no mantiene relación con ninguna otra organización. Cuentan con el apoyo jurídico del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE). No sufrieron desalojo, ni tampoco se ha judicializado el caso (Digno Brítez del CIPAE, 03/01).

Conflicto 26 – Yuqueri – Yhú

Campesinos que ocuparon una propiedad denunciaron las permanentes amenazas que venían recibiendo del presidente de la Seccional Colorada N° 24 de Asunción, Isidro Coronel. El conflicto se había iniciado en 1988. El trámite de expropiación o compra se encuentra en el IBR. Hay amenaza de desalojo. Son 600 familias, no hay datos sobre cantidad de hectáreas ni en qué año fue ocupada. El grupo se habría desarticulado. No contaron con apoyo de otras organizaciones (IC N° 14, 1989 y Gómez, 03/01).

Conflicto 27 – Blaysur I, Yhú

Los propietarios de la firma Blaysur SA denunciaron la ocupación de su propiedad de 2.297 ha por 100 campesinos sin tierra, en diciembre de 1990. Señalaron que son varios los perjuicios que les han causado. Entre los daños citan la destrucción de 20 kms. de alambrado y la imposibilidad de realizar transplantes de sus viveros forestales. No se explican cómo las autoridades no han tomado medidas, porque lo único que se está consiguiendo con esto es desalentar la inversión extranjera en el país. Los ocupantes fueron desalojados en 1994. Un tiempo después ocuparon otra propiedad en la localidad llamada Ybypyta del mismo distrito, donde consiguieron asentarse. La comisión vecinal era apoyada por el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) (IC N° 27, 1990; 94, 1996 y Aureliano Arévalos del MCP, 04/01).

Conflicto 28 – Blaysur II, Yhú

En julio de 1996, otro grupo de 40 sin tierra, con la intención de volver a ocupar la propiedad de la empresa, acamparon al costado de la misma. Empezaron a medir los lotes, pero posteriormente, ante las presiones recibidas por parte de la empresa, abandonaron la iniciativa. Creen que unas 150 ha son fiscales. Eran miembros del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). Este grupo se fundió con otras comisiones vecinales (Aureliano Arévalos del MCP, 04/01).

Conflicto 29 – SIDEPAR, Yhú

Unos 300 campesinos que ocuparon 3 mil hectáreas de las tierras que antes pertenecían a la empresa Siderúrgica Paraguaya (SIDEPAR) manifestaron su preocupación ante el inminente desalojo por parte de la empresa Aceros del Paraguay (ACEPAR), nueva propietaria de las tierras. La denuncia fue hecha en noviembre de 1991. El inmueble tenía 23 mil hectáreas, de las cuales 10 mil fueron destinadas para colonización. ACEPAR quería recuperar 3 mil hectáreas supuestamente ocupadas por indígenas. Los campesinos, sin embargo, han

asegurado que las tierras ocupadas por los indígenas se encontraban en otro lugar, pero dentro de las 23 mil hectáreas.

Las 10 mil hectáreas fueron colonizadas. *SIDEPAR 3.000* se llama una de las colonias y la otra *SIDEPAR 7.000*. Están asentadas un total aproximado de 862 familias. Fue una colonización directa. La empresa entregó la fracción al IBR. Los campesinos contaron y cuentan con el apoyo de la FNC (IC N° 38, 1991; Gómez, 03/01 e IBR, 2000).

Conflicto 30 – Zapattini Kue I, Yhú

Alrededor de 1.200 personas –350 familias– fueron violentamente desalojadas por efectivos de la Policía Especial de Operaciones (PEO) de una ocupación en el distrito de Yhú, y 32 de ellas fuerondetenidas y derivadas a la cárcel regional de Coronel Oviedo en febrero de 1993. Las tierras ocupadas, unas 10 mil hectáreas, pertenecerían al Coronel (SR) Moisés Zapattini Ortiz, quien reclamaba la totalidad de las tierras. Sin embargo, los ocupantes aseguraban que solamente 4.942 ha corresponderían al militar retirado. Los campesinos acusaron de complicidad a uno de los miembros del Consejo del IBR (IC N° 53, 1993: 29).

La denuncia del desalojo firmada por Sixto Ortega, del MCP, presidente de la comisión vecinal, refirió que los campesinos fueron agredidos por personas que decían tener orden judicial, pero que no la exhibieron en ningún momento. Tampoco mostraron credenciales que les habilitaran como policías, como argumentaban ser. De acuerdo a la denuncia, los campesinos desde hace 6 meses gestionan ante el IBR la posesión de dichas tierras sin resultado alguno, razón por la cual ocuparon (IC N° 58, 1993: 38).

Los campesinos solicitaron a Zacarías Vera, presidente de la Comisión de Bienestar Rural de Diputados, su mediación para solucionar el problema que mantenían con el IBR. Indicaron que desde 1977 venían gestionando dichas tierras sin que hasta la fecha la institución se expidiera sobre ella. Indicaron que en 1977 fueron desalojados y brutalmente reprimidos por militares a cargo del entonces Coronel Moisés Zapattini, y que a partir de entonces buscaban adquirir parte de la propiedad de 10 mil hectáreas (IC N° 59, 1993: 50).

El propietario solicitó al presidente de la Comisión de Bienestar Rural de Diputados su mediación para convencer a los ocupantes de abandonar la fracción ocupada; de lo contrario, amenazó con recurrir a la fuerza pública. Negó que tuviera 10 mil hectáreas y afirmó que sólo poseía 3.400 ha. Los campesinos, por su parte, solicitaron la compra o la expropiación, ya que el IBR no había hecho nada (IC N° 53, 58, 59 y 61, 1993): “Como resultado de las gestiones realizadas en el marco del expediente 5378/89, en 1994 el IBR compró unas 3 mil hectáreas de Zapattini y allí se asentaron unas 300 familias”. Esta comisión vecinal tuvo el apoyo del MCP (Fogel, 2001: 124 y 125).

Conflicto 31 – Zapattini Kue II

Durante la mensura judicial realizada por los agrimensores del IBR en el marco del expediente 5378/89 Coronel Zapattini vs. comisión vecinal de sin tierra, en 1994, éstos detectaron un excedente fiscal de 1.000 ha. En ellas el IBR pudo asentar a otro grupo de aproximadamente 100 familias de la misma comisión vecinal ya asentada en las 3 mil hectáreas adquiridas del Coronel Zapattini. De este modo se pudo recuperar 1.000 ha apropiadas indebidamente por este militar. La apropiación indebida de las tierras por parte de las autoridades políticas y militares en la época de la dictadura era una práctica corriente. Este grupo de campesinos también contó con el apoyo del MCP (Fogel, 2001: 24 y 125 y Gómez, 03/01).

Conflicto 32 – Zapattini Kue III

En 1995, otro grupo de campesinos ocupó de nuevo otra parte de la propiedad de aproximadamente 4 mil hectáreas que era del Coronel Zapattini, pero que había transferido a su yerno Hernán Sosa Gaona. Los ocupantes denunciaron amenazas de desalojo de parte del comisario Ricardo Villamayor, jefe de la PEO. Julio Colmán, consejero del IBR, informó que el predio en cuestión era del Coronel Zapattini, a quien el IBR ya le había comprado 3 mil

hectáreas. El propietario se negó a seguir las tratativas con el IBR, porque ya había vendido parte de la fracción al ente agrario.

El desalojo que debía realizar la Policía Ecológica y Rural no se llevó a cabo gracias a un acuerdo al que llegaron el diputado Antonio Álvarez Alvarenga de Caaguazú, Sosa Gaona y los campesinos. El compromiso era que en 15 días deberían buscar una solución al problema. Los ocupantes solicitaron al Congreso la expropiación de las tierras. Sin embargo, el Congreso rechazó el pedido de expropiación. El argumento de los parlamentarios era que la finca estaba racionalmente explotada con cultivos de jojoba. Mientras tanto, las 120 familias que estaban en el lugar desde hacía tres años debían abandonarlo por orden judicial. La presentación de una interdicción por parte de los ocupantes pospuso el desalojo de los campesinos por 8 días. La policía ya estaba lista para cumplir la orden. En noviembre del '95 se produjo el desalojo por parte de efectivos de la Policía Ecológica y Rural (PER), y 38 campesinos ocupantes fueron detenidos. Los campesinos no opusieron resistencia, pero el perjuicio fue grande. Muchos niños en edad escolar se quedaron sin poder continuar estudiando.

Los campesinos, sin embargo, volvieron a ingresar al terreno y nuevamente el 11 de diciembre del '95 tuvo lugar otro desalojo violento. El desalojo fue realizado por civiles armados y policías sin identificación y sin orden judicial. Luego de varias conversaciones, los labriegos decidieron rechazar la relocalización propuesta por el IBR y presentaron una querrela criminal contra el propietario por los daños causados. En julio del '96, unas 120 familias nuevamente ocuparon la propiedad de Sosa. En agosto del '96, los ocupantes sufrieron otro violento desalojo con quema y destrucción de viviendas y cultivos. En noviembre del '96, los campesinos volvieron a ingresar en el inmueble, del cual fueron desalojados en agosto. Crean que existe un excedente fiscal de más de 1.000 ha. En diciembre del '96 nuevamente fueron desalojados, y se encuentran viviendo en la calle de acuerdo a la denuncia hecha por Alfonso Cohene de la FNC.

Cansado de duras represiones, un grupo de campesinos atacó el puesto policial ubicado en el lugar en represalia por el permanente hostigamiento que sufrían por parte de los uniformados. El pedido de expropiación fue desestimado por el Congreso. Los campesinos, acusados de incendiar el puesto policial del lugar, estaban desperdigados por la zona y sin medios de subsistencia. La solución quedó en manos de la Comisión de Bienestar Rural de Diputados. De acuerdo a Marcial Gómez, el caso ya está cerrado. La comisión vecinal se desarticuló, algunas familias se acoplaron a otra comisión vecinal. Los campesinos que reclamaron las tierras de Sosa Gaona fueron acompañados en sus luchas por la FNC (IC varios números, 1995/1997 y Gómez, 03/01).

Conflicto 33 – Cai-o, Espigal, Yhú

Ocupantes de una propiedad de 1.303 ha perteneciente a Matías Gotz, explotada por la firma Espigal SA, procesadora de mandioca, fueron desalojados y sus cultivos destruidos con topadoras por efectivos de la Policía Ecológica y Rural (PER) en diciembre de 1995. El pedido de expropiación de las 80 familias ocupantes se encontraba con media sanción parlamentaria. La policía desconoció este hecho, y además el desalojo fue sin orden judicial. Los campesinos que habrían ocupado el predio desde 1988, volvieron a ingresar al terreno y aseguraron que resistirían en el lugar hasta morir. El proyecto de expropiación con media sanción en la Cámara de Diputados fue rechazado en el Senado porque según su titular, el senador Miguel Abdón Saguier, el inmueble "está racionalmente explotado". Como gerente aparecía el hijo del asesor presidencial del gobierno de Juan Carlos Wasmosy, Carlos Mersán Galli.

En un nuevo desalojo, efectivos policiales destruyeron las viviendas del asentamiento y detuvieron a 16 ocupantes. La orden de captura se hizo en virtud de la acción promovida por el anterior dueño, Matías Gotz. El inmueble pertenece actualmente a la firma Espigal SA, empresa procesadora de mandioca, cuyo gerente es Oscar Mersán, y está hipotecado a favor del Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que había dado el préstamo para la construcción de la fábrica de Almidón. La ocupación continúa, y hay una propuesta de permuta de los dueños. Éstos, en un documento entregado al IBR, manifestaron su intención de desistir del propósito de desalojar a los ocupantes a cambio de que el IBR les entregue otras tierras en el departamento de Misiones o en el Chaco. La propuesta seguía en estudio en el IBR. Esta comisión no tenía vinculación con otras organizaciones (IC N° 87, 1995; IC N° 91 y 92, 1996 y Julio Brun, gerente de Desarrollo Rural del IBR).

Conflicto 34 – Carayaó

Miembros de la comisión vecinal de esta localidad, en una entrevista con el presidente del IBR, Dr. Frutos, urgieron la solución a sus problemas de falta de tierra. La fracción de 4 mil hectáreas solicitadas pertenecía a la empresa Unión Paraguaya SA. El decreto de expropiación debía favorecer a 400 familias; sin embargo, la mensura y el loteamiento del terreno no fueron ejecutados. Las tierras no están ocupadas; la negociación se inició en 1980. Esta solicitud no prosperó porque se comprobó que las tierras solicitadas no eran aptas para la agricultura. La comisión vecinal se desintegró; no volvieron a solicitar otra parcela, según el agente regional del IBR de Caaguazú. La comisión no tenía apoyo de otra organización (IC N° 7, 1989 y agente regional del IBR de Caaguazú).

Conflicto 35 – Arroyo Norte, Carayaó

En 1996, 100 familias ingresaron a una fracción de terreno de 1.000 ha cuyo dueño era el Coronel (SR) Eugenio Amarilla Miltos. Los ocupantes comenzaron a gestionar estas tierras desde 1995, con la formación de la comisión vecinal y su reconocimiento por el IBR. En vistas de que la negociación legal no prosperó, la comisión vecinal decidió ocupar el terreno. Posteriormente llegó a un acuerdo con el dueño para que el IBR les comprara la fracción, pero hasta diciembre de 1999 el IBR no podía aún legalizar la ocupación por problemas de título de la propiedad. El expediente N° 4.218/96 sigue en trámite. La comisión vecinal contó con el apoyo de la Organización Nacional Campesina, ONAC (Rodríguez, 06/01 y Martínez, presidente de la ONAC, 22/06/01).

Conflicto 36 – Cocue Porâ, Carayao

Campesinos de este asentamiento, desalojados el 8 de abril de 1997, permanecieron durante varios días en la intemperie en las cercanías de la estancia San Andrés de la firma Lago Ypoa SA, que ocuparon en septiembre de 1996. Los sin tierra estaban dispuestos a permanecer en el lugar hasta que se les otorgaran las 400 ha donde se encontraban trabajando desde hacía ocho meses. Fue un caso perdido por los ocupantes. Los ocupantes no tuvieron apoyo de otra organización campesina (IC N° 103, 1997 e IBR, 2000).

Conflicto 37 – Tobatiry, Carayaó

En este lugar, campesinos desalojados de la compañía 3 de Mayo del distrito de R.I. 3 Corrales, con el apoyo de la Organización Nacional Campesina (ONAC), ocuparon una fracción de tierra perteneciente a Juan Maldonado y otros. Los ocupantes no sufrieron desalojo alguno; tampoco hubo persecución porque se llegó a un acuerdo con el dueño. Por resolución N° 1158/96 del IBR, los campesinos fueron adjudicados con 1.375 ha para 112 familias. La operación fue de compra (Rodríguez 06/01 e IBR, listado de asentamiento 89/99).

Conflicto 38 – Mandijho, San José de los Arroyos

Sesenta y dos familias que usufructuaban un campo comunal de 293 ha denunciaron la apropiación indebida del terreno comunitario por parte de una empresa denominada Ganadera 22 cuyo dueño era un militar de apellido Campos, quien alambró el terreno. El IBR, ante la denuncia de los pobladores, autorizó en junio del '89 la restitución del campo comunal a sus legítimos dueños. La Delegación de Gobierno de Coronel Oviedo debía cumplir esta orden; sin embargo, no se hizo presente en el lugar ningún funcionario de la misma. El campo comunal venía siendo utilizado por los pobladores desde 1942, y en 1969 comenzaron los problemas (IC N° 9, 1989). De acuerdo a la versión de uno de los pobladores, cuando ellos ocuparon el terreno en 1942 no sabían si era un campo comunal o era privado. En 1968 apareció el militar realizando trabajo de amojonamiento, y posteriormente comenzó a alambrear las tierras, que según él había comprado. Su intención era alambrear todo el inmueble, que tenía alrededor de 500 ha; para ello presionaba a los ocupantes a que abandonaran sus casas. Ya en 1957 varios pobladores fueron encarcelados por una supuesta dueña que era de nacionalidad extranjera,

conocida como Luisa. En 1973 el IBR habría destinado una parte del inmueble para los ocupantes, pero no pudo hacer nada para no enfrentarse con el militar. Recién en 1989, con la caída de la dictadura, los pobladores pudieron salir de las persecuciones permanentes a las que eran sometidos por los supuestos dueños y pudieron recuperar las 293 ha que venían usufructuando desde el año 1942. De esta cantidad de hectáreas, 198 fueron parceladas por el IBR individualmente a 22 pobladores con un promedio de 9 ha cada uno y las 95 ha restantes quedaron nuevamente como campo comunal para estas mismas familias (informe de un poblador).

Conflicto 39 – San Isidro, San José de los Arroyos

Cincuenta familias reclamaron judicialmente la devolución de un campo comunal del cual se apoderaron los generales Johansen y Clebsch, quedando este último como único dueño. Durante la dictadura, los pobladores no pudieron realizar ninguna denuncia por temor al militar. El campo fue alambrado por éste. El conflicto se inició en 1962; hasta entonces, las 1.040 ha eran utilizadas por los pobladores. En marzo de 1990 los pobladores solicitaron al IBR la investigación del campo comunal alambrado. En septiembre de 1991, nuevamente los pobladores solicitaron al titular del IBR, Cancio Urbietta, la recuperación del campo comunal. Le pidieron además que designara un abogado para iniciar las acciones judiciales. El campo comunal no fue recuperado (IC N° 12, 1989; 18, 1990; 35, 1991). De acuerdo a la versión de un poblador, el general Clebsch, en 1962, con una dotación de soldados, comenzó a alambra el campo. Nadie se le oponía, incluso 10 pobladores que tenían sus casas dentro del campo fueron obligados a abandonarlas. Los miembros de la comisión vecinal encargada de administrar el campo fueron presionados y amenazados y no pudieron oponer resistencia. Incluso la comunidad vivía en zozobra por la presencia de soldados armados en el lugar, quienes actuaban con total impunidad. Según el poblador, el militar vendió el campo comunal en 1988, posiblemente porque ya veía caer a la dictadura. Actualmente, las más de 1.000 ha están administradas por una familia de nacionalidad alemana. Ya no hay reclamos, nadie se anima a reclamar. El campo comunal favorecía a varias comunidades circundantes como San Isidro, Melo de Portugal, Yhaka y Cañada (Alejandro Segovia, poblador).

Conflicto 40 – Tayy Poty, San Joaquín

Una comisión vecinal integrada por 170 campesinos solicitó la expropiación de una fracción de un inmueble que según los campesinos tendría 17 mil hectáreas y de las cuales solamente 6 mil estaban explotadas racionalmente. Indicaron que desde mayo del '89 iniciaron las gestiones ante el IBR para la expropiación. El dueño ofreció tierras en otro lugar, pero éstas estaban ocupadas por indígenas. No hubo ocupación. El inicio de los trámites comenzó en mayo del '89 (IC N° 12, 1989).

Esta primera comisión vecinal fue disuelta. Sus dirigentes habrían sido cooptados por el dueño del terreno, Carlos Galeano Perrone. No llegaron a ocupar. Posteriormente formaron otra comisión vecinal, que también fue desarticulada en 1998, porque no pudieron resistir las reiteradas amenazas del dueño que, apelando a militares, amedrentaba a los miembros de la misma. Hasta entonces no tenían apoyo de ninguna organización de carácter regional ni nacional.

Pero desde marzo de 1999 400 familias formaron otra comisión, esta vez con el apoyo de la Federación Nacional Campesina (FNC), para solicitar la expropiación de las tierras de Galeano Perrone y otras dos propiedades aledañas. Se están realizando los trámites en el IBR (Marcial Gómez de la FNC, 16/03/01).

Conflicto 41 – San Joaquín

En julio de 1994, en el distrito de San Joaquín, 270 familias ocuparon un latifundio perteneciente al empresario José Bogarín. De acuerdo a los campesinos y otras personas del lugar, dichas tierras tendrían aproximadamente 135 mil hectáreas, de las cuales 7 mil serían fiscales. Esta porción fue la ocupada por los campesinos, quienes solicitaron que se haga una mensura judicial y se expropie posteriormente para el asentamiento definitivo de los ocupantes.

Después de un mes de producirse la ocupación, los ocupantes fueron desalojados, con un total de 100 detenidos derivados a la cárcel de Tacumbú en Asunción. El desalojo y detención fueron por orden judicial emitida por el juez Rubén Talavera, de la circunscripción judicial de Coronel Oviedo. El propietario recibió apoyo de la ARP. Sobre la extensión del terreno hay varias versiones. El dueño dice que tiene 10.800 ha, otros dicen 16 mil hectáreas y los campesinos hablan de 135 mil hectáreas.

Según el Ing. Julio Brun, del IBR, 2 mil hectáreas de estas tierras fueron loteadas por equivocación por parte de la Dirección de Colonización Militar, porque lindaban con las propiedades de SIDEPAR, que fue loteada a los campesinos. En compensación por el daño, el IBR le canjeó la propiedad por otra en el distrito de Curuguaty. Esta comisión vecinal no estaba articulada con otras organizaciones de carácter regional ni nacional (IC N° 70 y 71, 1994; Julio Brun, gerente de desarrollo rural del IBR).

Conflicto 42 – Chacoré, Repatriación

En diciembre de 1989, 500 campesinos sin tierra acamparon frente al terreno de 11 mil hectáreas perteneciente a la señora Elena Barrientos de Galanti y solicitaron la expropiación de 5 mil hectáreas. El IBR informó que las tierras estaban inexplotadas. El Consejo Nacional de Coordinación para el Desarrollo Rural (CONCODER) autorizó la ocupación de 330 ha para chacra comunitaria, mientras duraran los trámites. Sin embargo, la misma no duró una semana. Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta –policías y militares– desalojaron violentamente a los ocupantes, quemando sus ranchos, tirando bombas lacrimógenas y golpeando a los mismos. El número de ocupantes poco antes del desalojo subió a 1.100 y las hectáreas solicitadas a 11 mil. El desalojo fue por orden judicial. Según el Coronel Ugarte Ramírez, presidente de CONCODER, el dueño no cumplió su palabra de ceder las 330 ha para chacra. Los campesinos denunciaron la presencia de efectivos militares, quienes acamparon en la propiedad para garantizar el trabajo que realizaba el supuesto dueño, Mario Monges. Posteriormente apareció como dueño José H. Santos, y siguió el pedido de expropiación.

Informes brindados por campesinos que estuvieron en la ocupación señalan que la propiedad de la señora de Galanti tenía 13.997 ha, que fueron repartidas en cuatro partes a los señores Mario Monges, Pérez Ramírez, José Herminio Santos y otros dos de apellido Monzón y Poizón. Los cuatro dueños tuvieron conflictos con campesinos. Monges vendió 500 ha para ser colonizadas y posteriormente Herminio Santos también vendió totalmente su parte de 2.997 ha para ser colonizadas a favor de los ocupantes. Fueron 350 sin tierra los favorecidos con esta colonización. Los otros dos dueños no colonizaron. Pérez Ramírez alquiló totalmente su parte a los menonitas. Monzón vendió 500 ha también a los menonitas y alquiló el resto a la secta Pueblo de Dios. Los campesinos que no fueron asentados en esta colonia se acoplaron a otras comisiones vecinales. En aquel entonces, algunos tenían el apoyo de la ARPAC y del MCP (IC N° 15, 1989; 19, 1990 y Higinio Lezme, dirigente campesino del asentamiento Ypekua, 12/06/01).

Conflicto 43 – Ypa'u Señorita, Repatriación

El Centro de Servicios Profesionales y Socio-Antropológicos denunció la ocupación de una fracción reservada para la comunidad indígena Mbya Ypa'u Señorita. El Instituto Nacional del Indígena (INDI) había adquirido 3.500 ha para ser destinadas a la parcialidad Mby'a de la zona. De estas, 1.500 corresponden a la comunidad Ypaú Señorita, 1.000 ha a la comunidad de Pindoí, 500 ha a la comunidad de 3 de Noviembre (ahora 3 de Febrero) y 500 ha a la comunidad de Amambay-Culandrillo. Una fracción de 522 ha, que parte en dos las tierras compradas para los indígenas, está ocupada por 52 familias campesinas. Esta fracción quedó definitivamente en poder de los campesinos y ahora ya es una colonia legalizada. En un principio formaba parte de las tierras pretendidas por los indígenas. Los campesinos aducen que las tierras les pertenecen porque son excombatientes de la guerra civil del '47 y porque además tenían promesas del IBR.

Las 1.500 ha destinadas a la comunidad Ypaú Señorita fueron ocupadas por 20 familias campesinas sin tierra en abril de 1993. Las mismas fueron desalojadas poco tiempo después de producida la ocupación, pero a mediados de junio del mismo año volvieron a ocupar, y esta vez eran 40 familias. Los campesinos justificaron la ocupación diciendo que contaban con la

autorización del IBR; sin embargo, el IBR sólo había reconocido la comisión vecinal. Los indígenas se sorprendieron de la actitud de los campesinos.

El INDI informó del inminente desalojo de los campesinos, porque se habían agotado los medios para una salida negociada. Efectivamente, el 30 de julio del '93, los ocupantes fueron desalojados. Un grupo se trasladó a Asunción para denunciar ante el Parlamento el desalojo del que fueron objeto y durante el cual fueron derribadas y quemadas la mayoría de las casas. Los campesinos desalojados por orden judicial explicaron que fueron engañados por supuestos procuradores. Isidoro Paredes, dirigente campesino de la FNC, acusó al diputado departamental Francisco Alvarenga y a un funcionario del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), quienes para obtener réditos políticos aseguraron que estaban en condiciones económicas y políticas de respaldar la ocupación de las tierras de los indígenas.

Los ocupantes, que abandonaron el lugar, acusaron a un funcionario del IBR de ser el promotor de la ocupación, pero posteriormente lo negaron y culparon a la comisión vecinal anterior. El daño causado a las tierras indígenas fue cuantioso. Pero en noviembre del '94 el INDI denunció que los campesinos que ya habían sido desalojados y aparentemente habían abandonado el lugar, volvieron a instalar sus casas en una franja de la propiedad y comenzaron a extraer rollos. Ante este hecho, el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de Coronel Oviedo ordenó la detención de aquellas personas que se dedicaban a la compra y venta de rollos de madera extraídos del asentamiento de los Mby'a. En la orden también figura la detención de cinco campesinos que ocuparon el asentamiento. La comercialización de rollos por parte de campesinos acampados cerca del terreno y de los propios indígenas es un problema de nunca acabar. Según la denuncia, en el tráfico de rollos estarían implicados funcionarios de la Dirección Forestal Nacional y militares.

Los campesinos solicitaron al gobernador de Caaguazú, Mario Soto Estigarribia, que se les permitiera volver a instalarse en el predio de los indígenas. Representantes de estos últimos rechazaron el pedido de los campesinos.

En abril del '96 los indígenas seguían sufriendo atropellos a su propiedad. En octubre del '96, denunciaban que los campesinos se internaban cada vez más al interior de sus tierras. A fines de 1999 la ocupación continuaba y el caso se agravaba, ya que la intensa deforestación estaba dejando pelada la propiedad de los indígenas. Este caso continúa sin ser resuelto; sigue la ocupación de las tierras indígenas por campesinos. Las autoridades se muestran impotentes para resolver el caso, y mientras tanto el hábitat indígena está siendo destruido. Los campesinos ocupantes tienen el apoyo de la Organización Nacional Campesina (ONAC) (IC N° 36, 57, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 84, 91, 97, 1991-1996; Antonio Rodríguez del INDI).

Conflicto 44 – Amambay-Culandrillo, Repatriación

Un líder de la comunidad Mby'a Guaraní de Amambay-Culandrillo denunció la ocupación por campesinos sin tierra del hábitat natural de los indígenas, de aproximadamente 500 ha. Los campesinos alegaban tener autorización del IBR para asentarse en el lugar y proceder al desmonte y apertura de caminos. Ante esta situación, los nativos solicitaron la urgente legalización de sus tierras. La ocupación se produjo en junio del '95. De acuerdo a Antonio Rodríguez, funcionario del INDI, en principio fueron ocupadas 250 ha de la parte norte, pero posteriormente otro grupo de campesinos comenzó a ocupar desde el sur. A fines del '99 sólo quedaban 40 ha para los indígenas. Estos prácticamente ya no habitaban el lugar, se habían dispersado.

El primer grupo de ocupantes fue apoyado por autoridades políticas del lugar, razón por la cual se negaban a abandonar las tierras indígenas. Los mismos continuaron depredando el bosque mientras los indígenas observaban impotentes la destrucción de su hábitat. Algunos de los ocupantes de esta fracción formaban parte de una comisión vecinal que consiguió tierras de la empresa Fukada Traddint Corporation. En vista de que no todos podían acceder a la parcela conquistada, formaron otra comisión vecinal y ocuparon la parcela que correspondía a los indígenas. Pero otra comisión vecinal de sin tierra comenzó a ocupar la parte sur de la misma. Según Marcial Gómez e Higinio Lezme, dirigentes campesinos de la FNC, las dos comisiones vecinales se fusionaron y las 500 ha ya están ocupadas en su totalidad. Son 80 familias y el caso no ha sido resuelto. Los campesinos no forman parte de ninguna otra organización de

carácter nacional ni regional (IC Nº 81 y 87, 1995; Alberto Alderete, Marcial Gómez e Higinio Lezme).

Conflicto 45 – Pindoí, Repatriación

Campesinos sin tierra nucleados en dos comisiones vecinales denominadas Yakarei y Pindoí fueron denunciados por indígenas de la parcialidad Mby'a de ocupar sus 1.100 ha de tierras. También fueron denunciados por quemar un rancho indígena y por el apaleamiento de otro miembro de la comunidad nativa. Los nativos denunciaron en varias oportunidades la ocupación de sus tierras por parte de los campesinos. Sobre el hecho se había pronunciado el IBR, señalando que las tierras en litigio eran exclusivamente de los nativos. El IBR rechazó la pretensión de los campesinos de fraccionar la tierra de los indígenas. Los sin tierra ocuparon una parte de la propiedad y comenzaron a talar el monte.

Servicios Profesionales Socio-Antropológicos, en representación de los indígenas, solicitó al gobierno su intervención para desalojar a los campesinos de las comisiones vecinales de Yakarei y Pindoí, que ocupaban parte de las tierras indígenas. Los campesinos, según la denuncia, estaban devastando los recursos forestales pertenecientes a los Mby'a guaraní. Los ocupantes tuvieron que abandonar posteriormente las tierras al darse cuenta de que eran de los nativos. El INDI inició los trámites para presentar una querrela criminal sobre la ocupación cuando los campesinos decidieron dejar el lugar, por lo que el procedimiento judicial quedó descartado. Estas dos comisiones vecinales no tuvieron el apoyo de otra organización campesina (IC Nº 83, 85 y 86, 1985; 120, 1988; Antonio Rodríguez, funcionario del INDI).

Conflicto 46 – Ypekua, Repatriación

Unos 300 campesinos sin tierra iniciaron la ocupación de un inmueble de 1.100 ha cuyo dueño era Julio Leiva, ex-funcionario del IBR, en los primeros meses de 1995, pero en julio del mismo año abandonaron. El 11 de agosto, un mes después, 35 de ellos volvieron a ingresar al terreno con el apoyo de la Federación Nacional Campesina (FNC). Después de tres meses de ocupación, el 31 de noviembre, se produjo el primer desalojo violento. En esta ocasión no hubo detenidos. El 9 de enero de 1996 los campesinos volvieron a ocupar el predio, pero el 19 de abril se produjo de nuevo un desalojo violento con la detención de 16 ocupantes. Los restantes se campamentaron al costado del terreno, siendo nuevamente desalojados por los efectivos de la policía el 23 del mismo mes.

Después de este desalojo, los campesinos se replegaron durante aproximadamente un año. Una vez que los detenidos recuperaron su libertad después de casi un año de permanecer en la cárcel de Coronel Oviedo, el 11 de marzo del '97, los campesinos volvieron a tomar el terreno. El 19 de abril los policías volvieron a la carga, deteniendo a dos ocupantes. Esperaron casi otro año para volver a la ocupación. En enero de 1998, 31 familias volvieron a la ocupación pero rápidamente se acoplaron otras hasta llegar a 100 el número de ocupantes. El dueño no se daba por vencido y el 24 de julio la policía realizó otro desalojo con quema de ranchos, robo de herramientas y enseres domésticos. Durante el desalojo, 27 señoras con sus hijos fueron alzadas en camiones y dejadas en una comunidad cercana llamada Arroyito. Al día siguiente alquilaron un camión y volvieron a la ocupación. Cuando estuvieron a punto de terminar de construir sus precarias viviendas después de 22 días, de nuevo llegaron los efectivos policiales, rodearon el lugar y sólo encontraron a las señoras con sus hijos y no hicieron nada. Los hombres se habían internado en los montes cercanos.

Después de 8 días, los policías volvieron para realizar el desalojo. Los ocupantes salieron, pero 8 días más tarde volvieron a entrar. El 24 de septiembre hubo otro desalojo, ocasión en que fueron detenidos dos ocupantes y una señora embarazada golpeada brutalmente, como consecuencia de lo cual perdió su bebé. Al día siguiente se trasladaron a una iglesia cercana. Durante la estadía en el local de la Iglesia los policías volvieron con intenciones de desalojarlos del templo, pero no lo lograron. Durante este operativo fueron detenidos siete ocupantes, cinco de los cuales fueron trasladados a la cárcel regional de Coronel Oviedo. Después de 22 días fue detenido el presidente de la comisión vecinal, Higinio Lezme. Para evitar que los ocupantes volvieran al lugar, cinco efectivos policiales y tres civiles se campamentaron a la entrada de la propiedad. Pero debido a que ya las señoras y los niños no soportaban vivir en el templo donde se habían campamentado, decidieron volver al predio unos días después. Los policías y civiles,

al ver tanta gente entre niños y señoras, abandonaron la casita que ocupaban dejando armas y otras cosas. Los ocupantes se apoderaron de las mismas y las depositaron en la Iglesia, de donde pocas horas antes habían partido. La idea era mostrar y entregar las armas en presencia del juez de paz del lugar, el sacerdote y la prensa. Ese día algunos periódicos informaron con grandes titulares la versión policial de que los campesinos habían atracado una caseta policial robando las armas y utilizado una capilla como arsenal de guerra para abastecerse de municiones y armas contra los agentes policiales, a quienes despojaron de sus armas en un enfrentamiento. Esta versión, totalmente opuesta a la versión de los ocupantes, fue desmentida por los dirigentes de la FNC, pero la noticia ya había producido su efecto en la opinión pública. El armamento fue recuperado. El juez de paz de Repatriación, Alfredo Romero, ordenó la detención de las personas que supuestamente estaban involucradas en el delito contra la policía. Las personas detenidas fueron 25 hombres y cinco mujeres. La FNC presentó ante la Comisión de DD.HH. del Senado una denuncia de abuso de autoridad por parte de jueces y policías. Los detenidos recuperaron su libertad, pero quedaron aún siete ocupantes que guardaban reclusión desde tres meses atrás.

Desde esa vez, los campesinos no volvieron a abandonar el terreno y el IBR tuvo que negociar con el dueño para comprarlo. Para lograr la libertad de sus compañeros detenidos, un importante grupo de ocupantes, desde el 21 de diciembre del '98, decidió ocupar por tiempo indefinido el local del juzgado de primera instancia de la ciudad de Caaguazú. Después de 18 días lograron su objetivo. Otro grupo se campamentó sobre la ruta internacional N° VII por 6 días, durante los cuales cerraron la ruta por 24 horas. Los detenidos consiguieron su libertad, incluso después de que el juez hubiera decretado la detención de los mismos y dictado sentencia. Los campesinos ganaron con grandes sacrificios. El asentamiento lleva el nombre de Juliana Fleitas en memoria de la beba que murió en el vientre de su madre a raíz de la golpiza que recibiera ésta en uno de los tantos desalojos violentos. El asentamiento tiene 1.100 ha y está poblado por 70 familias (IC N° 91, 104, 105, 120, 121, 123, 133, 1994/1999 y José María Paredes, Higinio Lezme y Juan Santa Cruz, dirigentes del asentamiento Juliana Fleitas, entrevistados el 12/06/01).

Conflicto 47 – Carlos Pfannl, Coronel Oviedo

En abril de 1993, doscientos campesinos sin tierra ocuparon parte de una fracción de 3.100 ha perteneciente al Instituto Agropecuario Carlos Pfannl de Coronel Oviedo. Los ocupantes afirmaron que decidieron ocuparlo después de largos trámites burocráticos en el IBR sin resultado positivo. Luego de una reunión mantenida con funcionarios del ente agrario, y de la elaboración de un censo de todos los ocupantes, los campesinos abandonaron el terreno y se instalaron al costado de la ruta que pasa por el lugar. La ocupación duró 8 días.

El Centro de Ex Alumnos del Instituto emitió un comunicado en el cual refutó los argumentos esgrimidos por los ocupantes. Afirmaban que una escuela agropecuaria que cumple una función social no puede quedarse sin reservas de bosques. Rechazaron el calificativo de tierra improductiva esgrimido por los campesinos para realizar la ocupación. Los miembros de esta comisión vecinal que habían realizado la ocupación en su gran mayoría provenían de la colonia 3 de Noviembre del departamento del Guairá. Al producirse el desalojo, esta comisión se desarticuló. Varios volvieron a la colonia 3 de Noviembre, donde están asentados actualmente, y otros se fundieron con la comisión vecinal Santa Carmen. Los campesinos en el momento de realizar la ocupación no tuvieron el apoyo de ninguna organización regional ni nacional. Posteriormente, varios de los miembros se acoplaron a comisiones vecinales apoyadas por la FNC (IC N° 55 y 56, 1993 y Marcial Gómez de la ARPAC).

En 1998 se formó otra comisión vecinal que habría tenido al inicio el apoyo del General Lino César Oviedo. Llegó a mensurar incluso el terreno, pero se desarticuló al dejar de contar con el apoyo del ex-militar. El caso sigue sin cerrarse porque otra comisión está buscando apoderarse del inmueble por la vía legal (Adrián Vázquez de ARPAC y Julio Brun del IBR).

Conflicto 48 – Curuñai, Coronel Oviedo

Lo ocurrido en esta localidad fue denunciado ante la Comisión Permanente del Congreso en enero de 1995. Según uno de los afectados, la tierra fue ocupada por ellos en 1952. Sin embargo, en diciembre del '94, varios policías acompañados por civiles, exhibiendo orden

judicial, procedieron a destruir sus viviendas y plantaciones, dejándoles a la intemperie. Los campesinos solicitaron la mediación de la Comisión Parlamentaria para anular la inscripción del inmueble a nombre de otros que no fueran de la comunidad. El terreno tiene 19 ha y en él habitan 8 familias. Este conflicto fue finalmente resuelto a favor de los antiguos ocupantes. No tuvieron el apoyo de ninguna otra organización (IC N° 76, 1995).

Conflicto 49 – Empalado Mi, Colonia San Antonio, Cecilio Báez

En agosto de 1993, campesinos que habían perdido sus tierras durante la dictadura formaron una comisión vecinal con el objetivo de recuperarlas. Esta fue una colonización privada cuyo dueño era Corazón Valdez. Varios colonos incluso ya contaban con su título de propiedad. Sin embargo, el empresario Genaro Peña, utilizando sus influencias con las autoridades de la época, se apropió de varias extensiones de tierra que los campesinos aducen les pertenecían legalmente, ya que cuentan con documentos que prueban que compraron legalmente de su antiguo dueño, Corazón Valdéz, esposo de Carmen Buzarquis. Genaro Peña habría conseguido este terreno mediante un engaño. Le hizo firmar un papel en blanco a Corazón Valdez y puso a su nombre las tierras ocupadas por los campesinos. Después vinieron las persecuciones y el desalojo.

En vista de que las negociaciones legales no prosperaban, en septiembre del '97 los campesinos, que contaban con el apoyo de la ONAC, ocuparon el terreno. Pero para su sorpresa, en el mismo día fueron llegando efectivos policiales que procedieron al desalojo de alrededor de 100 familias de la comisión vecinal. Los campesinos habían ocupado la propiedad para llamar la atención de la opinión pública y de las instituciones, con el objetivo de recuperar la colonia San Antonio, oficializada por el IBR en 1966. Los desalojados permanecieron bajo carpas al costado del terreno durante un año. Durante el tiempo que permanecieron en el campamento continuaron las gestiones. Debido a la poca esperanza de recuperar sus tierras por las vías institucionales correspondientes, los campesinos conversaron con Peña, quien cedió en otro lugar 350 ha para el asentamiento de los campesinos. Estos aceptaron la oferta y 41 familias se asentaron en el terreno. Esta comisión vecinal decidió no litigar más por estas tierras (IC N° 59, 1993 y 108, 1997; Albino Jara, dirigente campesino de Simón Bolívar, 16/03/01, y de Estanislao Martínez, presidente de la ONAC, 22/06/01).

Conflicto 50 – Kaatymi, Cecilio Báez

A fines de 1989, setenta y tres campesinos sin tierra ocuparon parte de una propiedad de 2 mil hectáreas perteneciente a Sergio Balanzá, después de realizados los trámites legales correspondientes. Los ocupantes no fueron desalojados, pero 4 miembros de la comisión vecinal fueron detenidos y derivados a la Delegación de Gobierno de Coronel Oviedo. Ante este hecho, 40 de los ocupantes acamparon en la explanada de la Catedral de Coronel Oviedo por un lapso de 15 días en reclamo de la libertad de sus compañeros, quienes fueron liberados. Los ocupantes solicitaron la expropiación de 800 ha (IC N° 15, 1990).

La sospecha de la existencia de un excedente fiscal dentro de la propiedad motivó a los ocupantes a solicitar la mensura judicial, que después de unos trámites fue realizada, encontrándose efectivamente unas 337 ha de excedente. En esta porción de terreno fueron asentadas 40 familias. El asentamiento fue habilitado legalmente por el IBR en 1992. Esta comisión vecinal no estaba articulada con otra organización de carácter regional ni nacional (Albino Jara, 16/03/01).

Conflicto 51 – Simón Bolívar

Los 90 campesinos que ocuparon en julio del '94 un terreno de 1.050 ha perteneciente a las hermanas Estela y Nidia Buzarquis fueron desalojados, y 21 de ellos detenidos en agosto del '94. La ocupación respondía a la presunción de los campesinos de que en dicho inmueble existía un excedente fiscal que superaría las 1.000 ha, reclamadas por los ocupantes. El desalojo se hizo con orden judicial. El 12 de enero del '95 sufrieron otro desalojo y siete fueron detenidos de nuevo. Los campesinos amenazaron con cerrar la ruta III a la altura de Simón Bolívar.

El consejo del IBR dictó una resolución por la cual homologaba el acuerdo entre campesinos y propietarios. El ente agrario realizaría una mensura en la propiedad para dirimir el conflicto. Ambas partes designaron técnicos para fiscalizar el trabajo de los funcionarios. Esta mensura judicial detectó que efectivamente había un excedente fiscal de 774 ha, que en 1997 fue legalizado en favor de 70 familias. La colonia se llama actualmente Luis Santiago Franco, en homenaje a uno de los campesinos que murió ahogado al caer en un fango en ocasión de la mensura judicial. Esta colonia figura en los registros del IBR con el nombre de Arroyo Hondo. La comisión vecinal es parte de la Organización Campesina de Simón Bolívar, afiliada a la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) (IC N° 77, 1995: 36; Albino Jara, 03/01 e IBR, 2000).

Conflicto 52 – Estancia Syry, Simón Bolívar

Un grupo de campesinos ocupó parte de una estancia denominada Syry, propiedad de Alfredo Plate, en julio de 1996. En la ocupación se produjo un grave incidente, pues dos operarios del establecimiento fueron retenidos por espacio de veinte horas por los campesinos sin tierra del lugar en reclamo de la libertad de siete compañeros que estaban detenidos en la cárcel de Coronel Oviedo. Luego de un operativo policial fueron liberados los empleados de la estancia Elías Cuevas y Tomás Acosta, y privados de su libertad los campesinos Reinaldo Martínez, Custodio Domínguez, Antonio Franco y Roque Guzmán. Después de este grave incidente, los campesinos se replegaron.

En mayo de 1999, los 150 sin tierra que reclaman parte de la estancia Syry de 3 mil hectáreas se instalaron en carpas en los límites de la propiedad. En julio del '99, los campesinos tomaron como rehenes a funcionarios del IBR para que sus reclamos fueran atendidos. La tensión continuó con la ocupación de la estancia San Ignacio, colindante al asentamiento, por parte de unos 70 campesinos. Los dueños son Buzarquis, Alfredo y Delia Plate. En esta localidad existen tres estancias juntas: la de San Ignacio de Delia Plate, la de Mina Syry de Alfredo Plate y el Establecimiento Mbutuy, también de los Plate. Los campesinos hablan de la existencia de 3 mil hectáreas de tierra fiscal en estas estancias. Las mismas están custodiadas por policías y civiles armados. Los campesinos son miembros de la Organización Campesina de Simón Bolívar, afiliada a la MCNOC. El conflicto continúa (IC N° 94, 1996; 128 y 130, 1999 y Albino Jara).

Conflicto 53 – Chocokue Potĩ de Santa Ana, Simón Bolívar

En agosto de 1997, una comisión vecinal denominada Buzarquis Kue, integrada por 50 familias, ocupó una propiedad de 1.646 ha perteneciente a los hermanos Buzarquis. Comenzaron las gestiones entre los ocupantes, el IBR y los dueños. Después de varias negociaciones, finalmente los dueños aceptaron vender al IBR para su colonización en el año 2000. Actualmente es un asentamiento legalizado en el cual fueron ubicadas 80 familias. Durante los 4 años que duró la negociación no hubo desalojos (Albino Jara, 03/01).

Conflicto 54 – Santa Rosa del Mbutuy

Familiares de campesinos desalojados del lugar informaron a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados que no sabían el destino de los 15 detenidos durante el procedimiento de desalojo realizado por efectivos de la Policía Especial de Operaciones (PEO) el 9 de septiembre de 1994. La propiedad, ocupada por 70 familias, tenía una extensión de 900 ha, y la dueña sería la familia Garay Zuccolillo. Estos ocupantes no están articulados con otra organización. La ocupación continúa y aún no hay una solución definitiva (IC N° 72, 1994 y Julio Brun, Gerente de Desarrollo Rural del IBR).

Conflicto 55 – 3 de Mayo, RI 3 Corrales

Un grupo de campesinos sin tierra formó una comisión vecinal para solicitar parte de una fracción de terreno perteneciente a Antonio Medina Sagalés, en el distrito de RI 3 Corrales. Esta comisión solicitó al IBR la mensura del terreno debido a la sospecha de la existencia de

un excedente fiscal. Los miembros de la comisión vecinal realizaron las gestiones ante el IBR, pero éste prácticamente no les hizo caso. Para acelerar las negociaciones, el 3 de mayo de 1995 ocuparon el terreno, pero al mes siguiente fueron desalojados, y 12 de ellos resultaron detenidos y derivados a la cárcel regional de Coronel Oviedo. Los ocupantes exigían la expropiación de por lo menos 500 ha para su asentamiento.

Los sin tierra volvieron a ocupar el terreno y en octubre del mismo año sufrieron su segundo desalojo con la detención de 40 de sus miembros, quienes fueron derivados nuevamente a la cárcel de Coronel Oviedo. En esta segunda ocupación el reclamo ya fue de 1.000 ha, siempre con la sospecha de que serían excedentes fiscales. Sin embargo, el IBR sostuvo que no existía tal excedente. La comisión vecinal contaba con 70 miembros.

Los campesinos, que ya habían sufrido dos desalojos violentos (junio y octubre del '95), no se rindieron y nuevamente volvieron a ocupar el terreno, pero viviendo en estado de zozobra debido al hostigamiento de civiles armados. Un ocupante fue herido por un civil. Este hecho motivó la intervención del IBR, que propuso una solución. Ofertó a los ocupantes otra tierra en las cercanías, que fue aceptada por la comisión vecinal. El lugar en el que fueron asentados se llama Capiibary, pero los campesinos lo bautizaron con el nombre de Colonia 3 de Mayo, en recordación de la primera ocupación. Los campesinos contaron con el apoyo de la ONAC (IC Nº 81, 85 y 87, 1995 y Estanislao Martínez, presidente de la ONAC, 22/06/01).

Conflicto 56 – Yvypyta I, Vaquería

Sesenta campesinos sin tierra asentados desde 1994 en un inmueble de aproximadamente 852 ha cuyos dueños son Milton Kupas (252 ha), Benito González (300 ha) y Dietma Rehinhard Kaiser (300 ha), fueron desalojados en agosto de 1996, y 30 de ellos fueron privados de su libertad. Esta ocupación fue abandonada por la comisión vecinal. No volvieron a ocupar el terreno, pero se fundieron con otra comisión vecinal. Los ocupantes eran miembros del MCP que inicialmente habían ocupado unas tierras de la empresa Blaysur SA en el distrito de Yhú, de las cuales fueron desalojados en el '94 (IC Nº 94, 1996 y Aureliano Arévalo, dirigente campesino del MCP, 6/04/01).

Conflicto 57 – Yvypyta II, Vaquería

La misma comisión vecinal que abandonó las tierras de Kupas, González y Kaiser en agosto del '96 ocupó otra parcela perteneciente a la familia Oviedo en el mismo distrito. Este terreno fue comprado por el IBR para los ocupantes, y actualmente es un asentamiento legalizado. Son 1.227 ha para 123 familias, de acuerdo a la resolución Nº 1325 del año 1997 del IBR. La comisión vecinal formaba parte del MCP (Aureliano Arévalo del MCP, 6/04/01 e IBR, 2000).

Conflicto 58 – Yvypytä III, Vaquería

El 29 de noviembre de 1993 40 campesinos sin tierra ocuparon un terreno de 400 ha perteneciente a la familia Brítez Caballero. Este caso no fue resuelto aún; está en proceso de compra por el IBR. Los ocupantes no sufrieron desalojo alguno. El asesor jurídico de los campesinos es el abogado Digno Brítez, del CIPAE. Este grupo no está articulado con otra organización campesina (Digno Brítez, abogado del CIPAE y asesor jurídico de los ocupantes, 23/03/01).

Conflicto 59 – José D. Ocampo

Ciento veinte campesinos sin tierra ingresaron a una propiedad de 774 ha, anteriormente ocupada por un destacamento de la caballería, en el distrito de José D. Ocampo. Los ocupantes fraccionaron el terreno para sus integrantes y comenzaron a construir sus viviendas. Según Servellón Martínez, uno de los dirigentes, fueron visitados por los militares, que les aseguraron que siguieran tranquilos en el lugar. El predio sería del Ministerio de Defensa, y fue ocupado en el mes de agosto del '97. Esta parcela fue adjudicada en forma gratuita a la caballería por el IBR el 15 de julio del '82, para lo cual se confeccionó un título adulterado. El Ministerio de Defensa, en el '95, intentó rematar la propiedad que era supuestamente suya, pero que en realidad nunca dejó de pertenecer a la firma José D. Ocampo SA. El abogado de

la empresa, Felino Amarilla, comentó que sobre dichas tierras existe una orden de no innovar, que todavía está vigente e inscrita.

La posibilidad de un desalojo causa inquietud entre los sin tierra. La Policía Ecológica y Rural (PER) presentó una orden de no innovar expedida por el juzgado del 5º turno en lo comercial y laboral de Asunción el 25 de julio de 1996. Este recurso fue solicitado por el General Omar Guerin de la Primera División de Caballería. Según el titular de la comisaría de Juan E.O'Leary, Perfecto Figueredo, el desalojo se produciría en cualquier momento. Esta tierra fue ganada por los campesinos. El IBR colonizó a favor de los ocupantes en 1998. Los ocupantes son miembros del MCP (IC N° 107, 108 y 109, 1997 y dirigentes del MCP).

Conflicto 60 – San Carlos, Pastoreo

Un inmueble de 5 mil hectáreas perteneciente a Rubén Stanley que venía siendo reclamado por las vías legales correspondientes desde 1989 fue ocupado por 52 familias en 1995. Los ocupantes fueron desalojados y detenidos por orden judicial a los dos meses de haberse producido la ocupación. Una vez liberados volvieron a ingresar al terreno, y a los seis meses volvieron a ser desalojados, apresados, y sus ranchos quemados. En todo este tiempo la persecución no cesó. Después de la tercera ocupación ya no hubo desalojo. Siguieron con los trámites a través del IBR y éste posteriormente compró 600 ha en 1998, con lo cual se dio por finalizado el conflicto. Los campesinos son miembros de la ARPAC, regional Caaguazú de la FNC (Marcial Gómez de la ARPAC, 03/01).

Departamento de Misiones

Conflicto 1 – San Solano Mi, Santa Rosa

En la compañía San Solano Mi de Santa Rosa, 31 familias no pudieron acceder a un terreno de 41 ha destinado para campo comunal por el IBR, debido a que un señor de nombre Abundio González lo alambró y se resistió a abandonarlo, pese a la notificación del IBR para que lo hiciera. El conflicto se inició en 1990 y continuó al año siguiente, pero no se sabe a qué solución arribaron. Estas familias no recibieron apoyo de la organización campesina de Misiones (IC N° 28, 1991 y Mario Talavera de la OCM, 03/01).

Conflicto 2 – Estancia San Benito, San Ignacio

En el distrito de San Ignacio, unos 70 campesinos sin tierra ocuparon el 4 de noviembre de 1991 la estancia San Benito, de 11 mil hectáreas, perteneciente a Angel Ramírez e hijos. Al día siguiente ya fueron desalojados por efectivos policiales y militares. Previamente firmaron un acta de compromiso con el presidente del IBR, Ing. Agr. Cancio Urbieto, para continuar las negociaciones y encontrar una salida al problema. Los campesinos se instalaron al costado del terreno bajo precarias carpas, de donde fueron nuevamente desalojados (IC N° 38, 1991).

El 22 de febrero de 1992, 200 campesinos volvieron a ocupar parte de la estancia por falta de respuesta del IBR. Ocho días después decidieron abandonar el terreno ante la promesa del IBR de encontrar una solución. Se instalaron en la plaza San Roque González de Santa Cruz de la ciudad de San Ignacio como medida de fuerza. Por su parte, el IBR anunció la compra de 5 mil hectáreas en el distrito de Ayolas para el asentamiento de los campesinos misioneros. Esta compra no se llegó a efectuar. Esta comisión vecinal terminó, algunos miembros fueron beneficiados con 5 ha por los alrededores, y los demás se fundieron con otras comisiones. La ocupación fue acompañada por la organización, que se estaba rearticulando y que posteriormente se denominaría Organización Campesina de Misiones (OCM) (IC N° 41, 1992 y Mario Talavera de la OCM, 03/01).

Conflicto 3 – Ganadera Soley, San Patricio

El 4 de noviembre de 1991, unos 60 campesinos sin tierra del distrito de Santa Rosa y San Patricio ocuparon la estancia Soley Ganadera, de Víctor Chiriani. Al igual que en el caso anterior, fueron desalojados al día siguiente ante la presencia de efectivos policiales y militares. Firmaron un acta de compromiso con el presidente del IBR, Cancio Urbieto (IC N° 38, 1991).

Cinco años después, en mayo de 1996, 200 campesinos sin tierra nucleados en la Organización Campesina de Misiones (OCM) ingresaron por segunda vez a la propiedad de la ganadera Soley, para abandonarla nuevamente 4 días después (IC Nº 92, 1996). Pero el 10 de junio del mismo año volvieron a ocupar el predio, y una vez más fueron desalojados, dos días después, en cumplimiento de una orden judicial (IC Nº 93, 1993). Los ocupantes permanecieron bajo carpas al costado del terreno por espacio de un mes, tiempo en el cual negociaron con el IBR y la gobernación la reubicación de los ocupantes. Se negociaron 1.000 ha en el distrito de Ayolas, donde fueron ubicadas 45 familias en el año 1996. Este asentamiento fue denominado Alejandro Falcón, en memoria de uno de los dirigentes campesinos de las Ligas Agrarias asesinado en abril de 1976 (Mario Talavera, 03/01).

Tres años después de la segunda ocupación, en julio de 1999, 200 campesinos ocuparon por tercera vez la estancia Soley, de 7.800 ha. Los ocupantes solicitaron 3 mil hectáreas para asentar a 300 familias. Mientras tanto, policías y militares rodearon el lugar impidiendo que llegaran comidas a los campesinos. Tuvieron que mediar el Monseñor Melanio Medina y parlamentarios para que el IBR se comprometiera a adquirir unas 1.762 ha en otro lugar para asentar a las familias que ocuparon dicho predio. Sin embargo, el IBR no contaba con los recursos financieros para comprar el terreno (IC Nº 130, 1999). Los ocupantes eran miembros de la Organización Campesina Unida de Misiones (OCUM). Esta comisión vecinal terminó, 40 familias se unieron a otra comisión vecinal, y el resto está disperso. Actualmente está siendo reunido nuevamente en una comisión vecinal apoyada por la FNC (Pedro Talavera, 03/01).

Conflicto 4 – Mbocaya Poty, Ayolas

El 5 de noviembre de 1991, 50 campesinos sin tierra ocuparon un inmueble de 8 mil hectáreas inexplorado perteneciente supuestamente a los empresarios Conrado Pappalardo y Pedro Zuccolillo. Los campesinos recurrieron a esta medida ante la falta total de respuestas por parte del gobierno a sus pedidos de tierra. Los mismos fueron desalojados y se instalaron al costado de la ruta que conduce a la ciudad de Ayolas (IC Nº 38, 1991). Posteriormente el IBR se hizo cargo de las tierras, que en gran parte eran fiscales. En 1992 fue creada una colonia en el lugar para 120 familias, en un predio de 5 mil hectáreas. Gran parte de la parcela no era apta para la agricultura, pero sí para la ganadería. Es una colonia agroganadera (Pedro Talavera, 03/01). Entrevistas con campesinos ocupantes de la Estancia Don Emilio, de Marcelo Sisul, informaron que en dicha colonia sólo permanecen 16 familias campesinas. Las demás vendieron sus parcelas a comerciantes y pequeños ganaderos y abandonaron el lugar. Esta comisión vecinal no estaba acompañada por la OCM (Benito Arguello y otros, 29/03/01).

Conflicto 5 – Potrero San Antonio, San Ignacio

En octubre de 1993, en la compañía Potrero San Antonio del distrito de San Ignacio, 80 sin tierra ocuparon un establecimiento ganadero propiedad de César Zotti. Los sin tierra venían gestionando la adjudicación legal de esta tierra desde 1990. De acuerdo a Dionicio Gómez, dirigente de la comisión vecinal, dentro del predio existiría un excedente fiscal. La estancia sería de Nata Legal, concubina del ex presidente Stroessner, y Zotti sería sólo un prestanombre. Los ocupantes fueron desalojados por orden judicial el 4 de noviembre de 1993, y acamparon al costado de la estancia a la espera de alguna solución de las autoridades. La propiedad tendría 6.432 ha. El cura párroco de San Ignacio, Presbítero Ortega, afirmó que la tierra tiene título pero que es malhabida (IC Nº 62, 1993).

En febrero de 1994, los campesinos, por segunda vez, ocuparon parte de la estancia de César Zotti ante la falta de atención a sus pedidos de tierra por parte del IBR. Los ocupantes solicitaban la expropiación de unas 2.600 ha para dar cabida a los sin tierra del lugar. Esta vez ocuparon la propiedad 100 campesinos (IC Nº 65, 1994). El 3 de mayo de 1994 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de expropiación de 2.661 ha y lo mismo hizo la Cámara de Senadores el 25 de agosto del mismo año. En ese mes los ocupantes denunciaron amenazas por parte del hijo del dueño para que dejaran de cultivar dichas tierras. La cantidad de ocupantes se incrementó a 150. El entonces presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, que había prometido solución favorable a los campesinos que ya llevaban tres años de lucha, vetó la expropiación de las 2.661 ha, aprobada por el Congreso, con el argumento de

que agrológicamente las tierras no eran aptas para la agricultura (IC Nº 70, 1994). La Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de Diputados recomendó nuevamente la expropiación del terreno, pero ya no corrió el pedido. Mientras tanto, los ocupantes sufrían atropellos y amenazas por parte del capataz de la estancia (IC Nº 73, 1994).

En junio del '95, el juez Magno Vargas, de la circunscripción judicial de Misiones, ordenó el desalojo de los ocupantes. Éstos por su parte esperaban la presencia del presidente del IBR para aclarar el caso (IC Nº 81, 1995). En setiembre del '95, los campesinos, el IBR y el dueño llegaron a un acuerdo para la compra de las 2.661 ha para el asentamiento de 240 familias (IC Nº 84, 1995).

El asentamiento fue denominado 1º de Noviembre. Los ocupantes que lograron estas tierras denunciaron que otro grupo de 20 sin tierra habían ingresado a la parte destinada para campo comunal instigados por Arcidio Aquino Balbuena, presidente de la seccional colorada de Santa Rosa. Añadieron que los intrusos sacaban rollos de una reserva forestal y comenzaron a arar las tierras con el tractor del seccionalero, generando una peligrosa situación de conflicto. Los 20 campesinos fueron posteriormente desalojados. En la colonia fueron asentadas 120 familias (IC Nº 95, 1996).

Conflicto 6 – Villa Permanente, Ayolas

El 6 de febrero de 1994, 20 campesinos sin tierra ocuparon un terreno de 1.900 ha perteneciente a la señora Juana Bautista Román, viuda de Rodríguez, ubicado a la entrada de la Villa Permanente en Ayolas (IC Nº 65, 1994). El terreno ocupado por los sin tierra fue mensurado a favor de los ocupantes. La supuesta dueña no pudo hacer nada porque no contaba con los documentos que la avalaran como propietaria. Se cree que la tierra era malhabida y pertenecería al expresidente Stroessner (IC Nº 71, 1994). Las dos cámaras del Congreso declararon de interés social y expropiaron dicho inmueble, de 1.967 ha, inscrito en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre de la firma Cabaña Atinguy SA Agropecuaria, Comercial e Industrial, a favor de los 100 ocupantes. El presidente de la República firmó dicha ley el 4 de mayo de 1995 (Poder Legislativo, Ley Nº 558/95). La ocupación fue legalizada por el IBR en el mismo año.

Dirigentes campesinos miembros de la OCM señalaron que en este asentamiento gran parte de las familias que fueron favorecidas por la expropiación negociaron sus lotes con empresarios, comerciantes y funcionarios de la Hidroeléctrica Yacyretá. Acusaron al que fuera presidente de la comisión vecinal de negociar dichas tierras. Esta comisión vecinal de sin tierra no estuvo acompañada por la OCM (Benito Arguello y otros, 03/01).

Conflicto 7 – Mbyjui, Santa Rosa

En marzo de 1996, en la compañía Mbyjui del distrito de Santa Rosa, un grupo de 22 campesinos instigados por políticos y personas solventes alambraron un campo comunal de 3.600 ha y construyeron sus ranchos con el objetivo de apropiarse de una gran parcela que beneficia en forma directa a 120 familias e indirectamente a 500 productores. El titular del IBR, Hugo Halley Merlo, confirmó que el terreno fue declarado campo comunal. La denuncia fue hecha por Efraín Méndez, presidente de la comisión vecinal del campo comunal (IC Nº 90, 1996). Los ocupantes fueron desalojados al poco tiempo y se recuperó la normalidad en la comunidad. Los ocupantes no tuvieron el apoyo de ninguna organización del departamento (Mario Talavera, 03/01).

Conflicto 8 – Ypuku, Santa Rosa

En noviembre de 1997, en la localidad de Ypuku del distrito de Santa Rosa, 25 campesinos sin tierra ocuparon un predio de 300 ha cuya propietaria sería la Arq. Cristina Concepción Duarte Morínigo, hija de Feliciano Duarte, presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO) durante la dictadura. Los ocupantes eran miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM). Dionicio Gómez, líder del grupo, explicó que las tierras ocupadas eran aptas para la agricultura y que allí se quedarían, porque eran tierras malhabidas (IC Nº 110, 1997). Este caso terminó en la nada. Una parte de los miembros de la

comisión vecinal se integró a la OCM, otros están en un nuevo asentamiento denominado Martín Rolón adjudicado por el IBR en el año 2000, y otros en una comisión vecinal que ocupa la estancia Don Emilio de Marcelo Sisul, ubicada en el distrito de San Juan Bautista. Estos grupos fueron apoyados por la OCM (Pedro Talavera, 03/01).

Conflicto 9 – Alcibiades Ibañez Rojas, San Juan Bautista

En la compañía Alcibiades Ibañez Rojas de San Juan Bautista, el 3 de mayo de 1998, 130 sin tierra ocuparon la estancia conocida como Don Emilio, de la Rural Ganadera SA, perteneciente a Marcelo Sisul. Héctor Alvarenga, dirigente campesino, señaló que la ocupación busca solución a más de 255 familias sin tierra del lugar. Los ocupantes fueron desalojados 19 días después, y 76 personas fueron detenidas por orden del juez Mario Maidana Griffith. El gobernador de Misiones, Roque Achar Pujol, dijo que los campesinos fueron utilizados por sus dirigentes para justificar el dinero que recibían de gente poderosa y para quedar bien con la directiva de la FNC. Debido a que no se contaba con suficientes alimentos para ellos, niños y mujeres llegaron a sufrir enfermedades y desnutrición, además del rigor de la infrahumana condición penitenciaria a la que fueron sometidos. Los campesinos/as fueron recluidos/as en la cárcel de Abraham Cué (IC N° 118, 1998). Los detenidos/as fueron de a poco liberados/as, 30 la primera vez, 17 la segunda, y así sucesivamente. Cuatro de ellos recuperaron su libertad después de 6 meses.

En marzo de 1999, 136 campesinos volvieron a ocupar el establecimiento ganadero. Los mismos eran miembros de la OCM, liderada por Héctor Soto. Era la segunda vez que ingresaban a la propiedad, y argumentaban que existía un excedente fiscal (IC N° 126, 1999). Pero nuevamente fueron desalojados por orden judicial y acamparon frente al terreno, pasando hambre y otras necesidades. Reclamaron la expropiación de una parte del terreno (IC N° 127, 1999). Ocho días después volvieron a ingresar. Esta vez permanecieron dentro del predio por 2 meses, cuando llegó de nuevo una orden de detención masiva. Ante esto se replegaron durante 15 días, para volver a ocupar el terreno ya de manera definitiva. El repliegue ocurrió en mayo del mismo año, y aguardaron acampados frente al predio bajo precarias carpas (IC N° 128, 1999). Doce días después de haber ingresado en el terreno fueron rodeados por efectivos policiales y militares durante 8 días. En esta oportunidad, los dirigentes campesinos solicitaron la presencia del presidente del IBR, de Monseñor Medina, obispo de Misiones, y del comandante del cuartel del lugar para que el cerco policial-militar que les impedía la libre circulación abandonara la zona. Se emplazó a los ocupantes a dejar el terreno; sin embargo, estos decidieron permanecer en el lugar y enfrentar la probable represión. Desde entonces, alrededor de 60 sin tierra permanecen en el predio. Solicitan 2.500 ha de las 7 mil que posee la estancia (IC N° 134, 1999; Pedro Talavera y los ocupantes 03/01).

Conflicto 10 – San Pablo, San Ignacio

En diciembre del '99, en la compañía San Pablo de San Ignacio, unos 70 campesinos ocuparon una propiedad perteneciente al ganadero Venancio Pino, de aproximadamente 12 mil hectáreas. Los sin tierra ingresaron en la madrugada pero para la tarde ya fueron totalmente desalojados con orden judicial. Los ocupantes fueron derivados a la comisaría de San Ignacio, pero puestos en libertad por orden del ministro del Interior Walter Bower (IC N° 135, 1999).

Gran parte de la estancia era apta para la agricultura; sin embargo, el ganadero ofertó al IBR la fracción menos apta, razón por la cual los ocupantes abandonaron la intención de volver a ocuparla. Los/as campesinos/as que realizaron la ocupación son miembros de la Comisión Vecinal Campesino-Paraguaya de Sin Tierra. Actualmente están en el asentamiento Martín Rolón de 3.700 ha adquiridas por el IBR (Pedro Talavera, 03/01 y Nemesia Ramírez, asentada).

Nota

11. Tierra malhabida hace alusión a todas las tierras entregadas por el IBR a personas no sujetas a la reforma agraria, pero que por su influencia política o amistad con las autoridades consiguieron que se les adjudicaran grandes extensiones de tierra.

Capítulo VIII

Análisis de los conflictos de tierra en Misiones y Caaguazú

Cantidad de conflictos por departamentos

Desde 1989 a 1999 en los departamentos de Caaguazú y Misiones se registraron 70 conflictos de tierra, de los cuales 60 fueron en Caaguazú y 10 en Misiones. Los numerosos casos observados en Caaguazú tienen asidero en el acelerado crecimiento poblacional, a partir de los años '60, década en la cual pasó a ser el principal departamento receptor de la oleada migratoria campesina del período comprendido entre las décadas del '60 y '80. Antes de esta etapa, el movimiento migratorio en el departamento era escaso. Hasta 1931, la única colonia oficial habilitada fue la de Manuel Franco, en el distrito de San José de los Arroyos, de 1.600 ha distribuidas en 186 lotes (Pastore, 1972: 314). Posteriormente, y hasta el año 1953, fueron habilitadas 12 colonias oficiales y tres privadas en Caaguazú, en una superficie de 136.875 ha con 5.203 lotes (Frutos, 1982: 239). Éstas se localizaron fundamentalmente en los distritos más cercanos a la capital departamental, Coronel Oviedo. De las 12 colonias oficiales habilitadas, seis se ubicaron en el distrito de San José de los Arroyos, colindante con el departamento de la Cordillera; tres colonias dentro del mismo perímetro de Coronel Oviedo, y las demás en Cecilio Báez, Cleto Romero y Nueva Australia. Dos de las tres colonias privadas habilitadas correspondían a los colonos menonitas, con una superficie de 45.117 ha, y se ubicaron en los distritos de J. E. Estigarribia, anteriormente Campo 9 (Frutos, 1982: 238). Estas colonias fueron creadas mayoritariamente entre 1935 y 1941, coincidiendo con un corto período de reforma social iniciado por el gobierno del Coronel Rafael Franco, cuyo movimiento desplazó al Partido Liberal del gobierno mediante un levantamiento armado el 17 de febrero de 1936. Durante este breve gobierno –febrero de 1936 a agosto de 1937– se llevaron a cabo 22 expropiaciones, que afectaron una superficie de 81.709 ha y se localizaron fundamentalmente en los departamentos de la Cordillera, Paraguarí, y en algunos distritos de Caaguazú, Guairá, Caazapá y Misiones (Pastore, 1972: 328).

A partir de 1958 comienza el acelerado proceso de poblamiento del departamento. En el período comprendido entre 1958 y 1981 fueron habilitadas 36 colonias oficiales y 29 privadas, que juntas totalizaron 21.248 lotes en una superficie de 329.303 ha, de las cuales 12.136 lotes, con 167.080 ha, correspondían a colonias oficiales (Frutos, 1982: 242). Esta masiva creación de colonias en los departamentos del eje Este –Caaguazú y Alto Paraná– fue a instancias de la ley promulgada en 1963, que creaba el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Estatuto Agrario, cuya filosofía era la transformación de la estructura agraria del país con la incorporación de la población campesina al desarrollo económico y social (Frutos, 1982: 23). Responde además a la doble estrategia del gobierno de poblar la frontera, por un lado, para evitar la incursión de grupos armados –guerrilla– desde Argentina y Brasil, promovidos por la oposición al régimen stronista. Por otro lado, la intención también fue descomprimir la poblada región Central, anticipándose a posibles brotes de violencia a raíz del hacinamiento poblacional. Cabe señalar que entre 1959 y 1960 incursionó en los departamentos de Itapúa y Caazapá desde la Argentina la columna 14 de Mayo, grupo guerrillero que intentaba derrocar al régimen del General Stroessner.

En el departamento de Misiones, sin embargo, en los once años de apertura política sólo se han registrado 10 conflictos. Este hecho se debería básicamente a dos factores. Primero, es un departamento en el cual sigue coexistiendo el sistema minifundio-latifundio con fuerte predominio del modo de producción parcelario-comunitario. Si bien hacia finales de los años '60 hubo un intento de modernización de la agricultura con el plan de trigo y soja en la zona referida, esta iniciativa de agricultura empresarial no tuvo continuidad y fue extendiéndose hacia la cuenca del Río Paraná, donde existen tierras de mayor fertilidad que las de Misiones (Acosta, 2001). Segundo, es un departamento de expulsión migratoria. Uno de los dirigentes campesinos entrevistados señaló que la migración definitiva y temporal es una característica que marca la diferencia en Misiones con respecto a otros departamentos. Como tal, es un

factor que retrasa la lucha por la tierra, pues una gran mayoría de los sin tierra viaja hacia la Argentina, o a las ciudades de Asunción, Encarnación u otras localidades. Independientemente del camino que elijan, los migrantes se dedican a trabajar como obreros de la construcción (pintores, albañiles), mensuales y/o cosecheros de algodón en las provincias de Misiones y del Chaco argentino. Los dirigentes campesinos estiman que existen 5 mil campesinos/as sin tierra en el departamento, de los cuales sólo una ínfima parte está organizada (Argüello, 2001).

Hasta la década del '60 se habían creado en Misiones apenas siete colonias oficiales y una privada, con un total de 2.014 lotes en 62.214 ha, un promedio de 30,90 ha por lotes. Y desde los '60 a los '80 se crearon 21 colonias oficiales y ninguna privada, pero el número de lotes bajó a 1.851, al igual que las hectáreas afectadas, que pasaron de 62.214 a 35.057 (Frutos, 1982: 251-254), es decir que la cantidad de tierra recibida por cada campesino bajó considerablemente, de 30,90 a 18,93 ha. Esta escasa redistribución de la tierra hace que la estructura agraria en el departamento no haya sufrido modificaciones importantes hasta el presente.

Otro de los factores que pudo haber influido y sigue influyendo es el aspecto cultural. Si bien Misiones fue uno de los departamentos de mayor desarrollo de la conciencia de clase campesina durante las décadas del '60 y '70 con el trabajo de las Ligas Agrarias, no es menos cierto que el escaso desarrollo de la agricultura comercial, junto con la vigencia de la relación peón-patrón, típica de los establecimientos ganaderos de carácter extensivo, tuvo una decisiva influencia en la conciencia de los campesinos a la hora de reclamar los derechos sobre la tierra. Uno de los entrevistados manifestó que en Misiones no son pocos los campesinos que todavía mantienen la creencia de que no es bueno reclamar la tierra de los ganaderos, de los patrones, porque todavía son vistos como potenciales "protectores" en circunstancias de crisis económicas proveyendo algunas changas (Benito Argüello, ocupante de las tierras de Sisul y Ana López del asentamiento Martín Rolón). Además, es común que entre el patrón estanciero y el peón se establezca una relación de parentesco mediante el compadrazgo, razón por la cual no cabe en la lógica de un peón reclamar la tierra de ningún patrón. A criterio del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, regional Misiones, "el misionero no es agricultor, él es un granjero, un ganadero, es hombre de a caballo, que no tiene vocación agrícola. Para hacer agricultura en Misiones con el tipo de suelo que hay, franco arenosa, se deben hacer correcciones importantes en el suelo pero a un costo monetario muy alto" (Acosta Núñez, presidente de la Regional de la ARP, 2001).

Otro de los motivos de la escasa reacción de los sin tierra fue la escalada represiva del gobierno dictatorial entre los años 1975 y 1976, con la cual se erradicó de raíz el avance de las Ligas Agrarias. "La lucha tardía por la tierra obedece a que Misiones fue muy golpeado por la dictadura, tuvo una represión muy fuerte, muchos compañeros fueron masacrados y eso el pueblo vio con sus propios ojos" (Ana López). Esta violenta represión de la dictadura stronista, con un saldo de varios asesinatos y desapariciones, todavía permanece viva en la conciencia de los misioneros. El fanatismo partidario propiciado por los partidos políticos tradicionales, el Colorado y el Liberal, también fue señalado como otro de los obstáculos en la lucha por la tierra. Recién con la caída de la dictadura los campesinos misioneros comenzaron de nuevo un proceso organizativo con la creación de las primeras comisiones vecinales de sin tierra.

Localización de los conflictos

Los conflictos, en su mayor parte, se localizaron en los distritos de menor índice poblacional, y en consecuencia los que cuentan con mayores reservas de bosques o de latifundios improductivos. En el departamento de Caaguazú sobresalen claramente los distritos de Yhú, con 11 conflictos; J. E. Estigarribia, con 9; Repatriación con 5; Raúl Arsenio Oviedo, Mariscal López, Carayaó y Caaguazú con 4 conflictos cada uno; y Vaquería, junto a Simón Bolívar con 3 conflictos. Esta distribución muestra que la presión por la obtención de tierra estaba dirigida hacia distritos cercanos a los departamentos de Alto Paraná en el Este y San Pedro en el Norte, que no han sido incorporados a la colonización en el pasado reciente. Los distritos que se encuentran hacia el centro y colindando con el departamento de la Cordillera no sufrieron conflictos de tierra, excepto San José, donde reflataron dos casos de apropiación indebida de campos comunales por militares, los cuales no pudieron ser reclamados por sus usuarios durante el régimen dictatorial. Es importante destacar, por otro lado, que dentro del mismo departamento se ha dado un intenso desplazamiento de campesinos.

La rápida minifundización de las parcelas en los distritos colonizados, como Pastoreo, la Pastora, San José de los Arroyos, por citar algunos, por efecto del crecimiento demográfico, junto con la numerosa camada de jóvenes sin tierra provenientes de otras localidades, comenzaron a ejercer fuertes presiones sobre las tierras improductivas de las zonas menos pobladas. Esto confirma lo que numerosas investigaciones anteriores ya han señalado: que la apertura de la frontera agrícola va extendiéndose no por efecto de una política gubernamental de redistribución de tierra sino por efecto de la creciente presión ejercida por los sin tierra.

La localización de los nuevos asentamientos también muestra esa tendencia. Los distritos que en mayor proporción fueron afectados por las nuevas colonias son Yhú y Raúl Arsenio Oviedo, con 10 asentamientos cada uno, Repatriación con 4 y Caaguazú con 3, por citar los más importantes. De las 42 colonias oficiales habilitadas por el IBR desde el '89 al '99, 11 fueron ampliación de las colonias ya existentes, 5 corresponden a asentamientos urbanos, y las 26 restantes son nuevas colonias (anexo Cuadro 2). Estos nuevos asentamientos afectaron un total de 67.515 ha distribuidas en 6.990 lotes, de las cuales 1.210 son lotes urbanos.

En Misiones, los distritos con mayor índice de conflictos son San Ignacio y Santa Rosa, con tres cada uno, y Ayolas con dos conflictos. San Juan y San Patricio completan la nómina de los distritos con un conflicto cada uno. A diferencia de Caaguazú, en Misiones los conflictos se dieron en los distritos de mayor índice poblacional, que a su vez concentran las tierras de mayor fertilidad para la producción agropecuaria. En estos dos distritos (Santa Rosa y San Ignacio) los campesinos han tenido además un mayor desarrollo organizativo, lo cual facilita el ejercicio de una ciudadanía más activa, expresada en una presión permanente sobre las grandes propiedades ganaderas subutilizadas en su mayor parte. Con respecto a los nuevos asentamientos, datos del IBR muestran que en este departamento durante el período de estudio se crearon un total de 15 colonias oficiales y ninguna privada, de las cuales 2 son urbanas, 4 son ampliaciones y el resto nuevas colonias. La cantidad de tierras afectadas fue de 6.397 ha, las cuales se distribuyeron en 1.195 lotes, con un promedio de 5,35 ha por lote. La redistribución de tierras en parcelas muy pequeñas, lotes-quintas, en un departamento con aptitud más ganadera que agrícola, muestra la dificultad que tuvieron los sin tierra para acceder a una parcela, y el Estado para afectar los latifundios. Con esta distribución lo que hace el Estado es potenciar el minifundio sin afectar los latifundios, lo que a corto plazo generará nuevos conflictos (anexo Cuadro 3).

Los datos igualmente muestran la ausencia en este período de colonizaciones privadas, lo cual obedecería a dos motivos: por un lado, el continuo incremento del valor de la tierra, que deja fuera de competencia a los potenciales beneficiarios que son las capas campesinas más pobres, y por otro el desplazamiento de la agricultura por la ganadería, cuya rentabilidad es muy superior a la primera. Para el propietario de grandes extensiones de tierra es más rentable destinar su tierra a la ganadería o alquilarla a grandes productores, asegurando una renta importante, que ofertarla a los campesinos, sin garantía de que podrán asegurar el pago por los lotes.

Cuadro 3
Localización de los conflictos

Distrito	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Ayolas		0,00	2	20,00	2	2,86
Caaguazú	4	6,67		0,00	4	5,71
Carayao	4	6,67		0,00	4	5,71
Cecilio Báez	2	3,33		0,00	2	2,86
Cleto Romero	1	1,67		0,00	1	1,43
Cnel. Oviedo	2	3,33		0,00	2	2,86
J. E. Estigarribia	9	15,00		0,00	9	12,86
José D. Ocampo	1	1,67		0,00	1	1,43
Mcal. López	4	6,67		0,00	4	5,71
Pastoreo	1	1,67		0,00	1	1,43
R.I. 3 Corrales	1	1,67		0,00	1	1,43
Raúl A. Oviedo	4	6,67		0,00	4	5,71
Repatriación	5	8,33		0,00	5	7,14
S. Rosa Mbutuy	1	1,67		0,00	1	1,43
San Ignacio		0,00	3	30,00	3	4,29
San Joaquín	2	3,33		0,00	2	2,86
San José	2	3,33		0,00	2	2,86
San Juan		0,00	1	10,00	1	1,43
San Patricio		0,00	1	10,00	1	1,43
Santa Rosa		0,00	3	30,00	3	4,29
Simón Bolívar	3	5,00		0,00	3	4,29
Vaquería	3	5,00		0,00	3	4,29
Yhú	11	18,33		0,00	11	15,71
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Tipo de inmuebles

Las categorías utilizadas para definir esta variable son los inmuebles de tipo privado, los de tipo comunal, los de tipo fiscal, y las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. Como puede notarse en el Cuadro 4, la mayoría de los conflictos se desarrolló en los inmuebles de tipo privado, alcanzando un 82,86% (58 casos); 7,14% fueron en inmuebles de tipo comunal (5 casos); 5,71% en los de tipo fiscal (4 casos); y 5% (3 casos) en tierras pertenecientes a comunidades indígenas. En estos conflictos estuvieron involucrados aproximadamente 11.190 sin tierra, afectando a un total aproximado de 290.415 ha en ambos departamentos.

De los inmuebles privados

La alta proporción de propiedades privadas en conflicto confirma lo que en varios estudios se ha venido afirmando: a principios de la década del '80 el Estado ya no contaba con tierras fiscales para destinar a la colonización. Gran parte de esas tierras que el Estado había recuperado o comprado a la grandes corporaciones agroforestales fueron cedidas prebendariamente o vendidas a precios ínfimos a los personeros del régimen stronista. Este hecho hizo que las organizaciones campesinas que apoyan a las comisiones vecinales de sin tierra centraran su atención en las propiedades privadas, fundamentalmente aquellas cubiertas de bosques. La fuerte presión por este tipo de inmuebles se dio sobre todo en los primeros años de la transición, cuando los propietarios aún conservaban grandes reservas de bosques y la ocupación no era aún motivo de preocupación, a pesar de haberse incrementado desde los años 80. Cuando en 1989 se iniciaron las masivas ocupaciones de tierra, los propietarios comenzaron a derribar sus bosques, no necesariamente para destinarlos a la producción agrícola o pecuaria, sino en muchos casos para evitar la ocupación. Caaguazú es uno de los departamentos que ha pasado por este proceso de intensa deforestación. Lo demuestra el hecho de que más del 39% (350 mil de 900 mil hectáreas) de las tierras aptas para la agricultura esté destinando a la ganadería, cantidad superior a la de tierras destinadas a la agricultura, que llega a 319 mil hectáreas (STP, 1993). Aún en estas condiciones, sigue siendo uno de los departamentos de mayor volumen de producción agrícola.

De acuerdo con los datos encontrados, de 60 conflictos en Caaguazú, 50 se produjeron en inmuebles de dominio privado, afectando un total aproximado de 216.541 ha. En Misiones, en un 82,86% (8 casos) los conflictos se desarrollaron en propiedades privadas, afectando un total de 46.700 ha. Los sin tierra involucrados en estos conflictos sumaron un total aproximado de 9.149. Establecer la cantidad exacta de campesinos sin tierra en un conflicto no resulta fácil, porque va variando en cada evento y de acuerdo al desarrollo del conflicto. Generalmente en la primera ocupación la cantidad de ocupantes es proporcional a la cantidad de hectáreas del inmueble reclamado, pero posteriormente disminuye en la medida en que los acontecimientos van avanzando, sobre todo cuando la represión o la postura de los propietarios es inflexible. En cambio, cuando la negociación es favorable, se mantiene o aumenta.

De los inmuebles de tipo fiscal

Los casos de tierras fiscales en conflicto y reclamadas por los campesinos no pertenecían a reservas del IBR, sino que fueron excedentes fiscales apropiados indebidamente por particulares. Uno de los casos, en cambio, corresponde a una antigua ocupación de hecho en un inmueble perteneciente al Estado. Los otros se refieren a excedentes encontrados en la propiedad del Coronel Zapattini, 1.000 ha, en la tierra de Sergio Balanzá en el distrito de Cecilio Báez, 337 ha, y en la propiedad de los Buzarquis en Simón Bolívar, 774 ha. Estas parcelas fueron recuperadas mediante la decidida acción de los sin tierra con fuertes medidas de presión. En todos los casos los ocupantes tenían la certeza de la existencia de estos excedentes, pero los dueños se oponían a la realización de la mensura judicial. La presunción de estos excedentes fue confirmada luego con la mencionada acción judicial. Estos hallazgos confirman la hipótesis de que considerables extensiones de tierras fiscales estarían anexadas a las propiedades de particulares, y ésta sería una de las razones de la oposición de los propietarios de grandes extensiones a la realización del catastro rural. En varios otros casos los campesinos presumían la existencia de excedentes fiscales en las propiedades de particulares, pero no podían conseguir la orden para la realización de la mensura judicial por oposición de los propietarios y por la desidia o complicidad del IBR.

Los tres casos de conflictos por estos excedentes fiscales fueron en Caaguazú, y las tierras recuperadas sumaron 2.111 ha, que posteriormente fueron colonizadas a favor de los ocupantes. La colonia de 6.307 ha correspondiente a la antigua ocupación también fue legalizada a favor de los ocupantes. Misiones no registró un solo caso de conflicto en tierras fiscales. Si bien los campesinos presumen la existencia de excedentes fiscales en algunas grandes propiedades, las negociaciones para la realización de la mensura judicial y posterior recuperación de las mismas no pudieron prosperar.

De los inmuebles comunales

Las tierras comunales en conflicto son campos de uso común apropiados indebidamente por particulares. Cabe recordar que los campos comunales son una modalidad de tenencia en el Paraguay que tuvo su origen en la colonia, que consiste en praderas destinadas a apacentar el ganado. Es una reserva para uso exclusivo de los pobladores de una comunidad o colonia, y su objetivo originario era evitar que los animales invadieran las chacras de los productores. Esta modalidad de tenencia fue reconocida y fomentada por los gobiernos de Francia y los López, e incluso por los gobiernos posteriores a la guerra de 1970, por considerarlos de vital importancia para el desarrollo de la pequeña ganadería. Sin embargo, la incorporación de la tierra al mercado inmobiliario, junto con la corrupción y la impunidad en el reparto de tierra, presionaron sobre estos campos comunales, muchos de los cuales pasaron al poder de particulares, militares, caudillos políticos, ganaderos y autoridades locales o regionales. La ocupación, venta y desmembramiento de las tierras comunales afecta sensiblemente a las familias campesinas usuarias de las mismas al impedir un espacio para el sostenimiento de animales como las lecheras, bueyes y caballos, necesarios para el laboreo agrícola y para la alimentación (García, 1994: 5).

El Estatuto Agrario de 1963, en su artículo 62, señala que el IBR “destinará una superficie de campo o monte para uso de la comunidad, si así permite la disponibilidad de tierras y de acuerdo a las características de las mismas”. Esta ley fue reglamentada mediante el decreto N° 1.746 de 1978 con 12 artículos. El art. 4 señala que no podrán ser parcelados ni vendidos a particulares que no fueran la organización integrada por sus beneficiarios, y el art. 6 consigna que serán destinados exclusivamente al pastaje de los animales vacunos y caballar de los vecinos de menores recursos económicos (Estatuto Agrario, 1963: 62 y 63). Esta legislación fue en varios casos letra muerta, razón por la cual numerosos campos comunales pasaron al dominio privado, generalmente de personas vinculadas al aparato estatal y en connivencia con la propia institución que lo creó, el IBR.

Tres casos de conflictos sobre estos campos fueron denunciados en Caaguazú. Militares de alto rango se apropiaron de dos de ellos en el distrito de San José de los Arroyos. Los usuarios de estos campos comunales denunciaron el hecho, que involucró en uno de los casos a un general del Ejército, con mucho poder durante la dictadura en la localidad conocida como San Isidro, y en otro a una empresa ganadera cuyo dueño también era un militar en la compañía Mandiho. En San Isidro no se recuperó nada; al contrario, varios pobladores que usufructuaban estos campos fueron obligados a abandonar la comunidad bajo amenaza de ser detenidos o maltratados. Actualmente este campo de 1.050 ha es un establecimiento ganadero cuyo dueño es un extranjero. De acuerdo a los vecinos, el militar vendió el campo unos meses antes de la caída de Stroessner (informe de un poblador). Del de Mandiho, de un poco más de 500 ha, se pudo recuperar unas 95 ha. En esta comunidad, al igual que en la anterior, tuvo que caer la dictadura para que los pobladores recuperaran en parte la tranquilidad después de varios años de persecución con destrucción de cultivos, corte de alambradas, detenciones, etcétera. Informes de los pobladores del lugar dan cuenta de los numerosos atropellos que sufrieron por parte de estos militares y de la manifiesta complicidad de las autoridades del IBR, quienes no tuvieron la voluntad para hacer frente a estos atropellos a pesar de las numerosas denuncias realizadas por los pobladores. El propio presidente del IBR, Juan Manuel Frutos, manifestaba según los pobladores su impotencia para resolver el problema porque eran militares. El otro caso se produjo en el distrito de Coronel Oviedo, el cual fue recuperado por los usuarios.

En el departamento de Misiones fueron denunciados dos casos, y los usuarios tuvieron el mismo problema: la apropiación o el intento de apropiación por particulares no beneficiarios de estos campos comunales. En el primero, un grupo de 22 campesinos incitados por caudillos políticos del lugar ocuparon parte del terreno comunal de 3.600 ha, usufructuado por alrededor de 500 pobladores, pero fueron desalojados, recuperándose la tranquilidad en la zona. El otro caso fue el alambramiento de un campo por parte de un particular.

En los cinco casos denunciados estaban en juego 4.993 ha de campos, de las cuales 3.641 correspondía a Misiones y 1.352 a Caaguazú. Los usuarios fueron aproximadamente 700 pobladores en ambos departamentos. Esta modalidad de tenencia, que es toda una institución que contribuye y facilita las prácticas de cooperación en las comunidades campesinas, lastimosamente ha desaparecido en los nuevos asentamientos. Este hecho no necesariamente ocurre por una imposición de la institución responsable de la colonización, sino por descuido o

desinterés de las propias organizaciones. Paradójicamente, algunas organizaciones propician en sus discursos la socialización.

En algunos nuevos asentamientos se ha destinado parte de la parcela correspondiente a cada colono para uso comunitario, pero no con el nombre de campos comunales ni regidos por las normas de esta institución, sino por voluntad de los pobladores.

De las tierras indígenas

La ocupación de tierras indígenas por campesinos sin tierra es otro hecho que se viene dando cada vez con mayor frecuencia, debido a que la política agraria que se implementa no resuelve los problemas de tierra ni de campesinos ni de indígenas. Los pueblos indígenas fueron reconocidos por la Constitución Nacional de 1992 en su art. 62 como grupos anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, lo cual les garantiza (art. 63) el derecho a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat, así como a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, y la sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de su convivencia interna. Para ello el Estado debe proveerles de tierras, gratuitamente y en régimen de propiedad comunitaria, que serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles y exentas de tributo (Constitución Nacional, 1992). Se ha aprobado igualmente la Ley 904 del Estatuto del Indígena, que regula todo lo que hace a la vida de los pueblos indígenas.

Este notable avance de la legislación a favor de los pueblos indígenas no tuvo sin embargo su contrapartida en los hechos. Los indígenas siguen avasallados en sus derechos fundamentales, sobre todo en lo que respecta al derecho a la tierra. Muchas etnias no han podido recuperar sus antiguos territorios tradicionales, y cuando los recuperan sufren los embates de los ganaderos, y en los últimos años, de los campesinos sin tierra. En el país existen aproximadamente 100 mil indígenas distribuidos en 17 etnias. Actualmente varias de estas etnias no cuentan con suficiente tierra para desarrollar su tradicional sistema de vida silvícola, dando como consecuencia la migración de cientos de indígenas a las ciudades. Los nativos se convierten en mendigos o en mano de obra barata en las explotaciones agroganaderas en las cuales trabajan en condiciones infrahumanas y de semi esclavitud.

Los tres casos encontrados en el departamento de Caaguazú son conflictos que tuvieron sus inicios en los primeros años de los '90, de los cuales dos seguían sin resolverse a fines del '99, lo que demuestra la poca voluntad política de los sucesivos gobiernos de encontrarles solución. Pasaron cuatro administraciones diferentes por el gobierno sin que ninguna de ellas haya buscado solución a este problema. El caso de mayor impacto en la opinión pública es el de la comunidad indígena denominada Ypau Señorita, en el distrito de Repatriación, cuyo territorio de 1.500 ha fue y sigue ocupado por alrededor de 140 familias de campesinos sin tierra desde 1994. Al inicio ocuparon una franja de la propiedad, pero posteriormente fueron internándose hasta la ocupación total. En el '99 dichas tierras estaban totalmente ocupadas por campesinos. En Misiones no se registraron conflictos con indígenas; si bien fue asiento de las principales reducciones jesuíticas, no se ha establecido en él ninguna comunidad indígena. El Instituto Nacional del Indígena (INDI) es la institución creada por el Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección a los pueblos indígenas. En varias oportunidades esta institución fue denunciada por actos de corrupción, por la venta de las tierras indígenas a particulares, o por sobrefacturación en las compras de tierras para los nativos.

Cuadro 4
Tipo de inmueble por departamento

Tipo de inmueble	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Comunal	3	5,00	2	20,00	5	7,14
Fiscal	4	6,67		0,00	4	5,71
Indígena	3	5,00		0,00	3	4,29
Privado	50	83,33	8	80,00	58	82,86
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Tipo de latifundio

Esta variable incluye las categorías de inmuebles racionalmente explotados e inmuebles improductivos. La ley que regula la racionalidad o no de una explotación es el art. 158 del Estatuto Agrario, que expresa que un inmueble cumple con la función socioeconómica de la explotación racional cuando en él se encuentra asentado un establecimiento que puede ser indistintamente agrícola, ganadero, forestal, industrial o mixto, cuyas mejoras permanentemente representan por lo menos el 50% del valor fiscal de la tierra (Estatuto Agrario, 1963). Por otra parte, la calificación de que un inmueble es inculito ú ocioso está a cargo de una Comisión Técnica Nacional integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, uno del IBR, uno de la Secretaría Técnica de Planificación, un representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y uno de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), gremio de los medianos y grandes productores agropecuarios (Ley 418, 1973). Como puede notarse, esta comisión no incluye a representantes de las organizaciones campesinas gremiales, ni mucho menos a los interesados, los campesinos sin tierra. Es de suponer entonces que en la mayoría de los casos el dictamen de esta comisión favorece a los intereses del propietario, como efectivamente ocurrió en varios de los conflictos analizados en los departamentos estudiados. En la valoración priman la subjetividad y el favoritismo y no necesariamente la función social que debe cumplir toda propiedad.

Tampoco se tiene en cuenta la cantidad de fincas que posee el mismo propietario, sino que se juzga esa finca en particular. Incluso la depredación irracional se equipara con la racionalidad, lo que muestra el desfasaje de la legislación agraria al considerar como improductivos inmuebles cubiertos de bosques nativos. Para el Estatuto Agrario vigente un terreno con bosque sin intervención de la mano del hombre sigue siendo no racionalmente explotado y sujeto a expropiación. Propietarios que saben que sus propiedades serán sometidas al estudio de la comisión las depredan irracionalmente al solo efecto de aparentar la racionalidad de la misma. En Caaguazú, varios casos fueron denunciados. Mientras se gestiona la expropiación o la compra de algún inmueble, el o los propietarios convierten su tierra en “rosado” –término utilizado por los campesinos para designar la parte talada del bosque que será destinada a cultivo–, y en otros casos ralean sus bosques sacando las mejores variedades de árboles sin que les sea aplicada la ley que castiga el delito ecológico. La impunidad y la corrupción son los principales aliados de la masiva deforestación de los bosques en los últimos años. Desde 1989 las organizaciones ambientalistas denuncian la deforestación en un promedio que oscila entre 250 mil y 300 mil hectáreas por año. Se estima que Paraguay cuenta con menos de 2 millones de hectáreas de bosques en la actualidad.

La disparidad de criterios en la definición de estas categorías se ha podido notar en varios casos en el departamento de Caaguazú. Por ejemplo, en las ocupaciones de la Sociedad Luz y Esperanza del distrito J. Eulogio Estigarribia, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de expropiación; sin embargo, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto. Con el caso de Santa Carmen también ocurrió lo mismo: por un lado el informe del IBR era favorable a los propietarios mientras, y por otro la Comisión de Reforma Agraria del Congreso propiciaba la

expropiación. En el espíritu del art. 158 claramente prima el criterio económico. Así lo señala Carlos A. González, especialista en derecho agrario, quien dice que no importa que el inmueble no tenga una sola planta de maíz mientras tenga alambradas, aguadas u otras inversiones que lleguen al 50% de su valor fiscal, que en general es muy bajo: el inmueble ya no es considerado latifundio. Las necesidades sociales de la población no se tienen en cuenta (González, 1986: 4).

Las informaciones obtenidas en los departamentos estudiados dan los siguientes resultados: el 52,86% (37 casos) de los inmuebles en conflicto en el período de estudio fueron considerados improductivos, y en el 45,71% (32 casos) el conflicto se produjo en inmuebles racionalmente explotados. En un caso (1,43%) no se pudo obtener información. Cabe destacar, sin embargo, que la racionalidad o no de la explotación en este caso no se establece sobre la base de un estudio previo realizado, sino que más bien es la percepción que tienen los ocupantes, corroborada por parlamentarios o funcionarios del IBR. Los datos confirman que en una amplia proporción de casos, más de la mitad, la posesión de la tierra es con el mero propósito de especular con ella, porque no cumple con ninguna función socioeconómica, como lo exige la ley. Se demuestra además que los bienes inmobiliarios son una de las formas máspreciadas de ahorro, dada la tendencia a la valorización creciente de los mismos y el bajo costo imponible (Molinas, 2000: 53).

El análisis comparativo demuestra que Caaguazú es el departamento donde aparece la mayor cantidad de inmuebles no explotados racionalmente. El 56,67% de los casos (34) son tierras improductivas, mientras que en un 41,67% son consideradas racionalmente explotadas. En Misiones, en un 70% de los casos, los conflictos se produjeron en parcelas racionalmente explotadas. Como ya fue señalado, en Misiones los conflictos se desarrollaron en establecimientos ganaderos, razón por la cual no cabe la irracionalidad en la explotación. En todo caso cabría hablar de 'parcialmente explotado', debido a la desproporcionalidad entre la cantidad de vacunos por hectáreas.

Cuadro 5
Tipo de latifundio por departamento

Tipo de latifundio	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Explotado racionalmente	25	41,67	7	70,00	32	45,71
Improductivo	34	56,67	3	30,00	37	52,86
s/d	1	1,67		0,00	1	1,43
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Tamaño de los inmuebles

La variable 'tamaño de los inmuebles en conflicto' se ha clasificado en tres categorías: menos de 1.000 ha, entre 1.000 y 5.000 ha y más de 5.000 ha. Los datos dieron el siguiente resultado: en 16 casos (22,86%) fueron ocupadas propiedades menores a 1.000 ha; en 30 casos (42,86%), propiedades de entre 1.000 y 5.000 ha; y en 23 casos (32,86%), propiedades de más de 5.000 ha. En un caso (1,43%) no se obtuvo información.

El rango de los inmuebles de menos de 1.000 ha en conflicto va de 19 a 900 ha. El de 1.000 a 5.000 ha de 1.000 a 4.000, y el de más de 5.000 ha, de 5.000 a 40.000. Si se entiende como latifundios a las propiedades mayores a 10.000 ha en la Región Oriental y a 20.000 ha en la Región Occidental, art. 4 del Estatuto Agrario, los campesinos sin tierra no buscaron conquistar exclusivamente los latifundios, sino todo inmueble improductivo o parcialmente productivo, sin

importar el tamaño. Este hecho se debe a varias razones: una de ellas es la cercanía. Los campesinos buscan obtener tierras en su mismo distrito o en su defecto en el mismo departamento, lo cual les permite seguir manteniendo vínculos con sus parientes cercanos y amigos; en cambio, cuando se los traslada lejos de su lugar de origen, pierden ese vínculo y en su nuevo lugar de residencia deben empezar todo de nuevo. Esta razón es particularmente significativa en el caso de los campesinos de Misiones, quienes rechazaron los intentos del IBR de llevarlos a otros departamentos. La experiencia histórica muestra que los campesinos misioneros migraron hacia el departamento de Itapúa, pero no existen experiencias migratorias hacia otros departamentos como San Pedro, Alto Paraná o Caaguazú, y si las hubo fueron escasas.

El caso de los sin tierra de Simón Bolívar de Caaguazú es significativo. Estos grupos han conseguido la formalización de tres asentamientos en el mismo distrito y continúan luchando por otros más. Otra de las razones por las cuales las ocupaciones en inmuebles de grandes dimensiones han sido escasas obedece a que van quedando pocas propiedades que sobrepasan las 10 mil hectáreas, debido a la subdivisión de las mismas, justamente para evitar ser ocupadas o solicitadas en expropiación. De los 70 casos de conflictos en los dos departamentos, sólo 9 de ellos fueron con inmuebles cuya extensión superaba las 10 mil hectáreas en el momento de iniciarse el pedido de desafectación. Varias de estas grandes propiedades, sin embargo, fueron fraccionadas en 1991, año en que fue realizado el censo agropecuario. De acuerdo a este censo, en los dos departamentos sólo aparecen 11 inmuebles mayores a 10 mil hectáreas, 8 en Misiones y 3 en Caaguazú.

El mayor porcentaje de tierras en conflicto se concentró en la categoría de 1.000 a 5.000 ha. Caaguazú sobresale con 46,67% (28 casos), en tanto que en Misiones los conflictos se desarrollaron mayoritariamente en la categoría de 5 mil hectáreas y más (60%). Por otra parte, es significativa la cantidad de conflictos en fracciones pequeñas, menores a 1.000 ha. Fueron 16 los casos de conflictos en esta categoría, y casi todos en Caaguazú (14 casos), lo cual demuestra que en los departamentos con alta presión demográfica los conflictos por la tierra se irán agudizando y los sin tierra no tendrán en cuenta la extensión de las tierras en el futuro próximo. Si bien existe conciencia en las organizaciones campesinas de no reclamar las fracciones pequeñas, el crecimiento de los sin tierra, sumado a la subdivisión de las propiedades grandes, no dejará otra alternativa que reclamar con mayor frecuencia fracciones pequeñas. En este aspecto un dirigente campesino de Caaguazú sostuvo que la organización a la que él pertenece ha decidido no reclamar propiedades inferiores a las 3 mil hectáreas (Vázquez, 2001).

Una característica que es importante señalar guarda relación con la calidad de las tierras reclamadas. La mayoría de los conflictos y las ocupaciones se han desarrollado en inmuebles que cuentan con bosques. El bosque es para el campesino sinónimo de fertilidad y proveedor de energía. La escasa asistencia técnica y crediticia que recibe de los organismos del Estado le obliga a priorizar este tipo de inmuebles, los cuales no requieren de inversiones extraordinarias para producirlos hasta por lo menos cinco años. Los propietarios generalmente acusan a los campesinos de depredadores y de que tienen interés no por la tierra, sino por la reserva de bosques: "Muchos no tienen vocación agrícola", enfatiza uno de los propietarios de Misiones. En este aspecto es importante destacar que desde 1989 hasta 1999 fueron habilitadas 265 colonias en 1.457.388 ha. Exceptuando las colonias del Chaco, que en conjunto suman 6, con 755.516 ha, y las de Concepción en las ex tierras de la compañía CIPASA, de 224 mil hectáreas que son lotes agroganaderos, las tierras distribuidas en la Región Oriental a los campesinos no llegaron a las 500 mil hectáreas. Sin embargo, la deforestación en promedio en ese período oscilaba entre las 250 mil a 300 mil hectáreas anuales de acuerdo a las denuncias hechas por organizaciones ambientalistas. En este aspecto, claramente los predadores no son los sin tierra sino los dueños de las grandes fracciones de tierra que convirtieron los bosques en praderas para pastoreo de vacunos.

Si se cruza la variable tamaño con resultado (anexo Cuadro 4), se puede notar que la cantidad de casos favorables a los campesinos fue levemente superior en la categoría de 1.000 a 5.000 ha. De los 32 casos, 14 fueron en la de 1.000 a 5.000 ha; 12 en la de 5.000 y más, y sólo 6 en la de menos de 1.000 ha, lo cual demuestra que la desafectación de las propiedades pequeñas tuvo mayores dificultades. Las propiedades grandes, por su parte, tienen el inconveniente de que sus propietarios generalmente forman parte de la élite del poder político o ejercen mucha influencia en dicho ámbito. En un caso en el distrito de San Joaquín en que el

mismo propietario reconoció que su propiedad tenía una extensión superior a las 10 mil hectáreas, no se pudo expropiar ni comprar a pesar de las dos ocupaciones y desalojos violentos de los ocupantes. Había fuertes sospechas de que dicho inmueble le pertenecía en condominio con el ex presidente de la República, General Rodríguez. Este latifundio sigue siendo uno de los más grandes que aún queda en el departamento de Caaguazú. Los campesinos aseguran que tiene más de 100 mil hectáreas, versión desmentida por el dueño. Unas 2 mil hectáreas, sin embargo, fueron colonizadas por equivocación, pero el IBR se las canjeó por otra propiedad en otro distrito. Los datos muestran que los inmuebles pequeños, a pesar de las mayores dificultades, fueron igualmente afectados a la colonización, no por vía de la expropiación sino por la compra directa.

El balance por departamento muestra que entre el tamaño de los inmuebles en conflicto y el resultado no hay una relación directamente proporcional. Las desafectaciones se dieron en una proporción muy similar en las tres categorías estudiadas, con la salvedad de que en las de menos de 1.000 ha la solución favorable a los campesinos fue inferior comparada con las otras dos. De 28 casos en Caaguazú en la categoría de 1.000 a 5.000 ha, 12 fueron favorables a los campesinos y 10 a los propietarios; en la categoría de 5.000 ha y más, de 17 casos, 10 fueron favorables a los campesinos; en tanto que en la de menos de 1.000 ha, de 14 casos, 6 fueron favorables a los campesinos.

En Misiones, de 2 casos en la categoría de 1.000 a 5.000 ha, ambos fueron favorables a los campesinos; de 6 inmuebles encontrados en la categoría de 5.000 y más, sólo 2 fueron favorables a los campesinos; y en la categoría de menos de 1.000 ha, ninguno de los dos casos registrados fueron favorables a los campesinos.

Cuadro 6
Tamaño del inmueble por departamento

Tamaño	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
1.000 a 5.000 ha	28	46,67	2	20,00	30	42,86
Más de 5.000 ha	17	28,33	6	60,00	23	32,86
Menos de 1.000 ha	14	23,33	2	20,00	16	22,86
Sin dato	1	1,67		0,00	1	1,43
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Tipo de ocupación

Las categorías utilizadas para describir esta variable son las de ocupaciones antiguas y recientes. Son antiguas aquellas que se habían producido durante el régimen anterior y que venían arrastrándose hasta llegar a la apertura política de febrero de 1989. Con la apertura, estos viejos conflictos recuperaron su ímpetu con las denuncias y presiones que realizaron los afectados en la búsqueda de una solución definitiva. Las ocupaciones recientes son las que surgieron después de la apertura. Otra categoría incorporada es la de no ocupados: son conflictos en los que los campesinos no llegaron a realizar ocupaciones pero sí presiones y negociaciones. Los conflictos que se venían arrastrando desde la época de la dictadura sumaron un total de 10 (14,29%), todos en el departamento de Caaguazú, en tanto que los recientes son 55 (77,14%), de los cuales 46 fueron en Caaguazú y 9 en Misiones. En 5 casos (7,14%), los sin tierra no llegaron a ocupar el predio reclamado, 4 en Caaguazú y 1 en Misiones. Estos datos muestran las características que asumieron los conflictos por tierras en los departamentos citados.

El hecho de que en Misiones no se haya denunciado ningún conflicto en el período anterior a la apertura habla del impacto que produjo la represión a las Ligas Agrarias en 1976. El fenómeno resaltante que sí se produjo fue la migración de un creciente número de ex-liguistas y sus familias hacia el departamento de Itapúa, hasta el punto de que una de las colonias fundadas lleva por nombre Misiones-i en el distrito de San Pedro del Paraná. En Caaguazú, por su parte, venían arrastrándose varios conflictos, entre los cuales se destaca el de Torín Yguazú, donde aún cuando sus ocupantes contaban con una ley de expropiación a su favor no pudieron consolidar su asentamiento sino tres años después de la apertura política, por la presión de los dueños, con el apoyo de militares, autoridades locales y judiciales. Caaguazú quizás haya sido el departamento de mayores conflictos de tierra durante la dictadura stronista. En 1980, 10 campesinos de la colonia Acaray mí del Alto Paraná que se trasladaban hacia Asunción para reclamar solución a un conflicto de tierras de varios años fueron asesinados, y varios otros heridos y detenidos. Este episodio, conocido como el caso Caaguazú, mostró en su dimensión real la represión durante la dictadura.

El auge de los conflictos se dio entre 1989 y 1997, período durante el cual se produjeron 54 ocupaciones en ambos departamentos, un promedio de 6 ocupaciones por año (anexo Cuadro 5). Durante el primer gobierno de transición (1989 a 1993) se produjeron 28 ocupaciones en ambos departamentos. Este fue el período en el que el presidente de la República –el General Andrés Rodríguez– declaró la guerra a los ocupantes, utilizando las fuerzas armadas en los desalojos, mientras que los propietarios recurrieron a los civiles armados para defender sus propiedades. En Caaguazú se habían producido en este período 24 ocupaciones, y en Misiones 4. Hasta 1997, la tensión en el campo se mantenía, las ocupaciones no disminuían, y durante el período presidencial de Juan Carlos Wasmosy (agosto del '93 a agosto del '98) se registraron 23 ocupaciones, de las cuales 19 fueron en Caaguazú y 4 en Misiones.

En este último departamento las primeras ocupaciones se registraron en 1991. Tres inmuebles fueron ocupados en la misma fecha pero sus ocupantes fueron violentamente desalojados en el mismo día por efectivos militares y policiales. La inmediata reacción de los ganaderos, que en menos de 24 horas consiguieron órdenes de desalojo, y el inmediato cumplimiento de dichas órdenes por las fuerzas armadas y policiales, mostraban el poder de los mismos. Para los sin tierra esta rápida reacción de los ganaderos implicaba que la lucha por la tierra requeriría un gran esfuerzo organizativo y de mística. Tuvieron que pasar dos años para que realizaran otra ocupación.

Cuadro 7
Tipo de ocupación por departamento

Tipo de ocupación	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Antigua	11	18,33		0,00	11	15,71
No ocupado	3	5,00	1	10,00	4	5,71
Reciente	46	76,67	9	90,00	55	78,57
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Duración de los conflictos

Las categorías utilizadas en esta variable son: menos de 1 año, de 1 a 5 años, y más de 5 años. Los datos obtenidos muestran el siguiente comportamiento. Los conflictos que duraron menos de 1 año fueron 17 (24,29%), de los cuales 10 se desarrollaron en Caaguazú y 7 en Misiones; los que duraron entre 1 y 5 años fueron 26 (37,14%), 24 en Caaguazú y 2 en Misiones; y los que duraron más de 5 años fueron 25 casos (35,71%), 24 en Caaguazú y 1 en

Misiones. Se tiene 2 casos sin datos (2,88%), uno en cada departamento. La duración de los conflictos es un indicador importante de varias otras variables, como capacidad de resistencia de los sin tierra, nivel de organización, mística, apoyo externo, etcétera. Si sumamos las categorías de 1 a 5 años y 5 años y más, se observa que un 73% de los casos tuvo una duración bastante prolongada, lo que supone que los sin tierra tuvieron apoyo de otros actores. Las comisiones vecinales no articuladas con otras organizaciones en la mayoría de los casos fracasaron en su intento de apropiarse de la fracción reclamada.

Es importante destacar que el inicio del conflicto no necesariamente coincide con el año de ocupación. Varios se iniciaron después de haberse ocupado los inmuebles. Los tres casos de apropiación indebida de los campos comunales ocurridos en Caaguazú se produjeron varios años después de haber sido habilitados y usufructuados por los pobladores. Las ocupaciones de San Isidro y Mandiño de San José de los Arroyos fueron habilitadas en 1942; sin embargo, fue en 1962 cuando comenzó el alambramiento por parte de dos militares en el primero, y en 1969 en el segundo. En el de Curuñai de Coronel Oviedo, la habilitación del campo comunal fue en 1952 y el conflicto se inició en el '94. Por el contrario, en varios otros casos la ocupación se produjo después de haberse iniciado el conflicto, cuando las negociaciones por la vía legal correspondiente no daban resultado favorable a las comisiones vecinales. Uno de los casos más llamativos es el de Cleto Romero. El conflicto se inició en 1986 con la formación de la comisión vecinal y el pedido de expropiación de una parte del latifundio de 40 mil hectáreas. Las negociaciones legales duraron 5 años sin resultado positivo, lo que llevó a la decisión de ocuparlo. Esta medida de fuerza realizada por los sin tierra aceleró la negociación y el trámite de expropiación. A partir del '89, la diferencia entre año de ocupación e inicio de los conflictos se redujo, y en la mayoría de los casos la ocupación se realizaba paralelamente o un poco después de la tramitación legal.

Como puede verse en el Cuadro 8, la duración de los conflictos fue muy variable. Existen casos en el que el conflicto duró menos de un mes, en algunos casos apenas un día. Es decir, en algunas ocasiones se produce la ocupación de tierra y con un desalojo se finiquita la pugna, pero otros casos llevan un proceso bastante largo para su resolución, así sea favorable o no a los campesinos. En Caaguazú una alta proporción de los conflictos tuvo una duración prolongada, sólo 10 casos fueron resueltos en menos de 1 año, 24 entre 1 a 5 años, y 24 en más de 5 años. En el departamento de Misiones, en cambio, en un 70% (7 casos) los conflictos fueron resueltos en menos de 1 año. Las tres primeras ocupaciones de 1991 apenas duraron un día. Para la tarde los efectivos policiales y militares ya procedían al desalojo. En casi todos los casos la intervención del gremio de los ganaderos fue rápida y efectiva, sobre todo cuando se trató de ocupaciones llevadas a cabo en los establecimientos ganaderos más modernizados. Sólo en un caso el conflicto se prolongó por más de 5 años, en la estancia Don Emilio de Marcelo Sisul, no por la inacción del propietario, ni del Poder Judicial y de la Fuerza de Tarea Conjunta, sino por la resistencia que mostraron los ocupantes, quienes sufrieron desalojos en dos ocasiones, pero en el tercer intento las fuerzas de intervención no pudieron cumplir con la orden judicial de desalojo para evitar males mayores. Este conflicto continúa sin resolverse.

Cuadro 8
Duración de los conflictos por departamento

Duración	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
1 a 5 años	24	40,00	2	20,00	26	37,14
5 años y más	24	40,00	1	10,00	25	35,71
Menos de 1 año	10	16,67	7	70,00	17	24,29
Sin dato	2	3,33		0,00	2	2,86
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Resultado de las ocupaciones

Las categorías utilizadas para analizar esta variable fueron a favor de los ocupantes, a favor de los propietarios, y no resueltos. El resultado fue el siguiente: a favor de los ocupantes, 32 casos (45,71%); a favor de los propietarios, 21 casos (30%); y no resueltos, 14 casos (20%). El conflicto continuaba a fines de 1999. Sin datos, 3 casos (4,29%). En Caaguazú, de los 60 casos, 28 (46,67%) fueron favorables a los campesinos; 17 (28,33%) a los propietarios; 13 (21,67%) no resueltos; y 2 (3,33%) sin datos. En Misiones, 4 casos fueron favorables a los campesinos; 4 favorables a los propietarios; 1 no resuelto; y 1 sin datos.

Estos datos confirman que en todos estos años hubo una fuerte confrontación entre los campesinos y los propietarios, los primeros por conquistar las tierras reclamadas y los segundos por defender sus propiedades. Confirma también otro dato: que la obtención de la tierra propia continúa siendo esquiva para una alta proporción de los sin tierra en estos departamentos. En 1989, el censo realizado por el Ministerio del Interior consignaba en los dos departamentos un total de 23.289 campesinos sin tierra, de los cuales menos de la mitad – 11.230 aproximadamente– se involucraron en los conflictos. De este total, a su vez, los que consiguieron asentarse en alguna de las colonias habilitadas y regularizadas por el Estado fueron 6.629, un poco más de la mitad. En síntesis, del total de sin tierra censados por el gobierno en 1989 en los dos departamentos, menos de la mitad se organizaron para reclamar la adjudicación de tierra, y de los organizados un poco más de la mitad pudo conseguir su objetivo. Por departamento esto significa que de 18.971 sin tierra en Caaguazú, 11.230 se organizaron para intervenir en los conflictos, y de éstos, 6.267 consiguieron asentarse (33,03%); en tanto que en Misiones, de 4.318 sin tierra censados, 1.024 estuvieron involucrados en los conflictos, y sólo 362 consiguieron adjudicarse una parcela (8,38%), una proporción ínfima con respecto al total de sin tierra censados.

Con respecto a la cantidad de hectáreas afectadas en los conflictos, se registró un total de 290.415, de las cuales se consiguió comprar, recuperar o expropiar 74.400 ha, 25,62%, favoreciendo a 6.629 campesinos. La compra en todos los casos estuvo a cargo del IBR. Del total de hectáreas conquistadas, 58.239 estaban en Caaguazú, en las que se asentaron 6.267 sin tierra, con un promedio de 9,29 ha por lote, y 16.161 ha en Misiones, para 362 sin tierra, con 51,90 ha por lote. Este promedio en Misiones fue porque uno de los asentamientos de 8 mil hectáreas pudo albergar a sólo 120 familias por la poca aptitud de la tierra para la producción agrícola, aunque sí era apta para la producción de la pequeña ganadería. En todos los otros asentamientos el promedio de lote por familia o por sin tierra es de 10 ha o menos.

Dentro de la variable analizada aparece un dato interesante: del total de conflictos, menos de la mitad (45,71%) fueron favorables a los sin tierra, en tanto que en cantidad de adjudicados la proporción fue superior a la mitad, con el 59,03%. Esto confirma la existencia de una alta movilidad al interior de las comisiones vecinales; cuando una comisión se desintegra por efecto del desalojo, sus integrantes se van uniendo a otras. En términos cuantitativos, el total de sin

tierra que llegó a intervenir en algún conflicto podría ser inferior de lo que resulta de la simple sumatoria por casos. Por ejemplo, la comisión vecinal Santa Carmen se desintegró; sin embargo, sus miembros se unieron a otras comisiones que reclamaban otras parcelas. De ello se desprende la dificultad de precisar el número de sin tierra. Son varios los casos en que un mismo grupo de sin tierra va pasando de una comisión vecinal a otra, lo que indica que participaron en más de una ocupación para finalmente asentarse en alguna colonia. Pero también son numerosos los casos en que con un desalojo violento los ocupantes se dispersan y no vuelven a articularse en otra comisión, ni tampoco se fusionan con otras ya existentes.

Cuadro 9
Resultado de los conflictos por departamento

Resultado	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
A favor de los ocupantes	28	46,67	4	40,00	32	45,71
A favor de los propietarios	19	31,67	4	40,00	23	32,86
No resueltos	12	20,00	1	10,00	13	18,57
Sin dato	1	1,67	1	10,00	2	2,86
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Tipo de desalojo

Los desalojos asumen diversas características dependiendo del tipo de inmueble ocupado, del poder económico y político del propietario, y de la capacidad de resistencia de los ocupantes. El desalojo de por sí es violento; aún cuando en algunos casos la retirada de los ocupantes se produce por cuenta propia, implica siempre la presencia de una orden judicial de desalojo y/o de efectivos policiales y militares con amenazas de recurrir al uso de la fuerza si las circunstancias así lo requieren. La orden de desalojo emanada de un juzgado en todos los casos les garantiza esa prerrogativa a las autoridades legales, con la salvedad de “si fuere necesaria”, pero dada la poca profesionalidad de los efectivos policiales y militares, acostumbrados a usar la fuerza sin razón alguna, la aplicación en la generalidad de los casos termina siendo violenta.

Las prerrogativas de orden internacional también establecen una serie de recomendaciones respecto al uso de la fuerza. Los acuerdos firmados por los estados en el marco de los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención de delitos y tratamientos de los delincuentes establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben utilizar en lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. La utilización de la fuerza y las armas sólo será necesaria cuando los otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del objetivo deseado (Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, 1990). Si estas son las recomendaciones para casos que están dentro de los delitos de acción penal pública, con mucha más razón los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberían tener en cuenta dichas recomendaciones para los casos derivados de problemas sociales. En el caso paraguayo, en varios de los conflictos de tierra los encargados de hacer cumplir la ley proceden en sentido contrario. De los 60 asesinatos de dirigentes campesinos y sin tierra durante el período de estudio, por lo menos en 6 casos los policías fueron los responsables de estas muertes, directa o indirectamente (anexo Cuadro 6). En Caaguazú, de los 6 reportados como asesinados, 4 murieron en emboscadas preparadas por civiles armados, uno fue muerto en la plaza de Asunción durante el marzo paraguayo, y la

última fue una madre que perdió a su bebé de 8 meses por las torturas recibidas por parte de la policía en uno de los desalojos ocurridos en Ypekua de Repatriación. El asentamiento posteriormente legalizado lleva el nombre de Juliana Fleitas, la niña muerta a raíz de los golpes recibidos por la madre.

La práctica de la violencia en las ocupaciones, de acuerdo al abogado agrarista Digno Brítez, emana de las mismas órdenes judiciales de desalojo, que autorizan el empleo de la violencia en caso de necesidad, dejando abierta la posibilidad a la arbitrariedad. El uso de la fuerza bruta, sigue diciendo el autor, no constituye en derecho el uso de la fuerza pública, pero el alcance de la ley confunde no sólo a las fuerzas del orden sino a los mismos jueces del fuero criminal (Brítez, 1996: 21). La violencia en los desalojos tampoco tiene una connotación uniforme para los ocupantes. No es igual el desalojo en una ocupación de un año y más, que un desalojo producido al día siguiente de la ocupación. En la generalidad de los casos una ocupación a partir de los 6 meses ya es una colonia de hecho, en la cual las viviendas ya no son ranchos y los cultivos ya producen la primera cosecha. En estos casos el perjuicio ocasionado a los ocupantes es inmenso. En Zapattini Kue III, de Caaguazú, numerosos niños perdieron el año escolar porque el desalojo definitivo se produjo después de tres años, cuando la ocupación ya era una colonia de hecho con una importante infraestructura. Dados estos procedimientos surge la necesidad de la creación del Fuero Agrario, con el cual se puede evitar el innecesario uso de la violencia a consecuencia de los problemas sociales que se generan por la falta de acceso a la tierra.

Para el análisis de esta variable fueron seleccionadas categorías que van desde los desalojos pacíficos hasta los desalojos con detenciones masivas de los ocupantes, con destrucción de cultivos y de sus ranchos. De los 70 casos analizados en los dos departamentos, en 40 de ellos hubo desalojo; de los cuales en 17 ocasiones se produjeron detenciones; 11 casos fueron sin detenciones; en 6 casos, a las detenciones se le sumaron destrucción y quema de ranchos; en 5 casos hubo desalojo con quema de ranchos; y en un caso destrucción de viviendas y cultivos. Sólo en 2 de estos sucesos se logró una retirada pacífica: los ocupantes abandonaron por su propia cuenta el inmueble ocupado (Cuadro 10). Como ya fue señalado, los años de mayor conflictividad comprenden el período de 1989 a 1997. En estos años las cárceles no daban abasto por la cantidad de detenidos a raíz de los problemas de tierra. De los aproximadamente 4.871 campesinos/as detenidos/as desde 1989 a 1999 en todo el país, 586 eran de Caaguazú y 276 de Misiones. No en todos los desalojos hubo detenciones de los ocupantes. En Caaguazú, de un total de 60 conflictos, sólo en 19 se produjo apresamiento de ocupantes, y en Misiones, en 3 conflictos. Las órdenes de desalojo habitualmente van acompañadas de órdenes de detención de los ocupantes, si no de la totalidad por lo menos de los dirigentes. Sin embargo, no en todos los casos los ocupantes adultos se dejan atrapar, y en algunos casos los que enfrentan a las fuerzas del orden son las mujeres y los niños. Esta acción forma parte de la estrategia utilizada por los ocupantes para evitar la detención de sus dirigentes o los jefes de familias, lo cual facilita la rearticulación de los ocupantes. Cuando se descabeza una comisión vecinal, el reagrupamiento se vuelve más lento y difícil.

Un cambio importante que se ha operado en el proceder de las autoridades judiciales y policiales y que vale la pena marcar es el cumplimiento de las disposiciones legales. Casi la totalidad de las intervenciones del estamento policial y militar en los conflictos fue viabilizada a través de la justicia. Del total de conflictos registrados en ambos departamentos, en 43 de ellos hubo intervención judicial, en 23 casos los contendientes no llegaron a la instancia judicial, y en 3 casos no se tuvo datos. De los 43 casos en que hubo intervención judicial, en 40 de ellos la policía procedió al desalojo. Este avance en el respeto a la institucionalidad, a las normas legales vigentes, no quiere decir que todo se haya desarrollado conforme a lo que establecen dichas normas. Una cosa es la intervención del juez o los fiscales en un conflicto, y otra totalmente distinta es cómo se procede en la ejecución de la ley. En todos los casos de desalojos los ocupantes denunciaron arbitrariedades por parte de los efectivos policiales y militares. Varias fueron las denuncias de torturas, de robo de implementos agrícolas, de enseres domésticos, de destrucción de cultivos, de quema de ranchos, etcétera. La persecución del “delito de ocupación” en la mayoría de los casos ha producido otros delitos más graves, como las torturas, heridas de bala, incluso asesinatos de ocupantes: en el departamento de San Pedro, tres ocupantes fueron asesinados por policías en un procedimiento de desalojo. Lo grave es que la intervención de la justicia se reduce sólo a atacar la ilegalidad de la ocupación, pero los delitos conexos cometidos tras esa intervención ya no son tenidos en cuenta. Incluso los asesinatos quedaron impunes.

Cuadro 10
Tipo de desalojo por departamento

Tipo de desalojo	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
No hubo desalojo	25	41,67	2	20,00	27	38,57
Pacífico	2	3,33		0,00	2	2,86
s/d	1	1,67		0,00	1	1,43
Violento con destrucción de viviendas y cultivos	1	1,67		0,00	1	1,43
Violento con detenciones	14	23,33	3	30,00	17	24,29
Violento con detenciones y quema de rancho	6	10,00		0,00	6	8,57
Violento con quema de ranchos	5	8,33		0,00	5	7,14
Violento sin detenciones	6	10,00	5	50,00	11	15,71
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Eventos

Los eventos se definen por la cantidad de veces que un mismo inmueble ha sido ocupado. Para analizar dicha variable se tuvo en cuenta tres categorías: los inmuebles que fueron objeto de una ocupación; de dos a tres ocupaciones; y más de tres ocupaciones. Los datos arrojaron los siguientes resultados: 37 casos para la primera (51,43%); 17 (24,28%) para la segunda; 11 para la tercera (15,71%); 4 inmuebles no fueron objeto de ocupación (7,14%); sin datos un caso (1,43%).

En Caaguazú, en el 55% (33) de los casos se produjo una sola ocupación, mientras que en Misiones se dio en el 40% (4). Los que tuvieron de dos a tres eventos fueron 14 en Caaguazú y 3 en Misiones. Los que tuvieron más de 3 eventos fueron 9 en Caaguazú y 1 en Misiones. No sufrieron ninguna ocupación 3 inmuebles en Caaguazú y 1 en Misiones.

Los casos más conflictivos fueron aquellos inmuebles en los cuales se produjeron más de tres eventos. Sobresalieron en Caaguazú los de Santa Carmen, del distrito de J. Augusto Estigarribia, donde dos ocupantes, Arsenio Vázquez y Mariano Díaz, fueron asesinados por civiles armados que protegían la propiedad perteneciente al General (SR) Roberto Knopfelmacher. Pese a todo lo ocurrido, las autoridades no favorecieron a los ocupantes y estos tuvieron que abandonar la propiedad, que según los campesinos era malhabida. Esta denuncia de tierra malhabida no fue investigada por ninguna autoridad judicial ni parlamentaria, así como tampoco fueron detenidos los autores morales y materiales del asesinato de estos dos ocupantes. El caso quedó en la nada. Otro de los conflictos que tuvo una repercusión importante en la opinión pública fue el de Ypekua, del distrito de Repatriación, donde los ocupantes resistieron desalojos, torturas, y acusaciones de todo tipo, hasta de que eran

guerrilleros. Finalmente, después de cinco años consiguieron que el IBR les comprara dicho inmueble, sobre el cual también pesaba la acusación de ser tierras malhabidas, teniendo en cuenta que el dueño era un ex-funcionario del IBR. Otros casos en los cuales los ocupantes sufrieron todo tipo de atropellos fueron los de Zapattini Kue III. En esta ocupación hubo cuatro desalojos con quema de ranchos, destrucción de cultivos y detenciones masivas. El otro es el de un inmueble perteneciente a la comunidad menonita llamada Luz y Esperanza, en la que los ocupantes también sufrieron todo tipo de atropellos. Los campesinos permanecieron varias semanas frente al Parlamento para presionar por la aprobación de la ley de expropiación, que finalmente fue rechazada por los parlamentarios. Sin embargo, el IBR logró que los ocupantes fueran trasladados al departamento de Alto Paraná, donde finalmente se asentaron.

En Misiones los casos más conflictivos fueron los de Ganadera Soley, ocupada en cuatro ocasiones, y el de la Rural Ganadera (estancia Don Emilio) en la localidad de Ibáñez Rojas, distrito de San Juan Bautista, ocupada en tres ocasiones, pero que a fines del '99 seguía sin resolución. Aproximadamente 60 ocupantes permanecían en el lugar con la incertidumbre de no saber si habría desalojo o el caso sería resuelto favorablemente. Se trata de un establecimiento ganadero que según el propietario está racionalmente explotado. Sin embargo, los ocupantes expresaron que sólo unas cuantas cabezas de ganado apacentan en la estancia de más de 7 mil hectáreas.

La variable 'eventos' es otro indicador de la multiplicidad de características que puede asumir un conflicto y las diferentes estrategias a las cuales recurren los sin tierra para enfrentar la situación. Se puede suponer que a mayor número de eventos correspondería mayor cantidad de resultados favorables a los ocupantes. Sin embargo, cuando se cruza esta variable con resultados (anexo Cuadro 7) se puede apreciar que no existe una relación directamente proporcional entre ambas. La cantidad de eventos no garantiza necesariamente la solución a favor de los ocupantes. En efecto, de los 17 casos que tuvieron entre dos a tres eventos, siete fueron a favor de los ocupantes, siete a favor de los propietarios, y tres seguían sin ser resueltos. En los casos con más de tres eventos existe una leve diferencia a favor de los ocupantes, ya que de 11 casos, cinco fueron a favor de los ocupantes, cuatro a favor de los propietarios, y dos no fueron resueltos. En cambio, para los conflictos de un solo evento, de los 35 casos, 20 fueron a favor de los ocupantes (57,14%); ocho a favor de los propietarios, y 7 no resueltos. Paradójicamente, los conflictos que tuvieron un solo evento fueron los que lograron mayor éxito, por cuanto que consiguieron una resolución favorable. Este hecho puede obedecer a dos motivos, por un lado, los ocupantes se enfrentan a un propietario poderoso que con una acción de desalojo logra que los campesinos abandonen la intención de volver al predio o, por el contrario, el propietario no tiene los recursos económicos ni el poder político necesario para afrontar los gastos del desalojo y entonces negocia rápidamente. Varios propietarios negociaron directamente su propiedad con los ocupantes intermediados por el IBR.

A pesar de esta constatación, es importante destacar que la persistencia y la capacidad de resistencia de los ocupantes son factores que a la larga conducen a la victoria. Los casos de propietarios de inmuebles que logran tres y más juicios de desalojo y la ejecución efectiva de estos juicios por las fuerzas públicas, inducen a pensar que no se trata de cualquier propietario, sino que ocupan un lugar importante en la esfera económica o política. Y viceversa en los casos de, los ocupantes que pudieron resistir más de tres desalojos, con todas las consecuencias que ello implica, se podría decir igualmente que no estamos hablando de cualquier ocupante, sino que tuvieron una preparación previa importante en todos los aspectos, políticos e ideológicos, y el apoyo de actores externos importantes.

Cuadro 11
Evento por departamento

Eventos	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Una ocupación	33	55,00	4	40,00	37	52,86
Dos a tres ocupaciones	14	23,33	3	30,00	17	24,29
Más de tres ocupaciones	9	15,00	2	20,00	11	15,71
No ocupado	3	5,00	1	10,00	4	5,71
Sin dato	1	1,67		0,00	1	1,43
Total general	60	100,00%	10	100,00%	70	100,00



Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Destino de los ocupantes

El objetivo de esta variable es conocer con mayor detalle cuál fue el destino final de los ocupantes. Las categorías inicialmente previstas fueron: asentados, desarticulados, y los que se funden con otras comisiones vecinales de sin tierra. En el momento de la codificación de la información fueron apareciendo otros destinos que no cabían dentro de las categorías inicialmente previstas. De esta manera fueron incorporadas otras, como asentados ilegalmente, relocalizados, y 'continúa', lo cual significa que el conflicto no ha llegado a su término.

Las informaciones recogidas permiten apreciar que en 32 casos (46,70%), los ocupantes fueron legalmente asentados en los inmuebles ocupados. Hubo cuatro casos de relocalización por el IBR, es decir que el propietario no perdió su inmueble pero los ocupantes fueron relocalizados por el IBR en otro, y en un caso el propio dueño canjeó las tierras ocupadas por otra. De los 13 casos no resueltos en ambos departamentos, en cuatro de ellos los ocupantes permanecían en el lugar pero ilegalmente, a la espera de alguna resolución, y en nueve casos no estaban ocupando el inmueble que reclaman, pero seguían a la espera de una resolución y a la expectativa como para volver a ocupar si la solución no fuera la esperada por ellos, o de lo contrario buscar otro destino.

Las comisiones vecinales desarticuladas totalmente fueron ocho, de las cuales siete fueron de Caaguazú y una de Misiones. Las comisiones que no se desarticularon pero que se fundieron con otras fueron 11, siete en Caaguazú y cuatro de Misiones. Comparando la cantidad de conflictos y la cantidad de comisiones vecinales desarticuladas encontramos que son el 11,43%, lo que da la pauta de que en casi el 90% las comisiones vecinales creadas para reclamar una parcela de tierra se mantuvieron en su propósito, algunas con éxito y otras no, pero continuando con su lucha.

Aquí es importante destacar que la gran mayoría de las comisiones vecinales que se mantuvieron o que se habían fusionado con otras estaban articuladas con las organizaciones nacionales, como la FNC, la ONAC, el MCP o la OCM. Por el contrario, las comisiones que no tuvieron articulación alguna con otras organizaciones, regionales o nacionales, no pudieron persistir en su propósito, y mucho menos cuando las tierras ocupadas pertenecían a empresas vinculadas a países como Alemania, Japón, Inglaterra, etcétera. En estos casos, la actuación de los poderes públicos es inmediata. Las ocupaciones realizadas en las tierras de los menonitas, tales como Luz y Esperanza, Cooperativa Sommerfelt Ltda., Hildebrand y otras empresas, no tuvieron éxito porque son comunidades y/o sociedades integradas por colonos extranjeros que llegaron al país en el marco de un convenio de inmigración que les permite vivir dentro de un sistema tipo enclave con escaso nivel de relacionamiento con la comunidad

nacional. Estos colonos, nucleados en grandes cooperativas, han expandido enormemente su territorio, mucho más de lo que inicialmente se les había entregado, dado su gran poder económico. Algunas comisiones vecinales de sin tierra llegaron a ocupar predios pertenecientes a estas comunidades sin éxito. En un solo caso el Estado expropió 700 ha pertenecientes a la Cooperativa Sommerfelt porque formaban parte del hábitat tradicional de una parcialidad indígena en el distrito de José Domingo Ocampo.

Los ocupantes de tierras pertenecientes a militares, como el caso de Santa Carmen, del General (SR) Roberto Nopfelmacher, y los campos comunales de San Isidro y Mandiño de San José de los Arroyos, de los cuales se apoderaron los generales Johansen y Clebsch, y Campos, respectivamente, son otros ejemplos de cómo ciertos personajes no sujetos de la reforma agraria se apropiaron de inmuebles simplemente validos de su prepotencia y de la posición que ocupaban en la escala de poder, sin que las autoridades responsables interviniesen.

En resumen, los ocupantes en un 60% aproximadamente (6.629 de 11.230) tuvieron como destino final los asentamientos. De los 11.230 sin tierra involucrados en los conflictos en ambos departamentos, 6.629 consiguieron su objetivo de asentarse sobre una parcela que, una vez cancelado su costo, formará parte de sus respectivos patrimonios. De los 4.201 sin tierra restantes que no pudieron asentarse en colonia alguna, una gran mayoría siguió luchando por su tierra propia y otros han abandonado la lucha. Se puede concluir que el éxito logrado fue importante, al conseguir que un 60% lograra el objetivo, pero esta cantidad, comparada con la totalidad de los sin tierra en ambos departamentos, que son más de 23 mil según el censo realizado en el '89, indica que la lucha por la tierra es un capítulo que aún tiene un largo camino que recorrer. De acuerdo a estimaciones hechas por los dirigentes campesinos, en Caaguazú habría más de 50 mil sin tierra y en Misiones más de 6 mil.

Cuadro 12
Destino de los ocupantes

Destino	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Asentados irregularmente	3	5,0	1	10,0	4	5,7
Asentados legalmente	28	46,7	4	40,0	32	45,7
Continúa	9	15,0		0,0	9	12,9
Desarticulados	8	13,3		0,0	8	11,4
Relocalizados	4	6,7		0,0	4	5,7
Se funden con otras comisiones	7	11,7	4	40,0	11	15,7
Sin dato	1	1,7	1	10,0	2	2,9
Total general	60	100,0	10	100,0	70	100,0

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Resolución de los conflictos

La pregunta que interesa develar con esta variable es cuáles fueron los principales mecanismos utilizados para la resolución de los conflictos. Para ello se ha recurrido a categorías como expropiación, canje, compra, rechazo etcétera. Con el avance de la investigación empírica fueron surgiendo otras categorías, como la de colonización directa y la

de recuperación. Los datos que resultaron del análisis de los conflictos muestran claramente que el mecanismo más efectivo para destrabar los conflictos fue la compra. Esta modalidad de resolución fue asumida en todos los casos por el IBR, y en ningún caso por los ocupantes o las comisiones vecinales. En toda negociación intervino el IBR, es decir que es el Estado el que se compromete a adquirir las tierras para su posterior colonización. Las colonizaciones privadas dejaron de existir en 1989, por lo menos en estos dos departamentos. De los 32 casos favorables a los ocupantes en los dos departamentos, en 17 se recurrió a la compra.

El otro mecanismo al cual han apelado los ocupantes es la expropiación. Esta modalidad de resolución, como puede verse, no fue tan efectiva, ya que sólo siete casos fueron resueltos por esta vía. En la mayoría de los conflictos la primera solicitud de los sin tierra es la expropiación; cuando comienzan a percibirse dificultades para la presentación del proyecto de ley, se presiona por el otro mecanismo, que es la compra. Desde la promulgación de la Constitución Nacional, en la cual el art. 109 establece como uno de los requisitos para la expropiación el previo pago, esta figura jurídica ha sido poco utilizada por los ocupantes. En Misiones, de los 10 conflictos sólo en uno se ha conseguido destrabar el conflicto a través de esta modalidad, en tanto que en Caaguazú, entre los 60 casos, sólo seis proyectos de expropiación fueron promulgados por el Poder Ejecutivo. En algunos casos el Parlamento sancionó favorablemente el proyecto de ley, pero el Poder Ejecutivo se opuso a la promulgación, como sucedió en Santa Carmen, del distrito J. E. Estigarribia, cuya expropiación fue sancionada a favor de los ocupantes en ambas cámaras del Congreso, pero el Ejecutivo se negó a promulgar la ley. Lo mismo ocurrió con la ocupación de la propiedad de la Rural Ganadera en Misiones, de Marcelo Sisul. Las dos cámaras del Congreso aprobaron el proyecto de ley de expropiación, pero éste fue vetado por el Ejecutivo.

La otra categoría incorporada para el análisis de esta variable es la recuperación, que alude a los inmuebles fiscales que han sido anexados a propiedades de dominio privado y a los campos comunales. La inclusión de esta categoría es importante por cuanto muestra en primer lugar la existencia de excedentes fiscales apropiados indebidamente por particulares y, en segundo lugar, la posibilidad de recuperación por iniciativa y por presión de los campesinos, a veces a pesar de las propias autoridades gubernamentales.

El canje es una modalidad que prácticamente ha desaparecido como mecanismo de resolución de los conflictos de tierra. Desde que se acabaron las tierras fiscales, el Estado ha perdido toda posibilidad de recurrir a esta vía para resolver los conflictos. El único dato que aparece en el cuadro fue en compensación a un error en la mensura de las tierras de la Siderúrgica Paraguaya (SIDEPAR), que por imprecisión en la delimitación del predio mensuraron una propiedad privada, la cual fue canjeada por otra.

Colonización directa es cuando la ocupación o el conflicto se produce en tierras del Estado. En este caso, el Estado a través del IBR se encarga de la colonización. La intervención de otros actores prácticamente es inexistente en estos casos, exceptuando a las organizaciones campesinas nacionales que acompañan la negociación de sus miembros. Los dos casos registrados fueron en Caaguazú, en tierras de Siderúrgica Paraguaya (SIDEPAR), y en un terreno perteneciente al Ministerio de Defensa.

Por último está la categoría de rechazo. En ésta se incluyen todos aquellos conflictos que no tuvieron un final favorable a los sin tierra pero sí a los propietarios. Fueron 23 los casos registrados en esta categoría, lo que confirma la fuerte confrontación entre los sin tierra y los propietarios.

Cuadro 13
Resolución de los conflictos por departamento

Resolución	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Canje	1	1,7		0,0	1	1,4
Colonización directa	2	3,3		0,0	2	2,9
Compra	16	26,7	1	10,0	17	24,3
Expropiación	6	10,0	1	10,0	7	10,0
Recuperación	4	6,7	1	10,0	5	7,1
Rechazo	18	30,0	5	50,0	23	32,9
Sin dato	1	1,7	1	10,0	2	2,9
Sin resolución	12	20,0	1	10,0	13	18,6
Total general	60	100,0	10	100,0	70	100,0

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Estrategias

En la generalidad de los casos una ocupación de tierra lleva un largo proceso de preparación. No se trata de una acción que responde a un mero espíritu aventurero, sino de una acción donde el dirigente o el grupo de líderes debe concentrar toda su capacidad y su habilidad para manejar un grupo numeroso de personas para enfrentar con éxito la presión que ejercen los propietarios, las organizaciones de propietarios, los jueces y sobre todo las fuerzas policiales y últimamente los grupos de civiles armados, o paramilitares. Si no cumplen este proceso mínimo, las ocupaciones están destinadas al fracaso.

El trabajo se inicia normalmente con el censo de los sin tierra y la posterior selección para formar parte de la comisión vecinal. Una vez concluida esta primera etapa, el grupo nombrado para encabezar dicha comisión inicia las gestiones ante el IBR para su reconocimiento, y paralelamente realiza la denuncia sobre la tierra a ser solicitada en compra o expropiación. El IBR asume mayor interés cuando la comisión vecinal ya tiene identificado el inmueble a ser solicitado (Martínez, 2001). Esta primera tarea puede llevar mucho tiempo si la comisión no ejerce otro tipo de presiones aparte de las meramente administrativas. Se dan casos en que durante este proceso de reconocimiento las comisiones vecinales comienzan a sufrir las primeras fisuras por la imposibilidad económica de afrontar los trámites burocráticos y por la desidia de los funcionarios del IBR, que traban la agilización de los trámites. La abogada Elba Recalde había denunciado en 1992 el archivamiento de 122 solicitudes de reconocimiento de las comisiones vecinales.

Para analizar las estrategias utilizadas por los sin tierra se ha seleccionado cinco categorías: investigación previa del inmueble a ser ocupado o solicitado; negociación legal antes de la decisión de ocupar; alianza con otras organizaciones; las tomas de las tierras; y las movilizaciones, tales como cierre de rutas, campamento frente al inmueble o frente al Parlamento, ocupación de la oficina del IBR, etcétera. La utilización de las diferentes estrategias está en directa relación con la resistencia que ofrecen los adversarios, que en muchos casos no son sólo los propietarios sino también las propias instituciones del Estado, como el IBR, el Parlamento o el Poder Judicial, y con la capacidad de resistencia de las comisiones vecinales.

Investigación previa

Esta estrategia es una condición necesaria para el inicio de los trabajos posteriores. La ocupación o la tramitación legal se inician una vez que los sin tierra han realizado una serie de investigaciones previas sobre el tipo de inmueble; la extensión que tiene, si está documentado o tiene excedentes fiscales, las condiciones agrológicas, etcétera. Incluso se analiza si es un latifundio de utilidad o no, en el sentido de si el dueño es sensible a ciertos problemas sociales o no: “Algunos hacen algunas cositas, por lo menos escuchamos que le curan a criaturas, otros que ni siquiera un genio es capaz de proveer ni aunque se le pida socorro” (Ramírez, 2001). Pero lo fundamental es si se trata de una tierra que reúne las condiciones agrológicas para la actividad agrícola. Esto es particularmente importante para el departamento de Misiones, debido a que algunas tierras no reúnen la aptitud necesaria para la agricultura. Para el presidente de la Organización Campesina de Misiones (OCM), éste es uno de los aspectos de mayor cuidado para evitar caer en la trampa de los ofertantes de tierra que en algunos casos buscan negociar tierras no aptas para la actividad agrícola.

Dentro de esta estrategia (Cuadro 14), del total de casos en un 82,86% (58 casos) fueron realizadas investigaciones previas antes de iniciar otros trámites. En Caaguazú, de 60 casos, en 49 los sin tierra recurrieron a ella, y en Misiones, de los 10 casos en 9 fueron realizadas. Esta estrategia es resultado de las experiencias positivas y negativas a partir de las cuales las organizaciones van perfeccionando su estrategia. La investigación previa requiere esfuerzos y recursos de los cuales carecen algunas comisiones vecinales, sobre todo aquellas no articuladas con otras organizaciones, y sus acciones terminan en fracasos por haber pasado por alto esta estrategia.

¿En qué medida la investigación previa favorece un resultado a favor de los sin tierra? A juzgar por los datos que muestra el Cuadro 14, esta categoría es menos relevante de lo que se esperaba de ella. Si bien una amplia mayoría de los conflictos favorables a los campesinos (28 de 32) recurrieron a ella, de igual manera, casi la totalidad de los que no les fueron favorables (20 de 23) también la utilizaron.

Cuadro 14
Investigación previa

Estrategia	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Investigación previa	49	81,67	9	90,00	58	82,86
Sin investigación	11	18,33	1	10,00	12	17,14
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Negociación legal

Otra de las estrategias utilizadas por los sin tierra es la negociación legal. Consiste en movilizar los recursos jurídicos institucionales del Estado en busca de obtener por esa vía el acceso a la expropiación o a la compra de los inmuebles reclamados. Su importancia es innegable, ya que de un total de 70 conflictos en ambos departamentos (Cuadro 15), en un 82,86% (58 casos) los campesinos recurrieron a esta vía y sólo nueve no la utilizaron, quizás por falta de recursos, de apoyo o por desconocimiento. Hubo tres casos en que la negociación se realizó directamente entre la comisión vecinal y el propietario de las tierras, y la intervención del IBR fue posterior. Estos datos revelan que la lucha por la tierra en muy pocos casos se da fuera del marco legal-institucional; por el contrario, en la mayoría de ellos la primera acción

pública a la que recurren las organizaciones campesinas y las comisiones vecinales de sin tierra es a esta estrategia, para posteriormente iniciar otras medidas de presión. También hubo casos en que la primera acción es la ocupación, para luego dar inicio a los trámites legales.

En Caaguazú, de los 60 casos registrados, en 49 los sin tierra recurrieron a esta estrategia, en tanto que en Misiones, de los 10 casos, nueve utilizaron este mecanismo. Del cruzamiento de esta estrategia con la variable 'resultado' se puede observar que, de los 58 casos, 28 fueron favorables a los sin tierra, 19 a los propietarios, 10 no resueltos, y uno sin datos (anexo Cuadro 8). La proporción a favor de los ocupantes y a favor de los propietarios es similar, ya que de los 32 casos favorables a los campesinos en 28 se utilizó esta estrategia, y en los casos favorables a los propietarios, de 23 conflictos, se recurrió a la misma en 19. En este aspecto, se puede afirmar que la negociación legal por sí sola tampoco tiene el peso suficiente para balancear el resultado a favor de los sin tierra.

Cuadro 15
Negociación

Negociación	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Negociación con el dueño	3	5,00		0,00	3	4,29
Negociación legal	49	81,67	9	90,00	58	82,86
Sin negociación	8	13,33	1	10,00	9	12,86
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Alianzas

Las alianzas con otros actores es otro de los soportes importantes en la lucha por la tierra. En los inicios de la transición a la democracia, numerosas ocupaciones eran realizadas por grupos sin ninguna vinculación con organizaciones regionales y nacionales ni apoyo de otros actores externos. Estas ocupaciones no tuvieron resultados favorables a los sin tierra porque los grupos carecían del apoyo logístico para afrontar las dificultades derivadas de la ocupación. El éxito de un conflicto de tierra o de una toma de tierras depende en gran medida de una buena organización interna, lo cual permite mantener la disciplina y controlar las acciones de los miembros integrantes de la comisión vecinal. En segundo lugar, dicha comisión debe contar con el apoyo de grupos externos encargados de impulsar las negociaciones con las autoridades correspondientes y de planear las acciones a ser realizadas. Esta tarea habitualmente está a cargo de los dirigentes de las organizaciones regionales o nacionales, con las cuales está articulada la comisión vecinal. Es importante destacar que en los casos en los que aparecen como aliadas las organizaciones campesinas, si bien las acciones represivas son más violentas porque hay mayor resistencia, los ocupantes cuentan con mayores recursos y posibilidades de desarrollar estrategias múltiples de defensa. No se resiste sólo en las ocupaciones o en las carpas, sino en todos los espacios públicos, como el Parlamento, el IBR, el Poder Judicial, y sobre todo se hace un seguimiento en la prensa.

Del total de casos registrados en ambos departamentos (Cuadro 16), 47 establecieron alianzas con otros actores y 23 no recurrieron a esta estrategia. En Caaguazú, de los 60 casos, 41 contaban con apoyo, en tanto que en Misiones de los 10 casos, seis contaban con apoyo. Estos datos indican que un alto porcentaje de las comisiones vecinales (32,86%) actuó por impulso propio sin establecer alianzas con otros actores externos. De los 32 casos a favor de los ocupantes, en 21 de ellos (65,62%), los ocupantes habían establecido alianzas con otros actores. El hecho de establecer alianzas tampoco garantiza una solución favorable. Los datos

así lo demuestran (anexo Cuadro 9). De los 23 casos a favor de los propietarios, en 15 de ellos (65,22%) los ocupantes contaban con el apoyo de actores externos; sin embargo, el conflicto no les fue favorable. Si bien la probabilidad de éxito o fracaso proporcionalmente es igual, la utilización de esta estrategia permite que la acción no se abandone con el primer evento, sino que en la mayoría de los casos, cuando la comisión vecinal cuenta con apoyo externo, todos los medios se agotan antes de abandonar la lucha. Con relación a esta estrategia, los dirigentes campesinos entrevistados expresaron la importancia de que una comisión vecinal reciba el apoyo de actores externos para enfrentar con mayores posibilidades de éxito la consecución del objetivo.

Cuadro 16
Alianzas

Alianzas	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Con alianzas	41	68,33	6	60,00	47	67,14
Sin alianzas	19	31,67	4	40,00	23	32,86
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

La toma de tierras

La toma de tierras fue la estrategia más utilizada por los sin tierra para conseguir sus objetivos. De los 70 conflictos en ambos departamentos, en 61 se produjo ocupación. Esto confirma lo señalado por los dirigentes de las organizaciones campesinas y la percepción que tiene la mayoría de la población de este problema: que la ocupación es la estrategia que produce mayor impacto tanto en las autoridades como en la opinión pública. Mediante ella el conflicto se hace público y se desnuda la inequidad y la gran asimetría en la distribución de la tierra, obligando a las autoridades a buscar solución y a los otros actores sociales, como la Iglesia, los ganaderos, los políticos, etc., a pronunciarse sobre el tema. El Cuadro 17 muestra que en Caaguazú, de los 60 casos, en 52 hubo ocupación, y en Misiones, en nueve de los 10 casos. Si analizamos en qué medida la puesta en práctica de esta estrategia favoreció los intereses de los campesinos, se puede notar que, de los 32 casos ganados por los ocupantes, en 30 se hizo ocupación. En Caaguazú, de los 28 casos que fueron a favor de los ocupantes, en 26 se hizo ocupación, en tanto que en Misiones, de los 4 casos, en todos hubo ocupación (anexo Cuadro 10). Se demuestra igualmente que la ocupación por sí sola tampoco garantiza la solución a favor de los ocupantes. En el cuadro citado se puede observar que de los 23 casos que fueron favorables a los propietarios, en 20 hubo ocupación. La ocupación debe ser acompañada con otras estrategias para intentar obtener éxito.

Cuadro 17
Toma de tierra

Toma de tierra	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Con toma de tierra	52	86,67	9	90,00	61	87,14
Sin toma de tierra	8	13,33	1	10,00	9	12,86
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Las movilizaciones

Finalmente, otra estrategia utilizada por los sin tierra es la movilización, aunque en menor medida que las anteriormente citadas. Por movilización se entiende protestas públicas realizadas por los sin tierra en el marco del conflicto por la parcela reclamada. Si bien el hecho de realizar una ocupación implica movilización, para los fines de este trabajo la movilización se define como protesta pública. De los 70 casos, sólo en 24 los campesinos habían recurrido a esta medida. La misma fue utilizada generalmente cuando ya las otras se habían agotado y para ejercer mayor presión, para agilizar los trámites burocráticos en las instituciones públicas, para sensibilizar a la opinión pública o para presionar a los propietarios, parlamentarios o jueces a tomar una decisión favorable a los ocupantes. Estas medidas consisten habitualmente en levantar una carpa en los linderos de los inmuebles ocupados o en ocupar campamentos frente al Parlamento, al Poder Judicial, las oficinas del IBR, y eventualmente cierres de ruta en los accesos más importantes del país.

En Caaguazú, de los 60 casos, sólo en 19 se recurrió a esta estrategia (Cuadro 18), en tanto que en Misiones, en cinco de los 10 conflictos. ¿En qué medida esta estrategia favorece un resultado positivo a los sin tierra? El cuadro que cruza esta estrategia con la variable resultado indica que de los casos favorables sólo en 12 los sin tierra han recurrido a la movilización de protesta. En los casos favorables a los propietarios, los sin tierra han utilizado dicha estrategia en ocho casos de los 23 que fueron favorables a los propietarios. De los 13 casos no resueltos a fines de 1999, sólo en cuatro de los conflictos los campesinos recurrieron a la estrategia de movilización (anexo Cuadro 11).

Cuadro 18
Movilizaciones

Movilizaciones	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Sin dato	1	1,67		0,00	1	1,43
Con movilización	19	31,67	5	50,00	24	34,29
Sin movilización	40	66,67	5	50,00	45	64,29
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Estrategias juntas

El resultado global muestra que en más del 90% de los conflictos los campesinos sin tierra utilizaron más de una estrategia. Sólo en dos casos recurrieron directamente a la toma de tierra, y en cuatro casos se limitaron a la negociación legal. En todos los demás recurrieron a más de una. En 16 casos utilizaron todas las estrategias, es decir, realizaron la investigación previa del terreno, iniciaron la negociación legal, que implica la gestión para el reconocimiento de la comisión vecinal y el pedido formal de desafectación del inmueble objeto de solicitud, establecieron alianzas con otras organizaciones campesinas o instituciones privadas, realizaron la ocupación y también las movilizaciones. En 21 casos recurrieron a cuatro estrategias, en cinco casos a tres estrategias, y en otros cinco casos a dos estrategias. Si juntamos los casos en los que fueron utilizadas cuatro y cinco estrategias, encontramos que en más del 50% (37 casos) los campesinos sin tierra tuvieron que recurrir a dichas estrategias para hacer efectivo su reclamo por la parcela de tierra.

Otro aspecto importante que destacar con respecto a la variable 'estrategia' es que se ha podido comprobar que ninguna de las estrategias, separadamente, garantiza una solución favorable a los sin tierra. La utilización de múltiples estrategias es la que ofrece mayor probabilidad de éxito, y esto es posible gracias a una buena organización interna que, junto con la alianza, quizás sea lo más importante para enfrentar el desafío que implica una ocupación o la lucha por la tierra. Si las comisiones vecinales no cuentan con una buena base organizativa y carecen del apoyo de otras organizaciones, la probabilidad de éxito disminuye enormemente.

Cuadro 19
Estrategias

Estrategias	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Toma de tierra	2	3,33		0,00	2	2,86
Negociación legal	3	5,00	1	10,00	4	5,71
Negociación legal/ Toma de tierra	2	3,33		0,00	2	2,86
Negociación legal/Alianza	1	1,67		0,00	1	1,43
Negociación legal/ Alianza/Movilizaciones	1	1,67		0,00	1	1,43
Investigación/Toma de tierra	4	6,67	1	10,00	5	7,14
Investigación/ Alianza/Campamento	1	1,67		0,00	1	1,43
Investigación/ Negociación con el dueño/Toma de tierra	1	1,67		0,00	1	1,43
Investigación/ Negociación con el dueño/Alianza/ Toma de tierra	2	3,34		0,00	2	2,86
Investigación/ Negociación legal	1	1,67		0,00	1	1,43
Investigación/ Negociación legal/ Toma de tierra	4	6,67	1	10,00	5	7,14
Investigación/ Negociación legal/ Toma de tierra/ Movilizaciones	2	3,33	2	20,00	4	5,71
Investigación/ Negociación legal/Alianza	1	1,67		0,00	1	1,43
Investigación/ Negociación legal/Alianza/ Toma de tierra	19	31,67	2	20,00	21	30,00
Negociación legal/ Alianza/Toma de tierra/movilizaciones	2	3,33		0,00	2	2,86
Investigación/ Negociación legal/ Alianza/Toma de tierra/movilizaciones	13	21,67	3	30,00	16	22,86
Investigación/Alianza/ Toma de tierra	1	1,67		0,00	1	1,43
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Los actores sociales intervinientes

En todos los conflictos de tierra los tres actores más importantes son los campesinos sin tierra, los propietarios, y el Estado, a través del IBR, el Poder Judicial, el Instituto Nacional del Indígena (INDI) y el Parlamento. Los otros actores que aparecen en el escenario de los conflictos son las comisiones vecinales, las organizaciones campesinas vinculadas a los sin tierra, las ONGs con su asesoramiento jurídico a los ocupantes, la Iglesia en su calidad de mediadora, las autoridades locales y regionales, los partidos políticos como mediadores o instigadores, la organización de los propietarios, los civiles armados vinculados a los propietarios, las empresas y las cooperativas.

Dentro de este espectro de actores vinculados a los conflictos de tierra, los campesinos obviamente aparecen en el 100% de los casos. Aquí es importante acotar que no en todos los casos se puede hablar de sin tierra. Algunos conflictos se desarrollaron en antiguas ocupaciones y lo que se busca es la legalización de la ocupación. Uno de esos casos es el ocurrido en el distrito de Caaguazú en una ocupación que data de 1982. Es una fracción perteneciente a instituciones del Estado y sus ocupantes solicitaron su legalización ante frecuentes amenazas de desalojo por parte de militares. La misma fue legalizada por el IBR en 1994. El otro caso es el del distrito de Mcal. López, en el cual el dueño de origen griego Eutimio Ioannidis, quien había colonizado sus tierras en los años '60, trataba de despojar a los ocupantes paraguayos promoviendo juicios de desalojo con el aparente propósito de negociar las tierras con colonos brasileños.

El Estado es el segundo actor en importancia, y aparece en el 98,60% de los conflictos (69 casos). La intervención del Estado es fundamental para el campesino en los conflictos de tierra; sin él, es poco lo que los sin tierra pueden pretender. Si bien el esfuerzo que realiza es insuficiente para resolver en su conjunto los problemas generados a partir de los conflictos de tierra, el Estado sigue siendo el principal receptor de los reclamos, aunque dando soluciones de tipo parches. Hasta el presente ningún gobierno posdictadura ha desarrollado una estrategia global que permita trabajar soluciones globales al problema de la tierra y al desarrollo rural. A raíz de esta falta, numerosos asentamientos habilitados no han podido consolidarse por carecer de un apoyo sostenible, lo que va generando un círculo vicioso cada vez más difícil de resolver, y da argumentos a los terratenientes para oponerse a la redistribución de la tierra en el país.

El tercer actor en importancia lo constituyen los propietarios como contendientes directos de los campesinos sin tierra. De los 70 casos, en 56 aparecen los propietarios individuales, en 9 casos empresas, y en 5 casos indígenas. De los propietarios individuales, 46 corresponden a Caaguazú y 10 a Misiones. Los conflictos con las empresas y con los indígenas fueron todos en Caaguazú. En Misiones, si bien algunos establecimientos ganaderos son manejados empresarialmente, la mayoría siguen siendo estancias tradicionales pertenecientes a una persona o a un clan familiar.

Las comisiones vecinales aparecen en 68 de los 70 casos registrados, lo que representa el 97,14%. Este elevado porcentaje demuestra que la conformación de las mismas es un requisito ineludible para dar comienzo a la gestión por la tierra. El IBR no inicia ninguna gestión formal si no existe dicha comisión. Su conformación, sin embargo, no resulta fácil. Tiene un largo proceso. Los/as miembros deben estar debidamente identificados/as para su reconocimiento por el IBR o por las autoridades municipales. La norma que las regula se presta a manipulaciones, porque exige la participación del agente regional de la institución en la conformación de la misma y a veces los miembros electos no resultan de una participación democrática sino que son digitados por estos agentes. Establece también que el acta del acto asambleario debe estar firmada por el juez del lugar y por el jefe de policía local –art. 13 del Reglamento y funciones de las comisiones vecinales– (IC N° 86, 1995: 72). Varios casos de denuncias de irregularidades en la misma conformación se han denunciado, y ocurren generalmente con aquellos grupos no vinculados a otras organizaciones.

Otro de los actores que aparece en el escenario de los conflictos es el de los civiles armados o grupos paramilitares. Se trata en la generalidad de los casos de empleados de los establecimientos a quienes los propietarios les han dado la misión de custodiar la propiedad con todos los medios a su alcance. Esta modalidad de defensa comenzó a aparecer en los años de mayor auge de las ocupaciones y cuando la policía institucionalmente tenía vedado actuar arbitrariamente como lo hacía durante la dictadura sin mediar orden judicial o sin estar

acompañada de un agente fiscal. Para cubrir este “déficit”, los propietarios generaron sus propios mecanismos de defensa, creando sus propios guardias, los civiles armados o grupos paramilitares. En el departamento de Caaguazú fueron protagonistas en siete conflictos, matando a dos campesinos en la ocupación de las tierras de Knopfelmacher en el distrito de J. E. Estigarribia e hiriendo a un ocupante en la ocupación de 3 de Mayo del distrito de R. I. 3 Corrales. La impunidad con que actúan estos grupos ha generado reacciones diversas tanto en el sector de los sin tierra como en otros sectores de la sociedad civil. Los sin tierra, como consecuencia de la aparición de los civiles armados, también han creado en algunos lugares sus grupos de autodefensa para salvaguardar la integridad física de sus asociados. La mayoría de los asesinatos de campesinos han sido perpetrados por estos grupos en emboscadas, hecho que los vuelve más peligrosos aún, pues actúan amparados en la oscuridad y con total impunidad. La justicia no ha hecho nada para erradicar esta práctica, que ya ha causado varias muertes, 60 en total desde el '89 al '99. En Misiones no ha habido información sobre esta práctica (anexo Cuadro 6).

Otro de los actores sociales importantes en los conflictos de tierra es la Asociación Rural del Paraguay (ARP), gremio de los ganaderos. Si bien es una asociación no muy homogénea, se trata de uno de los grupos más poderosos, y el de mayor peso político frente a la estructura del Estado. Sus asociados se caracterizan por defender la propiedad privada a ultranza y sistemáticamente acusan a los campesinos y a los sectores que los apoyan de propiciar la desobediencia a la ley, aquella que defiende la propiedad privada sin importar la legitimidad de origen (por ejemplo, las tierras malhabidas).

En la categoría de otros se ha incorporado una variedad de actores tales como ONGs, Iglesia, partidos políticos, etcétera. En 36 casos los sin tierra han recibido algún apoyo de los actores nombrados, 32 en Caaguazú y cuatro en Misiones. La ONG que tradicionalmente ha apoyado a los sin tierra desde los primeros años de la década del '80 es el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE). Ha intervenido en varios de los conflictos ocurridos en Caaguazú y lo sigue haciendo hasta el presente. Otra ONG que ha dado su apoyo a los sin tierra y a los sin techo fue la Misión de Amistad, una ONG de la Iglesia Discípulos de Cristo. Posteriormente ha sumado su apoyo a esta causa el Servicio Integral Jurídico y Agrario (SEIJA). La Iglesia Católica, a través de sus obispos, también ha intervenido en varios casos intermediando por una solución pacífica y razonable. Los partidos políticos y los políticos en general han tenido una actuación no muy coherente, en algunos casos apoyando e incluso instigando la ocupación, y en otros denunciándola. Con respecto a la intervención de los políticos en los conflictos, los dirigentes campesinos han señalado que sólo aparecen en épocas de campaña proselitista, y una vez terminadas las mismas desaparecen del escenario.

Varias otras formas de intervención y de actores provenientes de ámbitos diversos se han manifestado con relación a los conflictos, y más aún en aquellos casos en que las consecuencias generadas producen impactos que rebasan el ámbito local o regional. Los actores que en algunas ocasiones han intervenido con comunicados u otro tipo de apoyo son los centros de estudiantes, los grupos religiosos/as, los intelectuales. Otro actor importante ha sido la prensa, que además de informar sobre los acontecimientos referidos a los conflictos ha tenido un rol de amortiguador de la violencia en los procedimientos policiales y militares. Un desalojo con presencia de los medios de prensa no es lo mismo que un desalojo sin ellos. Si bien en algunos casos la intervención de la prensa ha pretendido generar un efecto contrario en la opinión pública, acusando a los campesinos de invasores de propiedades privadas, el hecho de ventilar un problema de tierra y la problemática de la tierra en general en un país en el que la inequidad en la distribución de la tierra es la principal causante de la pobreza, es importante.

En el Cuadro 13 se puede observar que los actores que en mayor número han intervenido en los conflictos son los sin tierra, el Estado, los propietarios, las comisiones vecinales y otros. Estos actores han estado juntos en 30 casos de conflictos, 24 en Caaguazú y seis en Misiones, lo cual indica que en una proporción importante (42,86%) los sin tierra no han tenido que lidiar solos con los propietarios y con el Estado, sino que lo han hecho con el apoyo de otros actores.

Cuadro 20

Actores sociales

Actores	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Sin tierra/Estado/ Com. vecinales	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/ Estado/Empresa/ Com. vecinales	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/ Estado/Empresa/ Com. vecinales/Otros	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/Estado/ Com. vecinales	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/Estado Com. vecinales/Otros	2	3,33		0,00	2	2,86
Sin tierra/Estado Com. vecinales/ Indígenas	2	3,33		0,00	2	2,86
Sin tierra/Estado Com. vecinales/ Indígenas/Otros	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/ Estado/Empresa/ Com. vecinales	3	5,00		0,00	3	4,29
Sin tierra/ Estado/Empresa/ Com. vecinales/Otros	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/ Estado/Empresa/ Com. vecinales/ Indígenas/Otros	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/Propietario/ Com. vecinales/Otros	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/ Propietario/Estado		0,00	1	10,00	1	1,43
Sin tierra/Propietario/ Estado/Com. vecinales	2	3,33		0,00	2	2,86
Sin tierra/Propietario/ Estado/Com. vecinales	7	11,67	2	20,00	9	12,86
Sin tierra/Propietario/ Estado/Com. vecinales	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/Propietario/ Estado/Com. vecinales/ Otros	24	40,00	6	60,00	30	42,86
Sin tierra/Propietario/ Estado/Cooperativas/ Com. vecinales	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/Propietario/ Estado/Cooperativas/ Com. vecinales/ Indígenas/Otros	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/Propietario/ Estado/Civiles armados/Otros	1	1,67		0,00	1	1,43
Sin tierra/Propietario/ Estado/Civiles armados Com. vecinales/Otros	6	10,00		0,00	6	8,57
Sin tierra/Propietario/ Estado/Particulares/ Com. vecinales		0,00	1	10,00	1	1,43
Sin tierra/Propietario/ Estado/Empresa/ Com. vecinales/Otros	2	3,33		0,00	2	2,86
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Rol de los actores

En esta sección se analizan los roles que cumplen los principales actores sociales colectivos en los conflictos de tierra. El hecho de priorizar a estos actores no significa desconocer la importancia del papel que cumplen los actores individuales en un conflicto de tierra. La intervención del dirigente puede ser crucial en determinados momentos; también la de las mujeres y los niños, quienes en algunas circunstancias difíciles cumplen roles significativos, colocándose en primera fila ante un inminente desalojo o desarrollando actividades de soporte a la ocupación. Son lagunas que quedan y que deben ser llenadas de manera tal de no dejar escapar el protagonismo de los/as campesinos/as en su conjunto. Lo visible, en cambio, son las acciones de los actores colectivos que aparecen en la prensa, están en las negociaciones, etc., pero en los hechos concretos en que se deben tomar decisiones rápidas, la intervención del o de la dirigente o de cualquiera de los protagonistas directos es significativa y definitoria. En este trabajo analizaremos el rol de los principales actores sociales colectivos.

El Estado

La intervención del Estado en los conflictos de tierra se da fundamentalmente a través de una serie de instituciones. El Instituto de Bienestar Rural (IBR); el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la fuerza pública, constituida por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; y el Instituto Nacional del Indígena (INDI) para los casos que afectan a las parcialidades indígenas.

EI IBR

De todas las instituciones nombradas, la que tuvo una presencia relevante en los conflictos de tierra fue el IBR, ya sea para buscar una solución favorable a los ocupantes o para persuadirlos a que abandonen el inmueble ocupado. Fue creado por Ley N° 852 del año 1963 con el objeto de incorporar a la población campesina al desarrollo económico y social, eliminar progresivamente el latifundio y el minifundio, y establecer un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra. Entre sus atribuciones también está la de asegurar la estabilidad de las familias asentadas mediante una adecuada organización del crédito, la producción y la comercialización (Estatuto Agrario, 1963, art. 2). Todas estas funciones que le fueron atribuidas las cumplió sólo parcialmente, razón por la cual a cuatro décadas de su creación la concentración de la tierra se ha acentuado, la inmensa mayoría de las colonias sufre profundos deterioros socioeconómicos, y los conflictos agrarios se multiplicaron.

De los 70 casos estudiados en ambos departamentos, el IBR intervino en 67, siendo su intervención favorable a los ocupantes en 45 casos, propiciando la expropiación o la compra directa, aunque no en todos los casos pudo lograr su objetivo. Salió en contra de los ocupantes en 22 casos y no intervino en 2 conflictos. En Caaguazú intervino en 58 conflictos saliendo a favor de los sin tierra en 40 de ellos y en contra en 18. En Misiones, en los 9 conflictos en los que tuvo intervención, en 5 salió a favor y en 4 en contra. La intervención del IBR en todos los casos fue a posteriori, en el sentido de que fueron los campesinos sin tierra con su acción quienes movilizaron a la institución y no lo contrario. En este aspecto, el rol del IBR desde el agotamiento de las tierras fiscales hacia fines de los años '70 consistió básicamente en mediar en los conflictos entre campesinos y propietarios, y en la práctica dejó de lado su misión de promotor y ejecutor de la reforma agraria.

Cuadro 21
Instituto de Bienestar Rural (IBR)

IBR	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
A favor	40	66,67	5	50,00	45	64,29
En contra	18	30,00	4	40,00	22	31,43
No intervino	1	1,67	1	10,00	2	2,86
Sin datos	1	1,67		0,00	1	1,43
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

En general, el rol del IBR en los conflictos es cuestionado tanto por los propietarios como por los campesinos. Los propietarios lo acusan de tener una actitud prebendarista y populista al asignar tierras a campesinos sin ninguna planificación, lo que condujo a la rápida pérdida de la parcela asignada: "Históricamente ha tenido una mala actuación, porque como la mayoría de las instituciones, ha estado politizada, ha tenido una actuación prebendaria, ha tenido mala administración, pero por otro lado también tuvo gente con voluntad que quería hacer bien las cosas" (Trappani, 2001). Para otros propietarios, el hecho de que hayan disminuido las ocupaciones de tierra en los últimos años muestra el mejoramiento de la institución. Por su parte, los campesinos lo acusan por haber despilfarrado las tierras fiscales del país entregándolas a los no sujetos de la reforma agraria; por no haber propiciado ni desarrollado una política agraria que erradique el latifundio y el minifundio, para lo cual fue creado; y porque tampoco mostró interés después de la apertura política por la recuperación de las tierras malhabidas.

De acuerdo al que fuera gerente de tierra de la institución por varios años en las décadas del '70 y '80 y posteriormente presidente de la institución de 1994 a 1999, el IBR cumplió a medias su rol por defectos de la legislación y también por problemas de gestión. Por defectos de la legislación porque fue una ley orientada a la transformación agraria, a la incorporación de la sociedad campesina –dividida y excluida– a la sociedad nacional. Toda esta tarea se volcó sobre la Ley 852 y el problema es que no es tarea de una ley, sino que debiera haber habido un programa de gobierno que involucrara tanto a la clase política como a la sociedad civil consciente del problema. Otras dificultades que tuvo y sigue teniendo son su débil inserción en la estructura global del gobierno –su interlocución, fuerza normativa y coordinación y articulación con otras instituciones de desarrollo rural–, lo cual le restó capacidad política, además de los exiguos recursos que le destina el Estado para su gestión (Halley Merlo, 2001). Por otra parte, su actual presidente entiende que la reforma agraria debe ser encarada dentro del contexto del desarrollo rural y éste a su vez dentro del desarrollo nacional, lo cual implica que su tarea debe ir más allá de la mera intervención en los conflictos, como lo fue en los últimos años (Ibáñez, 2001).

Como puede apreciarse, la historia del IBR está jalonada por el entrecruzamiento de un doble discurso. Por un lado, las autoridades nacionales, así como los responsables de la institución, en todos los tiempos y en todas las épocas manifestaron que la Reforma Agraria no consiste en la cuadriculación del país, que no basta con entregar las tierras a los campesinos y abandonarlos a su suerte. Sin embargo, en los hechos concretos fue lo que hicieron siempre. La promocionada reforma agraria no fue más que la repartija de tierra y el posterior abandono a su suerte de los beneficiarios.

Poder Legislativo

El Poder Legislativo no tuvo una participación destacada en los conflictos desarrollados en ambos departamentos. Intervino en sólo 21 casos, de los cuales 13 fueron a favor de los ocupantes y ocho en contra. De los 13 casos en que tuvo una intervención favorable a los ocupantes, sólo siete inmuebles fueron expropiados: seis en Caaguazú y uno en Misiones. En los demás tuvo una postura favorable a la expropiación, pero ésta no llegó a concretarse. No intervino en 48 casos, 41 en Caaguazú y siete en Misiones.

Cuadro 22
Poder Legislativo

P. Legislativo	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
A favor	11	18,33	2	20,00	13	18,57
En contra	7	11,67	1	10,00	8	11,43
No intervino	41	68,33	7	70,00	48	68,57
Sin datos	1	1,67		0,00	1	1,43
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

La intervención del Poder Legislativo en los conflictos de tierra se inicia generalmente con la presentación por parte del IBR de un pedido de expropiación a solicitud de una comisión vecinal de sin tierra. El poder legislativo también puede actuar de oficio, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, Basilio Nikiphoroff. Este proceso se inicia en el IBR. Si el Consejo de esta institución aprueba la solicitud, el expediente es remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde otro equipo técnico lo somete a consideración. Si el MAG ratifica el pedido lo envía de vuelta al IBR, y éste al Congreso. La cámara que recibe el pedido puede ser la de Senadores o Diputados: si bien la ley establece que la cámara original es la de Senadores, esto en la práctica no se cumple. La Cámara que recibe el pedido inicia el tratamiento a través de la Comisión de Reforma Agraria en el Senado o de Bienestar Rural en Diputados. Aquí se convierte en proyecto de ley. Si una de las cámaras se pronuncia favorablemente, el caso con media sanción pasa a la otra, donde se procede al mismo tratamiento. Si ambas cámaras ratifican el pedido entonces el Congreso sanciona el proyecto con fuerza de ley, que luego pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación definitiva.

Este proceso puede durar varios años para llegar a su punto final. Su culminación exitosa en las dos cámaras de ninguna manera garantiza que el caso sea favorable a los sin tierra. El Poder Ejecutivo es otra de las barreras que se debe sortear. Varios proyectos de expropiación aprobados por el Parlamento fueron vetados por el Ejecutivo. En Caaguazú están los casos de Santa Carmen y Toledo. En ambos conflictos el Congreso declaró de interés social dichos inmuebles, expropiando a favor de los ocupantes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó ambas leyes, que ya no pudieron ser ratificadas por la Cámara de Senadores, la cual necesita de dos tercios de votos para sancionarla de nuevo. El de Santa Carmen duró un poco más de un año: en julio del '94 se produjo la primera ocupación y la presentación del pedido de expropiación, que fue aprobada por el Congreso en septiembre del '95. Los ocupantes renunciaron a seguir reclamando estas tierras. En Toledo, distrito de Yhú, en cambio, la ocupación y el pedido de expropiación se habían iniciado en junio del '94 y el Congreso aprobó la expropiación en el '98. En este caso, los sin tierra siguen ocupando el inmueble, pero pendientes de una orden de desalojo. En Misiones ocurrió lo mismo con la Estancia Olinda de la Rural Ganadera de César Zotti. El Congreso expropió una parte del establecimiento ganadero, pero el Poder Ejecutivo

vetó dicha ley, quedando sin efecto el proyecto de expropiación. En este caso, el IBR llegó a un acuerdo con el dueño para la compra de la parte solicitada.

La intervención del Poder Legislativo en los conflictos de tierra estuvo fuertemente marcada por criterios político partidarios o de defensa de intereses corporativos de grupos de poder político y económico antes que por una política o estrategia que asegure el bienestar de la población y específicamente del sector de los sin tierra para atenuar la injusta distribución de tierra. En algunas de sus decisiones prima el excesivo celo legal, en otras el supuesto temor a la huida de inversores extranjeros o la no radicación de capitales nacionales y extranjeros. Con estos argumentos desbarataban los intentos de los campesinos sin tierra de conseguir la expropiación para los fines de la colonización. Otro de los argumentos es la falta de un estudio acabado sobre el inmueble, si está racionalmente explotado, si es el inmueble solicitado, etcétera. En vista de que el Congreso carece de los mecanismos para asegurar la legitimidad del pedido optan por rechazar el proyecto, de acuerdo al presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado.

El Poder Legislativo es el ámbito en el cual están representados los intereses de las diversas fracciones de la clase dominante, y si bien algunos legisladores buscan representar los intereses de las clases subalternas, son un grupo minoritario que a la hora de las decisiones importantes no tiene el peso para destrabar ninguna decisión desfavorable a este sector. Algunos legisladores pregonan desde 1989 la recuperación de las tierras malhabidas para destinarlas a la reforma agraria; otros hablan de la necesidad de reformar las leyes vigentes de manera de hacer más viable dicha reforma (IC Nº 9, 1989: 27). Sin embargo, estas declaraciones jamás se convirtieron en propuestas concretas ni de quienes las planteaban ni de otros legisladores. Un hecho que llama la atención es la falta de interés de los parlamentarios para investigar las tierras malhabidas. Todos denuncian, todos hablan del despilfarro de las tierras públicas, incluso algunos responsables o que tuvieron algún involucramiento en el hecho fungen de parlamentarios y asesores del parlamento; sin embargo, no se ha hecho nada para aclarar dichas denuncias.

El Poder Legislativo ha sido desde la apertura política la caja de resonancia de las inquietudes ciudadanas. La plaza que bordea la sede del Congreso se ha convertido desde el '89 hasta el presente en el sitio de convergencia de las protestas de todos los sectores ciudadanos. Para los sin tierra ha sido el lugar desde donde presionaban por la aprobación de sus pedidos de expropiación, y para otros sectores campesinos se relacionaba con la aprobación de presupuestos justos para la asistencia técnica y crediticia. Sin embargo, en la mayoría de los casos el rol que cumplió y sigue cumpliendo no ha estado a la altura de los acontecimientos sociales del país. La población en general lo cataloga como un lugar en el cual las decisiones son resultado de componendas políticas y de transas al mejor postor y no un poder desde donde se busca la solución a los problemas nacionales. Esto le ha llevado a la pérdida gradual de credibilidad, y actualmente es uno de los poderes que ha sufrido el mayor deterioro de su imagen pública.

Poder Judicial

El Poder Judicial es otro de los poderes del Estado que tuvo activa participación en los conflictos de tierra. En los casos estudiados en los dos departamentos intervino en 40 conflictos, y en un solo caso la Corte Suprema de Justicia rechazó un juicio de inconstitucionalidad planteado por el propietario: el conflicto que mantuvieron los sin tierra de Cleto Romero contra la empresa Unión Paraguaya SA. En los restantes 39 casos los jueces emitieron órdenes de desalojo contra los ocupantes, acompañados de órdenes de detención contra dirigentes o contra personas innominadas. No intervino en 29 casos debido a la no judicialización de los conflictos, y no se tuvo datos de 2 conflictos.

Cuadro 23
Poder Judicial

Poder Judicial	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
A favor	1	1,67		0,00	1	1,43
En contra	33	55,00	6	60,00	39	55,71
No intervino	25	41,67	4	40,00	29	41,43
Sin datos	1	1,67		0,00	1	1,43
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

La intervención del Poder Judicial en los conflictos está contemplada en el art. 136 del Estatuto Agrario. Este artículo ordena que en “toda demanda de desalojo contra ocupantes pacíficos y de buena fe, de cualquier título, de inmuebles rurales privados, el propietario requerirá la intervención del Instituto de Bienestar Rural, a fin de buscar un acuerdo entre las partes” (Estatuto Agrario, 1963).

Si en el plazo de 60 días a contar desde la intervención del IBR no se llega a ningún acuerdo entre las partes, recién entonces el propietario podrá recurrir a la justicia ordinaria. El mismo artículo establece “que los jueces y tribunales no darán curso a ningún juicio de desalojo sin la comprobación de haberse agotado el procedimiento indicado en este artículo. Podrán sin embargo, adoptar las medidas precautorias admitidas por el derecho común” (Estatuto Agrario, 1963). El artículo de referencia establece claramente el procedimiento a cumplir; sin embargo, como se ha podido comprobar en numerosos casos, el desalojo se ha ejecutado en menos de 24 horas de haberse producido la ocupación. Las tres primeras ocupaciones realizadas en Misiones en 1991 fueron desalojadas el mismo día. Cuál o cuáles fueron las razones esgrimidas por los jueces para dicha determinación es una cuestión que escapa a la lógica de los procedimientos legales.

Hasta 1992 el nombramiento de los jueces se había hecho en base a criterios políticos partidarios antes que a la idoneidad, capacidad y/o trayectoria profesional. En estas condiciones, los jueces no representaban ninguna garantía de buen desempeño en sus funciones. Al contrario, estaban supeditados a los dictados de los mandamases de turno y protegían los intereses del sector dominante. Los tres desalojos en menos de 24 horas ocurridos en Misiones son ejemplos claros de la manipulación de la justicia. Antes de enterarse el IBR de la ocupación, ya los ocupantes habían sido desalojados y detenidos. Otro hecho grave denunciado en la ocupación de Ñane Maitei en Caaguazú ocurrió en abril de 1989, cuando el Ministerio del Interior, abrogándose atribuciones del Poder Judicial, detiene a ocupantes sin ninguna orden de juez competente. En Torin Yguazú el juez de paz cumplía órdenes de los militares y de los dueños de las tierras. Recién en la Constitución Nacional de 1992 se establecieron los criterios para los nombramientos de los jueces en toda la República y quedaron más claros los procedimientos a utilizar. Aún así, hubo varias denuncias de procedimientos arbitrarios en los cuales estaban implicados jueces de las circunscripciones judiciales del interior del país.

Además de los procedimientos no ajustados al espíritu de la ley, existen otros problemas de contenido más profundo que tienen que ver con la interpretación teórico-conceptual de los hechos, tales como el derecho a la ocupación, de posesión, de propiedad, etcétera. Con respecto a este tema, el abogado agrarista Digno Brítez señala que la ocupación es un derecho toda vez que se realice con el “ánimo de hacerse dueño en forma pacífica, pública y continuada, en una directa relación de la persona con el inmueble. La combinación de estos elementos hace de la ocupación un derecho de posesión, algo más que un puro hecho, hace constituir en un verdadero derecho inclusive paralelo al derecho de propiedad pero distinto del

mismo" (Brítez, 1996: 11). Brítez sostiene que "la conducta de ordenar la detención, sin ningún fundamento legal, de campesinos sin tierra ha sido la constante en el proceder de los jueces en nuestro medio, que cuando menos deberían constituirse in situ en una inspección judicial previa para la constatación de la existencia de un delito como ser la violencia y la clandestinidad y de no existir, evitar las arbitrarias y masivas detenciones de familias campesinas hambreadas" (Brítez, 1996: 15).

El rol del Poder Judicial en los conflictos de tierra ha sido bastante cuestionado no sólo por los sin tierra, sino por sectores de la sociedad civil que consideran las ocupaciones como resultado de una histórica exclusión del campesino de las tierras, su principal medio de producción. A juzgar por los hechos y las consideraciones precedentes, los jueces no sólo no han cumplido con los procedimientos establecidos en las leyes sino que han actuado con parcialidad manifiesta a favor de los propietarios. Esta práctica judicial "ha sido hasta hoy violatoria de las normas legales y contraria a la realidad socio-económica que vive el país", señala el agrarista Juan Carlos Ramírez Montalbetti (citado por Brítez, 1996).

Las organizaciones campesinas denunciaban permanentemente las arbitrariedades cometidas contra los ocupantes. Ya en septiembre de 1989, cuando el desalojo era el pan de cada día, la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA), en un comunicado a la opinión pública, denunciaba la arbitrariedad en un desalojo en el cual fueron detenidos varios ocupantes. El comunicado expresaba que "este tipo de procedimiento demuestra claramente que este Gobierno, supuestamente democrático, está sólo y exclusivamente para defender a los terratenientes y sus propiedades privadas, sin importar la privación a miles de campesinos agricultores del derecho a una parcela de tierra para trabajar, y también la privación de su libertad. Detienen y desalojan a campesinos humildes como si fueran criminales" (IC Nº 10, 1989: 5).

Los hechos citados demuestran el largo trecho que aún falta recorrer para llegar al Estado de Derecho. Jueces que criminalizan hechos surgidos a raíz de problemas sociales, y autoridades políticas que interpretan y ejecutan la ley de acuerdo a intereses de terceros.

La fuerza pública

La fuerza pública, que incluye a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, ha intervenido en 41 casos, en todos para cumplir con la orden judicial de desalojo. Cabe destacar que la acción de las fuerzas públicas, específicamente de la Policía Nacional, desde la apertura política se ha ceñido en casi todos los casos a las disposiciones legales pertinentes, y más específicamente desde la creación de la Policía Nacional por Ley Nº 222 del año 1993, la cual establece en su art. 3 que la Policía Nacional ajustará el ejercicio de su función a las normas constitucionales y legales y fundará su acción en el respeto a los derechos humanos (citado por Brítez, 1996: 23). Las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional no siempre fueron cumplidas, sobre todo en lo que compete al respeto de los derechos humanos. La violencia en la ejecución de las órdenes de desalojo se ha dado en casi todos los casos. Incluso las autoridades responsables de la Fuerza Pública han expresado en una ocasión que no necesitan de una orden judicial para proceder al desalojo toda vez que exista una denuncia responsable (Diario ABC, 29/10/95, citado por Brítez, 1996: 46), contraviniendo las disposiciones establecidas en su propia carta orgánica.

Durante el gobierno del General Rodríguez (1989-1993), la intervención de la fuerza pública en las ocupaciones de tierra estaba a cargo de efectivos de las Fuerzas Armadas, acompañados en algunos casos por efectivos de la Policía. A este cuerpo se le llamó Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), y su intervención fue continua durante la vigencia del Consejo Nacional de Coordinación para el Desarrollo Rural (CONCODER), coordinado por un coronel activo. Las organizaciones campesinas han realizado varios comunicados de repudio a la intervención de los militares en los conflictos de tierra, denunciando la acción represiva contra sus conciudadanos. Mientras tanto, las fronteras quedaban al arbitrio de los grupos criminales. Los campesinos denunciaban permanentemente que los militares estaban para proteger el territorio del país y no para reprimir a campesinos.

Como puede verse en el cuadro siguiente, la FTC intervino en por lo menos 13 casos de conflictos. En Misiones, de los 6 casos en que hubo intervención, en cinco actuaron las

Fuerzas Armadas. La decisión de utilizar a los militares en las ocupaciones fue ordenada por el Poder Ejecutivo. El Ministro del Interior expresaba en junio de 1989 que las ocupaciones de tierra eran provocadas por agitadores profesionales con el propósito de sabotear el proceso democrático recientemente instaurado (IC N° 9, 1989: 31). Con este argumento movilizó a las Fuerzas Armadas para dar tranquilidad a los propietarios de tierras.

En agosto de 1990, el Ministerio del Interior creó la Policía Especial de Operaciones (PEO) con el objetivo de precautelar los intereses, propiedad privada, bienes y haciendas de los habitantes del país. A partir de esa fecha, el desalojo en las ocupaciones quedó a cargo de esta fuerza especial que intervino en 15 casos de conflictos en Caaguazú. En agosto de 1994 este cuerpo fue disuelto y en su reemplazo se creó la Agrupación de Protección Ecológica (PER), que quedó finalmente como la responsable de actuar en los conflictos de tierra (Brítez, 1996).

Mientras los campesinos denunciaban el exceso de violencia en los desalojos, para algunos propietarios la actuación de la fuerza pública fue pésima al no cumplir las órdenes. “En Misiones la justicia actúa bien pero la policía mal. La fiscalía hace todas las cosas, se envía la orden de desalojo a la Policía y siempre hay algún político que se mete y evita el desalojo porque está cerca alguna elección y los ocupantes son sus votos” (entrevista a Acosta Núñez, 2001).

Cuadro 24
Fuerza pública

Fuerza pública	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Deleg. de gob.	1	1,67		0,00	1	1,43
FTC	6	10,00	5	50,00	11	15,71
FTC y Civ. arm.	1	1,67		0,00	1	1,43
Militares	1	1,67		0,00	1	1,43
No intervino	24	40,00	4	40,00	28	40,00
PEO	15	25,00		0,00	15	21,43
PEO y PER	1	1,67		0,00	1	1,43
PER	7	11,67		0,00	7	10,00
PER y Civ. arm	1	1,67		0,00	1	1,43
Policía local	2	3,33	1	10,00	3	4,29
Sin datos	1	1,67		0,00	1	1,43
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

EI INDI

El Instituto Nacional del Indígena (INDI) es la entidad rectora de la política oficial indigenista. Fue creado por Ley 904/81 que establece el estatuto de las comunidades indígenas, cuyo “principio general es el respeto a las culturas nativas a partir de la restitución de sus territorios tradicionales y señala además el procedimiento a seguir para la legalización de las tierras reclamadas por las comunidades” (DD.HH. 1997: 256). El rol que ha cumplido este instituto ha sido deficitario a pesar de contar con grandes avances en la legislación. La política oficial indigenista de los gobiernos se ha caracterizado desde 1989 por la ausencia de iniciativas que

favorezcan la protección de los nativos, lo que ha significado para las comunidades indígenas sobrevivir en condiciones de extrema precariedad. Al igual que los campesinos, la recuperación parcial de sus territorios fue conseguida gracias a las presiones ejercidas sobre el Estado y no necesariamente por iniciativa de éste.

Los conflictos de tierra registrados en tierras indígenas desde 1989 a 1999 fueron cinco, todos en el departamento de Caaguazú. Tuvieron que ver fundamentalmente con ocupaciones realizadas por campesinos sin tierra y también con problemas con algunos propietarios, como el caso de las tierras expropiadas a la cooperativa menonita Sommerfeld que, según informaciones de los dirigentes campesinos entrevistados, en la práctica seguían en poder de la cooperativa. Muy pocos territorios tradicionales han sido restituidos, y varios de los se han recuperado enfrentaron problemas de ocupación por parte de campesinos sin tierra, como los tres casos de ocupación en Caaguazú.

De las organizaciones campesinas

Las organizaciones campesinas constituyen el principal soporte de los sin tierra en la lucha por la recuperación, expropiación, o compra de una parcela. Desde la reorganización de las mismas en los inicios de los años '80, la tierra pasó a ser uno de los principales reclamos. Las organizaciones canalizaron este reclamo incorporando dentro de sus estructuras organizativas las secretarías de sin tierra, en algunos casos, y en otros los sin tierra se constituyeron en organismos internos con estructura propia, como lo fue la Asamblea Permanente de Campesinos Sin Tierra del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). Una sola experiencia de organización autónoma de los sin tierra de nivel nacional se tuvo en el país con la creación de la Coordinadora Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda (CNLTV), que llegó a aglutinar a campesinos sin tierra de algunos departamentos y a sin techo de la periferia de las ciudades. Esta experiencia duró desde 1989 a 1993, año en que fue disuelta, creándose por un lado la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y por otro la Coordinadora Interdepartamental de Campesinos Sin Tierra (CIST). Otra organización de nivel regional se creó en Alto Paraná y posteriormente en Itapúa.

Del total de conflictos registrados en ambos departamentos, 44 tuvieron el apoyo de organizaciones regionales y nacionales. De este total, 35 fueron en Caaguazú y nueve en Misiones. Si se cruza este dato con la variable 'resultado', se tiene que entre los que tuvieron apoyo de alguna organización, en 22 casos los resultados fueron favorables a los sin tierra, en 13 casos no, y nueve seguían sin ser resueltos. En los casos en que las comisiones vecinales no fueron acompañadas por ninguna organización, la relación entre resultados favorables y no favorables es similar. De 26 casos que no tuvieron acompañamiento, 10 fueron favorables a los sin tierra, 8 a los propietarios, 5 no resueltos, y 3 sin datos (anexo Cuadro 12). Caaguazú fue uno de los departamentos en el que varias ocupaciones fueron realizadas por comisiones vecinales sin apoyo de otras organizaciones, y por lo tanto sin una preparación previa adecuada, inducidos más bien por la ola ocupacional del momento. Esta sería una de las razones que explica la mayor proporción de casos perdidos: de 60, sólo 28 fueron favorables a los sin tierra. En Misiones, en cambio, de 10 conflictos, nueve tuvieron el apoyo de la OCM. Si bien la relación tampoco es favorable a los sin tierra, cuatro de 10, los inmuebles ocupados en Misiones en su gran mayoría fueron establecimientos ganaderos que no son totalmente improductivos y además estaban fuertemente apoyados por la ARP y por las autoridades políticas locales.

Cuadro 25
Organizaciones campesinas

Org. campesinas	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Con intervención	35	58,33	9	90,00	44	62,86
Sin intervención	25	41,67	1	10,00	26	37,14
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

El rol que cumplen las organizaciones campesinas en la lucha por la tierra se proyecta más allá de la preparación previa que conduce a un pedido de desafectación de un inmueble por la vía legal o la posterior ocupación. En cada etapa del proceso que conduce a la ocupación o al reclamo cumplen un papel importante, que fue afinándose cada vez más debido a fracasos en los asentamientos ya legalizados. Un gran número de comisiones vecinales se desintegraron una vez conquistada la tierra. Esto se dio debido a que en la etapa previa a la formación de la comisión vecinal no se hizo una buena selección de los miembros, y además no se priorizó el trabajo de motivación y de compromiso grupal. De esta manera, una vez conquistada la tierra y hecha la distribución, las comisiones se desintegran, se pierde el control sobre los miembros, y muchos de ellos se alejan del grupo bajo la excusa de la no integración, volviéndose individualistas; en algunos casos venden su derecho de ocupación a otros y se mudan. Si bien es cierto que el abandono de los asentamientos es producto también de otros factores, como la orfandad de apoyo oficial, no es menos cierto que en muchos casos el factor más importante fue la falta de una adecuada preparación política para afrontar las dificultades.

Sobre este aspecto, Adrián Vázquez, presidente de la Asociación Regional de Productores Agrícolas de Caaguazú (ARPAC), informó que el apoyo de la organización es importante “porque tiene mayor experiencia de lucha y esa experiencia se transmite a los compañeros, porque el compañero que va a ocupar una propiedad debe prepararse, debe entender qué es la tierra para él y qué es la lucha por la tierra y por qué se realiza la ocupación. Entonces, ese trabajo es lo que hacemos con los compañeros, una capacitación política. Dentro de la organización están todos informados, incluso los pequeños productores porque éstos tienen una gran responsabilidad con los sin tierra, su misión es colaborar en la provisión de alimentos en las ocupaciones. Si las comisiones vecinales no cuentan con este apoyo es muy difícil que resistan, porque se presentan muchas dificultades. En Caaguazú se dieron muchas experiencias sobre grupos sin articulación alguna que se extinguieron porque no estaban acompañados por una organización” (Vázquez, 2001).

Otro aspecto destacable del rol de las organizaciones en la lucha por la tierra es la visión que proyectan con respecto al Estado: que la consecución de la tierra propia individual o colectivamente es impensable sin la participación del Estado. Uno de los motivos por los cuales los sin tierra se organizan y se articulan con las organizaciones grandes es justamente esa visión de que ni individualmente ni formando parte de organizaciones atomizadas se podrá conseguir el objetivo. Uno de los entrevistados señaló que el motivo que lo llevó a integrar la organización es el haberse dado cuenta de que con su trabajo en la chacra ya no consigue nada, y mucho menos puede pretender comprar unas hectáreas de tierra.

Las organizaciones de propietarios

Los propietarios en su gran mayoría se encuentran nucleados en torno a tres grandes asociaciones: la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación Nacional de Propietarios (ANAPRO) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). La ARP es un gremio que reúne a los

ganaderos de todo el país y tiene una estructura basada en sus regionales. Cuenta con regionales en todos los departamentos del país y está conformada por ganaderos pequeños, medianos y grandes. La cantidad mínima requerida para ser socio es de 50 cabezas o poseer un animal puro de alto valor genético; también se puede ser socio adherente por el solo hecho de querer formar parte del gremio (Carlos Trappani, 2001, vicepresidente de la ARP y representante del gremio en el Banco Nacional de Fomento, BNF).

El otro gremio, la ANAPRO, reúne básicamente a propietarios de origen extranjero y es de más reciente formación (Fogel, 1992: 133). La SNA en cambio es una asociación de medianos y grandes productores agrícolas. Otro grupo prácticamente desconocido es la Sociedad Paraguaya de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP). Esta sociedad se hizo pública recientemente a través de un comunicado en el cual afirmó que “el derecho de propiedad no puede ser abolido por acción del Estado, porque no es concesión del Estado. Emana del orden natural de las cosas creado por Dios, que es anterior al Estado y del cual el propio Estado deriva. Una Reforma Agraria que viole el 7° y 9° mandamientos, no Robar y No codiciar los bienes ajenos, constituiría un pecado mortal colectivo, capaz de atraer sobre el País, no solo los castigos temporales, sino también y principalmente una retracción de las gracias de Dios” (Diario ABC, 30/03/01).

De los gremios o asociaciones citados, el que tuvo y sigue teniendo una presencia visible en el escenario público es la ARP. El gremio apoya a sus asociados en los aspectos técnicos, legales y de presión ante las autoridades en los casos de ocupaciones. Todos, sin embargo, asumen una actitud de abierta oposición cuando de modificación de la estructura agraria se trata y sobre todo cuando el cambio apunta hacia los intereses de los gremios. Para la ARP, “mientras existan dirigentes políticos, sociales y gremiales que alienten la ocupación ilegal de propiedades privadas [...] no podemos ver a nuestra democracia sino caminar con muletas”, afirma uno de sus directivos (IC Nº 70, 1994). Otros miembros del gremio, sin embargo, reconocen en ocasiones la existencia de causas estructurales que obligan a los campesinos a “invadir” las propiedades privadas, como la “falta de trabajo y la inmoralidad que ha cundido en nuestro país” desde varios años atrás (IC Nº 71, 1994). Estas expresiones confirman lo señalado por Fogel respecto de que en la asociación coexisten grupos con intereses no enteramente coincidentes y con ligeras diferencias en sus orientaciones, pero con una coincidencia básica, el rechazo a toda propuesta seria de reforma agraria (Fogel, 1992: 122).

Ya en junio de 1990, ante la masiva ocupación de tierras en el departamento del Guairá, la ARP exhortaba a la defensa de sus propiedades con todos los medios a su alcance. Aún cuando aclaró que no apelarían a la violencia ni a hacer justicia por mano propia, esta advertencia fue interpretada por los campesinos y otros sectores de la sociedad como el surgimiento de los civiles armados (IC Nº 21, 1990).

En los primeros meses de la transición los gremios empresariales habían organizado un foro sobre la problemática rural en el cual consensuaron que la reforma agraria en su aspecto económico implica el uso racional de recursos tales como la tierra, la mano de obra y el capital, y destacaron la necesidad de racionalizar la distribución de la tierra, atacando frontalmente la tenencia de tierras ociosas en manos de especuladores y de personeros del régimen anterior, que las obtuvieron en forma prebendaria y al margen de la ley. En el aspecto social, sostuvieron la necesidad del campesinado de acceder a niveles de vida compatibles con la dignidad de las personas y que la solución de los conflictos sociales debe darse a través de los canales institucionales y representativos propios del Estado democrático y a través del diálogo y la concertación. En el aspecto institucional señalaron que el Estatuto Agrario es un instrumento legal que, a pesar de algunas lagunas, debe ser aplicado en su letra y en su espíritu (IC Nº 9, 1989: 29 y 30). Este foro fue el resultado de la preocupación de los empresarios respecto de si la cuestión agraria no era priorizada por el gobierno y si no eran atacadas las principales causas que conducen a la ocupación y a las protestas de los campesinos, la anarquía podría apoderarse del país. La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) también insistía en que la economía paraguaya necesita de campesinos eficientes, con mejores ingresos, que puedan alcanzar niveles cada vez más altos de consumo, y para ello proponían que se encontraran formas de organización empresarial o cooperativa asentadas sobre tierras económicamente viables y con los beneficios que ofrece la vida moderna (IC Nº 9, 1989: 30). Como ocurrió con ésta y otras tantas propuestas con las cuales se buscaba viabilizar nuevas formas de relacionamiento social, las mismas no superaron la barrera de las buenas intenciones.

En los conflictos de tierra de Caaguazú y Misiones, la intervención de la ARP no fue significativa. Sólo intervino en 21 casos, 15 en Caaguazú y 6 en Misiones. Hay que entender sin embargo que no todos los conflictos se produjeron en tierras pertenecientes a socios de la ARP, sobre todo en Caaguazú, donde la ganadería tuvo un desarrollo tardío comparado con el de Misiones. En este departamento la ARP tiene una de sus regionales mejor organizadas. Lo demuestra el hecho de que de los seis casos en que intervino en sólo uno el propietario se vio afectado. Se trata del establecimiento ganadero de César Zotti, a quien primero le expropiaron 2.661 ha, caso vetado por el Poder Ejecutivo, para luego ser compradas por el IBR para su colonización. En ningún otro conflicto en el cual intervino la ARP los propietarios fueron despojados de sus tierras. Los dos asentamientos de Ayolas, uno por expropiación y otro por compra, fueron en tierras de dudosa posesión y no intervino la ARP. En la ocupación de la ganadera Don Emilio, de Marcelo Sisul, los campesinos siguen asentados pero ilegalmente, ya que no existe aún una definición. De los 21 casos en que tuvo intervención la ARP, sólo siete fueron favorables a los ocupantes, 10 favorables a los propietarios y 4 seguía sin ser resueltos, lo que demuestra su poder no sólo económico sino también político.

Cuadro 26
Organización de propietarios

Org. de propietarios	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Con intervención	15	25,00	6	60,00	21	30,00
Sin intervención	45	75,00	4	40,00	49	70,00
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

La Iglesia

En el Paraguay, la Iglesia Católica ha asumido desde 1960 una postura mucho más abierta hacia los problemas sociales a partir de las conclusiones y recomendaciones del Concilio Vaticano II y a raíz del recrudecimiento de la represión hacia las organizaciones de la sociedad civil y las cada vez más duras restricciones a la libertad de organización y de expresión que imponía la dictadura. Con la consigna de ser la voz de los que no tienen voz, comenzó a incursionar en la defensa de los derechos fundamentales del hombre. En 1976 la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) fundó con otras dos iglesias protestantes, la Luterana del Río de la Plata y la de Discípulos de Cristo, la ONG Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE), con la cual defendió a los/as presos/as políticos/as y brindó asistencia humanitaria a familiares de los/as mismos/as. Posteriormente, en 1979, creó su programa rural, desde el cual acompañó con asesoramiento jurídico y organizativo a los campesinos sin tierra en sus ocupaciones. Era un hecho sin precedentes en la historia del país. Si bien no toda la jerarquía acompañó este nuevo desafío, la Iglesia tuvo una destacada presencia junto con los sectores más desprotegidos de la sociedad, y muy especialmente el de los campesinos sin tierra.

Una de las diócesis que simbolizó ese nuevo accionar de la Iglesia en la defensa de los derechos de los más débiles fue justamente Misiones, bajo la dirección del Obispo Mons. Ramón Bogarín. Las Ligas Agrarias nacieron y crecieron con él, y la gran represión coincide con su muerte, acaecida en 1976. Esta tradición de defensa de los derechos de los más humildes continuó cuando asumió la diócesis su principal colaborador, Monseñor Mario Melanio Medina, quien posteriormente fue nombrado obispo de la diócesis de Benjamín Aceval del Chaco, para reasumir nuevamente la de Misiones en 1998. Ya en marzo de 1989 Monseñor Medina advertía que el problema de tierra podría convertirse en una bomba de tiempo si las autoridades no encaraban en serio la solución del mismo. Agregaba que esta solución debía ser estructural y provenir de una política agraria global (IC Nº 6, 1989: 16). El obispo de

Misiones, Monseñor Carlos M. Villalba, en 1990 también se hacía eco de los campesinos sin tierra señalando que en su diócesis, si bien no se habían producido ocupaciones, la lentitud en el proceso de distribución de tierras podría fastidiar y desesperar a cualquiera (IC N° 18, 1990: 31). Los dirigentes campesinos de Misiones valoraron el apoyo brindado por la Iglesia en algunos de los conflictos de tierra. Sin embargo, con el fortalecimiento de la Organización Campesina de Misiones (OCM) en 1994, ese apoyo fue disminuyendo y la responsabilidad y el compromiso en el campo de la lucha por la tierra fueron asumidos por la organización. La intervención directa de la Iglesia en este departamento se produjo en dos casos concretos: en las ocupaciones del establecimiento ganadero perteneciente a César Zotti, parte del cual fue colonizado posteriormente, y en el de la Estancia Soley de Víctor Chiriani, donde los ocupantes fueron rodeados por fuerzas policiales y militares y el obispo tuvo que mediar para que los ocupantes pudieran recibir alimentos.

En Caaguazú, la Iglesia no tuvo una actuación relevante en los casos de conflictos, pero sí algunos miembros de su clero. El obispo, Mons. Claudio Silvero, demostró sólo en algunos casos concretos una postura firme, por ejemplo cuando efectivos policiales de la Delegación de Gobierno de Coronel Oviedo intervinieron en el conflicto de Torín Yguazú desalojando a los ocupantes en abierta complicidad con los supuestos dueños en una fracción ya expropiada por el Estado. En un comunicado a la opinión pública expresó que los “indefensos y pacíficos campesinos de Torín Iguazú no se merecen los vejámenes y violencias de que fueron objeto. Las profundas heridas abiertas en sus vidas claman por una justicia rápida y ecuánime. El pueblo campesino ilusionado en un principio por las propuestas alentadoras del gobierno, ha soñado en un nuevo amanecer pero ahora ante su derecho pisoteado está a punto de perder la confianza en las autoridades” (IC N° 10, 1989: 11 y 12). En otro momento puso en duda la capacidad y la sobriedad de los campesinos al dejarse embaucar por propuestas de actores que intervienen en los conflictos desde fuera del ámbito natural de ellos. Manifestó su preocupación con respecto a la posibilidad de que los campesinos tomaran decisiones por sí solos como resultado de la frustración debido a las falsas promesas (IC N° 14, 1989: 25).

En Caaguazú la Iglesia tuvo intervención en nueve casos, básicamente a través de algunas de sus parroquias, como la de Yhú, que acompañó a los ocupantes en sus reclamos. El caso de Cleto Romero fue acompañado por la diócesis de la Cordillera, ya que involucraba también a los sin tierra de Juan de Mena, distrito perteneciente al departamento de la Cordillera. En el distrito de Mariscal López igualmente la parroquia tuvo una destacada intervención al defender a los ocupantes de las estafas a las que fueron sometidas por la empresa Greco Paraguaya SA, responsable de la colonización en la zona. Aparte de los ya citados, la Iglesia tuvo en Caaguazú muy poca intervención en los casos de los conflictos de tierra. Los campesinos utilizaron en varias oportunidades la explanada de la catedral de Coronel Oviedo a modo de campamento, desde donde presionaban por la solución de sus problemas de tierra o por la liberación de sus compañeros detenidos. En este aspecto vale la pena mencionar que la Iglesia no opuso reparos. En Asunción, la Catedral Metropolitana fue escenario de varios grupos de sin tierra que llegaban a la capital para reclamar solución a las autoridades del gobierno y a parlamentarios.

Cuadro 27
Iglesia

Iglesia	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Con intervención	9	15,00	2	20,00	11	15,71
Sin intervención	51	85,00	8	80,00	59	84,29
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Si bien a muchos de los que conforman la jerarquía de la Iglesia les cuesta aún superar el dilema que supone la propiedad privada, su carácter sagrado por un lado versus la enorme inequidad que produce por otro, en general la Iglesia tuvo una influencia importante para que el Estado pudiera responder a los reclamos de tierra de los campesinos. Las numerosas denuncias sobre atropellos, persecuciones y violencias extremas en los desalojos fueron permanentes, sobre todo por parte del sector más progresista de la jerarquía. A esto se suma la preocupación por generar nuevas propuestas de desarrollo rural y de reforma agraria, en que la Pastoral Social Nacional tuvo una destacada actuación.

Los partidos políticos

La intervención de los partidos políticos en los conflictos de tierra fue escasa. En general se dio a través de comunicados y de opiniones de algunos de sus dirigentes sobre la problemática de la tierra, y habitualmente en un tono de advertencia contra los campesinos cuando se trataba del partido oficialista y de crítica hacia el gobierno por parte de los partidos de oposición. La intervención de manera directa casi no se ha dado. Sólo en tres casos aparecieron: dos en Misiones y uno en Caaguazú. En los dos primeros fueron denuncias contra autoridades locales del partido oficialista por instigar a sus partidarios a ocupar un campo comunal y una fracción ya colonizada a favor de otro grupo de campesinos. En ambos casos los ocupantes fueron desalojados. El de Caaguazú fue una intervención de un dirigente del partido Encuentro Nacional, quien abogó por una salida negociada entre los ocupantes, el propietario y el IBR, logrando su propósito con la relocalización de los sin tierra. Los entrevistados manifestaron que en varias ocupaciones hubo sospechas de la intervención de algunos políticos locales y regionales instigando ocupaciones, pero no hubo prueba de ello.

Los partidos políticos tradicionales se declaran en teoría partidarios de la reforma agraria. El Partido Colorado ideológicamente se define como agrarista, y ha hecho de la colonización en las décadas del '60 y '70 su principal bandera de defensa de los intereses campesinos. En su momento, esto significó un avance con respecto a las políticas agrarias anteriores. La colonización ha tenido para este partido un doble propósito: por un lado dar solución a los reclamos más urgentes, y por otro sumar adeptos a sus filas. Desde la apertura política, en varias oportunidades figuras importantes del partido señalaron que el problema de la tierra no era acuciante, pero que se debían desarrollar programas de desarrollo que incentivaran los cultivos intensivos y no extensivos y crear industrias ligadas a la producción agropecuaria para resolver el problema de la desocupación y subocupación (IC N° 6, 1989: 14). Para otros dirigentes del mismo partido, el camino para la reforma agraria es de la ley, y no por ocupación forzosa ni prepotente. La Junta de Gobierno del Partido Colorado advertía que no apañarían ni protegerían las ocupaciones ilegales de tierra (IC N° 9, 1989: 27).

Para el principal partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la tierra es un factor de producción fundamental: el campesino sin tierra adecuada, de una extensión razonable y de segura tenencia, no podrá aumentar su producción. El campesino debe contar con una parcela de 10 ha con título definitivo e no enajenable por 20 años (IC N° 6, 1989: 15). Este partido con representación parlamentaria ha hecho muy poco a favor del campesinado. En los primeros meses de la transición su presidente había presentado un proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la concesión de más de 1.000 ha desde 1965 a 1988. En la ocasión manifestaba que quienes habían metido la mano en el bolsillo del pueblo tendrían que devolverlo todo y cumplir con las penalidades correspondientes (IC N° 19, 1990: 21). Estas intervenciones esporádicas no sólo no tuvieron ninguna repercusión, sino que a la larga fueron olvidadas. Las numerosas facciones internas de las que se compone esta nucleación política le han restado capacidad de respuesta para la búsqueda de solución a los problemas nacionales, y particularmente al problema de la tierra. Sus representantes en el parlamento, con raras excepciones, han tenido una actuación poco favorable a los campesinos sin tierra. En algunos casos de solicitud de expropiación de latifundios eran los más fervientes defensores de la propiedad privada. A esto se debe agregar que los principales asesores jurídicos de la ARP pertenecen a este partido político.

Los demás partidos, algunos con representación parlamentaria y otros no, no tuvieron tampoco repercusión en las decisiones que se tomaron respecto al problema de la tierra. Sus intervenciones no pasaron de ser meras declaraciones públicas. Esta escasa participación o desinterés de los partidos por la problemática de la tierra se refleja en la vigencia de un

Estatuto Agrario que ya lleva cerca de 40 años sin sufrir ninguna reforma. Es más, todas las reformas propuestas fueron congeladas en el Parlamento, ámbito natural de resolución de los conflictos sociales.

Los partidos o movimientos de izquierda sí tuvieron una intervención decididamente favorable a los campesinos en su lucha por la tierra, pero, atomizados y sin representación parlamentaria, tampoco tuvieron posibilidades de influir en las decisiones respecto al tema.

Cuadro 28
Partidos políticos

Partido político	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Con intervención	1	1,67	2	20,00	3	4,29
Sin intervención	59	98,33	8	80,00	67	95,71
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Otros actores

Otros actores que han intervenido en los conflictos de tierra son las ONGs y la propia comunidad. Las ONGs cumplieron un rol relevante al brindar a los sin tierra asesoramiento jurídico y en algunos casos organizativo. En este sentido fue y sigue siendo destacable la labor del CIPAE y de SEIJA por su defensa y acompañamiento a los campesinos sin tierra en las ocupaciones. De acuerdo a los datos recabados, un total de 25 comisiones vecinales de sin tierra recibieron asesoramiento jurídico de los abogados de las instituciones nombradas en Caaguazú. En Misiones los sin tierra no tuvieron acompañamiento de ONGs, y si lo tuvieron no fue relevante. En un solo caso aparece el acompañamiento de una ONG. La Organización Campesina de Misiones (OCM) tenía su propio asesor jurídico que acompañaba a las comisiones en los casos en que era necesaria su intervención. La importancia del asesoramiento se refleja en el resultado que obtuvieron los sin tierra. De los 25 casos que recibieron asesoramiento jurídico de ONGs, en 10 fueron favorables a los sin tierra, en 7 desfavorables, y en 8 casos el conflicto seguía sin resolverse.

Cabe destacar que las primeras ONGs en el Paraguay fueron creadas en los inicios de la década del '60 y posteriormente fueron multiplicándose hasta llegar a la década del '80, en la que tuvieron un gran crecimiento, abarcando casi todos los ámbitos del quehacer del país. Durante la dictadura su rol se desarrollaba básicamente en el campo de los derechos humanos, la educación popular y la promoción y fomento de organizaciones campesinas y urbanas con el objetivo de desarrollar actividades tendientes a aumentar los niveles de bienestar de la población más carenciada. Después de la apertura política, su ámbito de acción creció notablemente al variar el escenario sociopolítico. La diversificación de las demandas, así como la constitución de organizaciones de los grupos subalternos que exigían respuestas globales a sus problemas, exigió de las ONGs cambios en la orientación de sus estrategias de acción. Las diferencias entre el viejo escenario, en el que las organizaciones no gubernamentales se destacaban en las experiencias micro, y el nuevo, que exige propuestas más globales, crearon dificultades que no todas las ONGs pudieron sortear. Este desfase se observa claramente en la lucha por la tierra, en que las propuestas de las organizaciones campesinas van mucho más allá de las posibilidades y expectativas de las ONGs. Esta situación explicaría en parte el acompañamiento no muy significativo de estas instituciones a las demandas campesinas por la tierra y el escaso intento por presentar propuestas globales consensuadas sobre temas que hacen al desarrollo rural y la reforma agraria. Con lo expresado no se desconocen los intentos que hubo, pero eran propuestas parciales y no consensuadas entre todas las instituciones del mismo ámbito de actividades.

Cuadro 29
Instituciones privadas

Inst. privadas	Caaguazú	%	Misiones	%	Total general	%
Con intervención	25	41,67	0	0,00	25	35,71
Sin intervención	35	58,33	10	100,00	45	64,29
Total general	60	100,00	10	100,00	70	100,00

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

La comunidad circundante a los conflictos también tuvo su cuota de responsabilidad para que éstos tuvieran una resistencia mayor. De la mayor o menor solidaridad de los vecinos depende la permanencia de los sin tierra en la ocupación. Si bien hubo casos de hostilidad contra los ocupantes manifestados a través de algunos vecinos, fueron escasos. La solidaridad de la comunidad se expresaba fundamentalmente en la provisión de alimentos y otros tipos de apoyo. Una muestra de la solidaridad se dio en ocasión del desalojo ocurrido en Ypekua, distrito de Repatriación, cuando los ocupantes fueron alzados en camiones y abandonados al costado de un camino: el vecindario se encargó de proveerles alimentos y alojamiento. Estas muestras de solidaridad fueron observadas en varios casos de conflictos, y mucho más en aquellas comunidades donde existe cierto grado de organización comunitaria.

Capítulo IX

Conclusiones

La desigual distribución de la tierra, cuya consecuencia se expresa en la marginalidad de un amplio sector del campesinado, constituye uno de los problemas centrales de la cuestión agraria del país. La reforma agraria, entendida como un “conjunto de operaciones que tienden a transformar la estructura territorial de un estado o de una región mediante la modificación de las relaciones sociales, con el fin de asegurar la mejora de las técnicas de cultivo y el aumento de la producción agrícola” (Le Coz, 1976: 11), es la vía de solución institucional más importante a este problema. Así lo entendieron las organizaciones campesinas, razón por la cual han hecho de ella una de sus principales reivindicaciones. Pero la reforma agraria promovida desde el Estado no ha ido más allá de la distribución de la tierra. Con apoyo técnico deficiente, créditos escasos, un mercado interno deprimido y un mercado externo que exige una competitividad de la cual carece la economía campesina, los sujetos destinatarios de la reforma son condenados nuevamente a sufrir el mismo proceso del que habían sido víctimas previamente: el desarraigo, la migración y la asalarización. El problema se agravó con el cierre de la frontera agrícola: ya no existen tierras fiscales que puedan descongestionar la presión por la tierra y las inmensas tierras cultivables que existen están concentradas en poder de pocos propietarios e incorporadas al mercado, lejos de las posibilidades de los campesinos de escasos recursos. Una política agraria concentradora y excluyente ha hecho que una alta proporción de los campesinos sufra las consecuencias de la injusticia promovida por el propio Estado, y la supuesta reforma agraria se ha convertido en un instrumento de la contrarreforma, al no promover el arraigo y posibilitar que una gran mayoría de los sujetos de esa reforma pierdan sus posesiones y éstas pasen a manos de los medianos y grandes productores agropecuarios. De esta manera, la reforma agraria, que no fue más que una política de colonización, de desplazamiento poblacional, a la larga tuvo como beneficiarios a los medianos y grandes productores agrícolas, a los prominentes miembros del partido gobernante y las fuerzas armadas y a los políticos amigos del régimen.

La revisión de los datos de los tres últimos censos agropecuarios, 1956, 1981 y 1991 (anexo Cuadro 13), confirma que la expansión de la frontera agrícola, es decir, las nuevas tierras incorporadas a la explotación agropecuaria, que con la política de colonización inicialmente favorecía a los campesinos, a la larga ha engrosado los rangos de los estratos más altos de la explotación agropecuaria. En efecto, en este proceso de expansión, las explotaciones agropecuarias superiores a 1.000 ha han pasado de 14.548.860 ha en 1956 a 17.234.432 ha en 1981 y a 18.358.260 ha en 1991. En cambio, en los estratos menores, de menos de 5 ha y de 5 a 10 ha, el proceso de parcelamiento ha sido intenso, sin que ello implique una incorporación proporcional de tierras al incremento de las explotaciones agropecuarias de estos estratos. En 1956 había 67.121 explotaciones de menos de 5 ha con una superficie total de 162.360 ha, con un promedio de 2,42 ha cada una. En 1981 había 82.376 explotaciones con una superficie de 169.143 ha, con un promedio de 2,05 ha, y en 1991 un total de 114.788 explotaciones con una superficie de 231.304 y un promedio de 2,01 ha. La relación entre el incremento de la explotación agropecuaria y de la superficie era de 24,54% contra 4,17% en el período '56 a '81, en tanto que en el período '81 a '91 la relación fue de 39,35% a 36,75%. Si bien en el último período intercensal la relación entre explotación agropecuaria y superficie ha tenido un mayor equilibrio, la minifundización es y será una tendencia creciente si la política agraria del Estado sigue sin afectar a los grandes latifundios.

Esta particular “reforma agraria” fue socavando las bases de un modo de producción parcelario-comunitario sustentado en la autosubsistencia y en la reciprocidad, para dar paso a una nueva modalidad de organización productiva que propone al mercado como el centro de todas las operaciones de las actividades de producción, sin una adecuada preparación técnica ni planificación de la producción de tal manera que este brusco cambio atenúe las graves consecuencias socioeconómicas a la que llevó posteriormente a un importante sector del campesinado.

El proceso de latifundización y de minifundización por un lado, y de implantación de una nueva modalidad de organización productiva regida por el mercado no asumida totalmente por

los campesinos por el otro, fue conduciendo gradualmente a este sector al desarraigo que, junto con el crecimiento demográfico no absorbido por el mercado laboral secundario ni terciario, creó las condiciones para la aparición de los campesinos sin tierra, que desde los primeros años de la década del '80, en la que comienza el estancamiento económico del país, comenzaron a presionar por la tierra, proceso que se acentúa luego con la apertura política en 1989.

Privación relativa y cambio social

Importantes investigaciones (Hobsbawm, 1976; Gusfield, 1974; Landsberger, 1978; Touraine, 1997) han demostrado que no existe una relación directa, lineal, entre las carencias sufridas por un grupo social y el desarrollo de movimientos a favor del cambio. Es necesario que exista percepción o conciencia de tales carencias para que los grupos tengan motivaciones y se organicen a fin de buscar algún cambio. Si bien es cierto que el principio de la privación relativa establece una relación entre la "pérdida experimentada (o la amenaza de pérdida) y la expresión y organización del descontento" (Gusfield, 1974: 270), sin intervención de otros factores u otros actores esta relación no garantiza la búsqueda de cambios. El bajo perfil observado en Misiones con relación a las variables estudiadas, como tenencia de la tierra, que muestra una alta concentración, o bajo nivel de las actividades productivas, que repercute en una alta inseguridad alimentaria, induciría a pensar que dichas condiciones deberían haber sido motivos suficientes para generar una sistemática y agresiva campaña de movilización y búsqueda de superación de la gran inequidad existente, máxime cuando en los demás departamentos estallaban los conflictos sociales, sobre todo a raíz de los problemas de la exclusión de la tierra. Sin embargo, Misiones es el departamento con menor índice de conflictos de tierra. La lucha por la tierra en este departamento se ha iniciado tímidamente en 1989 con algunos reclamos específicos y movilizaciones esporádicas. Recién a fines de 1991 comenzaron las primeras ocupaciones, contrariamente a lo ocurrido en otros departamentos, como el de Caaguazú, en el que la ocupación de la tierra fue y sigue siendo una constante desde mucho antes de la caída de la dictadura. Indudablemente las características regionales de orden socioeconómico, político y cultural tuvieron mucho que ver para el avance o retroceso de las reacciones colectivas. Esta constatación confirma lo señalado en uno de los estudios realizados por el CIPAE y el CPES (1995) respecto de que la intensidad de los conflictos es menor en aquellos contextos donde predomina una agricultura tradicional enmarcada dentro de la relación minifundio-latifundio. En este aspecto, es importante remarcar lo afirmado por Gusfield: "la situación absoluta de un grupo no es tan decisiva en cuanto a crear y dirigir el descontento como lo es la percepción de lo que es justo, posible y de esperar" (1974: 270). De esto se deduce que la pobreza por sí sola no es determinante para la lucha por los derechos, hay otros factores y condiciones que son necesarios para que se produzcan las reacciones colectivas por la reivindicación de los derechos legalmente establecidos. Indudablemente, uno de esos factores es el nivel organizativo de los campesinos.

A la pregunta del por qué en Misiones se ha dado una tardía reacción con respecto al problema de la tierra. Todas las respuestas apuntaron a la represión masiva a las Ligas Agrarias en 1976, que dificultó que se volvieran a organizar. Justamente los sin tierra, en su mayoría gente común, de la masa, todavía siguen asociando la organización con la represión, la ocupación con la cárcel e incluso con el riesgo de la pérdida de vida (Ana López, 2001). Otro de los factores señalados es la dependencia. La misma proviene de la relación entre el patrón y el peón en el caso de los trabajadores de establecimientos ganaderos. Esta relación, en la mayoría de los casos, va más allá de lo laboral; se crean parentescos artificiales (Hobsbawm, 1976), producto del compadrazgo, o de tipo político, consecuencia del caudillismo. Para los dirigentes de Misiones la vigencia de este tipo de relaciones es un gran obstáculo para la organización y mucho más para plantear la lucha por la tierra. La dependencia también es generada por la Iglesia y en algunos casos por las ONGs, cuyas actividades con ciertos sectores del campesinado o con ciertas comunidades concretas restan posibilidades a las coordinaciones más amplias, produciéndose la atomización de las fuerzas campesinas (entrevista a dirigentes de Misiones).

En Caaguazú casi no existen relaciones de dependencia como las observadas en Misiones, excepto las que se establecen en el campo político partidario, que aún sigue siendo fuerte. El problema más bien se genera a raíz de la atomización o el parcelamiento entre la multiplicidad

de pequeñas organizaciones existentes y la gran movilidad horizontal de la población joven. La migración es un fenómeno que afecta a todos los departamentos.

La organización como instrumento de cambio social

Uno de los supuestos del cual parte este trabajo apunta a que los conflictos de tierra están fuertemente ligados al nivel de organización de los campesinos, a la experiencia previa y a las alianzas que pudieran establecer con otras organizaciones campesinas y actores externos. De la revisión de los conflictos de tierra en los departamentos estudiados se pudo constatar que la probabilidad de que los conflictos de tierras se produzcan se debe a la presencia de organizaciones gremiales independientes en la zona y a las experiencias previas. En este aspecto vale la pena volver a señalar que Caaguazú ha sido uno de los departamentos con gran desarrollo organizativo y además pionero en la colonización y también en cuanto a conflictos de tierra. Desde los inicios de los '80, grandes latifundios improductivos han sido objeto de ocupaciones por campesinos sin tierra apoyados por organizaciones nacionales y regionales y por otros actores como ONGs y algunas parroquias, experiencia que no ha tenido Misiones. En este departamento, la única ocupación de tierra de la que se tiene conocimiento fue cuando un sector de los miembros de las Ligas Agrarias del departamento decidió ocupar una propiedad perteneciente a la diócesis en el distrito de Santa Rosa en los inicios de los '70.

Por otra parte, la probabilidad de que los conflictos se resuelvan a favor o en contra de los campesinos depende de varios factores claves. Entre los más importantes, y quizás los de mayor peso, se encuentran el nivel organizativo interno y las alianzas que establecen con las organizaciones campesinas, fundamentalmente, y con otros actores externos. Se ha podido comprobar que el éxito en la lucha por la tierra depende en gran medida de la puesta en práctica de varias estrategias juntas, negociaciones legales, alianzas, ocupaciones, movilizaciones, y ninguna de estas estrategias separadamente garantiza el éxito. El hecho de que sólo el 11% de las comisiones vecinales de sin tierra se haya desarticulado es un indicador importante de que los sin tierra no han lidiado solos contra los propietarios y contra el Estado en algunos casos, sino que tuvieron el apoyo de sus organizaciones y de otros actores como la Iglesia, las ONGs, etc. El apoyo que reciben los sin tierra de una organización nacional o regional es crucial porque las estrategias de defensa se multiplican y la difusión del o los casos no se reduce sólo al ámbito zonal y regional, sino que se proyecta a través de los medios de prensa a la totalidad del país. El caso de Ypekua en el distrito de Repatriación, Caaguazú, fue elocuente. Tanta fue la publicidad y la presión que finalmente el dueño tuvo que negociar la venta de su tierra.

La importancia de la utilización de varias estrategias juntas se observa en el Cuadro 30, que cruza la variable estrategias con resultado. De los 32 casos favorables a los campesinos, en 17 los sin tierra recurrieron a cuatro estrategias y en ocho a cinco estrategias, lo que hace un total de 25. En otros términos, en un 78,12% los sin tierra han recurrido a estrategias múltiples para lograr el objetivo. De los 13 casos no resueltos, en tres han recurrido a todas las estrategias y en cuatro casos a cuatro estrategias. Con respecto a los casos favorables a los propietarios, de los 23 casos, en 14 (60,87%) los sin tierra utilizaron entre cuatro y cinco estrategias, lo cual demuestra que para los campesinos la lucha por la tierra no ha resultado nada fácil. El poder político y económico de los propietarios se ha demostrado en varios de los conflictos, al conseguir órdenes de desalojo antes de las 24 horas de producidas las ocupaciones, cuando teóricamente no debería procederse a los desalojos sin que la institución responsable, el IBR, agotara las negociaciones legales, así como establece uno de los artículos del Estatuto Agrario.

Cuadro 30
Estrategias juntas con resultados

Estrategias	A favor de ocupantes	A favor de propietarios	No resueltos	Sin dato	Total general
Toma de tierra		1		1	2
Negociación legal	2	1		1	4
Negociación legal/Toma de tierra	1		1		2
Negociación legal/Alianza			1		1
Negociación legal/Alianza/Movilizaciones			1		1
Negociación legal/Alianza/Toma de tierra/Movilizaciones	1	1			2
Investigación/Toma de tierra	2	2	1		5
Investigación/Alianza/Movilizaciones		1			1
Investigación/Alianza/Toma de tierra			1		1
Investigación/Negociación con el dueño/Toma de tierra	1				1
Investigación/Negociación con el dueño/Alianza/Toma de tierra	1		1		2
Investigación/Negociación legal		1			1
Investigación/Negociación legal/Toma de tierra	2	3			5
Investigación/Negociación legal/Toma de tierra/Movilizaciones	3				3
Investigación/Negociación legal/Alianza			1		1
Investigación/Negociación legal/Alianza/Toma de tierra	11	7	3		21
Investigación/Negociación legal/Alianza/Toma de tierra/Movilizaciones	8	6	3		17
Total general	32	23	13	2	70

<>

Fuente: matriz de conflictos elaborada en base a datos del Informativo Campesino y de las entrevistas.

Del análisis de los datos del cuadro de referencia se puede concluir que en un alto porcentaje de los conflictos de tierra los campesinos que tuvieron el acompañamiento de otros actores sociales, lo cual les ha posibilitado la utilización de varias estrategias juntas, llegaron a soluciones favorables, y si no llegaron no fue porque no se agotaron las instancias de negociación y de lucha, sino porque en todos los ámbitos de negociación salió favorecido el propietario. El hecho de que no se consiga la fracción reclamada u ocupada no implica que se haya abandonado la lucha, sino que la misma se traslada a otro sitio, a otra propiedad o a otra instancia de negociación. En cambio, en los casos en que los sin tierra no tuvieron ese acompañamiento, con una sola acción represiva los integrantes se desbandan y pierden protagonismo, y si ganan la parcela reclamada la posterior organización interna del asentamiento resulta más complicada debido a que la principal motivación por la que estaba unido al grupo era la tierra y no otra. En los dos departamentos estudiados se han dado casos en que las comisiones vecinales se desintegraron con la primera embestida de la fuerza pública, y en los asentamientos no controlados por organizaciones regionales o nacionales los asentados fácilmente pierden sus lotes por la presión de comerciantes y pequeños ganaderos, como ha ocurrido en Misiones en las colonias habilitadas de Villa Permanente y Mbocaya Poty, ambas del distrito de Ayolas (Arguello, 2001). Las modalidades organizativas también juegan un papel importante en el mantenimiento de la unidad en una colonia legalizada. En algunos asentamientos se trata de evitar la formación de pequeños grupos como comités de productores y se mantiene la organización al estilo de las asambleas comunales de las cuales todos/as participan.

La percepción campesina de la tierra

Otro factor que interviene muy fuertemente en la lucha por la tierra y que incursiona en el ámbito cultural es la percepción que tiene el campesino de la tierra. La afirmación de que la tierra es para quien la trabaja está muy arraigada en la mentalidad de los campesinos, y en esa medida es un factor importante que motiva y alimenta la lucha por la tierra. Para el campesino la tierra es un factor de producción y no de especulación o de status, como lo es para la oligarquía terrateniente. En un país en el que la economía aún depende en un alto porcentaje de la producción agropecuaria, la tierra constituye indudablemente una importante fuente de riqueza y también de poder. El 60% de las divisas por exportación en el período 1999-2000 correspondió al sector agropecuario y forestal. Por esta razón los grupos económicos ligados a la tierra se resisten a los intentos de modificación de la estructura de la tenencia de la tierra basada en el predominio de las grandes propiedades. La fuerte oposición a la realización del catastro rural obedecería a la negativa de los grandes propietarios al saneamiento jurídico y tributario de sus propiedades. En muchos inmuebles ocupados los sin tierra tenían sospechas de la existencia de excedentes fiscales anexados indebidamente por los propietarios; en tres de las ocupaciones se ha podido comprobar estos excedentes y se recuperaron, pero en otras no fue posible por la resistencia de los propietarios a someter sus propiedades a mensura judicial y por el desinterés del propio IBR en impulsar esta medida.

En cuanto a la visión que tiene el campesino de la tierra, si bien en ambos departamentos posee un fuerte contenido cultural, se pudo percibir variaciones en uno y otro contexto. Para los campesinos de Misiones, o por lo menos para algunos de los que fueron entrevistados/as, la tierra es aún percibida con un fuerte contenido ético/religioso, es la madre que debe dar sustento a todos, y por lo tanto la apropiación por parte de un grupo reducido es contraria al derecho natural de las personas a disfrutar de un bien que es patrimonio de todos. Esta manera de ver y entender la relación con la tierra viene de las prácticas y de las enseñanzas de las Ligas Agrarias. En Caaguazú, por su parte, los campesinos tienen una percepción un tanto diferente: la tierra es percibida como un medio de producción que permite al campesino sobrevivir. Al respecto, uno de los dirigentes señaló: “para el campesino la tierra es una fuente de vida, porque de allí se obtiene para que los compañeros puedan sobrevivir, la educación de los hijos, la salud, la vestimenta, depende completamente de la tierra. Realmente uno de los grandes problemas que tiene el campesinado es la tierra, la única profesión que tiene los compañeros es el trabajo por la tierra. Digamos que el 99% del campesinado no tiene otra profesión porque no tuvo ni tienen la posibilidad de estudiar otra profesión y por eso el trabajo por la tierra constituye una fuente de vida, porque de allí debe obtener el sustento de la familia y por eso para nosotros es de mucha importancia” (Vázquez, 2001).

Consecuencias de la lucha por la tierra

El proceso democrático iniciado con la ruptura del régimen autoritario no significó para la gran mayoría de la población, y específicamente para los campesinos, un avance en el mejoramiento de sus condiciones de vida. A once años de ese proceso, los campesinos siguen obligados a realizar ocupaciones, a changar –realizar trabajos extraprediales– y a migrar. Esa permanente búsqueda de su bienestar, sin respuesta alguna por parte de un Estado que cada vez lo conduce hacia una mayor marginalidad, lo ha degradado y lo ha marginado del avance tecnológico de la sociedad. La ilusión de la tierra propia nacida con la desaparición del régimen stronista se vio frustrada, y numerosos campesinos sin tierra siguen deambulando en la búsqueda de una parcela de tierra donde asentarse y desarrollar la actividad que saben hacer, la agricultura. La expresión de Monseñor Oscar Páez es elocuente: “nadie ocupa predios por puro gusto [...] La invasión no es una situación cómoda. Habría que ir a ver cómo viven aquellos que están acampados y aún los que están en ocupaciones más o menos legitimadas; es una situación de pobreza, de sufrimiento y de estrechez extrema” (IC N° 56, 1993: 2).

Cabe recordar que de los 110 mil sin tierra censados en 1989, a fines de 1999 se han asentado en las colonias habilitadas aproximadamente 47.600, el resto continúa en la búsqueda. Si a esta cantidad de sin tierra que aún no ha encontrado un lugar se le suman las 115 mil explotaciones agropecuarias de menos de 5 ha, que tienen un promedio de 2 ha por explotación, la cantidad de sin tierra probablemente se haya duplicado o triplicado a fines de 1999. Atendiendo a las cifras señaladas, probablemente la cantidad de sin tierra esté muy

cerca de las estimaciones de las organizaciones campesinas, las cuales calculan en alrededor de 250 a 300 mil en todo el país, cifra desmentida pero no de manera demostrada por el gobierno.

El desinterés, la falta de voluntad política o la viabilidad política para afectar los grandes latifundios son factores que obligan a los campesinos a recurrir a las ocupaciones de propiedades privadas y no cultivadas como el mecanismo de presión más importante para el logro de sus objetivos, que es conseguir una parcela propia donde asentarse y desarrollar sus actividades productivas. Si el Estado sigue con su política de ignorar la asimetría en la distribución de la tierra, de mostrar su falta de voluntad para desafectar la tierra a los políticos, a los militares y a los ganaderos, y los empresarios insisten en tratar el problema de la exclusión de la tierra como un simple problema de desocupación, lo cual se resolvería creando fuentes de trabajo, el conflicto podría adquirir un cariz cada vez más violento, y las consecuencias más dramáticas recaerían sobre la población campesina.

Para el análisis del conflicto de la tierra el presente estudio priorizó el enfoque del desarrollo de la ciudadanía, a partir del cual la lucha por la tierra se concibe fundamentalmente como una lucha por los derechos que han sido sistemáticamente conculcados por un Estado incapaz de garantizar condiciones mínimas de bienestar a este amplio sector de la población. Este enfoque está muy ligado a otros que analizan el surgimiento de los conflictos de tierra como reacción a factores tales como la descomposición campesina.

El futuro del campesinado en la percepción de los diferentes actores sociales

El futuro del campesinado es un tema poco debatido en el Paraguay, quizás porque continúa siendo el sector mayoritario y gran parte del desarrollo económico descansa sobre la producción agrícola, ganadera y forestal. Este hecho probablemente constituya la razón por la cual ese debate no sea una necesidad sentida y se considere que el campesinado aún tiene mucho que ofrecer a este país como principal productor de alimentos. El debate sobre la descampesinización o recampesinización, que fue intenso en América Latina en las décadas de los '70 y '80, ha pasado casi desapercibido en el país. Sin embargo, el incesante despoblamiento de las comunidades rurales como consecuencia de la crisis de la economía campesina comenzó a afectar de manera considerable a estas comunidades. La migración temporal o definitiva del campo a la ciudad y a los países vecinos constituyó siempre una vía de escape para las familias campesinas cuando su estabilidad económica se deterioraba. Este fenómeno es casi una constante, pero se profundiza en períodos de crisis, cuando la producción es afectada por factores climáticos adversos o por caídas en los precios de los productos de renta. No es un fenómeno nuevo. Ya Eligio Ayala en 1915 en su libro *Migraciones* denunciaba la emigración como "incesante hemorragia, que debilita y deprime nuestra incipiente producción económica; nuestra campaña se despuebla y la economía exangüe languidece y se paraliza [...]. Los cultivadores agrícolas, los peones hartos de profesión tan baja y envilecida, dan manotadas a las puertas de sus pobres hogares y se marchan camino de la ciudad y del extranjero" (Ayala, 1986).

La emigración afecta principalmente a los/as jóvenes que ante la falta de tierra, junto con la baja productividad y los bajos precios de los productos agrícolas, son obligados a abandonar sus comunidades en la búsqueda de un futuro más alentador. Esta sangría es alimentada en muchos casos por sus propios padres, quienes prefieren que sus hijos/as no pasen las penurias por las que ellos pasaron y entonces tratan de educarlos para la vida en las ciudades. Otro de los factores que paradójicamente suele ser señalado por los adultos con relación a los jóvenes como causa de la emigración es la pérdida de los valores culturales propios como la música, la forma de vestirse, etc., que hacen que el o la joven pierda interés en su terruño y mire el futuro fuera de sus comunidades. En 1992 los intendentes municipales de los departamentos de Misiones y Ñeembucú manifestaron su preocupación por los miles de campesinos/as que han emprendido el éxodo hacia Buenos Aires en busca de subsistencia. Los datos que manejaban daban cuenta de que el 20% de la población económicamente activa se estaba trasladando a la capital argentina, del cual el 80% eran jóvenes menores de 25 años (IC N° 42, 1992: 2 y 3).

En Caaguazú, estudios realizados en nueve comunidades campesinas mostraban de manera alarmante el rápido proceso de diferenciación social en colonias fundadas en los '60 y

los '80. De 1.300 hogares estimados en estas colonias, cerca del 50% se encontraba en la categoría de indigentes, lo que implica que su sobrevivencia depende en una alta proporción del trabajo asalariado, un 45% permanecía en la categoría de campesinos pobres que todavía sobreviven de lo que producen en su tierra, y apenas un 7% se ubicaba en la categoría de campesinos acomodados, con suficiente tierra y equipamiento para producir su tierra. Los dos indicadores claves utilizados para definir cada una de las categorías de campesinos fueron la tenencia de la tierra y las hectáreas cultivadas. En el primer caso se pudo observar una tendencia clara hacia la minifundización, en colonias en las que inicialmente fueron distribuidas tierras de 20 ha, y por otro lado las familias campesinas muy pobres en casi todos los casos ya no cultivaban más de una hectárea. En estas colonias, en estas condiciones, la única alternativa que quedaba al joven era abandonar su casa y buscar empleos en las ciudades (Riquelme et al, 1998: 3).

Ante esta realidad alarmante, los dirigentes campesinos entrevistados manifestaron opiniones dispares: "Veo que el futuro será mejor", expresa uno de ellos, "porque hay mayor conciencia del problema que afecta al sector campesino y esa conciencia no es sólo de algunos dirigentes ni se da en algunas comunidades, sino que se proyecta a nivel nacional e internacional y además con otros sectores sociales como los trabajadores urbanos. Hay una unión ideológica muy grande, las acciones se proyectan como organización debido a la común necesidad de salir de la pobreza" (Argüello, 2001). Para otros, en cambio, dentro de este sistema político y económico neoliberal ya no tienen futuro. Las tendencias a privatizar todo, vaciando al Estado de recursos y de responsabilidades para garantizar un mínimo equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad, conducirá irremediablemente a una mayor pauperización y por ende a la desaparición de las capas más pobres del campesinado. En el caso de la tierra, si el campesino no cuenta con el apoyo del Estado, ya no podrá jamás contar con un pedazo de tierra. La única manera de revertir o de amortiguar esta tendencia es la búsqueda de la unidad entre los sectores más vulnerables, lo que aún llevará un proceso largo debido a las múltiples diferencias existentes, algunas de carácter ideológico, otras de liderazgo, y la pobreza extrema, que conduce a la única preocupación por la sobrevivencia a cualquier costo, lo que los hace vulnerables a las apetencias personales de políticos inescrupulosos o simplemente los conduce a la absoluta imposibilidad de pensar y de actuar más allá de la satisfacción de su necesidad básica de sobrevivencia: "Nosotros entendemos que si los compañeros no se organizan fuertemente y si no se ayudan mutuamente ya no tiene futuro el campesino. Va a tener futuro en la medida en que se organice y recupere la tierra y la soberanía, esos son nuestros objetivos" (Soto, 2001).

Para otros dirigentes el futuro depende de la capacidad de las organizaciones de plantear estrategias de solución de carácter global y no sectoriales. La agricultura desvinculada de la industria y de los servicios no tendrá capacidad de sobrevivir. La competencia a nivel del MERCOSUR y las exigencias del consumidor necesariamente deben conducir a replanteos del modelo de desarrollo económico del país sobre la base de un desarrollo rural sustentable (dirigentes de la FNC, 1999).

Para las autoridades el futuro depende de que se defina una reforma agraria en el contexto de un desarrollo rural cuyo marco sea el desarrollo nacional, acompañado por comunidades rurales que estimulen las organizaciones autogestionarias, diversificando sus gestiones, de tal manera que éstas dejen de ser organizaciones puramente reivindicativas y desarrollen actividades productivas que dinamicen de nuevo a dichas comunidades. No es posible pensar en un desarrollo rural que parta de la industrialización si no se produce la materia prima básica para la industria (Ibáñez, 2001). El futuro del campesinado está fuertemente asociado al futuro del país. La reactivación económica y un ataque orgánico al problema de la pobreza comienzan con la reactivación de la agricultura, de una agricultura eficiente sin exclusión, articulada y complementada entre los distintos sectores y modos de producción (Halley Merlo, 2001).

Para los propietarios la solución al problema del campesinado está en la creación de fuentes de empleo y un apoyo global a los que están asentados, a los que trabajan. Se necesita un inventario de las tierras ya distribuidas y entregar las que quedan ociosas a los que tienen vocación agrícola, que quieren trabajar y producirlas, y que el Estado garantice seguridad a las inversiones productivas. Si no se procede de esta manera, se seguirá arrastrando el mismo problema (Trappani y Acosta, 2001).

Las apreciaciones de los diferentes actores sobre el problema que afecta al sector rural, y más concretamente al sector campesino, parecen coincidir en un presupuesto básico: la

necesidad de generar propuestas de reforma agraria y de desarrollo rural desde un enfoque global, que además de la diversificación productiva implique la transformación de la materia prima agrícola de tal manera que la mano de obra campesina sobrante en la agricultura pueda ser ocupada en la transformación de dicha materia prima. Este paso implica necesariamente una concertación, que los distintos sectores que operan en este ámbito abandonen sus posturas corporativistas, que permitan concensuar programas y propuestas de reactivación económica globales. Experiencias de concertación ha habido, pero fracasaron debido a la intransigencia de ciertos sectores y porque no hubo intención real de modificar la estructura de la tenencia de la tierra, que es uno de los principales obstáculos para el desarrollo rural. Uno de esos intentos fue el Consejo Nacional de Desarrollo Rural (CONCODER), creado en 1989, cuyo objetivo principal era promover el desarrollo rural con la apertura de nuevas colonias que incorporen a los campesinos sin tierra a los programas de desarrollo productivo.

Otro paso necesario tiene que ver con la reforma del marco legal e institucional, cuya ambigüedad y parcialismo favorecen a los que detentan el poder económico y político y marginan a los sectores carenciados, quienes se ven imposibilitados de acceder a los principales factores de producción que son la tierra y el capital. Cuando se habla de cambios del marco institucional es importante pensar no simplemente en la reestructuración de las instituciones ya existentes, sino en crear una nueva institucionalidad, que implique la incorporación no sólo de las tradicionales (MAG, IBR, CAH, BNF), sino además de instituciones que agrupan a los beneficiarios y potenciales beneficiarios, como cooperativas, comisiones vecinales, organizaciones gremiales, etc., porque son éstas las que dinamizan la sociedad en contraste con las grandes instituciones cuya burocracia se mueve muy lentamente e incluso obstaculiza su funcionamiento normal. Estas pequeñas instituciones no han tenido en el país oportunidades de desarrollarse, de participar formalmente en los procesos de cambios; han estado al margen de las grandes decisiones, siempre han sido consideradas objetos y no sujetos de las reformas, aunque en los papeles, en la legislación, aparezcan como tales.

Por otro lado, en todos los países latinoamericanos en los cuales se llevaron a cabo reformas agrarias éstas fueron reivindicadas como un acto de justicia social. Se pensaba eliminar o mitigar las grandes injusticias con la reforma agraria. Actualmente, en cambio, la reforma agraria parece ser concebida cada vez más como un factor de desarrollo y un acto de planificación (Le Coz, 1976). Si esto es así, un requisito fundamental es la participación de los actores en el diseño y en la ejecución del proceso de reforma agraria y de desarrollo.

Crear las condiciones institucionales necesarias y adecuadas para la reforma agraria y el desarrollo nacional debe partir de una premisa básica, la participación amplia de los sectores sociales, políticos, religiosos, interesados en modificar la actual injusticia en la distribución de la tierra y en lograr el uso óptimo de los recursos para obtener un desarrollo sustentable con mayor equidad. También se debe pensar en revalorizar lo público, donde lo público no sea visto como algo extraño y donde las autoridades y los propios funcionarios sean conscientes de su rol y asuman su compromiso de trabajar por el desarrollo del país. Además, se debe aprovechar las distintas alternativas que en el actual proceso político ofrecen los espacios de poder local, antes monopolizados por los agentes del régimen autoritario (Galeano y Yore, 1994). Las dificultades no serán pocas. Las mayores provendrán de los grupos dominantes, que todavía basan su poder y su prestigio en la tenencia de la tierra. Otras vendrán por el lado de la participación. La participación supone una mínima capacidad económica de los individuos y de los grupos sociales que, en las actuales condiciones, será una de las mayores barreras a sortear. Los pobres, que deben recrear permanentemente su estrategia de sobrevivencia, han perdido hasta su capacidad de participar y de pensar en el otro. Otras dificultades van a ser de carácter político e ideológico, o de restricciones administrativas y resistencias en el propio funcionariado, "puesto que los programas participativos implican directa o indirectamente la pérdida de poder y de discrecionalidad" (Furlan y Gorrochategui, 1989).

Las nuevas propuestas de reforma agraria y de desarrollo rural deben contemplar en sus articulados los mecanismos que permitan involucrar más directamente a los poderes locales y regionales y a todas las otras formas de expresión social en la búsqueda de una solución global al problema de la reforma agraria y el desarrollo rural. Es necesario comprender que los gobiernos locales son instrumentos de desarrollo local por estar cerca de los problemas y porque pueden posibilitar la participación de todos los actores interesados en la planificación y ejecución de estrategias puntuales de desarrollo. El peligro que se cierne sobre las nuevas propuestas es que las soluciones podrían reiterarse "sobre la vieja matriz de la centralidad del

Estado nacional y el escaso protagonismo e imaginación de las administraciones locales. Se acentúa de este modo la sobredemanda del Estado central incrementando las disfunciones propias de la centralización: burocratización, sectorialización, consolidación de rutinas y trabas en las tramitaciones, incremento de los gastos de funcionamiento de la estructura y del aparato" (Spagnolo, 1989).

En síntesis, el problema que genera la exclusión de la tierra de una gran cantidad de campesinos, como consecuencia de la concentración de la misma en poder de unos pocos terratenientes, seguirá siendo probablemente el mayor desafío para las autoridades políticas y para toda la sociedad. Si no hay voluntad para erradicar la pobreza en el campo, que se va generalizando, y si las ciudades no ofrecen tampoco posibilidades para absorber la crisis del campo, el conflicto seguirá siendo la manera habitual de resolución de esta crisis de la exclusión de la tierra y, en consecuencia, de la pobreza.

Anexo Cuadros

Anexo Cuadro 1

Resumen de colonias habilitadas por departamentos 1989-1999

Nº	Departamento	Colonias	Sup. (ha)	Lotes
1	Concepción	10	247.495	3.808
2	San Pedro	57	125.461	10.770
3	Cordillera	13	4.122	1.610
4	Guairá	3	2.085	281
5	Caaguazú	42	67.515	6.990
6	Caazapá	11	31.393	2.874
7	Itapúa	19	24.910	3.097
8	Misiones	15	6.397	1.195
9	Paraguarí	5	1.124	308
10	Alto Paraná	41	51.007	4.650
11	Central	2	216	227
12	Ñeembucú	1	2.367	168
13	Amambay	8	27.696	2.633
14	Canindeyú	32	110.084	8.047
15	Pte. Hayes	2	20.016	379
16	Alto Paraguay	4	735.500	601
		265	1.457.388	47.638

<>

Fuente: IBR, 2000.

Anexo Cuadro 2

Colonias oficiales habilitadas departamento Caaguazú años 1898-1999

Nº	Colonia	Distrito	Superficie	Lotes	Resolución Nº
1	Amp. Col. Cecilio Báez	Cecilio Báez	337	40	973/94
2	La Picada	Caaguazú	2.000	180	1.238/96
3	San Sebastian	Raúl A. Oviedo	1.064	102	508/94
4	Ampl. Col. Tembiapora	Raúl A. Oviedo	500	57	378/94
5	Ampl. Col. Tembiapora	Raúl A. Oviedo	601	83	165/94
6	Niño Salvador	Repatriación	503	67	508/94
7	El Triunfo	Repatriación	2.692	290	165/94
8	Nueva Esperanza	Yhú	10.000	862	335/94
9	Mariscal López	Yhú	6.307	630	1.238/96
10	Santa Silvia	Yhú	2.558	124	508/94
11	Ma. Auxiliadora	Yhú	360	45	378/94
12	Arroyo Guazú del Yhú	Yhú	1.219	96	378/94
13	Tembiaporá	Raúl A. Oviedo	3.679	257	554/78
14	Col. Caaguazú Poty	Yhú	3.900	301	149/95
15	Col. Culantrillo	J.E. Estigarribia	1.646	177	83/95
16	Col. Ñande Rogaité	Raúl A. Oviedo	1.674	162	83/95
17	Guido Almada	Cleto Romero	2.376	312	381/94
18	Col. Syryca	Raúl A. Oviedo	571	73	869/95
19	N.R. Isla Vera	J. M. Frutos	206	36	973/94
20	Col. Yuquyry	J. M. Frutos	464	40	1.158/96
21	Col. San Marcos	Repatriación	342	38	1.158/96
22	Col. Tobatiry	Carayaó	1.375	112	1.158/96
23	Ampl. Col. San Marcos	Repatriación	804	77	715/97
24	Pindo	Raúl A. Oviedo	2.457	328	715/97
25	Correntina	Yhú	179	16	715/97
26	Chemenda	Raúl A. Oviedo	510	60	715/97
27	Ampl. Col. Caaguazú	Caaguazú	339	85	715/97
28	Ampl. Tecoyoya	Yhú	9.065	55	1.290/97
29	Arroyo Hondo	Simon Bolivar	340	35	1.290/97
30	San Francisco	Repatriación	2.739	243	427/90
31	P.U. Colonia Caaguazú	Caaguazú	60	987	722/98
32	P.U. Colonia Niño Salvador	Repatriación	6	74	722/98
33	P.U. Nro. 2- Colonia el Triunfo	Repatriación	8	50	722/98
34	P.U. Nro. 3- Colonia el Triunfo	Repatriación	2	29	722/98
35	P.U. Nro. 4- Colonia el Triunfo	Repatriación	8	70	722/98
36	Colonia Torin Guazú	J.E. Estigarribia	350	38	722/98
37	Ampl. Colonia Ñande Maitei	Caaguazú	1.405	200	1.325/97
38	Ampl. Colonia Yvy Pytá	Yhú	1.227	123	1.325/97
39	Ampl. Colonia Guajhory	Yhú	313	30	1.325/97
40	Yguazú Norte	R.A. Oviedo	2.051	338	1.325/97
41	Ampl. Arroyo Hondo	Simon Bolivar	382	35	1.325/97
42	Ampl. De la Colonia Ko'e Rory	R.A. Oviedo	896	33	1.066/99
Totales			67.515	6.990	

Fuente: IBR, 2000.

Anexo Cuadro 3

Colonias oficiales habilitadas departamento Misiones años 1989-1999

Nº	Colonia	Distrito	Superficie	Lotes	Resolución Nº
1	Mbocaya Poty	Ayolas	1.808	98	1.238/96
2	Col. San Jorge	San Ignacio	681	100	1.158/96
3	N.R. Ysypo Potrero	San Miguel	200	65	85/95
4	P.U. San Ramón	Santiago	25	92	869/95
5	N.R. Pyta-í	San Ignacio	122	20	427/97
6	Atinguy	Ayolas	1.453	128	427/97
7	N.R. San Ramón	Santiago	498	101	427/97
8	N.R. Cerro Costa	Santa María	350	62	787/97
9	Misiones Poty	Ayolas	1.000	113	1.290/97
10	Misiones Poty	Ayolas	38	58	100/99
11	Ampl. N.R. San Benito	San Ignacio	21	5	720/98
12	Ampl. San Gabriel	San Ignacio	44	12	721/98
13	Ampl. Colonia San Juan Potrero	San Ignacio	40	10	721/98
14	Ampl. N.R. Isla Tobatí	San Juan Bautista	70	61	41/99
15	P.U. Colonia Atinguy	Ayolas	47	270	722/98
			6.397	1.195	

<>

Fuente: IBR, 2000.

Anexo Cuadro 4

Tamaño del predio con resultado

Tamaño <i>Categoría</i>	Resultado				Total general
	A favor de los ocupantes	A favor de los propietarios	No resueltos	Sin dato	
1.000 a 5.000 has	14	11	5		30
Más de 5.000 has	12	7	4		23
Menos de 1.000 has	6	5	4	1	16
Sin dato				1	1
Total general	32	23	13	2	70

<>

Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 5
Año de ocupación por departamento

Año	Caaguazú	Misiones	Total general
1942	2		2
1952	1		1
1968	1		1
1970	1		1
1973	1		1
1974	1		1
1977	1		1
1981	1		1
1982	1		1
1986	1		1
1988	2		2
1989	4		4
1990	6		6
1991	5	3	8
1992	1		1
1993	8	1	9
1994	6	1	7
1995	6		6
1996	4	1	5
1997	3	1	4
1998		1	1
1999	1	1	2
No ocupado	3	1	4
Total general	60	10	70



Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 6

Lista de campesinos asesinados desde 1990 a 1999

Nº	Departamento	Distrito	Año	Nombre	Circunstancia	Autores
1	Cordillera	Juan de Mena	S/d	Regina Marecos	Manifestación	Infarto en la plaza
2	Canindeyu	Ypehu	1990	Arsenio Páez	Emboscada	Dos brasileños
3	Alto Paraná	Naranjal	1990	Ramón Génes	Emboscada	Otros campesinos
4	Alto Paraná	Minga Guazú	1990	Francisco Báez G.	A raíz de tortura	Policías
5	Alto Paraná	Hernandarias	1990	Nicolás Cáceres	Emboscada	Policías con civiles
6	Alto Paraná	S/d	1990	Benjamín Balcázar	Emboscada	Antonio Scapini
7	San Pedro	Kapiivary	1991	Aldo Brizuela	Desalojo	Falta de atención médica
8	Canindeyu	Corpus Christi	1992	Bernardo Ramírez	Emboscada	Sto.Víctor Benítez
9	Alto Paraná	Naranjal	1992	Roberto Algarín	Emboscada	Santiago Coronel
10	Alto Paraná	Mbaracayu	1992	Fidencio Benítez	Emboscada	Nelson Maciel
11	Alto Paraná	Minga Porã	1992	Benito Benítez	Emboscada	Civiles armados
12	Canindeyu	Curuguaty	1992	Esteban Garay	Accidental	Dirigida a otra persona
13	San Pedro	Gral. Resquín	1992	Alodio Duarte	Emboscada	Civiles armados
14	Cordillera	Juan de Mena	1992	Rubén Medina	Emboscada	Nicanor Cabañas
15	Concepción	Horqueta	1992	Alvarenga	Emboscada	S/d
16	Itapúa	Carlos A López	1994	Esteban Balbuena	Emboscada	Demetrio Vigo
17	San Pedro	San Estanislao	1994	Sebastián Larrosa	Manifestación	Sub.of. A. Palacios
18	S/d	S/d	1994	Máximo Prieto	S/d	S/d
19	Caaguazú	3 de Febrero	1994	Rumildo Correa	Emboscada	S/d
20	S/d	S/d	1994	Sergio Villalba	S/d	S/d
21	Itapúa	Mayor Otaño	1994	Germán Ayala	Emboscada	S/d
22	Cordillera	Juan de Mena	1994	Cándido Ozuna	Emboscada	Civiles armados
23	Cordillera	Juan de Mena	1994	Hugo Rolón	Emboscada	Civiles armados
24	Cordillera	Juan de Mena	1994	Charles J. Ferreira	Emboscada	Civiles armados
25	Canindeyu	F.C.Alvarez	1994	Rafael Pérez Roa	Atentado	Empleado de estancia
26	Alto Paraná	Iruña	1995	Gregorio García	Emboscada	R.Ortigoza y F.Gonzal
27	Cordillera	Unión	1995	Leoncio Medina	Emboscada	Civiles armados
28	Cordillera	Unión	1995	Amalio Oviedo	Emboscada	Civiles armados
29	Amambay	Capitán Bado	1995	Pedro Balbuena	Emboscada	Desconocidos
30	S/d	S/d	1995	Flavio Martínez	S/d	S/d
31	San Pedro	25 de Diciembre	1995	Angel Coronel	Emboscada	Pedro Ahrens L.
32	San Pedro	Lima	1995	Agapito Cañete	Incendio	No se sabe
33	San Pedro	Lima	1995	Anastacio Cañete	Incendio	No se sabe
34	San Pedro	Kapiivary	1995	Reinaldo Díaz	Emboscada	Hugo Notario
35	Itapúa	Mayor Otaño	1995	Isidro Gómez	Emboscada	No se sabe
36	San Pedro	Santa Rosa A.	1995	Pedro Giménez	Manifestación	Policías
37	Canindeyu	Curuguaty	1996	Richar R. Sosa	Emboscada	Capangas armados
38	San Pedro	Gral. Resquín	1996	Germán Cuenca G.	Emboscada	No se sabe
39	San Pedro	Gral. Resquín	1996	José G. Cuenca G.	Emboscada	No se sabe
40	Alto Paraná	Minga Guazú	1996	Damiano Martínez	En la ocupación	Teresio Agüero y otro
41	Caaguazú	J.E.Estigarribia	1996	Arsenio Vázquez	Emboscada	Civiles armados
42	Caaguazú	J.E.Estigarribia	1996	Mariano Díaz	Emboscada	Civiles armados
43	Caaguazú	Cleto Romero	1996	José Martínez	Emboscada	Civiles armados
44	Concepción	Horqueta	S/d	Anacleto Barrios	Emboscada	Civiles armados
45	Caazapá	Yuty	1996	Pablo F. Benítez	Emboscada	Civiles armados
46	Ñeembucú	San Juan del N.	1998	Esteban Báez	Derrame cerebral	En la cárcel de Tacum
47	Caaguazú	San Estanislao	1998	Julián Benítez P.	Emboscada	Civiles armados
48	Concepción	Félix López	1998	Gumerindo Pavón	Emboscada	Civiles armados
49	Caaguazú	Caaguazú	1998	Juliana Fleitas	Desalojo	Policías
50	Caaguazú	Caaguazú	1999	Cristóbal Espínola	Manifestación	Oviedistas
51	Alto Paraná	Hernandarias	1999	Arnaldo Delvalle V.	Emboscada	Civiles armados
52	Alto Paraná	Hernandarias	1999	José Burgos	Emboscada	Civiles armados
53	Canindeyu	Ygatimi	1999	Agustín Lezme C.	Emboscada	Civiles armados
54	San Pedro	Gral. Resquín	1999	Crescencia González	Ocupación	Policía Nacional
55	Concepción	Félix López	1999	Francisco Jara	Emboscada	Civiles armados
56	Caazapá	S.J.Nepomucen	S/d	Silvio Rotela	S/d	S/d
57	Caazapá	S.J.Nepomucen	S/d	Martín Aguirre	S/d	S/d
58	Caazapá	S.J.Nepomucen	S/d	Bruno Aguirre	S/d	S/d
59	Caazapá	S.J.Nepomucen	S/d	Francisco Cantero	S/d	S/d
60	Caazapá	S.J.Nepomucen	S/d	César R. Cantero	S/d	S/d



Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 7
Eventos con resultados

Eventos	A favor de los ocupantes	A favor de los propietarios	No resueltos	Sin dato	Total general
1 ocupación	20	10	7		37
2 a 3 ocupaciones	7	7	3		17
Más de tres ocupaciones	5	4	2		11
No ocupado		2	1	1	4
Sin dato				1	1
Total general	32	23	13	2	70

<>

Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 8
Negociación legal con resultado

Negociación legal	A favor de los ocupantes	A favor de los propietarios	No resueltos	Sin dato	Total general
Negociación con el dueño	2		1		3
Con negociación legal	28	19	10	1	58
Sin negociación	2	4	2	1	9
Total general	32	23	13	2	70

<>

Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 9
Alianzas con resultado

Alianzas	A favor de los ocupantes	A favor de los propietarios	No resueltos	Sin dato	Total general
Con alianza	21	15	11		47
Sin alianza	11	8	2	2	23
Total general	32	23	13	2	70

<>

Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 10
Tomas de tierra con resultado

Tomas de tierra	A favor de los ocupantes	A favor de los propietarios	No resueltos	Sin dato	Total general
Con tomas de tierra	30	20	10	1	61
Sin tomas de tierra	2	3	3	1	9
Total general	32	23	13	2	70

<>

Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 11
Movilizaciones con resultado

Movilizaciones	A favor de los ocupantes	A favor de los propietarios	No resueltos	Sin dato	Total general
Con movilización	12	8	4		24
Sin movilización	20	15	9	2	45
Total general	32	23	13	2	70

<>

Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 12
Organización campesina con resultado

Organización campesina	A favor de los ocupantes	A favor de los propietarios	No resueltos	Sin dato	Total general
Con apoyo	21	14	9		44
Sin apoyo	11	9	4	2	26
Total general	32	23	13	2	70

<>

Fuente: matriz de conflictos.

Anexo Cuadro 13
Censo agrario según año

Estrato	Expl. Agric.	Expl. Agric. (%)	Superficie	Superficie (%)	Año
Menos de 5	67.121	44,86	162.360,5	0,97	1956
5 a 10	34.940	23,36	230.207,7	1,37	1956
10 a 20	25.192	16,84	316.663	1,88	1956
20 a 100	15.819	10,5	524.418,9	3,12	1956
100 a 1000	3.391	2,27	997.762,4	5,93	1956
1000 y más	1.449	1,04	14.548.859,9	87,73	1956

Estrato	Expl. Agric.	Expl. Agric. (%)	Superficie	Superficie (%)	Año
Sin tierra	7.278	2,92	0		1981
Menos de 5	82.376	33,09	169.143,5	0,77	1981
5 a 10	49.511	19,89	322.049,3	1,47	1981
10 a 20	56.476	22,69	694.188,4	3,16	1981
20 a 50	36.007	14,46	942.357,2	4,3	1981
50 a 200	11.020	4,43	1.003.558,6	4,57	1981
200 a 1000	3.973	1,6	1.565.801,5	7,14	1981
1000 y más	2.289	0,92	17.243.432	78,59	1981

Estrato	Expl. Agric.	Expl. Agric. (%)	Superficie	Superficie (%)	Año
Sin tierra	7.962	2,6			1991
Menos de 5	114.788	37,36	231.304	0,97	1991
5 a 10	66.605	21,68	430.658	1,81	1991
10 a 20	66.223	21,55	806.802	3,39	1991
20 a 50	31.519	10,26	857.909	3,6	1991
50 a 200	211.856	3,86	1.071.817	4,6	1991
200 a 1000	5.028	1,64	2.060.986	8,65	1991
1000 y más	3.240	1,05	18.358.260	77,08	1991

<>

Fuente: MAG, 1956, 1985 y 1993.

Anexo fotografías (archivo Área Sociogremial del CDE)

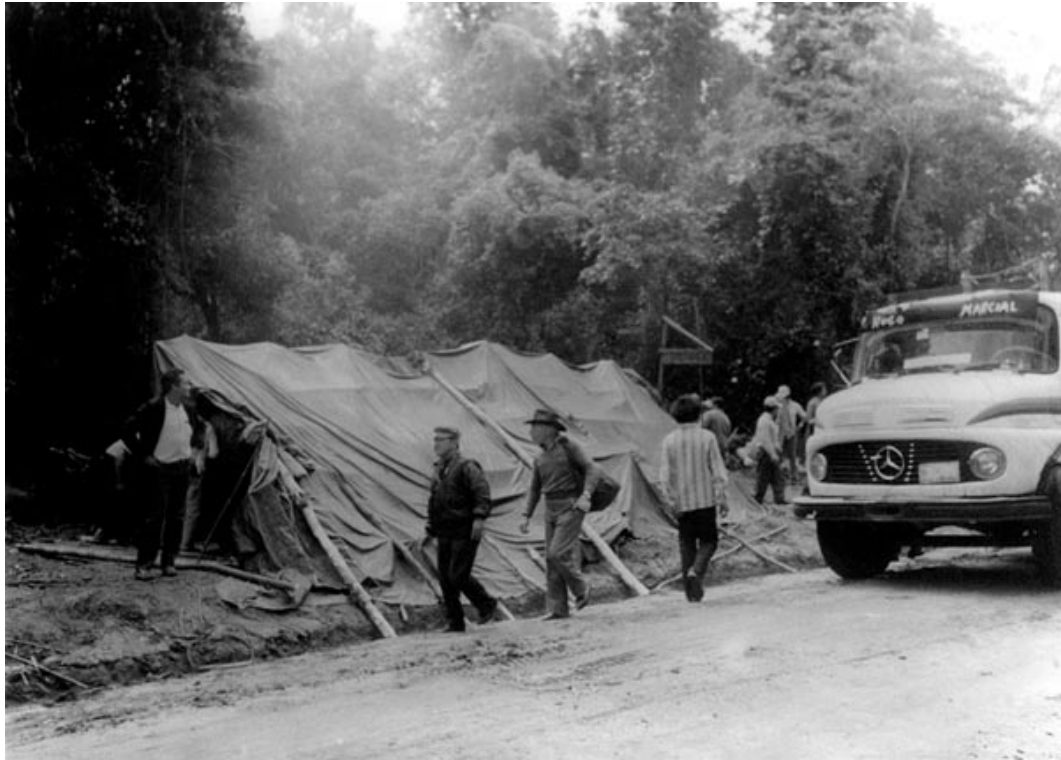
Recordación de la Pascua Dolorosa en Sta. Rosa, Misiones - Abril 1995



Marcha de Campesinos de Misiones a Asunción, Kuruzu Yvy Rape Rekavo – Noviembre 1990



Ocupantes de las tierras de la Empresa Águila Real - Diciembre 1991



Ocupantes de Luz y Esperanza frente al Parlamento - Septiembre 1993



Ocupantes de la estancia Sta. Carmen - Julio 1994



Ocupantes de C. Romero y J. de Mena en la Plaza Uruguaya, Asunción - Abril 1993



Anexo Entrevistas

Acosta Núñez, Miguel: Presidente de la Regional Misiones de la ARP.

Alderete, Alberto: Asesor jurídico de SEIJA.

Arévalos, Aureliano y otros: Miembros del MCP de Caaguazú.

Arguello, Benito y otros: Ocupación de la Estancia Don Emilio en San Juan Bautista Misiones.

Blanco, Luis: Ganadero de Caaguazú.

Brítez, Digno: Asesor jurídico del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE).

Brun, Julio: Gerente del Area Desarrollo del IBR.

Flecha, Eladio y Gómez, Marcial: Mesa de análisis sobre la problemática campesina (2000).

Gómez, Marcial: Secretario de Conflictos de la Federación Nacional Campesina (FNC).

Halley Merlo, Hugo: Expresidente del IBR 1994/99.

Jara, Albino: Organización Campesina de Simón Bolívar.

Lezme, Higinio; Paredes, José María y Santa Cruz, Juan: Asentamiento Juliana Fleitas de Ypekua, Repatriación, Caaguazú.

López, Ana: Asentamiento Martín Rolón, San Ignacio, Misiones.

Martínez, Estanislao: Presidente de la Organización Nacional Campesina (ONAC).

Quiroga, Damacio: Secretario General de la Organización Departamental de Caaguazú del Movimiento Campesino Paraguay (MCP).

Ramírez, María Nemesia: Asentamiento Martín Rolón, San Ignacio, Misiones, presidenta del Movimiento Paraguayo de Campesinos sin Tierra de Misiones.

Rodríguez, Antonio: Funcionario del Instituto Nacional del Indígena (INDI).

Rodríguez, Hugo: Gerente de la Oficina Regional del IBR de Caaguazú.

Soto, Héctor: Presidente de la Organización Campesina de Misiones (OCM).

Talavera, Mario: Directivo de la OCM y responsable de la Secretaría de Sintierra de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).

Trappani, Carlos: Vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Vázquez, Adrián: Presidente de la Asociación Regional de Productores Agrícolas de Caaguazú (ARPAC).

Bibliografía

- Alba Vega, Carlos 1990 "Las regiones industriales y los empresarios de México" en *Revista Mexicana de Sociología* (México: UNAM) Año LII / N° 2, abril-junio.
- Alcaraz, Mauricio 1987 *Organizaciones populares campesinas. Origen y naturaleza* (Asunción: SEAS).
- Arditti, Benjamín y José Carlos Rodríguez 1987 *La sociedad a pesar del Estado. Movimientos sociales y recuperación democrática en el Paraguay* (Asunción: CDE).
- Ayala, Eligio 1986[a] *La Evolución de la Economía Agraria en el Paraguay* (Asunción: Editorial Histórica).
- Ayala, Eligio 1986[b] (1915) *Migraciones* (Asunción: Editorial Histórica).
- Bareiro, Víctor 1997 *Notas sobre el proceso agrario paraguayo* (Asunción: Pastoral Social Nacional).
- Barrios, Federico 1984 "El proceso histórico de deterioro de la economía campesina" en Morínigo, José Nicolás et al *Tierra y Sociedad: Problemática de la tierra urbana, rural e indígena en el Paraguay* (Asunción: CEP) Cuadernos de Pastoral Social N° 4.
- Borda, Dionisio 1990 "Proceso económico y el sector agrario" en Borda, Dionisio (comp.) *Estado y políticas públicas: aportes para una REFORMA AGRARIA* (Asunción: NEIKE/CEPAG).
- Borda, Dionisio y Fernando Masi 1998 *Los límites de la transición. Economía y Estado en el Paraguay en los años 90* (Asunción: UCA-CIDSEP).
- Brítez, Digno 1996 *El desalojo en las ocupaciones de tierra, la violencia policial y el sistema latifundiaro vigente en el Paraguay* (Asunción: CIPAE).
- Caballero Carrizosa, Esteban 1999 "Reforma del Estado y Política Social en el Paraguay" en Borda, Dionisio y Fernando Masi (comp.) *Desafíos y Oportunidades de la Reforma del Estado* (Asunción: CADEP).
- Calderon, Fernando y Elizabeht Jelin 1987 *Clases sociales y movimientos sociales en América Latina. Perspectivas y realidades* (Buenos Aires: CLACSO y CEDES).
- Campos, Daniel 1982 *Diferenciación social y lucha por la tierra en el marco de las políticas públicas y la colonización de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú* (Asunción: BPD).
- Campos, Daniel 1992 "Antecedentes históricos: Colonización, Estado y Organizaciones Campesinas" en Borda, Dionisio y Daniel Campos *Las Organizaciones Campesinas en la Década de los 80. Sus respuestas ante la crisis* (Asunción: CIPAE).
- Cohen, Jean et al 1988 *Teoría de los movimientos sociales* (San José de Costa Rica: FLACSO) N° 17.
- CPES-CIPAE 1995 *Conflictos de tierra y defensa jurídica* (Asunción).
- Constitución Nacional del Paraguay* 1992 (Asunción).
- Constitución Nacional del Paraguay* 1967 (Asunción).
- Dávalos, Myriam y José Carlos Rodríguez 1994 *Censo de organizaciones campesinas 1992-1993* (Asunción: CDE).
- Derechos Humanos en el Paraguay 1997 (Asunción: CODEHUPY).
- DGEEC 2000 "Trabajo de apoyo estadístico al Congreso Nacional" (Asunción) Boletín N° 5, Año 1.
- DGEEC 1999 *Sistemas de indicadores socio-económicos y demográficos* (Asunción).
- DGEEC 1997 *Anuario Estadístico del Paraguay* (Asunción).
- DGEEC 1995 *Atlas de Necesidades Básicas* (Asunción).
- DGEEC y FNUAP 1999 *Población en el Paraguay. La dinámica demográfica y sus vinculaciones con el desarrollo sustentable. Tendencias y Perspectiva* (Asunción).

Diario ABC 2001 (Asunción) 30 de marzo.

Díez Hurtado, Alejandro 2001 "Organizaciones e integración en el campo peruano después de las políticas neoliberales" en Giarracca, Norma (comp.) *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO).

Estatuto Agrario 1963 (Asunción: CDE).

Fernández, Miguel y Francisco Corral 1988 *Rafael Barrett. Obras Completas*, Tomo I (Asunción: RP-ICI).

Fletschner, Carlos 1982 "La estructura del poder y su influencia sobre el pequeño productor" en Rivarola, Domingo (comp.) *Estado, campesinos y modernización agrícola* (Asunción: CPES).

Fogel, Ramón 2001 *Las Luchas Campesinas. Tierras y Condiciones de Producción* (Asunción: CIPAE y CERI).

Fogel, Ramón 1992 "Los conflictos agrarios y la intervención del Estado" en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción: CPES) Año 29, N° 83.

Fogel, Ramón 1990 *Los campesinos sin tierra en la frontera* (Asunción: CIPAE) Serie Tierra N° 2.

Fogel, Ramón 1989 *La concentración de la tierra en los departamentos fronterizos*. (Asunción: CIPAE) Serie Tierra N° 1.

Fogel, Ramón 1982 *Avances teóricos en la explicación de los movimientos sociales* (Asunción: CIPAE) Serie Cuadernos N° 8.

Frutos, Juan Manuel 1982 *Con el hombre y la tierra, hacia el bienestar rural* (Asunción) Cuadernos Republicanos.

Furlan, José Luis y Nora Corrochategui 1989 "El municipio como instrumento del desarrollo y la participación" en Steso, Roberto y Sergio Tocino (comp.) *Municipio y Región, Descentralización Estatal y Promoción de Actividades Productivas* (Buenos Aires: IIPAS y Fundación Ebert).

Galeano, Luis (comp.) 1990 *Procesos agrarios y democracia en Paraguay y América Latina* (Asunción: CPES).

Galeano, Luis 1982 "La diferenciación socioeconómica en el campo y las migraciones. Paraguay 1950-1975" en Rivarola, Domingo (comp.) *Estado, Campesinos y Modernización Agrícola* (Asunción: CPES).

Galeano, Luis 1978 "Dos alternativas históricas del campesinado paraguayo: Migración y Colonización (1870-1950)" en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción: CPES) Año 15, N° 41.

Galeano, Luis y Domingo Rivarola 2000 "La pobreza rural en el Paraguay" en *Pobreza y Gestión Social* (Asunción: SAS/INDES/BID).

Galeano Luis y Myriam Yore 1994 *Poder Local y Campesinos* (Asunción: CPES).

Gaona, Francisco 1987 *Introducción a la historia gremial y social del Paraguay*, Tomo I, II y III (Asunción: RP).

García, Antonio 1982 "El minifundio en el proceso agrario del Paraguay. Hacia un nuevo proyecto de desarrollo rural" en Rivarola, Domingo (comp.) *Estado, Campesinos y Modernización Agrícola* (Asunción: CPES).

García, Hermes (comp.) 1994 *Los campos comunales en el Paraguay. Antecedentes y Anteproyecto de Ley* (Asunción: CPC).

Gauto, Dionisio 1987 "Reforma Agraria, Leikuera, ñane ñe'etépe (Leyes de la reforma agraria en lengua nativa)" en *Ediciones populares* (Asunción: BASE-ISEC) N° 6, Serie Kogarä.

González, Carlos Alberto 1986 "Régimen legal de la propiedad inmobiliaria en el Paraguay" en González, Carlos Alberto y Juan Carlos Ramírez Montalbetti *La tierra: los derechos a la ocupación y sus transgresiones* (Asunción: Base Ecta) Documento de Trabajo N° 4.

González, Carlos Alberto et al 1986 *Organizaciones campesinas en el Paraguay. La búsqueda de la autoexpresión* (Asunción: CIDSEP).

Guanes, Rafaela 1992 *Familias sin tierra en Paraguay* (Asunción: CIPAE).

Gusfield, Joseph R. 1974 "Estudio de los movimientos sociales" en Sills, David L. *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, Volumen 7 (España: Aguilar).

Heberle, Rudolf 1974 "Tipos y funciones de los movimientos sociales" en Sills, David L. *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, Volumen 7 (España: Aguilar).

Halley Merlo, Hugo 2001 "Fundamentos para la reforma del Estatuto Agrario" ponencia presentada en el marco del estudio del proyecto organizado por la Red Rural (Asunción).

Hobsbawm, Eric J. 1976 *Los campesinos y la política* (Barcelona: Anagrama).

Hobsbawm, Eric J. 1968 *Los Rebeldes Primitivos* (Barcelona: Ariel).

Instituto de Bienestar Rural (IBR) 2000 *Listado de asentamientos 1988-1999* (Asunción).

Informativo Campesino 1989/1999 (Asunción: CDE) varios números.

Ibáñez, Antonio 2001 "Situación agraria del país en aspectos de tenencia y acceso a la tierra" ponencia presentada en la jornada de la Pastoral de la Tierra de la Conferencia Episcopal Paraguaya (Asunción).

Kritica 1985 "Organización de la vida colectiva" en *Revista Kritica*, Segunda época / 23, septiembre-octubre.

Lambert, Peter y Roberto Villalba 1991 *Cuadernos de Historia Obrera* (Asunción: CDE) N° 4, 1904-1936.

Landsberger, Henry A. 1978 "Disturbios campesinos: temas y variaciones" en Landsberger, Henry A. (editor) *Rebelión Campesina y Cambio Social* (Barcelona: Editorial Crítica y Grupo Editorial Grijalbo).

Le Coz, Jean 1976 *Las Reformas Agrarias. De Zapata a Mao Tsé-tung y la FAO* (Barcelona: Ariel).

López Jiménez, Sinesio 1997 *Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú* (Lima: Instituto de Diálogos y Propuestas).

Los campesinos y el Mercosur 1994 "Encuentro de Organizaciones Campesinas para la Participación en el Mercosur" (Asunción: QR Ediciones).

Luna, Matilde y Francisco Valdez 1990 "Perspectivas teóricas en el estudio de los empresarios en México" en *Revista Mexicana de Sociología* (México: UNAM) Año LII / N° 2, abril-junio 1990.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 1993 *Censo Agropecuario* 1991 (Asunción).

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 1985 *Censo Agropecuario* 1981 (Asunción).

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 1956 *Censo Agropecuario* 1956 (Asunción).

Molinas V., José R. 2000 "El mercado de tierras rurales en Paraguay" en *Desarrollo Productivo* (Santiago de Chile: CEPAL-ECLAC) Red de Desarrollo Agropecuario N° 77.

Oberschall, Anthony 1973 *Social Conflict and Social Movements* (New Jersey: Prentice Hall).

Ocampos, Genoveva y José Carlos Rodríguez 1999 *Hacia el fortalecimiento de la sociedad civil en Paraguay. Un desafío pendiente* (Asunción: CDE / BASE ECTA).

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 1990 *Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley*. Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana).

Orbe, Raúl 1993 *Diccionario de Ciencia Política*, Tomo I (Lima: Editorial San Marcos).

Palau, Tomas y María Victoria Heikel 1987 *Los campesinos, el estado y las empresas agrícolas en las fronteras* (Asunción: BASE ECTA).

Pastore, Carlos 1972 *La Lucha por la tierra en el Paraguay* (Montevideo: Editorial Antequera).

- Pérez Correa, Edelmira 2001 "Hacia una nueva visión de lo rural" en Giarracca, Norma (comp.) *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (Buenos Aires: CLACSO).
- Petras, James 2001 "La izquierda devuelve el golpe" en <http://www.eurosur.org/rebellion/petras/petrasindice.htm>
- Quijano, Anibal 1967 "Los movimientos sociales contemporáneos en América Latina" en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, septiembre 2000.
- Red Rural 1993 "Participación y organización campesina" en *Serie Red Rural* (Asunción: Ediciones RR) N° 4.
- Riquelme et al 1999 *Diagnóstico Rural Participativo en cuatro comunidades de Caaguazú* (Asunción: CDE).
- Rivarola, Domingo (editor) 1986 *Los movimientos sociales en el Paraguay* (Asunción: CPES).
- Rivarola, Domingo 1982 *Estado, campesinos y modernización agrícola* (Asunción: CPES).
- Rodríguez, José Carlos 1999 "Bloqueos en la participación campesina kuruzu rape yvy rekavo" en Roca Toranzo, Carlos (editor) *Paradojas de la Participación ¿más Estado o más sociedad?* (La Paz: Diakonía).
- Sartorius, Nicolas 1983 "Los movimientos sociales y la transformación democrática del Estado" en *Revista A Priori* (Madrid) N° 6/7, julio-diciembre.
- Sauma, Pablo et al 1993 *Producción, Ingresos, Empleo y Estratificación Social en el Paraguay* (Asunción: DIS / UNA).
- Spagnolo, Alberto E. 1989 "El impacto de la crisis sobre la problemática regional" en Steso, Roberto y Sergio Tocino (comp.) *Municipio y Región, Descentralización Estatal y Promoción de Actividades Productivas* (Buenos Aires: IIPAS y Fundación Ebert).
- Starn, Orin 1991 *Reflexiones sobre Rondas Campesinas, Protestas Rural y Nuevos Movimientos Sociales* (Perú: IEP Ediciones).
- Secretaría Técnica de Planificación (STP) 2000 *Diagnóstico sociodemo-gráfico del Paraguay* (Asunción).
- Secretaría Técnica de Planificación (STP) 1993 *Características socioeconómicas departamental: una visión actual para el porvenir* (Asunción).
- Secretaría Técnica de Planificación (STP) 1990 *Aspectos geo-económicos y sociales prevalecientes. Departamento de Caaguazú* (Asunción).
- Touraine, Alain 1997 *Podremos vivir juntos?* (Argentina: Fondo de Cultura Económica).
- Touraine, Alain 1982 "Reacciones antinucleares o movimiento antinuclear" en *Revista Mexicana de Sociología* (México: UNAM) N° 2.
- Wolf, Eric 1972 *Las luchas campesinas del siglo XX* (México: Siglo XXI).